

PROYECTO
CÓDIGO PENAL

PARA LA

REPÚBLICA ARGENTINA

REDACTADO EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DE 7 DE JUNIO DE 1914
Y PRECEDIDO DE UNA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

POR LOS DOCTORES

Norberto Piñero, Rodolfo Rivarola y José Nicolás Matienzo

2ª. EDICIÓN

BUENOS AIRES

TALLER TIPOGRÁFICO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL

1898





BIBLIOTECA DE LA CORTE SUPREMA	
Nº. DE ORDEN	3027
UBICACION	E. 71
FICHA MATERIA	





DECRETO DISPONIENDO LA PRESENTE EDICION

Ministerio de Justicia
Culto e Instrucción Pública.

Buenos Aires, Febrero 10 de 1898.

Hallándose agotada la primera edición del Proyecto de reformas al Código Penal vigente, redactado por los Dres. Norberto Piñero, Rodolfo Rivarola y José Nicolás Matienzo, y

CONSIDERANDO:

Que es conveniente proceder á la reimpresión de dicho proyecto, con el objeto de facilitar su estudio á las H. H. Cámaras Legislativas; que habiéndose expedido la Comisión de Legislación de la H. Cámara de Diputados, conviene asimismo incluir en la reimpresión el dictamen respectivo y el Mensaje del P. E. con que fué presentado al H. Congreso, el proyecto de que se trata;

Y por último, que tratándose de un trabajo de índole científica, es acertado disponer que la nueva edición se haga bajo la dirección de uno de los miembros de la Comisión reformadora.

El Presidente de la República—

DECRETA:

Art. 1º Procédase á la reimpresión del Proyecto aludido, bajo la dirección del Dr. Rodolfo Rivarola, incluyendo en ella el dictámen de la Comisión de Legislación y el Mensaje del P. E. mencionado en los considerandos de este decreto.

Art. 2º La edición constará de mil ejemplares y se hará en el Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, á cuyo efecto el Ministerio de Justicia pondrá á disposición del Director del Establecimiento, la cantidad de quinientos pesos, destinada á la adquisición de las materias primas que se necesiten.

Art. 3º Comuníquese, publíquese en el «Boletín Oficial» y dése al Registro Nacional.

URIBURU.

LUIS BELÁUSTEGUI.



DECRETO DEL PODER EJECUTIVO

DISPONIENDO LA

PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO PENAL

Ministerio de Justicia
Culto e Instrucción Pública.

Buenos Aires, Junio 7 de 1890.

CONSIDERANDO:

1º Que, según lo ha comprobado el estudio y la jurisprudencia de los Tribunales, el Código Penal vigente adolece de defectos que es indispensable hacer desaparecer, por los peligros que entrañan para la sociedad y para los que sufren especialmente su aplicación;

2º Que en los últimos años, diversos países han alterado su legislación penal, dictando sus códigos como el resultado de estudios minuciosos y completos que deben tenerse en cuenta; y que la ciencia penal se ha enriquecido con nuevas doctrinas que, si bien son objeto de discusión y no se imponen desde ya como verdades inconcusas, deben tomarse en consideración para aceptar de ellas lo que pudiera importar un progreso para nuestra legislación;



3º Que, además de las deficiencias apuntadas, existen vacíos que las legislaciones modernas han previsto en sus disposiciones, vacíos que es menester llenar por el carácter mismo de las leyes penales, que no deben dejar impunes ciertos hechos criminosos omitidos en sus disposiciones y que pueden ser de gravedad tal que comprometan las relaciones internacionales;

El Presidente de la República--

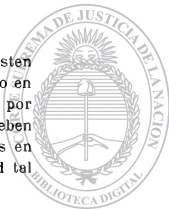
DECRETA:

Art. 1º Nómbrase á los Doctores D. Norberto Piñero, Catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Capital; Don Rodolfo Rivarola, Fiscal de las Cámaras de Apelación de la Provincia de Buenos Aires y Don José Nicolás Matienzo, Juez de 1ª Instancia en la Capital de la misma Provincia, á fin de que, constituidos en comisión, proyecten las reformas que reputen necesario introducir en el Código Penal, teniendo presente lo expuesto en los considerandos de este decreto.

Art. 2º Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Nacional.

JUAREZ CELMAN.

A. ALCORTA.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



A S. E. el Señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública.

Elevamos á V. E. el proyecto de reformas al Código Penal, que se nos encomendó por decreto de 7 de Junio de 1890; y pasamos á explicar los motivos en que se fundan las reformas que proponemos.

El decreto del P. E. que instituyó la Comisión revisora del Código Penal, dispuso que al proyectar las reformas que fuera necesario introducir en la ley, ésta tuviera en cuenta los últimos códigos extranjeros que se han dictado como resultado de estudios minuciosos y completos; las nuevas doctrinas que, aunque sean objeto de discusión y no se impongan como verdades inconcusas, debieran tomarse en consideración para aceptar de ellas lo que pudiese importar un progreso para nuestra legislación; y, por último, que existían en el Código actual vacíos que era menester llenar para no dejar impunes hechos criminosos omitidos en sus disposiciones y que podían ser de gravedad tal que comprometieran las relaciones internacionales.

Estas bases que el P. E. daba á la Comisión, sin restringir la libertad de proyectar todas las modifica-

ciones de la ley penal que creyera necesario, convenían exactamente con las opiniones de cada uno de sus miembros en esta materia. Pero hay una circunstancia más que la Comisión ha tenido en cuenta, y respecto de la cual ha obrado en la seguridad de no tener limitadas sus atribuciones: la de considerar que el Código Penal, dictado por el Congreso en uso de una atribución constitucional, debe ser la única fuente legal de imposición de penas en la República, y no simplemente un código para ser aplicado en las jurisdicciones locales, á cierto número de delitos y faltas, dejándose subsistente otra legislación penal flotante, de origen inconstitucional, si procediera de las legislaturas provinciales; de origen constitucional, pero ocasionada á dudas y chocantes contradicciones, si procediera del Congreso. Lo que ha ocurrido á este respecto con el Código Penal, no ha pasado, ciertamente, con los otros códigos que el Congreso ha dictado en cumplimiento de la Constitución. El Código Civil, el de Comercio, el de Minería, han abarcado el conjunto de leyes que, por la naturaleza del asunto, debían comprenderse en un solo cuerpo, sin distinción de las jurisdicciones que debían aplicarlos; sin hacer un código para los tribunales ordinarios y otro para los tribunales federales. La jurisdicción puede causarse por razón de la materia, por razón de los lugares ó por razón de las personas; y las leyes especiales de jurisdicción y de procedimientos determinarán á qué tribunales corresponderá el juzgamiento de los asuntos; pero no puede pensarse que la Constitución haya querido que se estableciera en el país la pluralidad de códigos penales, que hoy resulta de la diversidad de sistemas de penalidad, de la coexistencia del Código Penal, de la ley federal y de multitud de leyes espe-



ciales que contienen sanciones penales. Ha habido, pues, á juicio de la Comisión, un error fundamental en la preparación del actual Código, que cree indispensable y urgente corregir. En atención á estas consideraciones, el Proyecto comprende una legislación mucho más extensa que la que abarca el Código Penal; y si no comprende en su totalidad todas las sanciones penales que hayan de imponerse en la República, determina por lo menos,—cuando es menester dejar á las autoridades locales la potestad necesaria para hacer efectivas sus instituciones,—las reglas y la medida en que dicha potestad debe ejercerse, tal como en el Código Civil, se abandona á los reglamentos municipales ciertos detalles relativos á las restricciones del dominio.





LIBRO PRIMERO

TÍTULO I

Aplicación de la ley penal

(Art. 1º á 8º)

El Proyecto comienza por establecer, en el título primero, ciertas reglas que son indispensables para la solución de las cuestiones que puedan suscitarse en razón del conflicto de leyes relativamente al territorio y con relación al tiempo, y en razón de las facultades respectivas del Estado nacional y de las provincias. Respecto de este último punto, queda dicho lo necesario para la justificación de una declaración especial en la ley. Los otros dos están legislados en la generalidad de los códigos penales, y se les incluyó en los dos proyectos que precedieron al Código; pero en éste no se ha conservado sino la disposición relativa á la aplicación de la ley con relación al tiempo.

Consideramos tan indispensable un pronunciamiento expreso en la ley sobre una materia como sobre la otra. Cuestiones tan importantes no deben quedar expuestas á las soluciones varias y contradictorias que les daría la doctrina que se aplicara á los casos ocurrentes. Tampoco debe callar el Código sobre este punto por la consideración de que las reglas que



al respecto se dén. tengan el carácter de jurisdiccionales. El Proyecto no se preocupa del alcance del poder del juez, sinó de la extensión del imperio de la ley, aunque la última implique el primero. (1)

El artículo 1º del Proyecto declara cuál es la extensión territorial de la aplicación de la ley penal: 1º á los delitos ó faltas cometidas en el territorio de la República; 2º á los cometidos en buques que lleven su bandera; y 3º á los realizados en buques mercantes de bandera extranjera que se hallen en aguas jurisdiccionales de la República; y, en los tres casos, « cualquiera que sea la nacionalidad del agente, de la víctima ó del damnificado ». Un párrafo complementario agrega que se considera cometido en la República todo hecho punible cuyos efectos deban producirse dentro de su jurisdicción, aunque el acto se haya ejecutado ó preparado, y el agente se encuentre en el exterior.

La ley penal tiene por primordial objeto la defensa de todos los derechos que no pueden ser protegidos sinó por el medio indirecto de la penalidad. Siendo la pena un acto de fuerza de la sociedad sobre el individuo que la ha ofendido, la facultad de imponer pena debe llegar hasta donde alcance la fuerza del Estado, órgano de la sociedad. La medida de esta fuerza se modifica por los tratados internacionales, y aún sin éstos, por los principios y reglas del derecho internacional, extendiendo y restringiendo respectivamente la potestad nacional por concesiones recíprocas con los demás estados. El artículo no intenta legis-

(1) La materia cuya legislación proyectamos en los cuatro artículos primeros se encuentra legislada en muchos códigos penales, como puede verse por las concordancias de nuestro Proyecto. En el Código Civil existen también muchas disposiciones que determinan las leyes que rigen los actos, los contratos, la capacidad de las personas, las sucesiones, etc.



lar la materia bajo este aspecto. Los tratados internacionales celebrados por la República, están sobre la legislación particular y obligan antes que ésta. A falta de tratados, el Estado resuelve en cada caso á qué principios debe ajustar su conducta.

No deberá entenderse, pues, nuestro artículo como negatorio de las reglas de extraterritorialidad y otras admitidas por el derecho internacional. El artículo no afirma ni niega cosas que son extrañas al objeto del Código; no deroga el derecho internacional: afirma la extensión del derecho nacional.

La primera de las disposiciones enumeradas, la aplicación de la ley á los delitos ó faltas cometidos en el territorio de la República, no es materia que pueda ser susceptible de discusión entre nosotros, siendo un principio general en nuestra legislación la igualdad ante la ley de todos los habitantes de la República, nacionales ó extranjeros, domiciliados ó transeuntes, con excepción de lo pertinente al orden exclusivamente político.

Declara también el artículo que la ley se aplica á todos los delitos ó faltas cometidos en buques que lleven la bandera de la República. Son necesarias á este respecto algunas consideraciones. Comprendemos en el Proyecto á todos los buques que lleven bandera de la República, y no solamente á los buques de guerra, porque si los buques mercantes no pueden navegar sin estar nacionalizados y cubiertos por la bandera nacional, de la protección del derecho de su tripulación, equipaje y pasajeros, que nace de aquél hecho, surge el derecho de extender sobre ellos el imperio de la ley penal.

La aplicación de este principio no puede encontrar obstáculo cuando el delito se ha cometido á bordo de



un buque de guerra, aunque se halle en aguas jurisdiccionales de otro país, porque se reconoce con toda generalidad que el buque de guerra representa la soberanía del país. Tampoco puede presentarlo cuando el delito se cometa á bordo de un buque mercante, en plena mar, por no estar ésta sometida á la autoridad de ninguna nación. Pero no ocurre lo mismo tratándose de delito cometido á bordo de un buque mercante que se encuentre en aguas de otro estado. No reconociéndose en el buque mercante una representación de la soberanía, el imperio de la ley territorial bajo la cual se encuentra el buque, no debe encontrarse limitado por el de la ley nacional de este último. El artículo mismo reconoce este principio al establecer la aplicabilidad de la ley penal á los delitos cometidos en buques mercantes de bandera extranjera.

Por otra parte, la República ha aceptado como regla de derecho internacional que los delitos cometidos á bordo de los buques mercantes son juzgados y penados por la ley del estado en cuyas aguas jurisdiccionales se encontraba el buque al tiempo de perpetrarse la infracción. (1)

La Comisión ha creído, no obstante estas circunstancias, que el Código debe consignar la regla que proyecta, aunque sea aparentemente contradictoria con el otro principio admitido en el mismo artículo. Las dificultades de aplicación no serán tales si se considera la prelación en que el derecho internacional se encuentra respecto del derecho particular de cada Estado, en la solución de los conflictos internacionales. Si la disposición que proyectamos se hallara en pugna con un tratado ó con prácticas reci-

(1) Tratado de Montevideo, art. 11.



procas de otro estado, prevalecería la ley ó la costumbre internacional. Pero si el país en cuyas aguas jurisdiccionales se ha cometido el delito á bordo del buque mercante, renuncia á juzgarlo, no puede quedar impune el hecho. Bélgica, por ejemplo, deja á la justicia extranjera la represión de los delitos cometidos á bordo de un buque mercante por un hombre del equipaje hácia otro del mismo equipaje. (1)

Nuestro artículo no se hallaría en conflicto con la ley belga: en cambio podría quedar sin pena el hecho criminal cometido á bordo del buque argentino en aguas belgas. El Código holandés sanciona en su artículo 3º el mismo principio de que tratamos, y como no declara expresamente la aplicación de la ley penal holandesa á los delitos cometidos á bordo de buques extranjeros, puede inducirse que tampoco habrá conflictos entre dicha ley y la nuestra. Creemos, pues, dar con el artículo que proyectamos una regla que evite la impunidad de ciertos delitos, sin perjuicio de las excepciones que deba sufrir por el derecho internacional.

La tercera disposición contenida en el art. 1º declara la aplicabilidad de la ley penal á los delitos cometidos en los buques mercantes de bandera extranjera que se hallen en aguas jurisdiccionales de la República.

Siendo esta regla reconocida en el derecho internacional con más generalidad que la precedente, dará lugar á menor número de casos de conflictos que aquélla. Queda dicho que es la reconocida por la República en el art. 10 del tratado de Montevideo. No es sin embargo imposible, que los conflictos se pro-

(1) *Honn, Principes généraux du droit pénal belge*, 217.



duzcan, pero por lo que se ha expuesto en el párrafo anterior será excusado repetir que tales conflictos se resolverán por el derecho internacional: en el Proyecto nos limitamos á dejar establecido que la República no renuncia á juzgar los delitos que se cometan bajo su soberanía; el carácter y la naturaleza de la infracción, las circunstancias en que se haya producido, y las relaciones con el estado á que el buque pertenezca, podrán dar lugar á excepciones á la regla que queda consignada.

El art. 2º establece la aplicación de las leyes del Código á los delitos de piratería, siempre que los responsables cayeren bajo el poder de la República. Esta es también la regla admitida en el tratado de Montevideo. Los buques piratas están despojados de todo vínculo de nacionalidad, por lo que se les considera fuera del derecho público. Siendo común á todos los estados los peligros de la piratería, del interés general de perseguir el delito ha nacido esta jurisdicción universal contra él.

Los agentes ó empleados de autoridades argentinas que se encuentren en el extranjero en desempeño de sus funciones, están necesariamente ligados á la ley del país en cuanto se refiere al ejercicio de aquellas funciones, y en consecuencia, sujetos á ella por los delitos ó faltas que en el mismo carácter ejecutaran. Esta es la disposición del art. 3º.

Al legislar esta materia, algunos códigos penales, conservando la influencia del estatuto personal que liga el individuo á las leyes del país de origen, han extendido el imperio de la ley penal á los delitos que cometiera el nacional en territorio extranjero. La Comisión no acepta la doctrina sancionada por aquellas leyes, pues la cree contraria á los fines que atri-



buye á la ley penal y á los principios admitidos por la legislación general. El habitante de la República nacional ó extranjero, domiciliado ó transeunte, por el sólo hecho de pisar el territorio de la misma, quedando amparado por sus leyes, está sometido á la defensa que éstas pudieran oponerle si violara los derechos de las demás personas que ellas protegen. Consecuente con este principio, la Constitución declara la igualdad de todos los *habitantes* de la República para el ejercicio de sus derechos, con excepción de lo referente al orden exclusivamente político; y el Código Civil declara sometidos á las leyes civiles á todos los *habitantes* de la República, sin distinción. La calidad de ciudadano ó extranjero nada importa para el goce de los derechos ó la sujeción á las restricciones; recíprocamente, ninguna aplicación debe tener la ley respecto del que no es habitante, aun cuando sea ciudadano. Es, pues, un principio aceptado por nuestra legislación el de que la ley no tenga más alcance que el de la defensa de la sociedad que protege, y no la de una extraña. No es esta una doctrina egoísta ó mezquina, inspirada solamente en la conservación exclusiva del estado, sin preocuparse de la sociedad general ó de la humanidad, sinó una doctrina de respeto absoluto á la soberanía de todos los estados.

Tampoco importará ella asegurar la impunidad por los crímenes cometidos en el extranjero ó asegurar á los delincuentes un asilo en la República. El proyecto prevé el caso del que habiendo violado la ley extranjera entrase al territorio de la República, y el art. 4º autoriza á expulsar de la misma á todo el que hubiera cometido en otro país hechos ú omisiones calificados de delitos por el código de la Nación, si no hubiera sido juzgado y cumplido su condena, y si las



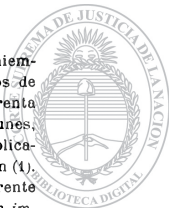
autoridades competentes para su juzgamiento, requeridas para la extradición, no la solicitarén.

Por el artículo 5º se establece que las disposiciones del Código no se aplicarán á los delitos del fuero militar. Es una excepción consignada en varios Códigos penales, y donde éstos no la declaran, la ley militar la establece expresamente. Lo dijo también el proyecto del Dr. Tejedor y están pendientes del estudio de las comisiones del Congreso los proyectos de códigos penales para el Ejército y la Armada. Las distinciones profundas que median entre la vida civil y la vida militar; el régimen de libertad y de expansión que debe caracterizar á la primera; el de sumisión absoluta á las reglas de una severa disciplina, que es el aspecto propio de la segunda, bastan para justificar la necesidad de que se rijan por distintas reglas de penalidad.

El artículo agrega que el Código no se aplicará á las infracciones de las leyes aduaneras y de impuestos, pues estando sujetas estas leyes á constante modificación, según las circunstancias económicas del país, es preferible que su infracción sea reprimida por leyes especiales y no por la ley general ó Código penal, que es de carácter permanente.

Estas son las únicas excepciones á la aplicación de la ley penal consagradas en el Proyecto, pues no tiene tal carácter la disposición del artículo 6º, cuyo alcance se explicará en seguida. El Proyecto Tejedor incluía además, las contravenciones de policía, los delitos de imprenta y los crímenes y delitos del fuero nacional.

Lo primero es la materia del artículo 6º; en cuanto á la razón de no exceptuar los delitos del fuero nacional, queda dicho lo necesario en páginas anterior-



res. Respecto de los *delitos de imprenta*, los miembros de la Comisión disintiendo en varios puntos de tan discutida cuestión, convienen en que la imprenta es siempre un medio de ejecución de delitos comunes, en cuyo caso, las reglas del Código deben ser aplicadas; y así resultará de no consignarse la excepción (1).

La Comisión no proyecta ningún artículo referente á cierto género de faltas conocidas por *delitos de imprenta*, en una acepción especial, ó *abuso de la libertad de la prensa*, en las que se cree ver un género de lesiones al derecho ajeno que solamente puede cometerse por medio de la prensa. Esta teoría, que tiene cierta divulgación en el país, es errónea. La prensa es un instrumento de transmisión de las ideas, lo mismo que la palabra. Toda enunciación de un pensamiento por medio de la palabra hablada ó de un manuscrito, que pueda importar por sí mismo un delito, es también delito si el pensamiento se enuncia por medio de caracteres *impresos*. La mayor diferencia entre un hecho y otro de aquella naturaleza consistiría en la fácil divulgación del impreso; pero ésta es meramente *posible* y la misma posibilidad hay cuando el medio es la palabra hablada ó manuscrita. Una legislación sobre abusos de imprenta, distintos de los delitos que pueden cometerse por la palabra hablada, será siempre una verdadera *restricción* de la libertad de la prensa, desde que no se podría hacer por ella, lo que oralmente sería lícito.

La potestad de legislar implica la de hacer efectivas con sanciones penales ciertas disposiciones legales para

(1) Aunque no todos los miembros de la Comisión convienen en que el Congreso puede legislar sobre el conjunto de los delitos de imprenta, cometidos en toda la extensión de la República, convienen unánimemente en que puede y debe legislar, por lo menos, sobre los que se ejecuten en la Capital de la Nación y en los territorios federales, y para los casos de jurisdicción federal exclusiva en toda la República.

cuyo cumplimiento no hay otro medio coercitivo. Si las Provincias tienen tal potestad dentro de los límites de su soberanía respectiva, y el Congreso la de dictar el Código Penal, esto es, la de ser la única fuente legítima de autoridad en la imposición de penas, la potestad de aquéllas quedaría reducida á algo como una jurisdicción sin *imperium*, que importaría la anulación de su relativa soberanía. Por otra parte, si debiera entenderse que á la potestad de legislar corresponde una amplia facultad de elección de las penas que servirán de sanción á las leyes, resultaría una multiplicidad de códigos penales, abiertamente contraria á la prescripción constitucional que reclama la existencia de un solo código penal en toda la Nación. Quizás el proyecto del Dr. Tejedor preveía en parte esta cuestión al definir como *contravenciones*, las faltas á que la ley señala penas de policía, y excluir luego del Código las *contravenciones de policía*. Esta no era una solución clara; pero el Código Penal, lejos de resolver expresamente la dificultad, guardó silencio sobre ella, sin atender á las consecuencias que de ese silencio derivaban. La Comisión piensa que lo prudente y necesario en este asunto es fijar el límite de represión de que harán uso las provincias. Las transgresiones que importen un delito ó falta en todas partes; que lo mismo afectarían los derechos del individuo y el interés de la sociedad si se cometieran en un punto, que si se realizaran en otro, estarán previstas en el Código Penal y no podrá ingerirse en ellas la legislación provincial. Las que sólo afecten intereses inmediatos ó directos de una localidad particular, siendo á las demás indiferente que estén previstas ó nó, no formarán en el cuerpo del Código Penal; pero como la imposición de penas de cierta medida





es un hecho que afecta á la comunidad entera, el Código fijará el máximo de penalidad que deba adoptarse. La misma cuestión que resolvimos en este artículo tiene que presentarse en cualquier país de organización federal y de código unitario; y así en Alemania, en la ley de 31 de mayo de 1870, que declaró vigente el Código Penal de la Confederación de la Alemania del Norte, se lee el siguiente artículo: «5º—En lo que respecta á las materias que no son objeto del Código Penal, no podrán imponerse por las leyes de los diversos Estados sinó las penas siguientes: prisión por dos años á lo sumo, arrestos, multas, la confiscación de objetos determinados y la pérdida del destino ó de las funciones públicas»; solución análoga á la que proyectamos.

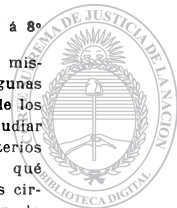
La irretroactividad de la ley penal es un principio que la Comisión ha creído supérfluo consignar en el Código Penal, puesto que está consagrado en el artículo 18 de la Constitución: «ningún habitante de la Nación Argentina puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso»; y cree que esta consideración es suficiente para justificar la supresión del artículo 46 del Código vigente. Pero la irretroactividad de la ley penal, fundada en consideraciones importantísimas de justicia y equidad, no puede, por razones del mismo orden, constituir una regla absoluta, y de aquí se sigue el principio, admitido con toda generalidad en la ciencia y en la legislación, de la *retroactividad benigna de la ley penal*. Cuando una ley posterior al hecho incriminado, suprime la represión del mismo, atenúa la gravedad de la pena ó cambia en un sentido favorable al imputado las condiciones de la imputabilidad, la sociedad reconoce un error en la ley antigua, y no debe hacer pesar los



efectos del mismo sobre el individuo que cayó bajo su sanción. Es, pues, la retroactividad benigna de la ley penal un principio tan justo, como la regla general de la irretroactividad, á la cual forma excepción. La aplicación práctica de este principio presenta, sin embargo, serias dificultades, en ciertos casos. Ningún inconveniente hay en aplicar la ley posterior, si es más benigna, cuando el hecho que motiva el proceso no ha sido aún juzgado. Tampoco puede haber un inconveniente sério en que si el legislador ha declarado inocente el hecho incriminado por la ley antigua, exima de toda pena á su autor, aun cuando ya hubiera sido condenado y estuviera sufriendo la condena. El Código Penal vigente no ha limitado á estos casos la retroactividad benigna: *si durante la condena*, dice el segundo párrafo del artículo 48, *se dictase una ley más benigna, la pena debe limitarse á la establecida por la ley*. En el tiempo que lleva de vigencia el Código no se ha dado aplicación á esta disposición, sea porque los Tribunales han creído que no debían proceder de oficio á la revisión de todos los procesos, sea porque los defensores no han reparado en la disposición, sea porque los interesados la han ignorado. Que dicho artículo autoriza la revisión del proceso es cosa que no puede motivar duda alguna. Una ley puede ser más benigna que otra, no solo porque imponga al mismo hecho delictuoso, sin distinción de los elementos que lo constituyen, una pena menor, sinó porque estos mismos elementos pueden variar, como varía en los delitos contra la honestidad la calificación legal según se cambie la edad de la víctima; como han variado en el Código vigente, respecto del anterior, las calificaciones y criterios de gravedad del homicidio, etc;

—puede ser más benigna también en cuanto á las condiciones del ejercicio de la acción penal, si se hace depender de acusación ó instancia privada la que antes procedía de oficio, ó si reduce el término de la prescripción. Si, pues, se hubiera llevado á la práctica la aplicación de la segunda parte del art. 48, es indudable que debieran haberse revisado, bajo todos estos aspectos, los procesos de los que están sufriendo condenaciones impuestas por la ley anterior. Las dificultades prácticas de la aplicación del principio, por justo que sea, son de tal consideración que motivaron en Italia la supresión de una cláusula del artículo 2º del proyecto del Ministro Zanardelli, tomada de proyectos anteriores, el de Mancini entre ellos, y que no tenía la amplitud que resulta de los términos del artículo 48 de que nos ocupamos, pues se limitaba á establecer que «si la pena se había infligido ya por sentencia irrevocable, se sustituyera por la pena más benigna en especie ó duración, establecida por la ley vigente *para el delito definido en la sentencia.*» Mancini no había dado mayor importancia en su *Exposición de motivos* § III (edición española, pág. 29) al argumento de las dificultades prácticas y creía «que cualesquiera que ellas fueran debían estimular á estudiar el modo de superarlas ó disminuirlas, sin que tuvieran eficacia para concluir de ellas á la anulación de un principio de justicia.» Pero no todos los principios de justicia pueden hacerse prácticos y es forzoso en más de una ocasión retroceder ante la imposibilidad material. «Cualquiera vé, dice el informe de la Comisión de la Cámara de Diputados, sobre el proyecto Zanardelli, cómo para saber si la nueva ley puede ser más favorable, es necesario descender al examen particular de los hechos, y ya que los hechos





están atestiguados por la sentencia, someter los mismos á largos y prolijos estudios; y como algunas sentencias están motivadas en los resultados de los veredictos y otras, sobre el de los debates, estudiar unas y otras para saber cuáles han sido los criterios reguladores de la pena, considerar de nuevo qué valor hayan tenido en la conciencia del juez, las circunstancias excusantes ó atenuantes, el carácter de las personas, su condición social, en una palabra todo el cúmulo de los elementos que fueron ya apreciados y sobre los cuales la sentencia debía imponer perpétuo silencio. Y entonces, es menester recurrir á la revisión de millares y millares de procesos; repetir, si nó un juicio formal, un juicio que ponga de nuevo en examen los resultados de hecho sobre los que se pronunció la sentencia; conmover con la esperanza de la libertad ó de más leves destinos, millares de desgraciados que están expiando su pena y arrojar el país en el temor de que los malhechores incorregibles, cuyo nombre ha pasado á la leyenda popular de las audacias criminales, no lleguen á recuperar la libertad, aunque fuera con la cautela propia de una vigilancia especial (1).»

El Ministro autor del proyecto aceptó la modificación, y la disposición fué desechada.

Por consideraciones análogas nos hemos limitado á proyectar el artículo 7°, en el que se declara que si una ley posterior quita á un hecho el carácter de delito ó falta que le atribuía la anterior, cesen la condenación y sus efectos; y que si la ley del tiempo en que se cometió el delito y las posteriores fuesen

(1) *Relazione Villa*, pag. 33.

diversas, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean más favorables al acusado.

Un párrafo final del artículo está destinado á salvar inconvenientes que se han presentado en la aplicación del actual Código, cuando por la larga detención preventiva del procesado, el cómputo de la misma dificultaba la determinación de la ley más benigna, lo que dió lugar á interpretaciones contradictorias en los tribunales.

El artículo 8º declara aplicables las disposiciones generales del Código á las materias regidas por otras leyes penales, en cuanto éstas no dispusieren lo contrario. En virtud de un principio de legislación conocido, las reglas generales ó las leyes comunes, en un orden cualquiera de relaciones jurídicas, se aplican á las materias regidas por preceptos especiales, en todo lo que éstos nada han previsto y en cuanto no se oponen á ello. De ahí que las disposiciones generales del Código Penal, que forma el conjunto de leyes penales comunes, puedan y deban ser aplicadas á las materias regidas por otras leyes también penales, siempre que no establezcan lo contrario.



TÍTULO II

De las penas

(Art. 9° á 55)

Establecidas las reglas generales relativas á la aplicación de la ley penal, el proyecto pasa inmediatamente á la determinación de las penas y de la forma de ejecución en cada una de ellas. Esta alteración respecto del plan del Código vigente no afecta las disposiciones de la parte general ó especial, y si la Comisión la proyecta es porque tiene por mejor consejo, en la preparación de un código penal, el de colocar en primer término las leyes relativas á las clases de penas y sus efectos, desde que toda la materia del código que sigue á continuación se refiere general ó particularmente á la aplicación de esas penas. Es este el método observado en los códigos francés, alemán, bávaro, belga, holandés, húngaro, italiano, etc.

De las penas enumeradas en el artículo 54 del Código Penal, nuestro Proyecto conserva las de muerte, presidio, penitenciaría, destierro, inhabilitación y multa, aunque modificadas, con excepción de la primera, en su forma y extensión, según explicaremos en seguida, al tratar en particular de cada una de ellas.

El Proyecto no adopta las penas de *prisión* y *arresto* por que debiendo cumplirse las dos en cárcel, como dicen los artículos 68 y 70 del Código Penal, no





pueden considerarse penas esencialmente distintas entre sí; porque, aún reducidas á una sola, la detención de los individuos en cárceles, sin sujeción al trabajo reglamentario que pudiera mantener al condenado en sus hábitos morales, si los tuviera, ó inclinarlo á ellos en caso contrario, se convierte en una escuela de holgazanería y de vicios, que es con frecuencia fuente de mayores delitos.

En la lista de penas solo agregamos la de deportación.

La mayoría de la comisión ha creído necesario conservar en el Código la pena de muerte. No creemos indispensable reproducir una vez más la discusión sobre tema tan debatido; pero haremos presente que teniendo en cuenta algunas de las más serias objeciones que se presentan en favor de la abolición, así como la adopción en nuestro Proyecto del presidio perpétuo, hemos adoptado un sistema, no presentado aún por ningún Código ó proyecto respecto de esta cuestión, y que, esperamos, sea un límite que pueda tenerse por justo y racional, ó por lo menos admisible por abolicionistas y antiabolicionistas. La pena de muerte no se aplicará, según nuestro Proyecto, por un solo delito: para éste, la seguridad social quedará satisfecha con la total segregación del individuo por toda su vida, cuando el delito lo haga acreedor al presidio perpétuo; pero, si durante esta pena el delincuente cometiera otro delito que también la merezca, los argumentos de la irreparabilidad ó la desigualdad de las penas, ó cualesquiera otros, deberán ceder ante la necesidad de la eliminación absoluta del delincuente.

Una de las importantes ventajas de este sistema es el de que si el Congreso resolviera abolir la pena de



muerte, la supresión de las disposiciones relativas en nada alteraría la economía del Código Penal.

La disposición relativa á los casos de aplicación de la pena de muerte se encontrará en la parte general del Proyecto, en las reglas concernientes á la acumulación de penas.

El artículo 10 del Proyecto contiene la reproducción del artículo 55 del Código Penal, con una agregación á que dá lugar la errónea interpretación que se dió al primero por algunos tribunales, al considerar que con él se reconocía y declaraba que las penas distintas de la de muerte podrían imponerse por presunciones. El Código Penal no legisla sobre medios de prueba, al hacer una salvedad especial sobre la pena de muerte.

En cuanto al medio de ejecución de la pena de muerte, el Código vigente guarda silencio. Creemos que es un error no determinar en la ley de fondo la manera de ejecutar la pena de muerte, por estar ella íntimamente subordinada á los fines que se tienen en vista en su adopción. No puede ser indiferente que para ejecutar la pena, en una parte se fusile, en otra se ahorque, y en alguna se descuartice. Hay, además, una inconsecuencia manifiesta al determinarse la forma de cumplirse todas las demás penas, y no expresar la de la pena más grave. Los medios de ejecución que el Proyecto fija son la electricidad ó el fusilamiento; y se explica esta alternativa en razón de que no será siempre posible aplicar el primero.

Dos modificaciones de menor importancia introducimos al texto del artículo 56 del Código vigente: la supresión de la palabra *aceptado* del primer párrafo, que carece de objeto, desde que no se manda que se ofrezca al reo el auxilio de un sacerdote; y la agregación de que, en defecto del juez de la causa, el di-



rector de la cárcel pueda hacer constar en acta la ejecución. Tenemos para esto último en cuenta la posibilidad de que el Juez no pueda asistir á la ejecución, por una circunstancia cualquiera, hecho que no está previsto en la ley actual.

El artículo 57 del Código Penal vigente señala el término en que debe ejecutarse la pena: «al día siguiente de la notificación de la sentencia irrevocable». Si la Constitución Nacional y las provinciales acuerdan al Presidente y á los Gobernadores facultad suficiente para conmutar la pena de muerte, el Código Penal no puede ni debe hacer ilusorio este derecho, por la fijación de términos angustiosas é improrrogables. Por esto proponemos que la ejecución de la pena de muerte tenga lugar dos días después de la notificación de la sentencia irrevocable, tiempo suficiente para impedir el ejercicio de la gracia; y en previsión de que el Poder Ejecutivo necesite informes respecto del caso y del condenado, que requieran mayor término, agregamos: “sin perjuicio de la suspensión que el P. E. podrá decretar á los efectos del ejercicio del derecho de gracia”.

La disposición del artículo 57 del Código queda comprendida en el artículo 12 del Proyecto. La del artículo 58 se reproduce sin modificación en el 13. En la del 59, reproducida en el 14, se declara que no se impondrá pena de muerte á los menores de diez y ocho años, en lugar de «*los menores de edad*», como dice aquél, puesto que en la misma ley se entiende completa y absoluta la responsabilidad penal á los diez y ocho años.

Es indispensable que la pena de presidio sea seria y esencialmente distinta de la pena de penitenciaría, con la cual ha permanecido confundida hasta hoy, cum-



pliéndose en los mismos establecimientos, donde los hay. Según el artículo 60 del Código Penal, la pena de presidio debe cumplirse trabajando los sentenciados en trabajos duros y penosos y sin recibir auxilio alguno. Dejando por el momento de ocuparse del destino que deba darse al trabajo de los condenados, la Comisión observa que los términos *duros y penosos* indican un rigor que excede á las necesidades de la pena: basta decir que el trabajo sea *forzado*. Debe ser condición especial de esta pena que se cumpla en establecimiento especialmente destinado al efecto y situado á la mayor distancia de los centros poblados. Debiendo aplicarse aquélla á los condenados que hayan revelado tendencias más opuestas á la convivencia social, por la ejecución de los delitos más graves, deben estar sujetos á un régimen disciplinario riguroso que no podrá hacerse ampliamente efectivo si no se sustrae el presidiario á la proximidad de parientes y camaradas que siempre encuentran el medio de burlar la más severa vigilancia.

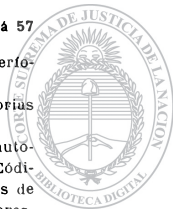
La creación de establecimientos penales es por demás costosa para que cada una de las provincias pueda dar cumplimiento á la ley del Congreso que determina la forma de aplicación de las penas. La Nación debe, pues, facilitar los medios de represión que tiendan á garantizar la seguridad de los habitantes del país contra la delincuencia. Disponiendo de islas en las costas del Sud de la República y pudiendo aplicar el trabajo de los condenados á la construcción de su propio presidio, tiene á la vez la Nación mayores facilidades para la fundación de un establecimiento adecuado. Por esto, el Proyecto dispone, en el artículo 15, que el Gobierno de la Nación funde en alguna de las islas del Sud un presidio al que deberán ser des.



tinados los condenados á esa pena por los tribunales nacionales, y al cual *podrán* ser remitidos los condenados por los tribunales provinciales. La Comisión ha tenido presente que existe en el Congreso un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, creando un presidio en la isla de los Estados. (1)

Por el artículo 16 del Proyecto se deja la reglamentación del presidio á la autoridad competente, pero esta reglamentación deberá estar sujeta á las condiciones que como esenciales de la pena, se fijan en el mismo artículo: la reclusión celular en las horas destinadas al sueño y á la alimentación, y la reunión durante el día, en clases separadas, para el trabajo, dentro ó fuera del establecimiento. La conveniencia del régimen celular es indiscutible. Pero ¿deberá observarse con todo rigor, imponiéndose el aislamiento absoluto y el silencio al condenado? Este es el sistema adoptado por algunos Códigos modernos; pero la Comisión estima que, á parte de que constituye una severidad cuyos resultados benéficos son negativos ó carecen de importancia, presenta serias dificultades de ejecución. El día del penado debe dividirse en tres partes: la destinada al trabajo, la destinada á la alimentación y la destinada al sueño. En estas dos últimas debe conservarse en aislamiento al penado: el trabajo en común les dará mayor actividad y energía, proporcionando resultados morales y materiales superiores. Además, el aislamiento absoluto pone en peligro las facultades intelectuales de los penados, y no se puede concebir la necesidad ni la conveniencia de convertir á los delinquentes en imbeciles. Solo por

(1) Presentado al Congreso el 27 de Junio de 1885.



vía de corrección disciplinaria y por un corto período puede aplicarse la reclusión absoluta.

Complementan la pena de presidio las accesorias de inhabilitación absoluta é interdicción Civil.

Omitimos la de sujeción á la vigilancia de la autoridad que, además de las anteriores establece el Código, tanto porque esta pena es ineficaz, después de haberse cumplido penas considerablemente mayores, cuanto por las dificultades de hacerla efectiva.

Por el artículo 18 establecemos el presidio perpétuo. La pena perpétua, como necesaria transición entre la pena de muerte y las penas temporales, donde aquélla existe, ó como pena suprema que sustituye á la de muerte, en los códigos que no establecen ésta está admitida por los códigos más adelantados. La pena de presidio por *tiempo indeterminado*, fórmula que tomó el proyecto Tejedor de la pena de cárcel de fuerza del Código de Baviera, no llena las condiciones de una pena inmediatamente inferior á la de muerte. Conviene advertir que en el código de Baviera se establece la pena de cadena á *perpetuidad* (art. 8). Los argumentos que puedan hacerse contra las penas perpétuas carecen de importancia, toda vez que se hace de ellas un uso moderado, y se aplica á los delincuentes más temibles, respecto de los cuales aparece indispensable la segregación de la sociedad.

En cuanto al presidio temporal, el proyecto aumenta considerablemente el máximo y el mínimo, elevando el primero á veinte y cinco años y el segundo á diez. Esta duración hace del presidio temporal una pena intermedia entre el presidio perpétuo y la penitenciaria, y marcadamente diversa de una y de otra. Defecto del Código vigente es el de que el presidio por tiempo indeterminado se confunde con el presidio tempo-



ral en su máximun de duración; y que el presidio temporal con la misma duración de la penitenciaría temporal, y constituidos uno y otro por elementos análogos dan lugar á dos penas con distintos nombres, pero en realidad sin distintos efectos; lo que, en resumen, limita los medios de represión.

Los artículos 19 á 24 del Proyecto, establecen y reglamentan especialmente la *libertad condicional*, de los condenados á presidio temporal, sistema que la Comisión propone en sustitución del actual *derecho de pedir gracia* de una parte de la condena, que establece el artículo 74 del Código penal.

La conveniencia de que en el cumplimiento de la condena encuentre el condenado á pena temporal una recompensa que lo estimule en la observancia de una buena conducta, ha sido conocida desde mucho tiempo atrás. La actual disposición del Código penal, tomada del Proyecto Tejedor procede del Código de Baviera sancionado en 1813. En las sucesivas traducciones y transformaciones, el artículo perdió su claridad y presenta hoy tales dificultades de interpretación que ha facilitado más de un abuso, que no es del momento referir. Pero no es este el principal defecto de la ley vigente. Mediante las «pruebas de una reforma positiva», —concepto muy riguroso si se aplica estrictamente, pero muy benigno si por él sólo se exige no haber cometido delitos ó faltas durante una parte de la condena, faltando precisamente la frecuente ocasión de cometerlos que tiene el delincuente en libertad,—el condenado obtiene la remisión absoluta de una parte de la pena, y se encuentra para cometer un nuevo delito en las mismas condiciones que el que nunca delinquiró. Se comprende que es mucho más racional y provechoso el sistema de la libertad condi-



cional, que vuelve á la libertad al condenado, durante una parte de la pena pero á condición de obtenerse alguna seguridad de que en ese tiempo no delinquirá de nuevo.

Teniendo presente que la pena de presidio solo se aplica en el Proyecto á los autores de delitos graves, y que la libertad condicional es un favor hecho al delincuente, en el interés de estimularlo á observar los reglamentos carcelarios, sujetamos la libertad condicional de los condenados á presidio temporal á los límites fijados por el artículo 19. Este favor se ampliará respecto de los condenados á penitenciaría, teniendo presente que aplicamos esta pena á delitos de índole menos perversa.

Los artículos 21 á 24 establecen los casos y consecuencias de la revocación de la libertad condicional, medidas derivadas del principio establecido en la disposición principal.

El Proyecto introduce en el número de las penas la de *deportación*, que no se aplicará á ningún delito en particular, pero que se impondrá á los reincidentes. Carecemos de una estadística de la reincidencia en la República; pero esto no basta para desconocer que una buena parte de la criminalidad se debe á los delincuentes habituales ó profesionales, frecuentemente autores de delitos de corta entidad en sí mismos, pero que mantienen en constante ejercicio á las autoridades policiales y judiciales. Contra una clase de estos delincuentes profesionales, los ladrones, las autoridades policiales se han visto en la necesidad de adoptar medidas extremas é ilegales, como la *gira*, (1) que por ningún concepto deben tolerarse.

(1) Consiste la *gira*, usada contra los ladrones en la ciudad de Buenos Aires, en tomar á los ladrones ó rateros conocidos, hayan cometido ó no un nuevo delito, y tenerlos por varios días en algunas comisarias de la ciudad, á fin de que sean conocidos por los agentes de la autoridad. Hecho esto se les pone en libertad dándose orden á los agentes de prenderlos nuevamente así que los hallaren. El ladrón queda de ese modo condenado á esquivar constantemente á los agentes de la policía.



La segregación de los reincidentes se debe reconocer, pues, como indispensable. La Comisión lo ha comprendido así, y, para legislar esta materia, ha tenido presente principalmente la ley francesa de 27 de Mayo de 1885. La deportación consistirá en la relegación por tiempo indeterminado, que no bajará de veinte años, en la Isla de los Estados ú otra que se destine al efecto. Más adelante determina el Proyecto los casos de reincidencia que dán lugar á la deportación. Tanto para esta pena como para determinar la colocación del presidio en una isla del sud, la Comisión ha tenido presente el mensaje y proyecto presentados, por el Poder Ejecutivo, al Congreso en 27 de Junio de 1883, dos años antes de que se sancionara en Francia la relegación en su forma actual.

Aunque para conocer con exactitud los resultados de la relegación es necesario poder comparar los datos estadísticos de una série de años, mayor que la que lleva de ejecución la ley francesa, de la relegación, los obtenidos hasta la fecha son satisfactorios.—«Los resultados de la Ley de 27 de Mayo de 1885, dice un magistrado de Lyon (1), no se han hecho esperar: todo magistrado que interviene en asuntos criminales y correccionales ha podido, en seguida, darse cuenta de los provechosos efectos de la relegación,» y agrega en una nota: «Respecto á Lyon, en particular, me ha sido fácil observarlo. Encargado del servicio del *petit parquet* sucesivamente en 1884, 1885, 1886, 1887, 1888 y primeros meses de 1889, he podido constatar la diferencia considerable entre el número de individuos detenidos y conducidos á la audiencia en estos periodos diversos; en la actualidad (Junio de 1889) el número

(1) A. Berard, en la *Revue d'anthropologie criminelle*, 1890, p. 35.



medio de individuos presentados cada mañana, es muy inferior á 20; en 1885 era por lo menos de 30. Como frecuentadores (habitués) del Petit Parquet, quedan los vagabundos y los mendigos; los ladrones de profesión casi han desaparecido, y los últimos que llegan son poco á poco relegados.»

La aplicación de esta pena exigirá la formación de registros de reincidencia; pero como son generalmente las grandes ciudades las que suministran mayor caudal de reincidentes, la oficina antropométrica que funciona regularmente en la Policía de la Capital, es un elemento de la mayor importancia para hacer efectiva la ejecución de la ley que proyectamos.

Los artículos 26 á 29 establecen las condiciones y modos de cumplimiento de la pena. El deportado quedará en libertad en el lugar de la deportación, pero estará sujeto á la vigilancia de la autoridad, á observar las reglas de inspección que ésta le prefije y á adoptar oficio, arte, industria ó profesión.

La facultad de obtener licencias temporarias para trasladarse el penado á otro sitio de la República, está establecida también en la ley francesa; pero hemos considerado conveniente que la ley prevenga los abusos que pudieran hacerse de esta medida, por la cual la sujetamos á restricciones no contenidas en aquélla y que se enuncian en nuestro artículo 27.

Hemos creído acertado no hacer de la deportación una pena perpétua, irredimible. Si un reincidente, gozando de una relativa libertad de acción, durante una larga serie de años, ha dejado de cometer delitos, bien puede confiarse en que haya modificado seriamente sus costumbres y que no haya peligro en volverle á la completa libertad. A esto se provee en el artículo 29 de nuestro Proyecto, concordante con el 16 de la

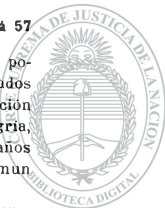


ley francesa, disponiendo que después de veinte años de buena conducta, el deportado obtendrá la exoneración de la pena.

La pena de penitenciaría no se conoce con este nombre en los códigos extranjeros, excepto el uruguayo. La penitenciaría no es una pena, sinó un régimen penal. La denominación está, sin embargo, consagrada en nuestros códigos y proyectos, y hemos creído útil y aún necesario conservarla en su aceptación nacional. La penitenciaría, como pena, es análoga á la que en el Código de Baviera se llamaba casa de trabajo penal; á la *detención* del código italiano; á la *reclusión* del húngaro, etc.

Conservamos para la penitenciaría las condiciones fijadas por el actual artículo 65 del Código Penal: cumplimiento de la pena en establecimientos distintos de los presidios; sujeción al trabajo dentro de los mismos. Pero de acuerdo con las más acertadas indicaciones recogidas de la experiencia, hemos conservado la reclusión celular durante las horas que los reglamentos no destinen al trabajo y la instrucción. Aún para las penas de corta duración es conveniente la reclusión celular; porque si aquéllas se han de aplicar á los autores accidentales de delitos de corta entidad, que pueden ser cometidos aun por las personas de mejor conducta, ningún beneficio mayor se puede procurar á éstas que evitarles la afrenta del contacto y de la sociedad de los penados.

En cuanto al término de duración de la penitenciaría, lo fijamos de un día á quince años. El máximo guarda relación con el actual. En cuanto al mínimo, se comprende que suprimiendo en nuestro proyecto las penas corporales menores, prisión y arresto, por las razones que ya quedan apuntadas, hemos debido



bajar el mínimum de penitenciaría al menor tiempo posible: por esto el artículo establece los expresados mínimum y máximun. En Italia, la pena de detención varía de tres días á veinticuatro años; en Hungría, la prisión de estado tiene por máximun quince años y por mínimum un día; el mismo máximun y mínimum tiene la prisión en Holanda, etc.

Una disposición final del artículo 30 establece que, cuando la pena no excediese de un año, se cumplirá en una sección especial de la cárcel de detenidos. Esta disposición, tomada de la parte final del artículo 15 del código italiano, tendrá por efecto inmediato disminuir considerablemente la población de los establecimientos especiales de penitenciaría, y, por consecuencia más importante, la de que reuniéndose en los últimos á los detenidos por mayor tiempo, será más fácil la observancia de los métodos disciplinarios que no sufrirán alteración por el continuo tránsito de los condenados á penas leves, que son el mayor número.

El artículo 31 del Proyecto dispone que las mujeres cumplan su pena en establecimientos distintos de los destinados á los hombres. El Código Penal guarda silencio sobre este punto. El mayor alejamiento y separación posibles entre los condenados de distinto sexo, es una regla esencial para el cumplimiento de la pena en buenas condiciones de orden y moralidad.

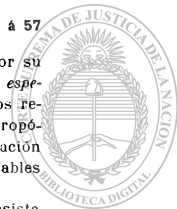
El artículo 32, que hace aplicable á los condenados á penitenciaría lo dispuesto para los presidiarios respecto á inhabilitación é interdicción, es análogo al 67 del Código Penal.

El artículo 33 dispone un pasaje intermedio y gradual entre la pena y la libertad condicional, al determinar que después de cumplida con regularidad la



tercera parte de la condena, los sentenciados podrán ser sacados, á petición suya, durante el día, á trabajar en establecimientos agrícolas ó industriales, bajo la vigilancia de la administración de la Penitenciaría. El penado gozará en este período siquiera de una relativa libertad, que será siempre un premio capaz de estimular su buena comportación y alentar-lo á perseverar en ella. Por otra parte, puede ser económicamente más provechoso el trabajo en un establecimiento libre que en una cárcel, y será conveniente recurrir á aquél en todo lo que sea posible suplir á éste.

Después de este pasaje intermediario á la libertad condicional establecido por el art. 33, el 34 establece la libertad condicional luego de cumplidos los dos tercios de la condena, *observando con regularidad los reglamentos del establecimiento*. Se dispone, asimismo, que la libertad condicional sea acordada por la *autoridad judicial* correspondiente. Una y otra disposición se consignan también respecto de la libertad condicional en la pena de presidio (art. 19). La primera importa una modificación, que hemos juzgado indispensable, de los términos *hubiesen dado pruebas de una reforma positiva*, usados por los artículos 73 y 74 del Código Penal. Estos términos carecen de precisión, como lo hemos indicado más arriba. Son ellos mismos una modificación de los empleados en los artículos 99 y 100 del proyecto Tejedor, los que eran á su vez una traducción modificada del art. 12 del código de Baviera. Tomar como término de apreciación de la conducta del penado una observancia regular de los reglamentos carcelarios, nos parece una fórmula aún más precisa que la del código italiano, «y haya tenido tal conducta *que haga presumir su*



arrepentimiento;» y que la del húngaro: «si por su buena conducta y aplicación *han fortificado la esperanza que se habia concebido de su enmienda;*» los Reglamentos carcelarios pueden disponer, á este propósito, la anotación del número de faltas de aplicación al trabajo, á la disciplina, etc., que sean imputables al penado.

La segunda modificación al Código actual consiste en declarar que la resolución sobre la libertad condicional, en los casos ocurientes, corresponderá á la autoridad *judicial* competente. El Código ha guardado silencio sobre este punto; pero esta circunstancia no ha debido estimarse suficiente motivo para que, por un manifiesto error respecto de la naturaleza y objeto de la reducción de las penas, considerándola como una porción del atributo de la gracia y conmutación que corresponde al P. E., se sustrajera al Poder judicial la decisión sobre la procedencia de esa reducción (1).

El mismo artículo 34 dispone que la libertad condicional, se acuerde á los condenados á penitenciaría por *más de dos años*. Por una parte, carece de importancia el sistema de la libertad condicional en las penas muy leves; por otra, el artículo 37 provee una forma conveniente de obtener la libertad en las penas menores, mediante la sustitución de penas.

En cuanto á las restricciones con que debe acordarse la libertad condicional, el artículo 35 las consigna de una manera más favorable que las determinadas por el artículo 20 para los penados de presidio. Esta diferencia en la libertad condicional de unos y otros

(1) Esta materia ha sido ampliamente tratada en el tomo I, Cap. XVIII de la «Exposición y crítica del Código Penal de la República Argentina» del Dr. R. Rivarola.



penados, es lógica y consecuente con la respectiva gravedad de las penas. Las condiciones de la revocación de la libertad condicional, no pueden variar en uno y otro caso, y á ello provee el artículo 36.

El artículo 37, á que acabamos de hacer referencia, establece como regla general la sustitución de la pena de penitenciaría cuando no exceda de dos años, y salvo los casos de prescripción expresa en contrario. Esperamos que sea admitida la conveniencia de una regla que tiende á disminuir, en los límites de lo posible el mal siempre considerable de una gran población de las cárceles. Hay, por otra parte, concordancia entre esta regla y las leyes que rigen en la República la excarcelación provisional; y es justo que si un depósito de dinero es suficiente caución de la libertad provisoria, una pena pecuniaria pueda sustituir á la corporal. Últimamente, el Congreso ha sancionado la sustitución de las penas corporales por pecuniarias en los casos de excarcelación.

El artículo 38 contiene una disposición común á las penas de presidio y penitenciaría: la aplicación del producto del trabajo de los penados. Nuestra disposición guarda relación con la del artículo 65 del Código Penal, que establece el destino que debe darse al producto del trabajo de los condenados á penitenciaría. Apenas necesita censura, por ser chocante, la falta de equidad de la disposición del artículo 60 del Código vigente, que adjudica al Estado íntegramente el producto del trabajo de los condenados á presidio.

Los términos del artículo 39 del Proyecto, que establece la pena de multa, son análogos á los del artículo 79 del Código Penal.

El Código no contiene reglas adecuadas para hacer efectiva esta pena: se limita á disponer que si el mul-



tado no pudiese pagar la multa sufrirá *arresto equivalente*, que no podrá pasar de nueve meses. La equivalencia de la pena de arresto con la de multa no está determinada por la ley. Por otra parte, el artículo no dice cómo se hace efectiva la multa en el penado que puede pagarla, y no es conveniente que sobre un punto tan importante se guarde silencio. Un arresto de nueve meses no es suficiente pena, como equivalente de multas elevadas, máxime si se tiene en cuenta que en ciertos delitos peculiares á empleados públicos, la multa se fija por proporciones de tanto por ciento sobre el importe de una defraudación ó de una exacción, vale decir, sobre una suma que puede ser de la mayor entidad.

Nuestro artículo 40 prevé los casos posibles en esta materia.

A lo prescripto por los artículos 71 y 72 del Código Penal sobre el cumplimiento de la pena de destierro, hemos agregado una sanción indispensable para el caso de reincidencia en la violación de la condena: el Código solo provee á la primera violación.

Como en el Código vigente, la inhabilitación en el Proyecto puede ser absoluta ó especial: perpétua ó temporal. A las disposiciones de los artículos 75 y 76 del Código, conservadas casi textualmente, solo agregamos en concordancia con otros códigos, que la inhabilitación absoluta importa la pérdida de toda jubilación, pensión ó goce de montepío de que disfrute el penado. La pena de inhabilitación absoluta se reserva ordinariamente para los malos empleados, y es, por este motivo, incompatible con aquellos beneficios que importan una recompensa á los buenos funcionarios.

El principio de que debe compensarse la detención preventiva, que por desgracia asume frecuentemente

en nuestro país las proporciones de las penas graves, —está para la Comisión fuera de debate, desde que ella acepta el precepto del artículo 49 del Código, entendiéndolo á casos que en éste fueron omitidos.

El art. 46 reproduce la disposición del 80 del Código vigente sobre comiso de los productos é instrumentos del delito:—agregamos que los instrumentos decomisados no puedan ser enajenados, para no popularizar los medios empleados por los criminales y á fin de que se conserven en los archivos ó museos como elementos de estudio de la criminalidad.

Estudiando la naturaleza y objeto de la pena, hemos creído que no podíamos prescindir de lo que se llama ordinariamente la responsabilidad civil del delincuente, como tampoco prescindió de ella el Dr. Tejedor al redactar el proyecto que sirvió de base al Código vigente.

Si el delito es un quebrantamiento del orden jurídico que debe hacerse cesar y repararse del modo más perfecto posible, es evidente que el poder social debe procurar el restablecimiento del orden alterado, obligando al delincuente á resarcir todos los daños causados por la alteración. Una pena que solo tienda á reparar el daño moral causado á la sociedad, descuidando el resarcimiento del perjuicio real inferido á la víctima del delito, no llena los objetos racionales de la penalidad, ni justifica suficientemente el ejercicio del derecho de represión por el estado. Histórica y teóricamente el estado, en materia penal, no es más que el depositario del derecho de defensa inherente á cada hombre. La fuerza del individuo ha sido reemplazada por la fuerza del estado en la evolución de la sociedad, pero el fin no ha cambiado ni tiene por qué cambiar: es, y tiene que ser siempre, proteger al in-





dividuo y á las instituciones protectoras del individuo.

Siendo esto así, no tiene explicación satisfactoria el sistema del Código vigente que excluye de la pena la reparación debida por el delincuente á su víctima, dejando que ésta ventile ese asunto, como meramente privado ante la jurisdicción y conforme á las leyes propias del derecho civil. Esa pena incompleta no llena sinó á medias su objeto.

Por otra parte, parece más conforme con la naturaleza de la administración de justicia, que un hecho punible dé lugar á un solo proceso, evitándose de ese modo: 1º la posibilidad de que la sentencia recaída en el juicio criminal sea contradictoria con la pronunciada en el juicio civil; 2º la pérdida de tiempo por el damnificado que desea, naturalmente, obtener la más pronta reparación del daño sufrido; 3º los gastos provenientes de la multiplicidad de los procesos.

Finalmente, la unidad y la lógica de la legislación exigen que el derecho penal rija todos los efectos del delito, con sujeción á sus principios y para el mejor éxito de sus fines, como el derecho civil rige todos los efectos de los hechos civiles.

Solo una concepción equivocada de la naturaleza del derecho penal y de su relación con el derecho civil, ha podido establecer una división radical entre los efectos del delito, separando hechos emanados de la misma fuente, para entregarlos á leyes y jurisdicciones diferentes y establecidas con diversos fines.

¿A qué título reivindicaría la ley civil la materia de daños y perjuicios causados por el delito? ¿A título de reguladora del derecho de propiedad, afectado por el resarcimiento de daños y perjuicios? Pues, entonces deberá reivindicar también toda la materia penal, porque no hay pena que no afecte un derecho

protejido por la ley civil, consistiendo, como consisten todas ellas en restricciones de los derechos individuales.

El Código Penal vigente, desconociendo la justicia de estas observaciones, eliminó del proyecto del Dr. Tejedor los capítulos relativos á la responsabilidad llamada civil y al modo de hacerla efectiva, capítulos tomados del código español; pero, quebrando la lógica dispuso incidentalmente en el art. 176 que las penas se impusieran sin perjuicio de las acciones del damnificado para pedir la correspondiente indemnización; en el art. 225, que las penas de los delitos contra la propiedad se aplicarán sin perjuicio de la restitución de la cosa sustraída ó defraudada; y en el art. 139 fué más lejos aún, y se colocó en la doctrina que nosotros sostenemos, disponiendo que los reos de delitos contra la honestidad fueran condenados á dotar á la ofendida si fuere soltera ó viuda, en proporción á sus facultades, y á mantener la prole que resulte.

Nuestro art. 47 hace extensivo á todos los damnificados lo que el 139 del Código vigente estableció únicamente en favor de las víctimas de los delitos contra la honestidad: el derecho de ser indemnizado del daño material y moral causado por el hecho punible. Hemos expresado que la indemnización será fijada por el juez al aplicar la pena, para que no quepa duda respecto de que la voluntad de la ley es que todos los efectos del delito se declaren simultáneamente en un solo proceso.

El art. 48 reproduce las disposiciones de los artículos 136 y 137 del código Tejedor, limitándose á declarar que la reparación comprende la restitución de la cosa obtenida por el delito, la indemnización de los daños





y perjuicios y el resarcimiento de los gastos del proceso.

El art. 49 casi idéntico al 139 del Código Tejedor, prevé el caso de que la restitución no pueda efectuarse en especie, disponiendo para entónces la restitución del valor de la cosa.

Los artículos 50 y 51, idénticos á los artículos 142 y 143 del Código Tejedor, declaran el alcance de la indemnización respecto de las personas, proveen á su regulación en defecto de plena prueba y fijan su orden de preferencia relativamente á las demás obligaciones del culpable.

El artículo 52 reproduce la disposición del artículo 144 del Código Tejedor, estableciendo el orden en que deben ser satisfechas las responsabilidades pecuniarias provenientes del delito.

En el artículo 53 declarando como el Código Tejedor (art. 69) la solidaridad de la responsabilidad pecuniaria de todos los culpables de un hecho punible, no hemos creído como él que el juez deba asignar á cada delincuente la cuota proporcional que le corresponda para que pueda pedir reintegro el que hiciese el pago. Hemos considerado más conforme á las exigencias de la moral pública, la disposición del art. 1082 del Código Civil, que prohíbe al codelincuente demandar á los demás responsables, las partes que les correspondieren en el pago de la indemnización que él hubiere satisfecho.

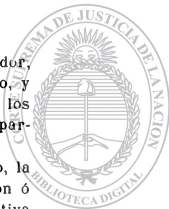
El artículo 54 análogo al 71 del Código Tejedor, regula la responsabilidad del que participa por título lucrativo de los efectos de un hecho punible, responsabilidad que debe ser proporcional al grado de participación según los principios generales del derecho.

El artículo 55 procurando la mayor prontitud en

la reparación, dispone, como el 145 del Código Tejedor, que ésta se haga efectiva por la vía de apremio, y provee, además, lo necesario para garantizar á los damnificados en los casos de insolvencia total ó parcial del condenado.

En el artículo 56 se elimina del 51 del Código, la declaración de no reputarse penas la separación ó suspensión de empleados por la autoridad gubernativa competente, ni las correcciones disciplinarias; porque, ó el hecho cae bajo la legislación constitucional y administrativa, ó bajo la aplicación del artículo 6º del Proyecto, según los casos.

El artículo 57 agrega á lo dispuesto en el 50 del Código, que el condenado que se volviese loco será atendido en una sección especial del establecimiento en que se encuentre, enmienda ajustada á lo que exponemos en el título siguiente.





TÍTULO III

De la responsabilidad

(Arts. 58 á 64)

El problema relativo á los fundamentos de la responsabilidad es uno de los más graves, más discutidos y más erizados de dificultades que pueden presentarse. Los criminalistas investigan empeñosamente su solución para ofrecer á las legislaciones una base sólida en materia tan delicada é importante. La Comisión no tiene para qué exponer las doctrinas y discusiones existentes sobre este asunto; y debe circunscribirse á explicar las reglas que ha consignado. Desde luego, al establecer esas reglas, ha querido conciliar dos órdenes de intereses igualmente respetables: los intereses de la sociedad y los del individuo.—Para ello le ha sido fácil hallar un punto de partida seguro é indiscutible. Es una verdad bien comprobada que, en la vida social, en la materia que ahora nos preocupa, el principio general es la responsabilidad: todo hombre responde de sus actos, porque los ha ejecutado, porque son suyos, porque se presume que ha tenido el designio de realizarlos; y esto es más estrictamente cierto si se trata de acciones criminosas. La excepción es la irresponsabilidad. Por eso el art. 58 del Proyecto determina, ante todo, el principio general: «En la ejecución de todo hecho punible, dice,



se presume la intención criminal de cometerlo;»—se presume, pues, que ha querido ejecutar ese hecho, y que, en consecuencia, ese hecho le es imputable. Esta cláusula es sustancialmente idéntica á la primera parte del art. 6° del Código vigente; difiere sólo en palabras;—las palabras han sido variadas para hacer la fórmula más amplia y comprensiva. Se dice *hecho punible*, en vez de «hechos clasificados de delitos», á fin de abarcar todos los casos posibles de acciones reprobadas ó incriminadas por la ley, sea que se trate de delitos consumados, sea que se trate de tentativas. Se dice *intención* en lugar de *voluntad*, porque la intención importa y precisa netamente el esfuerzo de la voluntad del individuo hácia el delito.

Pero, puede suceder que, en realidad, las cosas no hayan pasado de esa manera, que el ejecutor del hecho no haya tenido el designio de delinquir y que todos los elementos de convicción hagan visible la falta de ese propósito. En tal caso la presunción de intención criminal debe ceder ante la presunción contraria. Empero, es menester que esta presunción descanse en datos positivos; que resulte, como lo dice el artículo proyectado, de las circunstancias particulares del proceso, es decir, de las averiguaciones practicadas, de todos los indicios que rodeen el acto, de las constancias del expediente y no de las simples afirmaciones del imputado. Esta disposición es igual á la segunda parte del artículo 6° del Código vigente.

Puede suceder aún que la falta de intención criminal no resulte, ni pueda resultar,—por razón del modo como el hecho ocurrió,—de las circunstancias particulares del proceso; y que, no obstante, sean verosímiles las causas excluyentes de responsabilidad alegadas en ciertos casos. Así, una persona, atacada de



noche ó en un sitio apartado, fuera de la presencia de testigos, hiere ó mata al agresor, en su propia defensa. Desde que nadie conoce el suceso, nadie puede deponer en su favor; sinembargo, se trata de una persona de buenos antecedentes, que nunca ha sido llevada ante la justicia por actos delictuosos y que tiene reputación de honesta; además, no hay prueba alguna que contradiga sus aseveraciones de que ha obrado para defenderse y dentro de los límites de la defensa.

Es obvio que en un caso como éste y en todos sus análogos, no es posible presumir la intención criminal; la verosimilitud de las causas eximentes de imputabilidad alegadas y la falta de prueba en contrario, deben amparar al procesado y producir la presunción inversa. Tal es el precepto contenido en la parte final del art. 58.

En el Código, no solamente el 6º, sinó también los artículos 4º, 5º y 7º se refieren á la intención criminal. Hemos suprimido estos artículos, porque, bien interpretados, nada aclaran, nada agregan al principio general; y entendidos tales como suenan, como se hallan concebidos, serán una fuente de confusión y de perplejidades, pues no guardan armonía entresí, ó son contradictorios con otras disposiciones.

El artículo 4º dice: «El que después de formar la resolución de cometer un delito, emprenda una acción susceptible de causar uno mayor ó uno menor, será castigado como autor del delito realmente cometido, y no se le admitirá la excusa de que su intención fué solo cometer el menos grave».—El objeto de este artículo no es dulosó: por él se prescribe, en términos imperativos y absolutos, que no se admita al delincuente la excusa atenuante de que su intención no ha



sido realizar el delito ejecutado, sinó uno menos grave. Sin embargo, puede resultar de las circunstancias particulares de la causa, con arreglo al artículo 6º, que el agente se haya propuesto en realidad cometer el delito menos grave y no el más grave; en semejante caso, ¿qué sucederá? De dos cosas una: ó se admitirá la excusa atenuante, derivada de las circunstancias particulares del proceso, y, en esa hipótesis, el artículo 4º será supérfluo é inaplicable; ó no se admitirá aquella excusa, y entonces el artículo será malo é inconveniente, porque impedirá que en la investigación de la perversidad del criminal, se considere un dato positivo, fundado en hechos y deducido de las circunstancias de la causa.

El Código vigente suministra una razón más en contra del art. 4º. El art. 83, núm. 3º, coloca entre las circunstancias atenuantes la de «no haber tenido el delincuente intención de causar todo el mal que produjo». Esta cláusula se halla en contradicción con dicho artículo 4º, y en virtud de ella, cuando conste que el criminal no ha querido ejecutar el delito más grave, efectivamente realizado, ni, en consecuencia, «causar todo el mal que produjo,»—deberá admitirse la excusa de que su intención fué sólo cometer el menos grave.»

Según el art. 5º «cuando por efecto de error ó ignorancia, el autor de un delito no haya conocido el carácter particular de la acción que ha cometido, y este carácter sea de una naturaleza capaz de aumentar la culpabilidad de la acción, de tal modo que el culpable se encuentre haber cometido un delito más grave que el que intentaba, no se le imputará el hecho como voluntario, sinó en consideración á la intención real que hubiese tenido, atendiendo á las



circunstancias del caso.» La nota, puesta por el Dr. Tejedor al pié del artículo correspondiente de su proyecto, explica, con un ejemplo, el alcance de la disposición. «Así, dice, cuando un hombre comete delito de violación, ignorando que era el padre de la víctima, será culpable de violación, pero no de incesto.»

Sin duda, siempre que, por ignorancia ó error de hecho, el delincuente no haya conocido alguna de las particularidades de la acción, susceptible de aumentar su gravedad, no deberá imputársele el delito como si hubiese conocido esa particularidad. En el caso del ejemplo dado por el Dr. Tejedor, como en el de un hombre que ha herido ó ha muerto á otro hombre, sin saber ni sospechar que éste fuera su padre, en estos casos, y en cualesquiera otros, el acto sólo se imputará al agente en relación á su intención efectiva, y nunca se agravará su situación en virtud de una circunstancia que ignoraba. Pero ¿es necesario un precepto especial para esto? A nuestro juicio, no; bastará la prescripción contenida en el art. 6º del Código ó en el 58 del Proyecto: ésta lo comprende todo en sus términos amplios y generales. Efectivamente, realizada una violación por un padre en la persona de su hija, se presumiría que quiso violar á su hija; no obstante, si de las circunstancias particulares de la causa resultara que no sabía que la víctima fuese su hija y que tuvo intención únicamente de violar á una mujer, la primera presunción cedería ante la segunda presunción contraria, con arreglo á aquellas disposiciones.

El artículo 7º estatuye que « cuando una persona sea convicta de haber cometido con intención un acto que, según las nociones de la experiencia general, acostumbra producir inmediata y necesariamente un resulta-



do criminal determinado, se tendrá como cierto que este resultado entró en las previsiones del culpable, á no ser que justifique lo contrario con pruebas manifiestas». Este artículo establece una presunción respecto de las consecuencias ó resultados inmediatos y necesarios del acto cometido con intención: la de que esos resultados entraron en las previsiones del culpable.

Lo que aquí se presume se halla comprendido íntegramente en la regla ya consignada sobre la responsabilidad, pues al decir la ley que todo hecho punible se presume ejecutado con intención criminal, se refiere al hecho y á sus resultados inmediatos y necesarios, y entiende seguramente que esos resultados entraron en las previsiones del agente. De ahí que el artículo sea supérfluo é inconducente. A parte de esto, adolece de un vicio: la presunción que establece sólo puede ser destruida, según sus últimas palabras, con pruebas manifiestas, y no ya con la presunción contraria, resultante de las circunstancias particulares de la causa. No se concibe el fundamento de semejante diferencia. Si contra la presunción de intención criminal (en la cual intención entra la previsión de los efectos del acto) basta que resulte lo contrario de las circunstancias particulares de la causa, con mayor razón debe bastar esto mismo contra la presunción de que el resultado inmediato y necesario del hecho entró en las previsiones del culpable.

Hemos suprimido también los artículos 1º, 2º y 3º, que definen el delito ó la falta, el delito consumado y el delito frustrado. La ley no necesita definir el delito, en general, porque ante ella y para ella no puede haber otros actos delictuosos que las acciones que concretamente reprime como tales. Todo lo que en la ley no sea reprobado, jamás dará lugar á la



imposición de una pena. Tampoco necesita definir el delito consumado, ni el frustrado. Las definiciones de estos delitos no responden á ningún fin práctico porque en la investigación de la pena aplicable al delincuente, en cada caso, único objeto que ha podido tenerse en vista al consignarla en la ley, no prestarán servicio alguno, ni será posible tomarlas en cuenta. Para saber cuál es la pena que corresponde al reo, se deberá indagar qué pena impone el Código, en la parte especial, á la acción que realmente ha cometido. Además, la definición del delito frustrado se justifica en los códigos que hacen de él algo distinto de la tentativa; pero no en los que, como el argentino ó como el proyecto que presentamos, constituye simplemente una modalidad de la tentativa, puesto que definida ésta queda definido aquél.

Determinado el principio de la responsabilidad, procedía lógicamente la consideración inmediata de las causas de irresponsabilidad. Es lo que hemos hecho en el artículo 59. El Código vigente no lo ha entendido así; ha legislado la responsabilidad en el título 1º y se ha ocupado de las causas que la excluyen, después de tratar de las penas, bajo el epígrafe, «causas que eximen de pena» Esta designación es errónea. No se trata de la exclusión de pena, sino de la falta de imputabilidad. Aquélla es una consecuencia de ésta. Ciertamente, en la práctica, los resultados no difieren cualesquiera que sean el orden y el sitio en que se coloquen las disposiciones relativas á la irresponsabilidad y el nombre más ó menos incorrecto que se les dé; empero, si se tiene presente que la exención de pena se funda en exención de responsabilidad; y que la buena distribución de la materia facilita la inteligencia y aplicación de la ley, se com-



prenderá que hay ventajas positivas en no dividir las prescripciones referentes á un mismo tópico ó en no separar materias íntima y esencialmente ligadas. El método en la colocación de los títulos y preceptos del Código contribuye á su claridad.

Explicado el motivo que hemos tenido para colocar la irresponsabilidad á continuación de la responsabilidad, veamos las reglas relativas á la primera.

Desde luego proyectamos eximir de responsabilidad criminal «al que ha cometido el hecho bajo la influencia de una enajenación ó enfermedad mental cualquiera». La persona que ejecuta una acción calificada de delito, en un estado patológico de la mente y bajo el influjo de la enfermedad, no puede ser imputable del hecho. La adopción de este principio no podía ofrecer dificultades; sin embargo ante el infinito número de manifestaciones que afecta la locura, ante la variedad enorme de casos y de formas que presenta y ante la falta de una clasificación de las enajenaciones mentales que cuente con la adquiescencia de todos los alienistas, ó, si se quiere, ante la diversidad de las clasificaciones existentes, todas las cuales son objeto de controversias y de observaciones más ó menos fundadas, hemos debido preocuparnos de hallar una fórmula que, por su amplitud, comprendiese los múltiples casos en que el ejecutor de un hecho, definido como delito, hubiera obrado bajo la influencia de un estado mórbido ó de una locura cualquiera. Creemos que la cláusula transcrita es suficientemente ámplia y llenará el fin indicado, pues se refiere á toda enfermedad ó enajenación mental: la demencia, la parálisis general, el sonambulismo, la imbecilidad, las manías, la histeria, la epilepsia, las locuras transitorias ó no transitorias, etc., en una palabra, todas las

enajenaciones mentales afectivas, volitivas é intelectuales quedarán comprendidas dentro de sus términos. No hemos añadido la condición, incluida comunmente en los códigos, de que el agente no tenga conciencia del acto ni de sus consecuencias, porque hoy es una verdad demostrada en Psiquiatría, que los alienados, al menos la gran mayoría de ellos, tienen conciencia de los actos que realizan y á veces hasta los premeditan, aunque esos actos sean prohibidos y calificados de delitos por la ley; y que algunos deploran su estado y procuran combatirlo, pero son impotentes para resistir las impulsiones que los dominan. La conciencia que los alienados tienen ó pueden tener de sus acciones, aún de las más monstruosas, no impide que obren bajo el influjo de la enfermedad. La locura los enajena y los desasimila, los convierte en individuos distintos, en parte, de lo que eran en su estado normal. He ahí porqué no deben ser responsables, ni represibles.

Pero, si debe eximirse de responsabilidad criminal á las personas que se encuentran en la situación prevista, no por eso debe dejárseles siempre en libertad. Si la perturbación es momentánea y si no es en manera alguna probable su repetición, nada se opondrá á la soltura sin otro requisito. La averiguación de si la enfermedad ó el mal es pasajero y de si, siéndolo, no es posible temer su repetición, se hará fácilmente durante la secuela de la causa, por medio de informes periciales. Cuando de esos informes y de las demás indagaciones que al efecto se hubieran practicado, resultara que la perturbación no es momentánea, ó que, á pesar de serlo, puede repetirse, entonces habría verdadero peligro para la sociedad y para el mismo enfermo en ponerlo en libertad. Se trataría de un loco peligroso,





cuyo peligro habría sido revelado por la realización de un hecho punible, que podría repetirse y producir nuevos trastornos y nuevos daños. No se comprende por qué, ni con qué objeto, quien ha herido á la comunidad y es capaz de hierirla aún, gozaría de una especie de privilegio que al fin redundaría en perjuicio suyo: el de no ser, recluso en un establecimiento sanitario adecuado donde fuera sometido al tratamiento curativo requerido por su enfermedad. Y se comprende tanto menos, cuanto que la ley civil permite, excepcionalmente, privar de su libertad personal al loco, cuando pueda temerse que, usando de ella, se dañe á sí mismo ó dañe á otros (art. 482 Código Civil argentino) sin exigir que el alienado haya delinquido; pues basta para ello que el temor del daño exista, ya proceda de la naturaleza de la enfermedad, ya de cualquier otra causa. Sin duda, la disposición aludida podría invocarse para pedir al juez civil que el alienado criminal fuera recluso momentáneamente; pero podría también no invocarse y no solicitarse por nadie medida alguna; entretanto el loco quedaría en libertad y constituiría una amenaza para el público, sin obtener personalmente ninguna ventaja. La ley debe ordenar imperativamente la reclusión de los locos peligrosos; y desde que la intervención del juez en lo criminal es necesaria, siempre que se ejecutan hechos declarados delitos, á él deberá corresponderle adoptar, cuando el agente sea un enfermo, en resguardo y en defensa de la sociedad, la medida que salvaguarde á ésta, que la garanta para lo futuro y que proteja al mismo tiempo al enfermo y tienda á volverlo á la salud.

Con estos propósitos, para prevenir nuevos hechos nocivos y en beneficio del mismo enfermo, se dispone que si la perturbación no es momentánea ó si puede

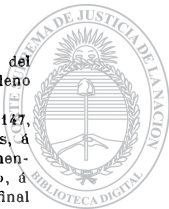


temerse su repetición, y el hecho ejecutado es de los que la ley reprime con pena de muerte, presidio, deportación ó penitenciaria, el Juez decretará la reclusión del agente en un establecimiento de alienados criminales ó en un departamento especial de los manicomios comunes, del que no saldrá sinó por resolución judicial en que se declare, con audiencia del Ministerio Público y previo dictámen de peritos, que ha desaparecido el peligro que motivó la reclusión.

El precepto que ordena recluir al alienado delincuente no es una novedad en las legislaciones. Con diferencias más ó ménos sensibles, en diversos códigos, se autoriza á la justicia criminal para decretar, si lo considera necesario, la detención de los individuos absueltos por haber cometido el hecho en estado de enajenación mental. Atribuyen esa facultad á los jueces el código de los Países Bajos (art. 37), que limita el máximum de detención en el hospicio á un año, el italiano (art. 46) que los autoriza para remitir al imputado á la autoridad competente, y otros. Algunos van más lejos: no solamente facultan al juez para adoptar la medida, sinó que se la prescriben como un deber.—«Cuando el imbécil ó el loco, dice el núm. 1º art 8 código español, hubiere ejecutado un hecho que la ley califique de delito grave, el Tribunal decretará su reclusión en uno de los hospitales destinados á los enfermos de aquella clase, del cual no podrá salir sin prévia autorización del mismo Tribunal.

«Si la ley califique de delito menos grave el hecho ejecutado por el imbécil ó el loco, el Tribunal, según las circunstancias del hecho, practicará lo dispuesto en el párrafo anterior, ó entregará al imbécil ó loco á su familia, si ésta diese suficiente fianza de custodia».

Sustancialmente idénticas son las disposiciones del



código de Venezuela (2º párrafo nº 1º, art. 19), del oriental (párrafo 2º y 3º, nº 1º art. 47), del chileno (2º párrafo, nº 1º, art. 10).

Por último, el Código Tejedor, en el artículo 147, declara exentos de pena, entre otros, á los locos, á los furiosos, á los imbeciles, «incapaces absolutamente de apreciar las consecuencias de sus acciones», á los menores de diez años, etc., y, en el párrafo final del mismo artículo estatuye que «las personas nombradas que cometan algún crimen, serán encerradas en algunas de las casas destinadas para los de su clase, ó entregadas á su familia, según lo estime el juez por conveniente».—Esta disposición ha estado en vigencia en varias provincias argentinas y en la Capital de la República. Seguramente no será fácil hallar la razón que se ha tenido para eliminarla al aprobar el Código actual.

Resuelta afirmativamente la cuestión de si los locos criminales deben ser reclusos, se presenta esta otra: ¿Dónde deben serlo? ¿En los manicomios comunes ó en establecimientos especiales?

La reclusión en establecimientos especiales, si bien puede mirarse como una novedad en los códigos, no lo es en la teoría científica, ni en la práctica de las naciones. Desde mucho tiempo la doctrina ha venido poco á poco uniformándose sobre las ventajas de separar á los locos delincuentes de los locos comunes, y secuestrar á aquellos en manicomios criminales; hoy la opinión está hecha y resuelta favorablemente la cuestión. Estos manicomios existen y funcionan en varias partes, como en Irlanda, en Inglaterra (1)

El asilo Inglés de Broadmoor (Broadmoor's criminal lunatics Asylum) para citar uno siquiera—con capacidad para 600 personas de ambos sexos, es un bello establecimiento, admirablemente organizado, en el que rige la mas severa disciplina. El Gobierno de Inglaterra no ha economizado ni economiza nada para adaptarlo á las necesidades que debe llenar. Bien compensadas tiene la Inglaterra, con los eximios resultados que produce, las grandes erogaciones que ese establecimiento le cuesta.



y en Escocia, en Pensilvania y en Nueva York; hay países, donde á falta de ellos, se destinan en los manicomios comunes ó en las cárceles, departamentos especiales y separados para los locos delincuentes; así sucede en algunos puntos de Alemania, Italia. etc. En 1886 se ha instalado en Italia, en Montelupo, un verdadero manicomio criminal. Los departamentos aludidos y el mismo manicomio de Montelupo han sido fundados administrativamente; no tienen aún sanción legislativa. El Senado francés ha sancionado, con enmiendas, un proyecto de ley, cuya iniciativa corresponde al gobierno, en el que se crean establecimientos especiales para los alienados delincuentes.

Por este proyecto se trata de reformar la ley francesa de 1838, sobre los alienados. En él se proponen innovaciones fundamentales, particularmente en lo relativo al punto de que hablamos. Desde luego, se introduce la distinción entre *condenados alienados y epilépticos* y *alienados criminales*. Los primeros son todos aquellos individuos que, después de la condenación y durante el cumplimiento de la pena, han sido atacados de enajenación mental ó de epilepsia; los segundos son todos aquellos que se hallan afectados de enajenación mental en el momento de cometer el delito. Para los primeros (condenados que se vuelven locos ó son reconocidos epilépticos) se proyecta la creación de departamentos especiales, anexos á los establecimientos penitenciarios. En estos alojamientos serán aislados y detenidos, de acuerdo con el dictamen de la comisión permanente del Departamento en el cual el establecimiento penitenciario esté situado y hasta que curen ó expire su pena—los individuos de uno y otro sexo que, «condenados á penas aflictivas é infamantes



ó á penas correccionales (1) superiores á un año de prisión,» cayeren en estado de locura ó fueren reconocidos epilépticos, según un certificado del médico de la penitenciaría.

Francia cuenta ya con un departamento para condenados alienados ó epilépticos, anexo á la Penitenciaría de Gaillon. La necesidad de crear establecimientos de ese género, había sido sentida desde muchos años y demostrada en diversos documentos oficiales. En 1869 se decretó administrativamente la creación del *Departamento de alienados (Quartier d'aliénés)* en la Casa central de Gaillon, que fué ocupada y empezó á funcionar en Mayo de 1876. Desde entonces ha producido y produce excelentes resultados, cada día más positivos y seguros. Lo que en 1869 se creaba administrativamente, en un solo punto, se trata de establecer hoy, por medio de una ley, en todos los lugares donde sea necesario. Las secciones destinadas á los hombres deberán ser distintas de las destinadas á las mujeres.

Para los alienados criminales se proyecta la fundación, por el estado, de uno ó varios establecimientos especiales. En estos establecimientos serán asilados los individuos declarados irresponsables por haber ejecutado un hecho definido como delito, bajo el influjo de una afección mental. Podrán también ser asilados y retenidos en ellas los alienados que, colocados en un asilo, cometieren un acto calificado de crimen ó delito contra las personas; los condenados á una pena correccional inferior á un año de prisión que se volvieren locos durante el cumplimiento de su

(1) Las designaciones—penas *aflictivas, infamantes, correccionales, etc.*, corresponden a la legislación francesa.



pena; y los condenados alienados de que se ha hablado precedentemente, cuando al expirar su pena el Ministro del Interior reconociere que es peligroso, sea ponerlo en libertad, sea trasladarlo al asilo de su departamento.

El proyecto que hemos mencionado es el fruto de los más luminosos y concienzudos estudios. Para formularlo se ha tenido en cuenta el ejemplo de otras naciones, como Inglaterra, que tiene manicomios criminales desde hace más de un siglo; las investigaciones y las propuestas de varias sociedades sábias, como la Sociedad de Legislación Comparada (1872), la Sociedad de Medicina Legal y la Sociedad General de las Prisiones (1879); los votos emitidos por algunos congresos científicos, como el de Ciencias Médicas reunido en Bruselas en 1875 (1) y el *Internacional de Medicina Mental*, celebrado en París en 1878; las iniciativas y las proposiciones de ley presentadas á diversas asambleas nacionales; en una palabra, un conjunto de indagaciones y de enseñanzas prolijamente acumuladas, que revela con cuánta circunspección y sabiduría se ha procedido antes de emprender la reforma de la ley de alienados de 1838. Todo ello puede verse en el grande y eruditísimo informe del Senador Théophile Roussel. (2)

En España se discutía el año último un proyecto de ley referente á la fundación de manicomios criminales.

(1) El voto del Congreso de Bruselas estaba concebido en los siguientes términos: «Cada vez que un acto criminal ó delictuoso haya sido cometido por un individuo reconocido irresponsable, á causa de enajenación mental, el juez, después de haber comprobado, y declarado su no culpabilidad, debiera ordenar su internación en un asilo determinado de donde no podrá salir sino en virtud de otro fallo, contradictorio como el primero.

(2) RAPPORT fait au nom de la Commission chargée d'examiner le projet de loi portant révision de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés par THEOPHILE ROUSSEL (1884) T. I, Section III.



Los manicomios criminales se recomiendan por razones muy obvias. Si uno de los objetos de la reclusión de los alienados delincuentes es prevenir sus ataques ulteriores, es claro que, para conseguirlo, esa reclusión debe efectuarse en casas que ofrezcan condiciones de seguridad que no presentan, ni requieren, los manicomios comunes. Y aunque estos manicomios ofreciesen las mayores seguridades, no sería prudente, ni científico asilar en ellos, juntamente con los alienados ordinarios, á los alienados criminales, porque se suscitarían graves dificultades, insuperables en ciertos casos, para poner en práctica el tratamiento adecuado á unos y á otros, y porque se expondría á los primeros á ser víctimas de los ataques de los segundos. La protección de aquellos es necesaria.

Por otra parte, en virtud de un sentimiento no infundado, se estima de diverso modo á los locos ordinarios y á los locos delincuentes; en los primeros se ve simplemente desgraciados, en los segundos se ve algo más, se ve también individuos que han ofendido á la sociedad, y no es posible contener un movimiento de desconsideración, de repulsión, á veces, hacia ellos. La necesidad de no herir ese sentimiento, particularmente en las familias de los locos ordinarios, es otra razón en pró de los manicomios criminales. Es visible la diferencia entre ambas clases de locos: la una delinque, la otra no. Esta sola diferencia basta para justificar la separación.

Pero hasta ahora no existen en la República establecimientos de ese género, y ha de transcurrir algún tiempo antes de que se funden,—y sobre todo de que se funden en número suficiente para responder á las exigencias de toda la nación. Mientras esto no suceda, mientras en una jurisdicción cualquiera no haya un ma-



nicomio criminal á donde enviar á los alienados delincuentes, éstos deberán ser reclusos, como lo dispone el inciso que explicamos, en un departamento especial de los manicomios comunes. En ese departamento permanecerán completamente separados de los alienados ordinarios. El secuestro, donde quiera que se efectúe, no podrá cesar en tanto que subsista el peligro que lo motivó; y la cesación del peligro, y, en consecuencia, la soltura del recluso, no podrán ser declaradas sinó por resolución judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictámen de peritos.

Cuando el hecho ejecutado bajo el imperio de la enajenación mental no sea de los que motiven la aplicación de las penas de muerte, presidio, deportación ó penitenciaría, el agente no será tan peligroso, ó por lo menos, el acto solo no lo revelará tan peligroso, como en los otros casos; y entónces la sociedad podrá garantizarse sin recurrir á la reclusión. Si un miembro de la familia del enfermo ú otra persona lo toma bajo su custodia y amparo, y afianza su conducta futura, el alienado tendrá la protección que necesita, y la comunidad se sentirá tranquilizada á su respecto. Por eso se proscribó que, en el caso supuesto, si se trata de un hecho que dé lugar á la imposición de una pena diferente de las mencionadas, el agente será puesto en libertad bajo fianza de custodia, que garanta su buena conducta ulterior; pero como la fianza es condición ineludible de la soltura, se añade que mientras no se preste, el alienado quedará recluso.

El artículo 81, nº 1 del Código exime de pena al que ha cometido el hecho «en estado de beodez completa é involuntaria». Reemplazamos esta disposición por



la siguiente: « queda exento de responsabilidad el que ha resuelto y ejecutado el hecho en estado de embriaguez completa y accidental, sobrevenida sin culpa suya » (nº 2º art. 59). Los escritores y las legislaciones resuelven de diferentes maneras las cuestiones que la embriaguez y la responsabilidad del ébrio suscitan. En presencia de la diversidad de teorías y de conclusiones, hemos creído prudente mantener en general la solución del Código, pero alterando la forma del precepto para limitar y precisar su alcance. A pesar de ser frecuentemente contradictorias, en esta materia, las opiniones de los criminalistas, hay un punto en que existe bastante uniformidad,—es el relativo á la embriaguez habitual, la que se juzga que jamás debe excluir la responsabilidad, y que, muy á menudo, debe agravarla, porque un borracho consuetudinario conoce mejor las funestas consecuencias de su vicio y ofrece mayor peligro que cualquier otro. Es necesario que en ningún caso la ley ampare con la impunidad la embriaguez habitual; sin embargo, según los términos del inciso vigente, transcrito más arriba, un borracho habitual que hubiera ejecutado el hecho en estado de embriaguez completa ó involuntaria, quedaría exento de responsabilidad, pues un hombre que tiene el hábito de la embriaguez puede emborracharse y se emborracha casi siempre involuntariamente. El bebedor no bebe con el fin de embriagarse, ni para sufrir las molestias de la embriaguez; bebe por el placer que el alcohol le suministra, para experimentar las sensaciones que le producirá, y porque una necesidad de su organismo lo impele á ello. Luego, para que la embriaguez excluya la responsabilidad es menester, no solamente que sea completa é involuntaria, sino también que no constituya un



hábito en el sujeto; que sea una excepción, un accidente en su vida, que no le pueda ser imputado ni como culpa; y es menester asimismo que en ese estado enteramente fortuito ó accidental haya resuelto y cometido el delito. Entonces quedará exento de responsabilidad, porque entonces se habrá encontrado bajo el imperio de una enajenación ó alteración mental momentánea; al resolver y ejecutar el hecho habrá sido un individuo anormal, distinto de lo que era y es normalmente. La disposición que proyectamos prevé y establece todas las condiciones indicadas.

El estudio del hipnotismo ha adquirido un gran desarrollo y se extiende cada día más, merced á la persistencia y tenacidad con que muchos sabios de distintas partes del mundo investigan y tratan de explicar los fenómenos que le conciernen. Es innegable que, por medio del hipnotismo, se puede sugerir á una persona, sometida á su influencia, la ejecución de los actos diversos, morales ó inmorales, criminales ó no criminales, en épocas y lugares determinados. Empero, son muy pocos los hechos criminosos que se conocen ó se suponen cometidos por ese medio. La hipnotización no se ha generalizado todavía, ni ha entrado en las prácticas de los criminales; sin embargo, es posible que se generalice y que los delincuentes lleguen á servirse de ella. La sola posibilidad es motivo suficiente para que en los códigos se consagren disposiciones á su respecto.

Desde luego, nada hay que decir, ni que prever en cuanto á los crímenes que el hipnotizador ú otro puede ejecutar en la persona hipnotizada. Esos crímenes, por variados que sean, se hallarán en idénticas condiciones que los demás. La hipnotización habrá sido un simple medio de reducir y someter á la víctima;



y las dificultades que entonces se suscitan serán únicamente dificultades de investigación, de hecho, sobre si el paciente consintió ó nó, sobre el mérito del consentimiento, en caso de haber existido, y sobre otros puntos. Otra es la hipótesis que interesa y que ha debido prever la ley: aquella en que el individuo á quien se ha ordenado, por medio de la sugestión, la comisión de un delito, contra un tercero ó contra sus derechos, cumple la orden y realiza el delito. En tal caso ¿cuál será la responsabilidad del hipnotizador y cuál la del hipnotizado?

Sin discutir la cuestión debatida por las escuelas existentes sobre el hipnotismo, á saber: si las sugerencias hipnóticas y post-hipnóticas son fatalmente irresistibles, como sostienen algunos; ó si el sujeto solo obedece y cumple las sugerencias que le son agradables ó indiferentes, hechas por un individuo agradable también (Brouardel); ó si el sujeto es capaz de resistir las sugerencias que le repugnan ó se hallan en oposición con un sentimiento profundo (Feré); ó si el hipnotizado permanece siempre alguien y puede manifestar su voluntad resistiendo las sugerencias (Giles de la Tourette); ó si el hipnotizado sabe que se le ordena representar una comedia (Delboeuf);—sin discutir estas soluciones, pues parece indudable la posibilidad de inducir á ciertos sonámbulos, aún á pesar de ellos, á ejecutar actos ofensivos para si mismos y para los derechos ajenos, «que les repugnarían manifestamente y que no habrían ciertamente cumplido en otras condiciones» (1), podemos responder á la pregunta formulada de la manera siguiente:

(1) Emile Laurent—*Les suggestions criminelles*, en los Archives de l'Anthropologie criminelle et des Sciences pénales, etc. T.V, pag. 602. En este trabajo se resumen las opiniones enunciadas en el texto.

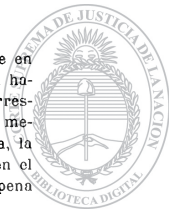


Si el hipnotizado ha sido un mero instrumento pasivo, un simple ejecutor de una orden que no ha buscado, ni ha querido, á la que ha sido extraño, por decirlo así, es indiscutible que el verdadero y el único responsable será el hipnotizador: al hipnotizado nada podrá imputársele. Pero si el hipnotizado ha querido la sugestión, si ha consentido en ella de cualquier modo, si ha pedido ó ha ordenado al hipnotizador que le sugiriera el crimen para robustecer su energía y no vacilar, ni desfallecer en el momento de la acción, entonces será también autor responsable del hecho y deberá ser reprimido como tal; en vano alegaría que ha cometido el acto sugestionado y que no es un criminal, porque el mismo habría buscado ó aceptado la sugestión para eliminar sus temores en el momento del ataque, y asegurar el golpe. El inciso que explicamos (nº 3º art. 59) supone las distinciones enunciadas: declara irresponsable al que ha ejecutado el hecho en virtud de una sugestión hipnótica; pero á condición de que no haya prestado su consentimiento á la sugestión misma. Si ha consentido será responsable, porque el consentimiento demostrará que ha querido el crimen y que ha querido convertirse en una especie de instrumento para cometerlo.

El Código vigente exime de pena:...2º á los menores de diez años; 3º á los mayores de diez años y menores de quince, á no ser que hayan obrado con discernimiento (art. 81). El primero de estos preceptos declara irresponsables siempre al menor de diez años. En su virtud, cuando se trate de un acto criminoso, realizado por un menor de diez años, bastará comprobar que el agente no ha cumplido esta edad para que se suspenda toda medida y todo

procedimiento y se sobresea libre y enteramente en la causa. Es la única comprobación que deberá hacerse. El segundo precepto considera ó presume irresponsables también á los mayores de diez años y menores de quince; pero admite la prueba contraria, la de que hayan obrado con discernimiento, caso en el cual serán responsables y se les impondrá la pena que merezcan.

Hemos reemplazado las dos disposiciones aludidas por otra que exime de responsabilidad al menor de catorce años. Extendemos la irresponsabilidad del menor, sin limitación alguna, hasta los catorce años, no porque, á nuestro juicio, el discernimiento no empiece antes de esa edad, sinó por razones de otra índole. Estamos persuadidos de que el discernimiento, la apreciación de la moralidad ó inmoralidad de los actos, de ciertos actos sobre todo, como los delitos, comienzan generalmente antes de los diez años. Empero, un menor de catorce años, en virtud de sus cualidades personales diversas, de su desarrollo incompleto, de su escasa fuerza para resistir á las tentaciones, de los cambios que en él se han de operar necesariamente y de la série de datos positivos que lo diferencian de los mayores de esa edad, aunque comprenda la criminalidad de un hecho y lo ejecute á designio, no podrá ser equiparado á un adulto para responsabilizarlo de igual manera y someterlo á la misma penalidad. La aplicación á los impúberes, en algunos casos, cualesquiera que sean, de los medios represivos calcula los y establecidos para los adultos, importa prescindir del primer elemento, de las condiciones personales del agente, que debe tenerse en cuenta para fijar la represión; y dará siempre resultados negativos y perjudiciales á los impúberes y á





la sociedad: á los primeros porque quedarán inscriptos en el grupo de los criminales, y así habrán salvado uno de los mayores obstáculos que podía preservarlos del delito, el temor de ser confundidos con los bribones y el deseo de mantener en los demás la creencia en su honestidad; á la sociedad, porque habrá gastado simplemente su dinero, cuando no lo haya hecho para alimentar un reincidente futuro. Los menores de catorce años, declarados absolutamente incapaces por el Código Civil, no pueden ni deben estar sujetos á las penas establecidas para los adultos.

Por eso y en ese sentido, los declaramos irresponsables. Pero esto no quiere decir que no deba adoptarse medida alguna en resguardo de la sociedad y en bien de los impúberes. Sería y es tan deplorable y pernicioso dejar á esos menores completamente librados á sí mismos, en situación de cometer nuevos hechos criminosos y de adquirir el hábito del delito, como declararlos responsables á la par de los adultos é imponerles un medio represivo inadecuado. La sociedad no puede desentenderse de los impúberes que delinquen, debe contar con ellos y procurar su enmienda. A esto responde la disposición que sigue al inciso que declara irresponsables á los menores de 14 años. Si esos menores tienen padres ó guardadores, como la misión de encaminarlos y corregirlos corresponde ante todo á la familia, nada obstará á que se entreguen á dichos padres ó guardadores, si por razón de las condiciones personales de éstos y de las circunstancias de la causa no resultare peligrosa la medida; pero si resultare peligrosa, tengan ó nó los menores padres ó guardadores, no podrán ser entregados á ellos, y el juez deberá ordenar su colocación en un establecimiento agrícola, industrial ó de ense-



ñanza destinado á corregirlos. Se comprende que el peligro de entregar impúberes á sus padres ó guardadores podrá resultar de la ineptitud y de los vicios de éstos; entonces para preservarlos del mal ejemplo y de la mala educación se les separará y se les colocará en alguno de los establecimientos indicados.

Las colonias agrícolas para menores delincuentes ó de mala conducta han producido excelentes resultados en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Suiza, en Estados-Unidos y en todos los países donde han sido fundadas. Es que en ellas el menor queda sustraído al medio vicioso en que se desenvolvía, su actividad se aplica al trabajo, y se hace posible, con su crecimiento en un ambiente propicio, una transformación de sus instintos, ó cuando menos una transformación social de su carácter y el desarrollo de sus buenas inclinaciones á expensas de las malas. Los establecimientos industriales, son también convenientes para la colocación de menores, aunque no ofrezcan todas las ventajas que las colonias agrícolas. Hemos debido mencionarlos en segundo término, para el caso de que no existan colonias agrícolas ó no sea posible enviar á ellas á los menores.

Las casas de enseñanza bien reglamentadas, sometidas á un régimen y á una disciplina distintos de los observados en las casas de corrección conocidas, cuyos defectos todos deploran, pueden ser útiles, á falta de los establecimientos antes enunciados, y pueden serlo sobre todo cuando se trate de niños de muy tierna edad, á los cuales, por razón de esa misma edad, no convenga la colonia agrícola, ni el establecimiento industrial.

Si se considera que hasta hace poco, en esta ciudad, á los muchachos vagos ó á aquellos de cuya indisci-



plina y mala conducta se quejaban sus padres, tutores guardadores ú otros, denunciándolos ante el Ministerio pupilar como desobedientes, holgazanes, dañinos, incorregibles, etc., se les remitía á la Penitenciaría, donde eran asilados en un departamento ó pabellón especial, si se considera esto, decimos, se percibirá cuán superior es el sistema que proponemos, no ya para tratar á niños simplemente indisciplinados ó más ó menos viciosos, sinó á niños ó muchachos que delinquen.

La permanencia del menor en el establecimiento donde sea colocado, no podrá prolongarse indefinidamente, ni durar un lapso de tiempo fijo. Precisados á limitar su duración máxima, estatuímos que concluirá cuando el menor haya cumplido la edad de diez y ocho años, porque, de acuerdo con otras disposiciones del Proyecto, desde esa edad la responsabilidad criminal es plena; de modo que, si una vez fuera del establecimiento el individuo comete otro acto criminoso será tratado como delincuente y reprimido con la pena que merezca.

Pero como la detención del menor no tendrá otros objetos que procurar su enmienda, hacer de él un ser útil y resguardar á la sociedad, esa detención deberá cesar siempre que el menor, aunque no haya cumplido los diez y ocho años, experimente un cambio favorable en su conducta, en virtud del cual nada haya que temer en lo sucesivo. Para asegurarse de que esto ha ocurrido y para revestir el acto de la seriedad necesaria, la soltura solo podrá ordenarse por resolución judicial, fundada en el informe que dé la dirección del establecimiento y en todos los datos que el juzgado ó tribunal competente hayan creído oportuno recoger.

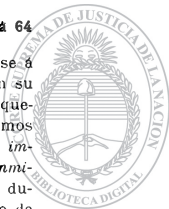


El art. 147 del Código Tejedor, citado más arriba, declaraba irresponsables á los menores de diez años, á la par de los locos, imbéciles, etc., y mandaba que las personas á que se refería, cuando delinquiesen, fuesen encerradas en alguna de las casas destinadas para los de su clase ó entregadas á su familia, según lo estimara el juez. Varios códigos extranjeros prescriben también la adopción de medidas análogas por un término variable ⁽¹⁾.

La prescripción del n° 5°, artículo 59 es, en el fondo, idéntica á la del n° 5° Art. 81 del Código; sin embargo, hemos variado la redacción para precisar mejor su alcance. El precepto vigente dice: «El que obra violentado por fuerza irresistible, física ó moral.» Puede entenderse, sin torcer el sentido de las palabras, que la frase *fuerza irresistible moral* se refiere no solamente á la fuerza moral externa, á la intimidación ó al miedo ejercido sobre una persona y por el cual se la compele á ejecutar un delito, sino también á una fuerza interna del agente, á una causa mórbida, que lo impulsa irresistiblemente á la acción. Empero, si se atiende á los antecedentes de la cláusula transcrita, á lo dispuesto, en su caso, por los códigos que han servido de modelo al nuestro y á lo que generalmente preceptúan las leyes penales, se puede afirmar con toda seguridad que nuestros legis-

(1) Después de resuelta la cuestión relativa á los menores de catorce años y de escritas las páginas anteriores, leemos en el Boletín de la Unión Internacional de Derecho Penal, Febrero de 1891, que esta eminente asociación, compuesta de criminalistas de todos los partidos científicos y de todas las partes del mundo, ha votado en su Sesión celebrada en Berna, el año último, la siguiente proposición:

«Reconociendo el valor de la influencia geográfica y etnográfica, la Unión opina: 1° que los niños que no han alcanzado aún la edad de catorce años no deben ser sometidos á medidas penales. 2° que la cuestión del discernimiento debe ser abolida y reemplazada por otra cuestión, saber si es necesario someter el niño á la tutela pública; 3° que el tratamiento por aplicar á los niños culpables ó abandonados debe conformarse á la individualidad de cada niño.



ladores no han tenido la menor idea de referirse á una *fuerza irresistible interna*. Para evitar que, en su aplicacion, se dé á la ley un alcance que no han querido darle sus autores ó que no debe tener, hemos reemplazado la palabra *moral* por estas otras: *ó impulsado por amenazas de sufrir un mal grave é inminente*. Con esta reducción se previene cualquiera duda, porque queda claramente limitado el sentido de la disposicion. De acuerdo, pues, con el inciso de que nos ocupamos solo estarán exentos de responsabilidad los que obren bajo el impulso de la violencia fisica ó de la intimidación ó miedo de sufrir un mal grave é inminente.

La disposicion del n° 6°, artículo 59, es la misma que la del n° 12, art. 81, del Código. El motivo de eximir de responsabilidad al cónyuge que, en el acto de sorprender á su consorte en adulterio flagrante, hiere ó mata á ambos culpables ó á uno de ellos, no es otro que el estado de pasión, de verdadera indignación, que se apodera del agente, en presencia del gravísimo ultraje que se le ha inferido.

Pero si la pasión explica y excusa, en general, la muerte ó las heridas, es porque se supone que el cónyuge autor de esos actos se ha conducido regularmente en sus relaciones matrimoniales; de manera que, cuando con sus faltas ó su mala conducta haya motivado ó hecho excusable el adulterio de su consorte, la exención de responsabilidad será inadmisibile. Hé ahí el objeto de la salvedad que, de acuerdo con los códigos chileno (art 10 n° 11) y oriental (art. 17 n° 14) consignamos en la parte final del inciso.

El número 7° del artículo que explicamos, por el que se declara irresponsable al padre ó al hermano que hiere ó mata al que encuentra yaciendo con su



hija ó hermana menor de quince años, es la reproducción textual del n° 13 del Código. Como la anterior, esta causa excluyente de responsabilidad se explica y se justifica por la pasión, por el estado de sobreexcitación del agente, que ha debido impulsarlo á cometer el hecho.

La defensa propia queda consagrada en los mismos términos y condiciones que la establece el Código. A continuación de los requisitos que debe reunir, para ser legítima, añadiremos que se entenderá que éstos concurren respecto de aquel que durante la noche rechaza el escalamiento ó fractura de los cercados, paredes ó entrada de una casa ó departamento habitado ó de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor.

Esta cláusula consagra una presunción de derecho que, como tal, cederá á la prueba contraria. Su fundamento no puede ser más obvio. El escalamiento, llevado á cabo durante la noche, es una agresión ilegítima gravísima, que ningún motivo puede justificar; y que, por lo común, se produce sin *provocación suficiente* y aún sin provocación de cualquier entidad. En semejante situación, es racional la necesidad del agredido de emplear todos los medios seguros á su alcance para repeler el ataque y prevenir sus consecuencias. El momento de la agresión, la ignorancia misma en punto á la importancia de ésta y á todo lo que entra en los designios del agresor y la inminencia del peligro, demuestran la necesidad de que el agredido se sirva de los medios más rápidos y adecuados para detener y rechazar el ataque. En ese momento y en esas circunstancias no es posible exigirle, y sería imprudente de su parte que lo hiciera, el examen de sí, por el empleo de otro medio, menos susceptible de



dañar, podría obtener el resultado apetecido. Si se distrajera en ésto, quizá cuando se resolviese á obrar fuese demasia lo tarde. Por otra parte la cláusula en cuestión no es en suma, sino el precepto contenido en el n.º. 11 artículo 81 del Código, expuesto de una manera mis clara y precisa, que hará imposible las conjeturas y las interpretaciones várias á que se presta hoy.

El núm. 9 art. 81 del Código legitima la defensa en favor de varios parientes, de los ascendientes, descendientes, cónyuges, hermanos, afines en iguales grados y consanguíneos hasta el cuarto grado civil, en las mismas condiciones de la defensa propia, pues exige la primera y segunda circunstancias de ésta y la de que, en caso de haber precedido provocación de parte del acometido, no tuviera participación en ella el defensor. El n.º. 10º se refiere á la defensa de un extraño, y requiere, para que sea legitima, más requisitos. No solamente exige todos los de la defensa propia, sino tambien que *la agresión sea grave*.

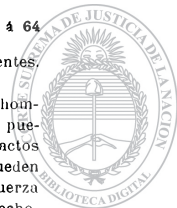
La teoría de la defensa familiar es antigua en la legislación española. Del Código penal español la ha tomado, casi textualmente, el argentino. La razón de la defensa, en el que rechaza un ataque á su vida, á su integridad personal ó á sus derechos, no es un sentimiento ó una afección: es la necesidad de conservarse, es la necesidad de proteger el derecho, en los casos y en los momentos en que la autoridad no puede ocurrir para contrarrestar la fuerza y prestar á las personas agredidas el amparo que les debe.

El fundamento de la propia defensa: la necesidad de proteger el derecho, es también el de la defensa de un tercero, sea ó no pariente del defensor. La defensa propende á la consecución de los mismos fines, obra



en idéntico sentido que la administración de justicia. Donde no alcanza el amparo y la acción de los poderes públicos, la acción individual es legítima; y la defensa que un hombre hace de su derecho ó del derecho ajeno repercute en la sociedad é importa indirecta, pero realmente, la defensa del derecho de todos, por que lleva á todos la seguridad de que el derecho, en cualquiera que sea ultrajado, encontrará otros protectores además de la autoridad. La asociación se siente tranquilizada por la defensa, de la misma manera que se alarma, se inquieta y sufre por la ejecución del delito, sea cual fuere la víctima de éste

Por otra parte, la teoría de la defensa familiar tropieza con un inconveniente de primer orden. Los afectos hácia los parientes faltan algunas veces: y aunque se presumiera que existen siempre, no serían ni son de igual intensidad respecto de todos. *Cæteris paribus*, el amor hácia un hijo difiere del amor hácia un ascendiente, el primero es más vivo, más grande que el segundo; el amor hácia un cónyuge difiere del amor hácia un hermano ó un afín; y el amor hácia un hermano del amor hácia cualquier otro consanguíneo más remoto. Si la teoría en cuestión fuera fundada, la lógica y la verdad exigirían que se concediesen facultades más ámplias para la defensa de los parientes respecto de los cuales el cariño debe ser naturalmente mayor; y que esas facultades disminuyeran á medida que los afectos fuesen ó debiesen ser menores, para desaparecer completamente respecto de aquellos á quienes no se tuviere afección alguna. Se llegaría así á considerar inadmisibile la defensa de todo pariente desconocido, ó al cual ningun afecto nos vinculara, y de todos los extraños, desconocidos ó nó, relaciona-



dos ó nó con nosotros, que nos fueran indiferentes. Estas consecuencias serían lógicas.

Los afectos de un pariente hácia otro ó de un hombre hácia otro hombre, en casos determinados, pueden disculpar, pueden excusar la comisión de actos vituperados y reprimidos por la ley; pero no pueden fundar el ejercicio de un derecho ó el uso de la fuerza ó de un medio indispensable para proteger el derecho.

No nos detendremos ahora en la anomalía que resulta de la ley, en cuya virtud el pariente ó defensor tiene poderes más extensos que el agredido, desde que no se justificaría la defensa propia de ese agredido, cuando hubiera motivado el ataque con una *provocación suficiente*, y se justificaría la que en su favor hiciera un pariente que no hubiese intervenido en dicha provocación. Nuestro pariente podría hacer en nuestra defensa lo que no podríamos hacer nosotros mismos.

Las observaciones apuntadas, el ejemplo de las legislaciones más recientes y las críticas hechas al código español y al nuestro por algunos de sus comentadores, nos han decidido á suprimir la disposición que consagra la defensa familiar. La defensa de parientes queda incluida en la defensa de terceros á que alude el n° 9° del Proyecto. En cuanto al contenido de este número hemos eliminado de él la exigencia de que la *agresión sea grave*, porque, si la defensa efectuada por un tercero tiene el mismo fundamento que la defensa propia, idénticas deben ser las condiciones de justificación de una y otra. No hay razón para exigir más al tercero que, acaso, se expone generosamente en favor de otro.

Es el lugar de decir porque suprimimos el n° 14 del art. 81 del Código, que exime de pena á «la mujer que hiere ó mata al que intenta violarla ó robarla”.



La mujer, en este caso, defiende su honor ó su libertad individual. Se trata, pues, de un caso de defensa de derechos, incluido ya en la regla que declara irresponsable al que obra en defensa de su persona ó de sus derechos. Desde que la disposición general abarca evidentemente el caso, el precepto especial es supérfluo.

También diremos aquí por qué suprimimos el art. 82 del Código, que dispone: «Todo aquel que en estado de legítima defensa, hiriese ó matase á alguno, está obligado á dar aviso del suceso, tan pronto como le sea posible, á la autoridad más inmediata. Si no cumple con esta obligación, ó trata de ocultar el hecho, se presumirá que ha habido exceso en los límites de la defensa, aunque después demuestre que hubo ataque peligroso dirigido contra él. Si el proceso destruye esta presunción, el acusado será absuelto por lo que hace á la herida ó á la muerte; pero será condenado por haber ocultado el hecho, ó por haber omitido declararlo á la autoridad, con arresto de uno á tres meses.»

La obligación que este artículo impone, en su primer párrafo, la presunción que establece en el segundo y la pena que fija en el tercero, para el caso que el proceso destruya la presunción, carecen de objeto y de motivo plausible. Está en el interés del que ha herido ó ha muerto, en su propia defensa ó en defensa ajena, dar aviso inmediato á la autoridad, pues su silencio le creará una situación desfavorable: el hecho de la herida ó de la muerte se presumirá cometido con intención criminal; y para que esta presunción desaparezca será menester que resulte lo contrario de las circunstancias de la causa.

Así, bastará el precepto general sobre la responsa-



bilidad, para que el que haya obrado en estado de defensa se apresure á llevar el hecho á conocimiento de la autoridad; sus conveniencias le indican este camino. Pero si, por razones particulares ó por temores fundados, la persona que se ha defendido ó ha defendido á otro, omite declarar el hecho á las autoridades, ¿cómo penar al autor de la omisión en semejan e caso? La ley no debe erigir la omisión en delito, porque consagraría una injusticia: debe dejar que los tribunales, aplicando el principio general citado, resuelvan si de las particularidades del proceso resulta ó nó que el agente se ha hallado en estado de defensa y, por lo tanto, si es ó nó irresponsable.

En el n° 10 art. 59 reunimos, sin alterar nada, los incisos 7° y 15° del artículo 81 del Código. La analogía entre el contenido de una y otra cláusula justifica suficientemente la reunión. En efecto, el primero de esos incisos se refiere al que obra en cumplimiento de un *deber*, ó en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad ó cargo; y el 2° al que obra en virtud de obediencia debida. Obrar en virtud de obediencia debida es, en rigor, obrar en cumplimiento de un deber, en un caso especial. Precisábamos decir cuándo se debe la obediencia, que excluye la imputabilidad del acto ejecutado á consecuencia de la orden recibida; y hemos debido decirlo para prevenir las vacilaciones y las controversias á que se presta esta causa excluyente de responsabilidad. Sin duda, nunca una persona, en las relaciones generales de hombre á hombre en la sociedad, puede estar obligada á obedecer á otra un mandato para ejecutar un hecho criminoso ó simplemente ilegal, sabiendo que lo es. Sin embargo, en el orden jerárquico administrativo, los empleados inferiores deben obediencia á los empleados superiores,

X en todo lo que sea del resorte de sus funciones; no se la deben ciertamente para ejecutar crímenes ú otros actos ilícitos, cuya ilegalidad les conste ó puedan discernir fácilmente. Pero hay casos en que el empleado inferior carece de medios para apreciar el alcance y la trascendencia del acto que el superior le ordena, y en que, por el modo y las solemnidades con que se lo manda ejecutar, debe suponerlo legitimo. Así, por ejemplo, un magistrado en el ejercicio de su cargo, dicta, á sabiendas, una sentencia injusta; empero, para dictarla, observa todos los trámites del procedimiento y reviste su fallo de todas las formalidades legales. Queda ejecutoriada la sentencia y el magistrado la manda cumplir; ¿puede el empleado inferior, encargado de ejecutarla, negarse á ello?. Evidentemente no, porque el fallo reviste la más completa legalidad, porque no le es dado revisar las decisiones de su superior y porque, si resistiera, faltaría á sus deberes. Casos como éste, fáciles de generalizar, son los que se prevén al excluir la responsabilidad del que obra en virtud de obediencia debida. De acuerdo con lo que resulta de dicho caso y de los que se hallan en iguales condiciones que él, decimos que la obediencia es debida, cuando la orden emana de quién ejerce sobre el agente autoridad directa, corresponde al género de sus funciones y reviste las formas legales.

Los n^{os} 11° y 12° art. 59 son textualmente idénticos á los n^{os} 4° y 6° del artículo 81 del Código. Son, pues, disposiciones vigentes. Por eso y porque se explican por sí mismos es innecesario fundarlos.

Legislada la responsabilidad en general y luego la irresponsabilidad, por la enumeración de las causas que la producen, era menester prescribir el modo de fijar concretamente, en cada caso esa responsabilidad





y de determinar la pena aplicable al agente del hecho criminoso. Para ello era necesario reglar la manera de tomar en cuenta los accidentes y condiciones del delito y las cualidades, aptitudes y peculiaridades del delincuente, susceptibles todas de revelar la mayor ó menor perversidad de éste.

Las circunstancias atenuantes y agravantes, en que varios códigos y algunos escritores han dividido las modalidades del delito y las condiciones personales del delincuente, han sido el medio empleado para averiguar la perversidad del culpable. El sistema de las circunstancias atenuantes y agravantes ha constituido un progreso real; ha venido á reemplazar, en la doctrina y en las leyes penales, el de la pena fija é inalterable para el autor de cada delito; de tal modo que definido y especificado el delito se establecía la pena invariable que se impondría al que lo ejecutara, cualesquiera que fuesen las condiciones en que el hecho se cumpliera y la índole y los caracteres personales del ejecutor. Así, todo homicidio era siempre igual á otro homicidio y se reprimía con la misma pena, sin atender para nada á las circunstancias de hecho y á las cualidades de su autor. Por medio de las circunstancias atenuantes y agravantes se llegó á abandonar el sistema de la pena fija é inflexible para el agente de cada delito; y se adoptó entonces un límite máximun y un límite mínimun, dentro de los cuales el juez, sin cambiar la especie de pena, podría oscilar, aumentándola ó disminuyéndola, con arreglo á aquellas circunstancias.

El sistema de las circunstancias atenuantes y agravantes no es un medio suficiente para conocer la perversidad del criminal y fijar é individualizar la pena que se le ha de imponer. En efecto, si se observa en la ley el procedimiento de enumerar taxati-



vamente esas circunstancias, seguido en el código español y copiado en el nuestro y en otros, se toca el inconveniente insalvable de no ser posible prever y precisar el infinito número de accidentes, caracteres y peculiaridades de los hechos punibles y de sus agentes. Por eso la enumeración será siempre incompletísima. Y nada importa que después de consignar algunas circunstancias atenuantes, se diga que se considerarán tales cualesquiera otras análogas á las enumeradas (núm. 8 art. 9 cód. esp. y núm. 7º art. 83 cód. pen. arg.) porque siempre quedarán excluidas las atenuantes que no sean análogas á las enumeradas y todas las agravantes que no se hayan previsto y enunciado expresamente. Además, resultará á veces que una circunstancia consignada como atenuante, será en algún caso, agravante y vice-versa; y entonces será imposible darle su verdadero significado en el proceso, porque á ello se opondrá la ley.

Si en vez de enumerar, se diera en la ley una definición de las circunstancias atenuantes y agravantes, se tocaría también una dificultad insuperable. Por amplios y comprensivos que fueran los términos de la definición, nunca podrían abarcar las numerosísimas particularidades de todos y de cada uno de los delinquentes, y las múltiples modalidades de los hechos.

Los códigos alemán, húngaro, holandés, italiano etc., enuncian varias causas de disminución de la pena (y alguno de ellos, como el holandés, causas de agravación también) pero no hacen una enumeración taxativa, ni definen, ni excluyen ninguna de las atenuantes posibles y permiten y prescriben la consideración de todas las agravantes. Así, por ejemplo, el artículo 89 del código húngaro dispone que «se tendrán en cuenta, en la determinación de la pena, las circuns-



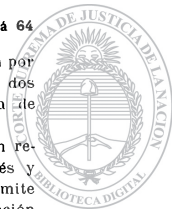
tancias agravantes ó atenuantes que puedan tener una influencia en el grado de la criminalidad.»

Si, en lugar de enumerar ó de definir, la ley guardase silencio y librara al magistrado, enteramente ó con las limitaciones que lo hacen los códigos aludidos la consideración y determinación, en cada caso, de las circunstancias atenuantes y agravantes, concedería al juez facultades excesivas y dejaría indeterminados, total ó parcialmente, los medios de que hubiera de valerse para indagar la criminalidad del agente. Y este inconveniente sería mayor aún en la República Argentina, dada la multiplicidad de jurisdicciones que han de aplicar el Código y la diversa cultura científica de los hombres llamados á administrar justicia en esas jurisdicciones. La ley debe consagrar netamente el medio de que se han de valer los magistrados para fijar la responsabilidad y determinar la pena, en todos los casos, sin obstar con sus términos á la apreciación de ningún dato conducente á ese fin. Si tal es el propósito que se persigue, si lo que se busca es el medio por el cual el juez ha de procurar el conocimiento del criminal, para imponerle la pena adecuada, lo que debe hacerse es tomar las cosas como son: ver en la naturaleza, accidentes y circunstancias del delito y en los caracteres y condiciones del delincuente un conjunto de elementos, que, bien interpretados, revela la perversidad mayor ó menor de éste, el peligro que ofrece y las medidas represivas que convendrá adoptar á su respecto. Entonces lo que la ley precisa es establecer reglas generales, amplias y claras, para que los magistrados puedan tomar en cuenta y apreciar debidamente esos elementos, en conjunto y en detalle. Es lo que se ha hecho en el Proyecto.



Por eso se dispone que, en las penas divisibles por razón del tiempo ó de la cantidad, la pena ordinaria del delito será el término medio entre el máximo y el mínimo, pero los tribunales podrán abreviarla ó prolongarla dentro de estos límites, motivando la medida de la pena en las circunstancias expresadas en los artículos siguientes (art. 69). Esta disposición no difiere sustancialmente del art. 52 del Código, á no ser en cuanto omite la salvedad contenida en la parte final de dicho artículo. Sin embargo, se ha variado la redacción para precisar el sentido del precepto y armonizar sus términos con el sistema adoptado sobre el modo de apreciar los elementos reveladores de la criminalidad. Así, donde el art. 52 dice que los jueces aumentarán ó disminuirán la pena «con arreglo al carácter de las circunstancias agravantes ó atenuantes» que existan, en el Proyecto se dice que los tribunales podrán abreviar ó prolongar la pena dentro del máximo y mínimo, motivando su medida en las circunstancias expresadas en los artículos siguientes, porque en estos artículos se dan las reglas para estimar la perversidad del criminal y determinar la pena.

Se suprime la salvedad final del art. 52, en cuya virtud el juez no podrá variar la pena, con arreglo á las circunstancias, cuando se trate de casos para los cuales se haya hecho determinación especial de calidad, de tiempo ó de suma, y se suprime porque nada justifica esta excepción, esta fijación previa é inalterable del *quantum* de la pena tratándose de penas variables en sí en un sistema que quiere dejar al juez la apreciación de la criminalidad del culpable y la determinación de la pena adecuada, dentro de ciertos límites. No se debe prescribir la aplicación



de otras penas fijas que la de aquellas que lo son por su naturaleza. En el Proyecto solo se establecen dos penas invariables: la de presidio perpétuo y la de muerte.

Sin salir de lo sancionado por legislaciones tan recomendables como los códigos alemán, holandés y otros, se habría podido suprimir en general el límite mínimum y establecer solo el máximun de duración ó de cantidad hasta donde podría llegar el magistrado. De este modo se le habría dado mayor latitud de juicio y habría quedado en mejor situación para determinar la pena conveniente. No obstante, la Comisión ha creído que en la República Argentina, esa reforma no sería prudente. Acaso se entendiera, por muchos magistrados, que en razón de no axistir un límite mínimum de represión puesto en la ley, les sería permitido, si así lo estimaban, exonerar á veces al delincuente de toda pena. Esta sola eventualidad basta para no adoptar la reforma aunque se recomiende teóricamente. La ley argentina necesita asegurar la aplicación de un mínimum de penalidad, como siempre que se cometa delito.

El artículo 61 indica el conjunto de datos que los tribunales deberán tomar en cuenta para indagar la criminalidad del culpable y fijar la pena. Ese conjunto de datos se compone de todas las condiciones y antecedentes personales del agente y de la naturaleza y circunstancias del hecho. La enumeración contenida en el artículo es puramente enunciativa y explicativa, no es taxativa, no excluye uno solo de los elementos referentes á la persona ó al hecho dignos de ser considerados. En cuanto á los datos enumerados, es fácil mostrar su alta significación.

La edad. Es el primer elemento enunciado. Es una



verdad bien averiguada que, *cæteris paribus*, la fuerza para delinquir y la tendencia á cometer ciertos delitos preferentemente á otros ó á cometerlos de determinada manera, varían con la edad. Desde la infancia hasta la época de pleno desarrollo corporal, la inclinación al crimen crece, llega á su máximo en el período de la vida en qué la madurez es completa y las pasiones son más vivaces y enérgicas, para disminuir luego ó afectar distinta forma, á medida que el sujeto declina. Nada más indiscutible que el valor de la edad, como uno de los varios datos, para juzgar de la criminalidad del autor de un hecho punible y fijar la pena.

La educación.—No se discute la influencia de la buena educación en el desarrollo de la moralidad y de las sanas tendencias del individuo, aunque se discute y puede discutirse el grado de esa influencia y la extensión de su eficacia. Tampoco se discute el influjo pernicioso y el poder desmoralizador de la mala educación, tan notorios, tan incontestables siempre. Por consiguiente, es indudable que el conocimiento de la educación recibida por un procesado—si esa educación ha sido buena ó mala, bien ó mal encaminada—es un dato interesantísimo, que debe ser pesado al investigar la perversidad de éste.

Los hábitos y las costumbres constituyen otro elemento de juicio. Si un hombre ha sido de costumbres y hábitos honestos, ó si, aunque sin distinguirse por su honradez, sólo eventualmente se ha apartado de las exigencias de la ley, existirá un motivo para creer que, á pesar de su crimen, su inmoralidad no es grande. No se dirá lo mismo si su conducta ha sido á menudo dudosa. Y si se ha señalado por la práctica frecuente de actos condenables y por hábitos y cos-

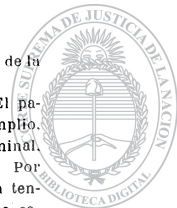
tumbres viciosas, se tendrá un indicio seguro de su falta de escrúpulos y de su poco ó ningún respeto al derecho ajeno.

La naturaleza de la acción y de los medios empleados.—La naturaleza de la acción, la especie de delito indica la calidad del deber y del derecho violados y puede mostrar la propensión á cometer principal ó exclusivamente un género dado de crímenes. Una lesión, un homicidio, un robo ó una estafa, pueden denunciar la tendencia preferente á ejecutar delitos contra las personas ó contra las propiedades.

La naturaleza de los medios empleados, así como el modo y las circunstancias de la ejecución, pueden revelar la audacia, la destreza, la habilidad ó la fuerza del criminal; y si ese criminal prefiere la violencia y los medios brutales, á la astucia ó vice-versa. Todo ello contribuye al conocimiento del culpable, porque los medios empleados en la acción concuerdan, en general, con las calidades personales.

La importancia y calidad de los motivos determinantes de la acción, forman un dato muy valioso. Si los motivos que el delincuente ha tenido para ejecutar el acto no han sido vituperables, si se ha determinado por móviles sociales, por un sentimiento generoso, aunque extraviado, como el dolor que le ha producido una injuria atroz inferida á su nombre, á su honor ó á alguno de los suyos, no podrá decirse que su inmoralidad sea manifiesta; al contrario, se tendrá un indicio de su leve criminalidad; y, al juzgársele y al medir la pena que se le ha de imponer, se deberá tener en cuenta el móvil que lo ha guiado. Pero si los motivos que el criminal ha tenido han sido antisociales, si ha realizado el hecho impulsado por un sentimiento de concupiscencia, de venganza, de odio, etc.,





entonces es claro que los motivos determinantes de la acción denunciarán su perversidad.

Las reincidencias en que hubiere incurrido.—El papel que la reincidencia, tomada en su sentido amplio, desempeña en el estudio del crimen y del criminal, es de primer orden y del más elevado interés. Por ella se puede descubrir el hábito del delito ó la tendencia de adquirir ese hábito; y, por lo tanto, la capacidad de un procesado para delinquir. Si una persona ha sido condenada muchas veces, ó si se sabe que ha cometido muchos delitos, puede afirmarse con certidumbre que hace profesión del crimen ó que el crimen le es habitual. Si sólo ha sido condenado pocas veces ó si se le conocen pocos actos delictuosos, no se podrá afirmar que ha adquirido el hábito; pero sí que se halla en vía de adquirirlo y que ha salvado ya los inconvenientes más serios que esa adquisición podía ofrecerle: los temores y los escrúpulos que detienen y embargan á un individuo antes de la primera caída, antes de resignarse á quedar excluido de la parte honrada de la sociedad é incorporado al gremio de los criminales.

Para que no se dude de que la enumeración de los elementos analizados es simplemente enunciativa, se ha agregado, al final del artículo, que se tendrán en cuenta también los «demás antecedentes y condiciones personales del procesado, que demuestren su mayor ó menor perversidad»

Con el fin de completar las reglas que han de servir al magistrado para valuar la responsabilidad, hemos reproducido del código Tejedor los preceptos contenidos en los artículos 62 á 64, relativos á algunos casos en que la criminalidad aumenta ó disminuye.

Así, desde el punto de vista de la naturaleza de la



acción y de los medios empleados, la criminalidad aumenta ó disminuye en razón de la extensión del daño ó del peligro causado; y se comprende por qué. El daño más extenso ó el peligro mayor resultante de la acción revela más fuerza ó más tenacidad y, en todo caso, mejores aptitudes para el crimen, desde que el agente no se ha detenido ante las consecuencias del hecho.

Es innegable, y su mera enunciación lo demuestra, que la criminalidad aumenta, desde el punto de vista de la intención, cuando existen motivos más numerosos é importantes de observar la ley, ó cuando los deberes violados por el culpable son más numerosos é imperiosos, y éste es más capaz de comprender claramente esos motivos y esos deberes; cuando son más grandes los obstáculos para la ejecución del crimen, ó se necesita emplear más audacia y coraje, más inteligencia y malicia, ó más fuerza corporal para preparar la acción, ó consumirla; cuando las acciones exteriores y accidentales que han arrastrado, extraviado y seducido al culpable son menores, ó éste se ha determinado más espontáneamente y ha buscado personalmente la ocasión; cuando el culpable está desmoralizado y empeñado en la carrera de los delitos por la práctica constante de malas acciones, por desarreglo de costumbres ú otros motivos semejantes; cuando los deseos y pasiones que lo hacen obrar son más perversos y peligrosos.

Es igualmente innegable que la criminalidad disminuye cuando, por una debilidad natural de la inteligencia, el culpable no ha comprendido toda la gravedad del peligro, ni la extensión de la prohibición; cuando el agente se ha determinado á cometer el delito por persuasión, promesas artificiosas, orden ó

amenaza, en los casos en que estas circunstancias no eximen de responsabilidad; cuando ha sido impelido por una miseria apremiante ó por cualquiera otra necesidad urgente; cuando ha obrado arrebatado por una pasión ó perturbación intelectual sobrevenida casualmente y sin que de su parte haya culpa; y cuando resulta de sus antecedentes ó de su conducta durante ó después del hecho, que su perversidad y su desmoralización son todavía poco avanzadas.

La claridad de las disposiciones precedentes y la circunstancia de haber estado vigentes, antes de ahora, en casi toda la República, nos excusa de insistir sobre ellas. Conviene hacer notar que este sistema del código Tejedor no pudo dar en la práctica todos los resultados que dará con la aplicación de nuestro proyecto, porque en la parte especial de aquél no se observó suficiente latitud en la determinación de las penas y se abusó de las penas fijas.





TÍTULO IV

De la tentativa

(Arts. 65 á 68)

La legislación de la tentativa es uno de los puntos difíciles y delicados del derecho penal. Convienen comúnmente los expositores de la materia en que la tentativa consiste en la realización intencional de actos externos directamente vinculados con el fin que se propone el agente: cometer el delito. Es lo que en el fondo estatuye el artículo 8º del Código. En esto no hay dificultad. Las dudas y las vacilaciones se presentan cuando se quiere saber cuáles son los actos vinculados con el fin propuesto. Ciertamente los actos externos, reveladores del designio criminal, han de hallarse en el camino del delito, han de formar parte del *iter criminis*, según la expresión de los antiguos criminalistas, y han de ser tales que, clara ó incontestablemente, se dirijan ó tiendan á la comisión del hecho. Por eso varios escritores, como Carrara, y algunos tribunales extranjeros, exigen, para que haya tentativa, que las acciones exteriores aludidas se encaminen inequívocamente á la consecución del fin anhelado por el criminal. La *inequívocidad* en cuanto á la dirección de los actos, al vínculo que los liga con el delito, es lo que caracteriza la tentativa. De



acuerdo con estas ideas, para eliminar todo motivo de discrepancia ó de duda y establecer netamente el concepto de la tentativa, la Comisión ha añadido, á los términos del artículo 8º del Código, después de la voz *directa*, las palabras *é inequívoca*. De manera que la disposición queda actualmente así, bajo el número 65 del Proyecto: «Hay tentativa cuando la resolución de cometer un delito ha sido manifestada por actos exteriores que tienen relación directa *é inequívoca* con el delito»

El artículo 9º del código no ha sufrido alteración y figura en el Proyecto con el número 66.

Por el artículo 10, el Código presume voluntario el desistimiento del delito. Esta presunción es fundada, y debe mantenerse para todos aquellos casos en que no existan motivos que induzcan á suponer otra cosa, pues ¿qué razón habría para no presumir espontáneo el desistimiento de un individuo que anteriormente nunca había sido llevado ante la justicia y era tenido como de buena conducta? Pero si el autor de la tentativa es un hombre de malos antecedentes, procesado ya en otras ocasiones, si es un reincidente, no podrá suponerse voluntario el abandono de su proyecto; al contrario, deberá creerse que se ha detenido forzado por algún obstáculo, porque á ello inducen los motivos de presunción. La parte agregada al artículo 10 del Código (67 del Proyecto) responde á estas observaciones y en su virtud no se presumirá voluntario el desistimiento, sino todo lo contrario, cuando se trate de una reincidencia.

El artículo 11 del Código dice: «El que se detiene en la ejecución de un delito, pero con el propósito de consumarlo en otro tiempo, en otro lugar, sobre otra persona ó de cualquier otro modo, será castigado co-



mo si hubiese dejado de cometerlo por circunstancias independientes de su voluntad». Se suprime este artículo porque no preceptúa nada que no se halle previsto en las disposiciones anteriores del mismo Código y en las del Proyecto explicadas ya. Efectivamente, el que se detiene en la ejecución de un delito, pero *con el propósito de consumarlo* en otro tiempo, en otro lugar, etc., no desiste, suspende solo el cumplimiento del hecho punible porque se lo impide algún obstáculo, que necesita vencer para asegurar el golpe, y mantiene su resolución, su propósito criminal. No es menester que la ley diga que no desiste voluntariamente el que suspende la ejecución del crimen, con el propósito de llevarlo á cabo en otras condiciones, porque es á todas luces evidente. El art. 11 es, pues, supérfluo.

Al considerar la penalidad de la tentativa, la Comisión se planteó la cuestión de si, para el autor de un delito tentado, debería establecer la misma pena que se le impondría en caso de haberlo consumado, ó una pena menor; y, por mayoría, resolvió esto último. Despejado el punto precedente en el sentido que lo resuelve el art. 12 del Código, convino, por unanimidad, en modificar ese artículo, ya porque las penas que prescribe no son adecuadas, ya por las dificultades prácticas que su aplicación suscitará. Véanse algunas de estas dificultades. En el n° 2° art. 12 se dispone que «en los demás casos (es decir, cuando no se trate de aquel en que la pena que debería imponerse por el delito fuera la de muerte) la pena que corresponda al delito consumado, se disminuirá desde la cuarta parte á la mitad». Supóngase que se ha cometido la tentativa de un delito por el que su autor si lo hubiera consumado, habría merecido presidio ó penitenciaría por tiempo indeterminado; en tal caso,



¿qué número de años comprendería la cuarta parte, la mitad ó una fracción cualquiera del presidio ó de la penitenciaría por tiempo indeterminado? Nadie podría responder.

El último párrafo del art. 12 dice: «En caso de que al delito consumado correspondiese el mínimum de una clase de pena, se aplicará el máximun de la pena inferior en grado, que podrá disminuirse hasta en una tercera parte». El Código establece clases ó especies de penas, pero no *grados*; entonces, ¿cómo pasar del mínimum de una clase de pena al máximun de la inferior en *grado*? ¿cuáles son los grados de las penas? Empero, la palabra *grado* parece tomada, según el contexto de la disposición, en el sentido de clase ó especie. Si ésta fuera la acepción que se le ha querido dar, resultarían, muchas veces, al aplicar el precepto, verdaderas atrocidades. Así, del mínimum de presidio, tres años, se pasaría al máximun de penitenciaría, á la penitenciaría por tiempo indeterminado, si hubiera de observarse rigurosamente el orden de colocación establecido en el artículo 54; y si ese orden no fuese de rigor, se pasaría, sin duda, al máximun de la penitenciaría por tiempo determinado, cuya duración es de quince años. Disminuido este término en una tercera parte, quedaría reducido á diez años. Ahora, diez años de penitenciaría constituye una pena más grave que la de tres años de presidio. Si la jurisprudencia salvara en la práctica estas dificultades, no las salvaría sin apartarse del texto y del significado de la ley.

El artículo 68 del Proyecto jamás dará lugar á las observaciones apuntadas. Desde luego, prescribe en general que la pena que correspondería al agente, si hubiese consumado el delito, se disminuirá en un tercio; y en seguida prevé los casos en que la pena



del delito consumado sea perpétua ó sea la de muerte, y dispone en el primero, que la de la tentativa no excederá de veinte años, ni bajará de diez, y en el segundo que será presidio desde quince hasta veinte y cinco años. De manera que se podrá siempre determinar fácilmente la pena aplicable al autor de una tentativa .

En el artículo 13 el Código dispone que, «si la tentativa constituye por sí misma un delito consumado diferente del tentado y castigado con mayor pena que la señalada para la tentativa, se aplicará la establecida para el delito». Se suprime esta disposición, porque nada previene, nada decide que no sea evidente. En presencia de un hecho, constitutivo de un delito consumado, á la vez que de la tentativa de otro, ningún juez dejará, sin apartarse de la ley, de considerar el delito completo y de imponer á su autor la pena que corresponda, para ver en ese hecho sólo una tentativa y aplicar al agente una pena menor. Hacer caso omiso del delito consumado importaría violar los preceptos legales relativos á ese mismo delito. Además, en el artículo 78 del Proyecto se prescribe que cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fije pena mayor, con lo que se resolverá cualquiera cuestión que en la práctica surja. También se suprime el artículo 14 por el cual se declara que los actos preparatorios sólo son punibles cuando importan una contravención, salvo disposición expresa de este Código. La ley no precisa declarar que los actos preparatorios no serán punibles. Para que no se reprima á los que ejecuten esos actos, bastará que no les imponga pena, pues ningún tribunal podrá penar á nadie sino por hechos expresamente incriminados. La razón que existe para

no reprimir, en general, á los autores de actos preparatorios, es que éstos son ambiguos, no acusan el propósito del agente y lo mismo puede referirse á una acción honesta que á una acción ilícita. Pero si la ambigüedad desaparece, si en virtud de las circunstancias y de las condiciones de las personas que los han ejecutado es indudable la dirección de esos actos, la relación directa é inequívoca en que se hallan con el delito, entonces entrarán en el concepto de la tentativa, constituirán una verdadera tentativa y deberán ser reprimidos como tal, sin que el Código necesite añadir una palabra á lo dicho respecto de ésta. Tampoco es menester que se haga la salvedad de que se reprimirán los actos preparatorios cuando el Código lo disponga expresamente, desde que es clarísimo que si erige un hecho en delito y le impone pena, su autor deberá ser reprimido.





TÍTULO V

De las personas responsables

(Art. 69 á 77)

El título V, libro I del Proyecto, abarca la materia legislada en los títulos IV y V, libro I, del Código vigente. Las personas responsables son exclusivamente los autores y los cómplices. Los encubridores no forman una tercera categoría de cooperadores; son autores, y pueden también ser cómplices, de un delito existente por sí, de un delito especial, el encubrimiento.

El artículo 69 es, en su esencia, igual al 21 del Código. Sin embargo, hemos modificado la redacción de éste porque es impropia y redundante, en los dos primeros incisos, y en el tercero se entra en una enumeración de las diversas especies de concurso moral en que no debe entrar la ley, pues el único efecto que la enumeración produce, es limitar el alcance de la disposición y particularizarla á los casos que prevé, excluyendo los modos de instigación ó las especies de concurso moral no enumerados.

En el número 1º del artículo 69 decimos que se consideran autores á «los que toman parte en la ejecución del hecho» en vez de repetir con el Código actual «el que ejecuta el delito directamente por su

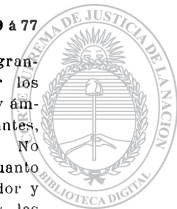


propia acción.» Las palabras «directamente, etc.», están demás, desde que es imposible ejecutar un hecho indirectamente ó por la acción de otro.

En el n.º 2.º expresamos simplemente que se consideran autores á «los que prestan al ejecutor un auxilio ó cooperación sin los que el hecho no habría podido tener lugar»; no añadimos, como lo hace el Código, que el auxilio se preste «antes ó durante la ejecución» porque, desde que se trata de una cooperación ó ayuda indispensable para que el hecho tenga lugar, no podrá prestarse en otro momento; *después* de la ejecución sería completamente inútil. Tampoco añadimos que se preste «con el intento de asegurar la consumación del delito», porque en virtud de la regla sobre la responsabilidad, consignada en el art. 58, todo hecho punible ó toda participación en un hecho punible se presume realizado con voluntad criminal.

En el núm. 3.º nos referimos á los partícipes por concurso moral, diciendo que se consideran autores á «los que instigan y determinan á otros á cometer el hecho». Esta cláusula precisa claramente la condición necesaria para que un individuo por medio de un mandato, una orden, etc., revista la calidad de autor: es la de que *determine* á otro á ejecutar el delito. Además, comprende todos los casos posibles de instigación y evita así los inconvenientes de la enumeración hecha en el precepto en vigencia.

Suprimimos los artículos 22 al 31 del Código, que fijan la extensión de la responsabilidad del instigador ó autor mediato, en diversos casos (arts. 22-24) y que legislan sobre el complot (arts. 25-29) y sobre las bandadas (arts. 30-31). Suprimimos las disposiciones relativas á la extensión de la responsabilidad, porque declarado *autor* el que instiga y determina á otro á co-



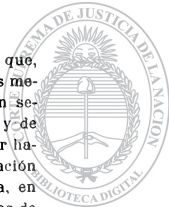
meter un delito, su responsabilidad más ó menos grande, en cada caso, será deslindada y fijada por los tribunales, de acuerdo con las reglas generales y amplias referentes á la responsabilidad explicadas antes, de la misma manera que lo será la del ejecutor. No hay razón alguna para hacer una casuística en cuanto á la extensión de la responsabilidad del instigador y no hacerla respecto de la del ejecutor. Además, las reglas especiales para casos que entran perfectamente en los preceptos generales, solo sirven para estrechar el criterio del juez, para obligarlo á no apreciar á veces datos y circunstancias dignos de ser considerados y susceptibles de aumentar ó disminuir la responsabilidad; pero que no podrá tomar en cuenta, porque la ley no se lo permite.

Suprimimos los artículos sobre el complot, porque el complot en nuestro Código es exactamente lo mismo que la condelincuencia ó complicidad, ó más bien dicho, es un modo ó una especie de condelincuencia ó complicidad.

Se justifican los preceptos relativos al complot en algunas legislaciones extranjeras, porque en ellas el complot significa conspiración ó es la conspiración para realizar un delito, especialmente un delito contra la seguridad ó el orden público; pero no se justifican en nuestra ley, desde que el complot solo designa un modo de coparticipación.

El Dr Tejedor reprodujo, en su proyecto, las disposiciones del código bávaro, que luego pasaron al argentino con algunos cambios. En uno y otro caso no se tuvo en cuenta la observación precedente.

Finalmente, suprimimos los artículos relativos á las bandas (30-31); en primer lugar, porque la banda ó la asociación para delinquir constituye un delito



por sí, por el mero hecho de su formación, delito que, entre paréntesis, no figura en el Código y que es menester legislar en la parte especial de la ley; en segundo lugar, porque la responsabilidad de todos y de cada uno de los miembros de una banda, sea por haberla constituido, sea por los delitos que la asociación hubiere ejecutado, se determinará, en la práctica, en cada caso ocurrenente, por la aplicación combinadas de las reglas de la parte general y de la parte especial del Código.

El artículo 70 que declara cómplices á «los que no hallándose comprendidos en el artículo precedente, cooperan á la ejecución del hecho por actos anteriores ó simultáneos», es en el fondo y hasta en la forma, salvo una leve alteración requerida para concordar el precepto con los anteriores, idéntico al 32 del Código.

Pero el Código después de haber dado una noción cabal y exacta de los cómplices, tomándola de la ley española, se aparta del sistema á que responde su artículo 32; divide á los mismos cómplices en dos categorías ó grados, enumera los que se hallan incluidos en uno y otro grupo y establece la pena con relación al grado de complicidad. La división de los cómplices en grados, la enumeración de los casos en que el individuo entra en uno ó en otro grado y la fijación de la pena con referencia al grado de complicidad, hacen superflua la noción del artículo 32 é imposible su aplicación siempre que se trate de actos de concurrencia no incluidos en la enumeración, aunque estén comprendidos en los términos de dicho artículo.

La división de los cómplices en categorías y la enumeración de los casos incluidos en cada grupo, ¿son convenientes? Algunas legislaciones como el código



francés y el belga enumeran casos de complicidad. El código bávaro, que sirvió de modelo al de Tejedor, del que las tomó el argentino, suprimiendo una categoría de cómplices, la tercera, sanciona una y otra cosa. Sin embargo, otros códigos, sobre todo los más recientes, las han rechazado. Ni el código español, ni el alemán, ni el húngaro, ni el holandés, ni el italiano ni el oriental han adoptado ese sistema. Y se explica que se rechace la división y la enumeración, «ya por las dificultades que ofrece la previsión de todos los casos que pueden ocurrir para señalarles de antemano el lugar que les corresponda en las diversas agrupaciones formadas por la ley, ya por la oscuridad á que puede dar lugar la diversidad de distinciones» (1). Además, con semejante sistema se legisla, no la complicidad en género, sinó casos de complicidad, lo que es contrario al fin que debe proponerse la ley.—

Es conocida la teoría según la cual las circunstancias, los accidentes y las condiciones personales de un partícipe, susceptibles de agravar, disminuir ó excluir la responsabilidad, no se comunican, ni afectan á los otros partícipes ó cooperadores. La edad, el sexo, la calidad de padre ó de hijo de la víctima, el estado mental, el hábito del crimen, etc., son elementos personalísimos, propios sólo del sugeto que los posee, que no pueden modificar la situación de sus copartícipes ante la ley y ante la justicia. Tal es el principio que consagra la primera parte del artículo 71.

Pero, es posible que algunas circunstancias, cualidades y relaciones personales que agraven la criminalidad concernientes á alguno de las partícipes, hayan

(1) Dr. Manuel Obtrio—*Curso de Derecho Penal*, p. 123—En el mismo sentido se pronuncia el Dr. Rodolfo Rivarola, en su «Exposición y Crítica del Código Penal de la República Argentina» t. I, páginas 256 y siguientes.



servido para facilitar el delito y hayan sido, al mismo tiempo, conocidas por los otros cooperadores; en ese caso, las circunstancias, cualidades y relaciones mencionadas se tomarán en cuenta también al apreciar la responsabilidad de estos últimos, de acuerdo con la segunda parte del artículo 71. Así sucederá, por ejemplo, con la condición de criado de la víctima en uno de los codelincuentes, cuando se haya valido de ella para hacer penetrar en la casa á sus compañeros porque entonces dicha circunstancia habrá sido utilizada por todos y revestirá un carácter real, como se ha observado, desde que sin ella habría sido menester que los copartícipes se sirvieran de otro medio para entrar en el domicilio.

La segunda parte del artículo 71, concordante con el artículo 65 del código italiano, no sanciona para caso alguno la comunicabilidad de las condiciones personales, sanciona únicamente—por una excepción, que explica cuando ciertas circunstancias individuales de un partícipe se tomarán en cuenta para estimar la responsabilidad de los otros—la verdad de la teoría que sostiene la incommunicabilidad de las condiciones y cualidades subjetivas, pues lo que en virtud de la regla se comunicará será la parte *objetiva*, la parte realmente aprovechada por todos, de las circunstancias personales.

Más inconcusa aún que la precedente es la prescripción del artículo 72, que establece la comunicabilidad de las circunstancias materiales agravantes, ó que ordena se tomen en cuenta, aunque hagan cambiar la especie del delito, respecto de todos los partícipes, porque el hecho y sus diversos accidentes vinculan y afectan á los cooperadores que los conocían ó podían preverlos. Empero, si algunos concurrentes al delito



no conocían, ni podían prever una ó más circunstancias materiales, éstas no se tomarán en cuenta á su respecto, por que faltará la condición indispensable de la comunicabilidad. Sería injusto é ilógico agravar la situación de un hombre por hechos que ignoraba y que no entraron en sus previsiones.

La mayoría de la Comisión decidió mantener, en principio, la teoría en virtud de la cual se debe imponer al cómplice una pena inferior á la del autor principal; pero simplificada la legislación sobre complicidad, era preciso simplificar también la penalidad respectiva. Así, para dejar á los jueces la amplitud necesaria, se ha creído suficiente disponer que, cuando se trate de la aplicación de penas divisibles, que constituyen la regla en Proyecto, el cómplice será reprimido con la pena correspondiente al hecho á que ha cooperado, sin que se le pueda imponer el máximo. En seguida se prevé los casos en que se trate de delitos por los cuales al cómplice, con arreglo á sus antecedentes y condiciones personales, le correspondería pena de muerte ó presidio perpétuo, si fuera autor, y se prescribe que por ser solamente cómplice se le imponga presidio perpétuo en vez de la pena de muerte, presidio temporal en lugar de presidio perpétuo. Se vé que, para juzgar la responsabilidad del cómplice y determinar la pena que se le aplicaría si hubiese sido autor, será indispensable considerar todos los elementos y datos individuales y reales á que se refiere el título de la responsabilidad y solo en atención á que es cómplice, á que ha participado accesoriamente en el delito, se le disminuirá la pena del modo indicado.

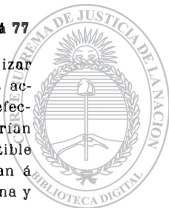
Los artículos 74 y 75 reproducen las disposiciones del 38 y de la primera parte del 39 del Código, con



algunos cambios en la redacción, que se explican por sí mismos. El artículo 76 restablece el 58 del Código Tejedor, que reprime la tentativa de complicidad, pues no existe razón alguna para eximir de pena al que, por actos externos directa é inequívocamente relacionados con el delito, ha tentado cooperar á su realización, si según los principios legales relativos á la tentativa, merece ser reprimido.

Hemos completado la legislación sobre la codelinquencia con un precepto que declara exento de responsabilidad por los hechos punibles cometidos por la prensa, á los editores, impresores y demás personas que prestan al autor del escrito ó grabado la cooperación material necesaria para su publicación. Este artículo deroga aparentemente el principio común en materia de codelinquencia, según el cual se presume responsables á todos los que han cooperado á la realización de un delito, y se presume, porque se supone que todos han concurrido con intención de delinquir. A pesar de la apariencia, el artículo puede no ser, y no será á menudo, una derogación al principio. El editor, los cajistas, etc., cooperan, es verdad, á realizar el hecho; pero lo hacen ordinariamente sin propósito criminal, sin el menor deseo de agraviar derecho alguno, sin conocimiento de la trascendencia del escrito ó grabado y del fin á que se encamina; lo hacen solo para ejercer su industria ó su modo de vivir. Sin embargo, aunque las personas nombradas presten sus servicios con intención criminal y para que el hecho punible se cumpla, el artículo debe mantenerse, porque de la manera amplia como está redactado consagra una garantía de la libertad de imprenta. La Constitución Nacional ha desechado la censura previa; y sería restablecerla, y restablecer la peor

de las censuras,—la de la ignorancia—responsabilizar á los editores, grabadores, cajistas, etc., por los actos punibles cometidos mediante la prensa. En efecto, antes de imprimir cualquier trabajo examinarían si es ó no ofensivo; y, si á su juicio fuera susceptible de comprometer su responsabilidad, se rehusarían á imprimirlo. El artículo 77 se apoya en la doctrina y en la legislación comparada.





¡CAPÍTULO VI

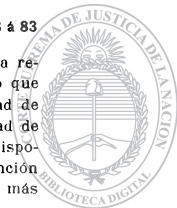
Concurso de hechos punibles

(Arts. 78 á 83)

Hemos agrupado bajo un solo título las disposiciones de la ley sobre el concurso de hechos punibles. La importancia de la materia así lo exigía, y el ejemplo de los códigos más nuevos y mejor ordenados nos lo aconsejaba.

Es conocida la vieja división hecha por los juristas, del concurso de acciones en ideal y material: ideal, cuando con un solo hecho se violan varias disposiciones legales ó varias leyes; material, cuando con hechos repetidos, independientes entres sí, se cometen diversos delitos de la misma ó de diferente especie

En el caso de concurso ideal, la teoría más fundada y consagrada por los códigos más adelantados, relativamente á la represión, es la que sostiene que solo se debe aplicar la ley ó la disposición que fija la pena más grave. Con arreglo á ella, el artículo 78 del Proyecto prescribe: en primer lugar, que si un hecho cayera bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fije pena mayor; y en segundo lugar, que si un hecho estuviere diferentemente reprimido por una disposición general y por una disposición especial se aplicará esta última. La razón



de la primera parte del artículo es que una es la resolución del agente y uno es también el hecho que ha ejecutado. Si hay unidad de hecho y unidad de resolución, lo que importa decir que hay unidad de delito, debe aplicarse una sola de las leyes ó disposiciones violadas. ¿Cuál? La que establece la sanción más severa porque es la destinada á amparar el más importante de los derechos lesionados.

A la razón consistente en la unidad del hecho y de la resolución, se agrega otra para fundar la segunda parte del artículo; es la de que, en virtud de una regla común de interpretación, la disposición especial deroga la general en lo que la especial comprende.

El artículo 79 prevé las acciones ó delitos continuos y manda que á sus agentes se aplique la disposición que fija la pena mayor. En el delito continuo, uno es el designio del criminal y uno es también el fin que se propone conseguir. Los distintos hechos que realiza, en prosecución de ese fin, aunque sean culpables, considerados aisladamente, no son independientes entre sí, no son sino diversos momentos de una sola acción, forman un conjunto. Por esto el autor de esos hechos, en vez de ser penado por cada uno de ellos, tomado separadamente, debe sufrir la pena que corresponda á la acción continua y única que todos constituyen.

En los artículos 80 y 81 se legisla el concurso material. Entre las doctrinas adversas sobre la represión del concurso material, entre la que sostiene que se debe imponer al criminal la pena del delito mayor y la que afirma que deben aplicársele las penas correspondientes á todos los delitos ejecutados, la última se apoya en buenas razones y tiene seguramente un fundamento más sólido. El criminal ha realizado los



distintos delitos, y, por cada uno de ellos, se ha hecho acreedor á la pena respectiva, la cual sin duda se le habria impuesto si hubiese sido juzgado á su tiempo. No obstante, es posible que la acumulación no sea practicable y que no responda á las exigencias sociales, ni á los fines de la represión, dadas las condiciones del delincuente. De ahí la necesidad de templar y de modificar la regla de la acumulación para adecuarla á los diferentes casos de concurrencia. Es lo que se ha hecho en los artículos 80 y 81, que ordenan la acumulación, pero con varias alteraciones y limitaciones de importancia. El primero de esos artículos dispone que, tratándose de hechos reprimidos con una misma especie de pena restrictiva de la libertad, las penas de los diversos delitos se adicionarán, sin que nunca la suma resultante de la adición pueda exceder del máximun de duración fijado en el Proyecto á la especie de pena de que se trate. Así, si la especie de pena es la de penitenciaria, la suma procedente de la acumulación jamás pasará de quince años. Este precepto se halla, en el fondo, comprendido en el artículo 85 del Código.

El límite que el citado artículo 80 fija á la acumulación, en los casos de pena pecuniaria, es el de que la suma no excederá nunca del cuádruplo de la multa que corresponda al hecho más severamente penado. Se concibe los graves inconvenientes que la adición indefinida de las multas es susceptible de originar. Para obviarlos, en la necesidad de fijar un límite máximun, hemos creído prudente establecer que no pasará del cuádruplo de la multa más alta que el delincuente merezca.

El artículo 81 se refiere, ante todo, á la concurrencia de hechos reprimidos con penas divisibles de di-



ferentes clases; y sanciona también la acumulación, pero, como se trata de penas de diversa naturaleza, la agregación lisa y llana de las unas á las otras no es posible. Es preciso reducirlas todas á una especie, la cual no puede ser otra que la de la pena más grave. Así lo preceptúa la disposición que exponemos y la norma de reducción que en ella se adopta es la contenida en el artículo 45, respecto al cómputo de la detención preventiva en la pena. El límite de la acumulación queda marcado por el máximo legal de la especie de pena á que las demás sean reducidas.

Sucedará á veces que concurren hechos por los que el delincuente merezca la imposición de penas divisibles é indivisibles.

Las únicas penas indivisibles que el Proyecto establece son la de muerte, el presidio perpétuo y la deportación. La deportación es una pena accesoria: y, por lo tanto, insusceptible de acumularse ó de sumarse con otra alguna. En cualquier caso, sea ó nó de concurso de delitos, si procede su imposición, con arreglo á las prescripciones que le son propias, deberá siempre aplicarse. Quedan el presidio perpétuo y la muerte. Toda vez que concurren hechos por los que el agente deba sufrir estas penas con otros por los que deba imponérsele penas divisibles, es obvio que la acumulación, aunque fuera prácticamente realizable, sería improcedente é inhumana. Bastará entonces, como lo dispone el segundo inciso del artículo 81, aplicar la pena indivisible más grave. ¿Qué se puede agregar á la muerte, que no sea una crueldad inútil y repugnante, cuando su aplicación es necesaria? ¿Con qué objeto y por qué medio se agravaría el presidio perpétuo, sin demostrar un lujo de severidad que ningún beneficio reportaría?



La inhabilitación podrá imponerse como pena principal ó como pena accesorio; y, de una y otra manera, su aplicación no ofrecerá dificultad de ningún género. Por eso, cuando concorra con otras penas de diversa naturaleza, no habrá para qué reducirla á la especie de las más graves y deberá aplicarse en calidad de accesorio de la que resulte de la acumulación. Es lo que estatuye el inciso final del artículo 81. Al ordenar que la inhabilitación se imponga sin la reducción aludida, el inciso no prohíbe en manera alguna que, si el criminal ha incurrido en varias inhabilitaciones especiales ó temporales, éstas se adicionen.

Sancionada la acumulación para los casos de concurrencia de hechos punibles, reprimidos con penas divisibles de diferente naturaleza, en los términos y con las limitaciones, salvedades y excepciones prescritas en el artículo 81, era menester consignar la regla por medio de la cual se determinará la gravedad relativa de las penas que el Proyecto consagra, á fin de eliminar toda dificultad y prevenir las dudas, que de otro modo suscitaría la aplicación de ese artículo. A ello provee el artículo 82, disponiendo que esa gravedad relativa se determinará por el orden en que las penas se enumeran en el artículo 9°. Es visible que ese orden de enumeración—muerte, presidio, deportación, penitenciaria, etc.—señala evidentemente el orden de gravedad.

El artículo 83 prevé el caso en que un individuo, ya juzgado y condenado por uno ó más delitos, deba ser llevado nuevamente á juicio por un hecho realizado antes de la condena, pero que se ignoraba en el instante en que ésta fué pronunciada; y ordena que las reglas explicadas precedentemente se apliquen al resol-

ver sobre ese hecho Nada más justo, pues la circunstancia de haberse ignorado, durante el primer juicio, el otro delito cometido, no puede mejorar la situación del agente





TÍTULO VII

De la reincidencia

(Arts. 84 á 86)

En las reglas concernientes á la responsabilidad se incluye la reincidencia entre los elementos capitales que, en general, los magistrados deben pesar y tener muy en cuenta para indagar la perversidad del culpable y determinar la pena que se le ha de infligir. Al explicar esas reglas, hemos mostrado cómo la reincidencia denuncia el hábito del delito ó la tendencia á adquirir este hábito y cuán importante es en el juicio, la consideración de ese hábito individual. La ley sería, empero, incompleta si, en el estado actual de la ciencia y de algunas legislaciones extranjeras y ante el desarrollo creciente de la criminalidad profesional, particularmente en los centros urbanos, se circunscribiera á expresar que entre los elementos personales que se considerarán para juzgar la perversidad del criminal y fijar su pena, se halla la reincidencia. Es preciso que determine también cuándo y cómo las reincidencias reiteradas de un individuo exigirán la adopción, respecto de éste, de medidas que amparen á la sociedad contra la repetición probable, por no decir segura, de sus crímenes, después de cumplir su última condena, y que procuren al



mismo individuo un cambio en sus costumbres, la enmienda, si es posible; y, en todo caso una vida más regular. De esto se ocupa el título VII del Proyecto, empezando por precisar la noción de la reincidencia. Era necesario definir esta palabra, pues, a pesar de ser uniforme la vieja opinión según la cual el delincuente que reincide es más malvado y muestra mayor inclinación al crimen que el que sólo ha delinquido una vez, reinan las más serias discrepancias en la doctrina y en las leyes penales sobre lo que es y sobre las condiciones que ha de revestir la reincidencia.

Para algunas legislaciones la reincidencia existe siempre que un individuo, luego de haber sido irrevocablemente condenado por un delito, comete otro de la misma especie. Para otras existe toda vez que el criminal ejecuta un hecho punible, no ya de la misma especie, sino del mismo genero de aquel por el cual fué ejecutoriamente condenado antes. Algunas requieren que el culpable haya sufrido la primera condenación; otras no. Algunas exigen como condición ineludible, que el segundo delito se cometa dentro de un lapso de tiempo determinado—variable ó nó, según la naturaleza del hecho—después del primero; otras no establecen plazo. Y no paran ahí las diferencias.

El Código Tejedor decía: «el que después de sufrir una pena cometa nueva y voluntariamente, dentro de los diez años siguientes, un crimen de la misma especie, será considerado reincidente y castigado con una pena mayor que la legal de la primera infracción, aumentándola en los términos siguientes». En seguida legisla la manera de efectuar el aumento. En el Código vigente se han reemplazado los artículos del



código Tejedor por las siguientes reglas, tomadas del Código español de 1850.

«Son circunstancias agravantes:

«19. Haber sido el culpable castigado anteriormente por delito á que la ley señale igual ó mayor pena.

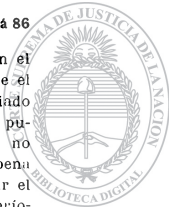
«20. Ser reincidente de delitos de la misma especie» (art. 84).

La última regla consigna la reincidencia en *especie*; pero no la define; de manera que no se sabe lo que es preciso entender legalmente por ella. No basta decir *reincidencia especial*, desde que existen divergencias manifiestas entre las nociones contenidas en los códigos que sólo admiten la reincidencia especial.

La primera regla transcrita ¿alude á la reincidencia? Aunque la comparación de los términos en que se halla concebida con los de la segunda, parecería indicar la negativa, puede afirmarse que sí. Efectivamente, se refiere á la reincidencia en general, limitada á los casos en que, por el nuevo delito, el culpable, *castigado anteriormente*, merezca una pena igual ó menor que la que sufrió.

Ni el sistema del Código vigente, ni el del código Tejedor, ni el de otros códigos, que limitan el alcance de la reincidencia, son satisfactorios. Ésta debe tomarse en una acepción amplia. Si la reincidencia revela la profesión ó la tendencia á adquirir la profesión del delito y la mayor perversidad del sujeto, es claro que el criminal acusa y pone de relieve aptitudes más varias para el crimen, una habilidad más desarrollada, una audacia y una inmoralidad más considerables, cuando repite sucesivamente, no obstante las condenas de que es objeto, delitos muy diversos por su índole y clase.

Fundados en las consideraciones precedentes y en



otras análogas, fáciles de concebir, estatuímos, en el artículo 84, que «habrá reincidencia siempre que el condenado por sentencia firme, aunque haya mediado indulto ó conmutación, cometa un nuevo hecho punible de cualquier naturaleza que fuere». Así, no será necesario que el condenado haya sufrido la pena impuesta por la sentencia firme antes de ejecutar el nuevo hecho, ni que realice éste dentro de un período de tiempo, después de cometido el primer delito ó de dictada la condenación. Tampoco será menester que los delitos sean homogéneos ó de igual especie ó género; pueden ser de índole y de clases muy diferentes.

Establecemos que la reincidencia existirá, aunque haya mediado indulto ó conmutación de la pena impuesta en la sentencia antecedente, por una razón muy simple. El indulto ó la conmutación son modos diversos de la gracia, en virtud de los cuales se remite la pena ó se la sustituye por otra más benigna. Nada más. No impiden que, al juzgar á un delincuente se aprecie una circunstancia positiva, el delito anterior por el que fué condenado y luego perdonado total ó parcialmente. Al contrario, la comisión de un nuevo delito después del perdón, será un indicio más de su mayor inmoralidad, pues el indulto ó la conmutación, de que se ha mostrado indigno, debería haberlo estimulado á respetar el derecho ajeno.

La amnistía es otra forma de la gracia, es la principal y la que produce efectos más extensos. Establecemos también que «no se contarán para los efectos de la reincidencia los delitos amnistiados»; no porque etimológicamente, amnistía signifique olvido, ó porque produzca el olvido ó borre el delito y sus efectos desde que un hecho no puede suprimirse; sino por

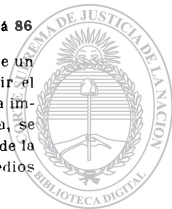


una doble razón: 1ª porque la amnistía es una medida general: comprende y beneficia á todos los que han participado en los hechos á que se aplica, y se otorga antes, durante ó después del proceso. Otorgado ántes ó durante el juicio, no se sabrá más tarde si las personas á quienes se concedió habrían sido absueltas ó condenadas; sin embargo sería necesario suponer que habrían sido condenadas para contar el hecho amnistiado en la reincidencia. 2ª Porque la amnistía, se concede en la República Argentina, por delitos políticos únicamente; y los delitos políticos difieren profundamente, en cuanto á su moralidad y en cuanto á sus consecuencias, de los delitos comunes.

— El artículo 85 legisla el único caso de imposición de la pena de muerte admitida en el Proyecto, aquel en que el condenado á presidio perpétuo reincidiese en un delito por el que merezca la misma pena. Este sistema ha sido fundado en el título segundo, al motivar la conservación de la pena de muerte; de manera que sería superfluo volver ahora sobre él.

— El artículo 86 determina los casos en que se aplicará la pena de deportación. Esta pena está destinada á combatir la reincidencia; por eso se impondrá siempre á los reincidentes y no á otros. El artículo establece el modo de hacerla efectiva y el número de condenaciones que se requerirá para imponerla como accesoria de la última condena. Ese número variará con la importancia de las condenaciones ó más bien dicho, con la mayor ó menor gravedad de las penas que por las mismas condenaciones se impongan: será tanto menor cuanto más severas sean estas penas, y vice-versa. Y se percibe la razón: la reincidencia en delitos de mucha entidad, después de haber sido condenado á una pena grave, denota desde luego la tena-

cidad y la índole perversa del agente y constituye un verdadero peligro para la sociedad. Al prescribir el número de condenaciones que se necesitará, para imponer la deportación como accesoria de la última, se han tenido presentes las disposiciones análogas de la ley francesa y, sobre todo, el sistema y los medios de penalidad adoptados en el Proyecto.





TÍTULO VIII

Ejercicio de las acciones penales

(Arts. 87 á 94)

Hemos reunido en un solo título las disposiciones dispersas en el Código actual sobre el ejercicio de las acciones penales, consultando el buen orden en la redacción de la ley.

Así, el artículo 87 enumera todos los hechos punibles que solo dan lugar á acciones privadas. En el artículo 88 hemos refundido los artículos 141 y 185 del Código vigente, generalizando su aplicación de modo que comprenda, no solo el ejercicio de las acciones provenientes de delitos contra la honestidad y el honor, sino todos los demás delitos sustraídos á la acción del Ministerio Público, puesto que no hay entre aquellos y éstos diferencia fundamental que motive una excepción.

El artículo 89 contiene en el fondo la misma disposición protectora de la familia que el 223 del Código vigente, pero su forma es más amplia y comprende, entre las acciones prohibidas á los cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos y cuñados, no sólo las provenientes de hurtos, defraudaciones y daños, sino todas las provenientes de delitos que no sean contra la persona ni contra el vínculo matrimonial.

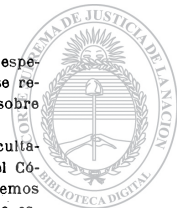


El artículo 90 introduce en nuestra legislación penal una garantía preciosa para la libertad individual, la de no ser obligado á responder por delito que se le impute sin que el tribunal competente declare antes haber lugar á la acusación, garantía consignada en la enmienda quinta de la Constitución de los Estados Unidos, donde el tribunal competente para hacer tal declaración es el gran jurado. Consideramos indispensable esta disposición para evitar que la aplicación del código penal siga siendo, como lo es frecuentemente, un instrumento de opresión injusta respecto de tantos inocentes que, por la sospecha de un empleado de policía ó un juez de paz de campaña, se ven obligados á sufrir largos procesos, al cabo de los cuales obtienen una absolución tardía.

Los artículos 91 á 93 contienen reglas para determinar la jurisdicción ante la cual deben ser instauradas las acciones penales, porque hemos creído que el Código penal debe establecer por sí mismo los principios directores de su aplicación, como lo ha hecho el Código Civil en su esfera propia.

En un país unitario, la materia de jurisdicción puede ser totalmente legislada en el Código de Procedimientos, porque éste emana de la misma autoridad que la ley sustantiva y no es más que uno para todo el territorio nacional. Pero, en un país federativo, como el nuestro, donde la autoridad central no dicta las leyes de procedimientos, sino únicamente la ley sustantiva, ésta necesita impedir el desorden en su aplicación, estableciendo las reglas fundamentales á que debe obedecer dicha aplicación en todo el territorio.

El vecino de Córdoba necesita saber con exactitud si debe entablar sus acciones en esa provincia, en Ju-



juy ó en Buenos Aires y no tiene porqué estar esperando, para acojerse á un código nacional-que se resuelva primero un conflicto de leyes provinciales sobre jurisdicción.

En el art. 94 hemos resuelto las dudas y dificultades que suscitaba la disposición del art. 1104 del Código Civil sobre cuestiones prejudiciales. Creemos que el Código Civil, en ese punto, ha invadido la esfera propia del Código Penal, reglamentando las acciones criminales y ha creado una fuente inagotable de conflictos. Nosotros pensamos que la acción criminal no depende en ningun caso de cuestiones prejudiciales, y así lo hemos consignado en el artículo referido, estableciendo que las cuestiones civiles propuestas con motivo del hecho punible sean resueltas en el mismo proceso al sólo efecto de la condenación ó absolución del procesado. Como nuestro proyecto devuelve al derecho penal la materia de la reparación del daño causado por el delito, que el Código Civil hacía suya, desaparece la necesidad artificial de legislar la influencia de la sentencia civil sobre la criminal y vice-versa. Cada rama del derecho conserva su independencia. El juicio civil sólo producirá efectos civiles; el juicio criminal sólo producirá efectos penales, incluyendo entre estos la reparación debida á las víctimas del delito, como es lógico y justo.

Se simplifica así la administración de la justicia, evitándose la multiplicidad de los procesos y el gasto inútil de tiempo y de dinero que resulta de seguir dos ó más juicios, cuando puede seguirse uno solo.



TÍTULO IX

Extinción de las acciones y de las penas

(Arts. 95 á 108)

El código vigente solo ha legislado un modo general de extinción de las acciones y de las penas, la prescripción. De los demás modos de extinguir la acción penal ó la condena, no se ocupa en la parte general, y, solo accidentalmente, en la parte especial, menciona casos de extinción por perdón ó renuncia del agraviado. Nosotros, siguiendo el método de los códigos más modernos, hemos reunido en un solo título todas las reglas relativas á la extinción de las acciones y de las penas por cualquiera de los modos admitidos por el derecho á saber: la muerte del inculcado, la amnistía, el indulto, la prescripción y la renuncia ó remisión del agraviado en los hechos punibles que solo dan lugar á acción privada.

Respecto de la amnistía y el indulto, hemos establecido que ellos no extinguen las indemnizaciones debidas á particulares, porque, siendo modos de extinción usados por la autoridad política con fines de orden público, es justo que sus efectos se limiten á lo que el interés general requiere, sin alterar los derechos legítimos de las víctimas del delito.

En cuanto á la prescripción, hemos creído que ella

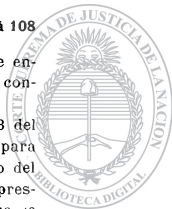


no debe operarse por el solo transcurso del tiempo, pues él no garante suficientemente á la sociedad del arrepentimiento del culpable. Ya el código actual, en su art. 92, hace de la enmienda del delincuente una condición de la prescripción, al establecer que ésta queda sin efecto si, antes de vencer el término, comete el reo otro delito de la misma especie ó que merezca igual ó menor pena. Más justo y más preciso, el artículo 134 del código español declara interrumpida la prescripción por la comisión de cualquier nuevo delito.

Hemos generalizado esta regla, de acuerdo con la opinión de criminalistas distinguidos, consignando, en los arts. 98 y 99 del Proyecto, que la acción penal y la pena se prescriben por la buena conducta del imputado, durante el tiempo fijado por la ley, y agregando, en el 102, que si, antes de vencido el termino, comete el reo otro delito de cualquier naturaleza que fuere, la prescripción de la acción penal ó de la pena queda sin efecto.

En la fijación del término de la prescripción, hemos cuidado de mantener la proporcionalidad entre los plazos y las penas, alterando el código actual en lo necesario para ponerlo en armonía con el sistema de penalidad adoptado en nuestro proyecto.

Los artículos 100 y 101, sobre el momento en que empieza á correr la prescripción, corresponden al 91 del Código vigente, y solo contienen de más las disposiciones necesarias para ajustar el cómputo de los términos al modo establecido en el Código Civil y para prever el caso de los delitos continuos, respecto de los cuales el Código no ha solucionado la debatida cuestión sobre el día que debe servir de punto de partida para la prescripción. Hemos adoptado el día en



que cesó de cometerse el delito, pues solo desde entonces puede cumplirse la condición de buena conducta exigida al prescribiente.

El artículo 103 del Proyecto es análogo al 93 del Código, sin más modificación que la necesaria para que se entienda claramente que todo acto directo del procedimiento judicial interrumpe, no solo la prescripción de la acción, sino la de la pena, lo que se había puesto en duda en vista de la ambigüedad del texto legal.

Cerramos las disposiciones sobre la prescripción con la declaración de que ella corre ó se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes de un hecho punible. Evitamos así una cuestión árdua á la jurisprudencia. La solución contraria, adoptada por el código italiano, no nos parece ajustada á los principios del derecho penal. La prescripción es una gracia que la sociedad hace al culpable, y no debe otorgarse sino á aquellos que la han merecido por su conducta individual, no habiendo justicia ni lógica en que los beneficios de la prescripción concedida á un delincuente se hagan extensivos á los copartícipes que por su conducta no la hayan merecido.

Hemos adoptado del nuevo código italiano la extinción de la acción penal por oblación voluntaria de la multa y de las indemnizaciones á que hubiere lugar, en los casos de hechos reprimidos con pena pecuniaria. En tales casos, la oblación voluntaria suprime el motivo del juicio, en cualquier estado en que se halle, sometiendo el inculcado á las consecuencias penales de su acción, con ahorro de tiempo y de gastos para él, para su víctima y para la autoridad. Tratándose de penas pecuniarias, no hay peligro en dejar á las partes este medio de terminar los procesos.

Establecemos, finalmente, en este título, que las indemnizaciones pecuniarias inherentes á la pena puedan hacerse efectivas sobre los bienes propios del condenado aún después de su muerte, porque no sería justo que los herederos del delincuente aprovecharan la parte de fortuna que éste debió entregar á sus víctimas en reparación del daño causado.





TÍTULO X

Significación de términos empleados.

(Art. 109)

Imitando al código holandés, hemos agrupado en un solo título las definiciones de palabras y locuciones cuya exacta significación debe fijarse para la mejor inteligencia de la ley que las emplea.

LIBRO SEGUNDO

Método del proyecto en la parte especial

La parte especial del Código Penal vigente está dividida en dos secciones: 1º *De los delitos y sus penas*; 2ª *Delitos políticos y delitos peculiares á empleados públicos*. Esta división deriva de la distinción frecuentemente hecha de los delitos en *públicos y privados*; pero el Código Penal no la ha seguido en sus consecuencias lógicas, aceptando la denominación correspondiente, de lo que ha resultado que ha dado á la primera sección un epígrafe general que conviene á todo el libro segundo, y ha incluido en la sección segunda las falsedades y los delitos contra la salud pública, que no son delitos políticos ni peculiares á empleados públicos.

Hemos suprimido, en consecuencia esta gran división por que es ilógica, toda vez que conservamos la idea más importante del Código, de no distinguir entre delitos públicos y delitos privados, distinción doctrinaria rechazada ya por la ciencia y eliminada en la codificación moderna. La agrupación de los delitos en títulos, según la naturaleza de los derechos lesionados, y prescindiendo de aquella distinción, se encuen-



tra en efecto, en los códigos de Bélgica, España, Italia, Alemania, Holanda, Hungría, Chile, y la República Oriental del Uruguay, etc.

En la parte especial, además del libro sobre *faltas*, hemos introducido nuevos títulos y capítulos, que no podían faltar en el Proyecto, dado nuestro propósito, de acuerdo con las instrucciones del decreto de nuestro nombramiento, de presentar en este trabajo un cuerpo de legislación penal tan completo como nos fuese posible. Al tratar de ellas en particular, explicaremos los motivos que nos hayan determinado á comprenderlos en el Proyecto.





TÍTULO I

Delitos contra las personas.

(Artículos 110 á 145)

Comprende el primer capítulo de este título, todos los delitos en que el derecho lesionado es el de la existencia. Poca trascendencia tiene, en realidad, que se consignen en capítulos distintos, ó reunidas en uno solo, las disposiciones relativas al homicidio, al infanticidio y al aborto; pero desde que la lesión de derecho es la misma, sea que la víctima fuere una persona mayor ó menor de tres días, nacida ó por nacer, hemos considerado más ajustado á una buena clasificación la agrupación de todos los atentados contra la vida, en un solo capítulo, aceptando como razonable el ejemplo que á este respecto hemos encontrado en los mejores códigos.

En las disposiciones especialmente relativas al homicidio hemos introducido reformas importantes que serán más fácilmente explicable desde que se observan los defectos de que adolece el actual capítulo del Código. Si se comparan sus disposiciones con las del Proyecto del Dr. Tejedor se observará que en esta materia el Código se apartó también de su antecedente.

Nuestra reforma consiste principalmente en modificar la medida de las penas, imponiéndolas más severas á



un delito que está, desgraciadamente, muy generalizado en nuestro país, y que entra en la criminalidad general por una asombrosa proporción.

El Código impone la pena de muerte al homicidio en la persona del padre, madre ó hijo, legítimo ó natural, ó de cualquier otro ascendiente, descendiente ó de su cónyuge, y al que mata por precio, ó con alevosía ó por medio de veneno, incendio ó descarrilamiento; pero agrega *siempre que no haya circunstancia atenuante alguna*. Dado, por otra parte, el sistema de las circunstancias atenuantes, cuyos defectos quedan ya apuntados, la aplicación de la pena de muerte cede ante la pena inmediatamente inferior, que, en realidad, no consta de más de quince años de presidio ó penitenciaría, pena que todos los que tienen que aplicar el Código reconocen ser excesivamente leve dada la importancia y gravedad del delito por que se aplica y la frecuencia con que éste se comete.

Las penas del homicidio y las distinciones sobre este delito fundadas en el número, y no la importancia de las circunstancias agravantes ó atenuantes que concurren, constituyen un modo de penalidad totalmente despojado de razón y fundamento. La importancia de las circunstancias atenuantes ó agravantes varía de tal manera de uno á otro delito, que no se explica cómo haya podido ajustarse la penalidad del homicidio á una suma de cosas heterogéneas. Ninguno de los códigos que hemos tenido á la vista, adopta ese sistema. Nuestro artículo 110 consigna una disposición general sobre el homicidio, en la cual se comprenden todos los casos no reprimidos de distinta manera por un precepto especial.

Se tratará aquí del homicidio doloso, con dolo cierto, ó sea con intención determinada de matar; forma que



no requiere precisamente que haya mediado *premeditación*, concepto que de conformidad con el Código vigente, no mencionamos como circunstancia cualificativa del homicidio, pero que servirá, cuando concorra, para demostrar la intención determinada de matar.

Este homicidio, acompañado de la *voluntad de dar la muerte*, en el derecho francés se llama *meurtre*. El código francés, contiene en la definición los términos *cometido voluntariamente*; el italiano expresa también el *fin de matar* (*a fine di uccidere*); el holandés, usa la voz *con intención*; el húngaro la palabra *intencionalmente*, y así los demás códigos concordantes que prevén la forma del homicidio voluntario.

Nuestro artículo no consigna en este caso cuál es la voluntad ó la intención que debe acompañar al hecho para no crear una excepción á la regla observada en toda la articulación de la parte especial, respecto al elemento moral concurrente en la ejecución de un hecho calificado de delito. Para este caso y para todos los demás rige la regla del artículo 58.

Fijamos la pena de este delito en presidio de diez á veinticinco años. Consideramos que esta pena es la necesaria para reprimir el homicidio cometido con voluntad de matar y con todas las agravaciones que no hayan dado motivo para una calificación especial en el artículo siguiente. Esta pena, cuyo mínimun coincide con el máximun de la que el Código vigente fija para el homicidio sin circunstancias agravantes, se aplicará también á los casos del artículo 96, inciso 1º, del mismo Código, que se reprime con presidio de diez años hasta presidio por tiempo indeterminado.

El artículo 111 determina los casos de homicidio calificado por el concurso de ciertas circunstancias



especiales de agravación, que causan en la generalidad de los códigos la aplicación de la pena de muerte ó de las penas perpétuas. El Código fija para estos casos la pena de muerte ó la de presidio por tiempo indeterminado, que baje en el último caso del artículo 95 á un mínimun de diez años de presidio, por la concurrencia de dos ó más circunstancias atenuantes. Se verá en el artículo siguiente que si la naturaleza del hecho lo requiere, nuestro Proyecto permite también reducir la pena á un mínimun mucho menor.

Volvamos ahora á los casos comprendidos en este artículo. Es el *primero* el de parricidio previsto en el artículo 94 del Código Penal. Hemos modificado ligeramente la redacción en obsequio á una expresión más clara; hemos suprimido los términos *legítimo* ó *natural* á fin de que no se tomara este último término en el sentido del derecho civil y no se viera que la causal de toda agravación pueda ser otra que el vínculo natural de sangre. Hemos equiparado la muerte de un *bienhechor* á la de las demás personas comprendidas en el inciso, considerando que los vínculos de la gratitud, pueden ser tan poderosos como los de sangre y que la misma perversidad que el que mata á su padre demostraría el que matara á quien le hubiera colmado de beneficios, le hubiera criado, mantenido y educado paternalmente.

En el *segundo inciso* se comprenden los casos previstos en el artículo 95. Hemos agregado: 1º la forma de homicidio por solo impulso de perversidad brutal, que tomamos del código italiano, como análoga en gravedad á la forma de ensañamiento: 2º la forma de inundación ó explosión, como análogas por el peligro á que exponen, á las de descarrilamiento ó incendio, razón por la cual hemos agregado esta fórmula gene-



ral; ó cualquier otro medio capaz de causar grandes estragos.

En nuestro artículo no aparece como circunstancia calificativa la de que el homicidio se haya realizado por *medio del veneno*. Seguimos en esto el ejemplo del código holandés y del húngaro, que han abandonado la tradición que veía en el medio del veneno la prueba de la premeditación y de la alevosía. El empleo del veneno no implica necesariamente la alevosía ni la premeditación, desde que puede ser suministrado en un estado de excitación ó irreflexión. Puede haber alevosía en el mayor número de casos de envenenamiento; pero desde que no la hay en todos, será preferible que el homicidio se califique por la alevosía, ya que nuestro Proyecto conserva esta forma adoptada por el Código.⁽¹⁾

Introducimos en el *inciso 3º* el caso previsto en el artículo 280 del código de Hungría, porque el homicidio de varias personas por un solo hecho, por ejemplo un envenenamiento, puede no entenderse comprendido en las reglas dadas para la concurrencia de hechos punibles. Otro tanto puede decirse del inciso 4º que prevé el caso, no previsto en el Código, de que el homicidio se ejecutara como medio ó consecuencia de otro hecho punible.

En el artículo 112 se prevén tres casos en que el homicidio debe ser reprimido con una pena menor que la fijada en la regla general: 1º el homicidio provocado; 2º el infanticidio para ocultar la deshonra; 3º el homicidio causado con dolo indeterminado.

1. No prevén especialmente el envenenamiento, además de los citados, los códigos de Alemania, de Zurich, del Canton Ticino ni la ley inglesa sobre delitos contra las personas.



El primero de estos casos está previsto en el Código por el artículo 97 y por la circunstancia atenuante del art. 83, inciso 4°. El Código admite como atenuante una simple provocación y una provocación con ofensas ó injurias ilícitas y graves, fijando para el primer caso una pena de tres á seis años de presidio y para el segundo tres años de prisión. Dependiendo la importancia de la provocación en todos los casos de circunstancias especiales que deben librarse á la apreciación de los magistrados, es preferible que dentro de los límites amplios de la pena, éstos puedan determinar la que por su apreciación corresponda al caso.

La atenuación en el infanticidio, fundada en el ánimo de ocultar la deshonra, no comprende en el Código sinó á la madre que mata á su hijo menor de tres días, y á los abuelos maternos. Como en varios de los concordantes del artículo del Proyecto, comprendemos en la misma excusa á los hermanos, marido ó hijos que procediesen impulsados por el móvil de ocultar la deshonra de la hermana, esposa ó madre.

El homicidio causado con dolo indeterminado, ó sea el homicidio simple del artículo 196 del código Tejedor, no se encuentra especialmente distinguido en el Código vigente, pero podría, en su caso, penarse como homicidio con una circunstancia atenuante, la de no haber tenido intención de causar todo el mal producido.

Es preferible mantener una disposición especial sobre este caso tan importante y con tanta frecuencia sometido á los tribunales. Así lo consignan los códigos con que concuerda este artículo.

Si respecto de los casos enumerados en el artículo



111 media una razón de agravación de la pena fundada en la calidad ó número de las víctimas ó en los medios brutales de la ejecución del hecho, debe mediar una relativa atenuación de la pena cuando en aquellos casos concurren las circunstancias enumeradas en el artículo 112, inciso 1º y 2º. A ésto provee el artículo 113.

El artículo 114 prevé la cooperación y la instigación al suicidio como delito especial que tiene su perfecta colocación en este grupo de delitos contra la vida. El proyecto Tejedor había erigido el suicidio en delito, imponiéndole como pena la anulación de las disposiciones de última voluntad del suicida, y al autor de tentativa de suicidio la sujeción á una rigurosa vigilancia por uno á tres años. Estas disposiciones fueron suprimidas, conservándose solo la de cooperación al suicidio, en el proyecto adoptado interinamente, ó sea, en el código Tejedor. La ley actual no consigna prescripción alguna sobre este punto. Hubo razón en suprimir la infundada prescripción del proyecto Tejedor con sus penas ridículas é ineficaces, pero no la hubo para guardar silencio sobre la instigación y la cooperación al suicidio, á las que puede procederse por malignidad, por mal entendida misericordia ó por interés.

El artículo 115 prevé especialmente el caso de homicidio causado por culpa ó imprudencia. Nuestro Proyecto no consigna en la parte general disposiciones sobre la culpa, encontrándose en el segundo libro, determinada la represión que corresponde en los casos en que la merezcan los hechos producidos por aquella causa. Preferimos este sistema al adoptado por el Código, por motivos que se explican fácilmente. El número de los hechos reprimibles aunque no



concurra la voluntad criminal, es reducido relativamente á los hechos que no es posible producir por imprudencia, y no hay por qué generalizar una disposición que corresponde á casos excepcionales en que precisamente sufren una derogación los principios comúnmente admitidos de la responsabilidad. Tampoco hay motivo fundado para establecer una relación proporcional entre la penalidad del hecho cometido con intención criminal y la del cometido por imprudencia: no hay entre los hechos derivados de una ú otra causa sino una relación puramente material; y el hecho material por sí solo no justifica la medida de la pena.

Los artículos 116 á 119 contienen las prescripciones relativas al delito de aborto. Se observarán en esta materia las siguientes modificaciones.

Los artículos del Proyecto no expresan, como el artículo 102 del Código Penal, que el hecho penado es el aborto que se causare *maliciosamente*. No se trata por esto de suprimir tal elemento como característico del delito; pero siendo la malicia, esto es, la voluntad criminal, un elemento esencial del delito, era preferible no repetir excepcionalmente en la parte especial del Código la disposición de la regla general de la responsabilidad, siempre que no lo requiriese una imperiosa é imprescindible necesidad, lo que por cierto no puede decirse en este caso. En el que cause aborto, como en el que produzca cualquier otro hecho punible que no esté expresamente atribuido á culpa ó imprudencia, la voluntad criminal se *presume*, salvo que las circunstancias particulares de la causa autoricen una *presunción* contraria. Por lo demás la *prueba* establecerá en su caso la verdadera responsabilidad ó inocencia.

Para graduar la pena en los casos de aborto, el



Proyecto no toma en consideración la naturaleza del medio empleado, esto es, si se ha causado el aborto con violencia ó sin ella. La naturaleza del medio empleado podrá ó nó, según las circunstancias, servir de elemento de juicio para la determinación de la pena en los casos particulares, dentro de los límites fijados por la ley, suficientemente ámplios para responder á aquella consideración.

Lo que modifica con mayor trascendencia la gravedad del delito de aborto, es el hecho de causarle con consentimiento ó sin consentimiento de la mujer.

El Proyecto eleva la penalidad fijada al aborto por el artículo 102 del Código, especialmente en el máximo, sin alterar considerablemente el mínimum. La penalidad del proyecto es todavía benigna, si se la compara con la fijada por los códigos concordantes.

En el mismo artículo se prevé el caso en que el aborto cause la muerte de la mujer que se hace abortar, circunstancia no prevista en el Código.

El artículo 117 prevé, como el 105 del Código Penal, la circunstancia agravante del abuso de la ciencia ó arte para causar el aborto, proporcionando las penas á la relativa gravedad de los casos del artículo precedente y agregando la pena de inhabilitación especial.

El artículo 118 es reproducción del 103 del Código, con aumento del máximo de la pena.

El 119 es reproducción del 104 del Código. El Proyecto no menciona la circunstancia especial de que el aborto se cause por el móvil de ocultar la deshonor, desde que esta circunstancia podrá tenerse en cuenta para determinar la pena dentro de los límites fijados.

En la parte final del artículo 119 se declara que no



es punible en la mujer la tentativa de su propio aborto. «Racionalmente es indiscutible la existencia de la tentativa de aborto. Tampoco aparece obstáculo alguno á la conveniencia de castigar la tentativa de aborto ejecutada por un extraño; pero respecto de la punibilidad de la tentativa de aborto ejecutada por la embarazada, la doctrina común de los criminalistas decide la inconveniencia de todo castigo. Desde luego, habría respecto de la tentativa de aborto las mismas razones que respecto de los delitos contra la honestidad, para no acordar al ministerio público la acción para perseguirlos, por cuanto el juicio que se iniciara por tentativa de aborto llevaria el escándalo y la turbación á una familia, sin utilidad apreciable para la sociedad, que no se sentiría muy alarmada por la ineficaz tentativa». (1)

El capítulo *Lesiones* no puede ser separado del título *Delitos contra las personas*, puesto que la lesión ataca directamente á la persona. No se comprende porqué razón han podido tratarse en dos títulos separados del Código Penal los *delitos contra las personas* y las *lesiones corporales*.

Las disposiciones de este capítulo han sido reformadas en el sentido que aconseja la experiencia recogida en la aplicación del Código Penal y el ejemplo de las diversas legislaciones que la Comisión ha tenido presentes.

Una disposición general (el art. 120) prevé todo daño que se cause en el cuerpo ó en la salud, que no sea motivo de una prescripción especial. Esta disposición es análoga á la del artículo 120, inciso 2º, del Código Penal, y fija la misma penalidad.

(1) RIVAROLA, *Exposición y crítica etc.*, nº 196.



Los artículos 121 y 122 del Proyecto son correlativos de los artículos 119 y 120 inciso 1º del Código; pero tienen en cuenta, separadamente, estas circunstancias no distinguidas por el Código: que la lesión hubiera producido una *debilitación* permanente de la salud, de un sentido, de un órgano ó de una facultad etc; ó que haya producido su *pérdida* etc. La penalidad ha sido establecida con arreglo á los casos previstos en los dos artículos, sin separarla considerablemente de los extremos que fija el actual Código.

El artículo 123 contiene una disposición perfectamente lógica. Con excepción de la entidad del daño causado á la persona, que en el homicidio es invariablemente el mismo, en tanto que en las lesiones es siempre variable, los demás criterios de gravedad en uno y en otro delito son idénticos, y siempre que hay una razón ó motivo cualquiera para aumentar ó disminuir la pena del homicidio, la misma razón ó motivo habrá para aumentar ó disminuir la del delito de lesiones. Si la provocación por injurias ilícitas y graves, fué, por disposición del artículo 97 del Código Penal, motivo suficiente para rebajar la pena del homicidio hasta tres años de prisión, ¿por qué no ha valido igual circunstancia para disminuir la pena por delito de lesiones cuando se las causara en un impulso suscitado por esa provocación? Según el Código Penal, no podría imponerse por una lesión causada á consecuencia de provocación por ofensas ó injurias ilícitas y graves de parte de la víctima, una pena menor de tres años de penitenciaría, en tanto que se impondría solo tres años de prisión por el homicidio causado en las mismas condiciones. Los vínculos de parentesco que dan motivo á una agravación especial del homicidio ¿por qué no lo darán para una agravación especial del delito

de lesiones? Entre herir ó matar al propio padre solo hay diferencia de intensidad del daño, pero la violación del deber moral es la misma.

En el artículo 124, y con sujeción al método adoptado en el Proyecto para la represión de la culpa ó imprudencia, se prevé el caso de lesiones producidas por esta causa.

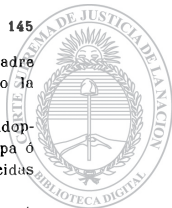
Bajo el rubro *Disposiciones comunes á los dos capítulos anteriores* se comprenden en el Proyecto las disposiciones sobre los casos de homicidio y lesiones en riña, previstas en los artículos 98 y 121 del Código Penal.

La especialidad del homicidio ó de las lesiones en riña consiste en no saberse quién fué el autor de las heridas ó de la muerte. Desde que se sepa quién ó quiénes fueron los autores, el caso especial desaparece y queda el hecho punible sometido á las reglas del homicidio ó de las lesiones. Es, pues, manifiestamente supérflua la disposición del inciso 1º del art. 98 del Código Penal.

En el inciso 2º del mismo artículo se prevé el caso en que la muerte se produzca por el número de las heridas, no siendo mortal alguna de ellas, para el cual fija la pena del mínimum del homicidio, pena que en el mejor de los casos no bajaría de tres años de prisión; y en el inciso 3º se fija la pena de uno á tres años de prisión para todos los que han tomado parte en la riña.

Estas penas son las mismas que el Código aplica al caso de lesiones en riña, con excepción de las lesiones leves; lo que priva de poder considerar, en los casos de que se trata, para la determinación de la pena, la entidad del daño causado.

Es por otra parte injusto que en este caso, en que se aplica pena según una mera presunción *juris*, sean





reprimidos todos los que tomaren parte en la riña. Bastará presumir autores de la lesión ó muerte á los que ejercieron violencia ó estuvieron en contra del ofendido.

Las disposiciones del art. 125 del Proyecto salvan todas estas observaciones. La pena fijada, fuera del caso en que sólo se hubieran producido lesiones de menor entidad, es de uno á cuatro años, lo que permite la apreciación del daño causado y la de las demás circunstancias que concurran en el hecho.

En el capítulo del *duelo* proyectamos una reforma que creemos impuesta por la razón y por la experiencia: la de que el duelo regular no debe reprimirse. Tenemos á la vista un código práctico y severo, fuente de muchos de los modernos códigos penales, el francés, que no ha reprimido el duelo.

Es, sin embargo el código de una nación con hábitos sociales semejantes á los de nuestro país y en que el duelo es frecuentemente el medio de resolver las cuestiones de honor. Aunque en sus orígenes el duelo sea una institución germánica, en su forma actual, los franceses lo reputan «un producto totalmente francés». (1)

El sistema del código francés consiste en guardar completo silencio sobre el duelo: no estando definido como delito, la consecuencia inmediata es la impunidad. Hasta 1837 la jurisprudencia francesa reconoció invariablemente que el duelo regular no era crimen ni delito. Pero, en aquella época, bajo la influencia de las exhortaciones de Dupin, la Cámara de lo Criminal en la Corte de Casación abandonó la jurisprudencia

(1) GARRAUD, *Traité théorique et pratique du droit pénal français*.

dencia observada hasta entonces, y declaró que «el homicidio y las lesiones inferidas en duelo entraban en las disposiciones comunes del derecho penal». Los escritores de derecho penal, tanto los que piensan que el duelo constituye en sí mismo un delito y debe reprimirse, como los que sostienen su impunidad, consideran que la jurisprudencia francesa es una violación de la ley «¿No hay, por lo pronto algo de extraño, dicen Chaveau y Hélie, en esa brusca variación de una Corte que había perseverado veintisiete años, es decir, desde la promulgación de la ley misma, en la interpretación que rechazó repentinamente? ¿Puede admitirse que una acción que ayer aún declaraba totalmente inocente, tome de pronto por la sola fuerza de un fallo el carácter de un crimen ó delito? Hacía medio siglo que se había dejado de considerar el duelo como un hecho punible; la ley lo cubría con su silencio como con un velo; se producía á la vista de la justicia, y ésta quedaba inmóvil, reprimía las persecuciones indiscretas y desplegaba su autoridad para protegerlo; y hé aquí, que repentinamente el duelo se convierte en un crimen amenazado con penas terribles. ¿Ha cambiado la legislación? ¿Se han sancionado nuevas penas? Nada de eso: la Corte de Casación ha cambiado de dictamen. Pero ¿no es acaso el legislador el único que hubiera podido modificar una regla que era en cierto modo ley por la larga autoridad que la había consagrado? Y hubiera sido suficiente toda la autoridad de la ley para hacer pasar repentinamente una acción grave y común de la esfera de la inocuidad á la del crimen! La conciencia pública, que dá á las costumbres la importancia que les corresponde ¿no debió ser ilustrada por una discusión solemne, consultada, si puede decirse, por el po-





der social? No sucede con la incriminación de un hecho, lo que con una cuestión de derecho que puede recibir veinte soluciones diversas: la conciencia no se somete á estas alternativas de la jurisprudencia, que tan pronto proclama inocente una acción como culpable: cuando las costumbres, que también son leyes, no le reconocen el carácter de crimen, no es suficiente la autoridad de un fallo, para convertirla en crimen y castigarla.» (1)

Con esta autorizada opinión, con la que concuerdan Garraud, Valette, Villey, Frank, Nypels, Carrara, y cuantos jurisconsultos franceses ó nó franceses se han ocupado de aquella jurisprudencia, y con nuestras nociones respecto de la fuerza obligatoria del texto legal y de la interpretación restrictiva que debe darse á las leyes penales, podemos afirmar que no obstante la Corte de Casación, el código penal francés no reprime el duelo. Agregaremos todavía que, no obstante esa jurisprudencia, el duelo no se reprime en Francia. Es posible que M. Floquet haya recibido las felicitaciones de alguno de los miembros de la Corte de Casación por su éxito en el duelo con el General Boulanger; pero lo que es cierto, es que M. Floquet no ha sido castigado con la pena que la ley impone á los autores de *coups et blessures*. Pero no solo los personajes notables en la política son los que quedan exentos de la depresión impuesta al duelo: el fallo de 1837 dejó el duelo tan impune como antes; siempre que es llevado un duelista ante el jurado está seguro de la impunidad, porque el jurado decidiendo según su conciencia y no comprendiendo afortunadamente

(1). *Theorie du Code Penal*—tomo 3º N° 1260.



las sutilezas del Procurador general Dupin, no puede resolverse á ver un asesinato en un acto que la ley penal deja completamente sin castigo y que, en ciertos casos, es aplaudido aún por las almas mas nobles y honradas. (1)

En resumen, en Francia, el estado de esta materia es el siguiente: silencio de la ley sobre un hecho que el sentimiento público no puede mirar como un crimen (2); jurisprudencia contraria á la ley; derogación de la jurisprudencia por los veredictos del jurado.

Verdad es que la ley francesa no ha sido en este punto imitada por los otros códigos europeos, y que muchos de los escritores que combaten la jurisprudencia francesa, concluyen por sostener que «el duelo es un hecho especial, *sui generis*, que no puede ser reprimido sinó por una legislación particular; que la ley debe estudiar su carácter, y, hasta cierto punto, tener en cuenta las preocupaciones que lo toleran; que debe apreciar los hechos que lo acompañan y algunas veces lo excusan, para reprimirlo con éxito, etc.». Esta doctrina suficientemente generalizada, ha recibido en varios países la sanción legislativa. Es este el sistema de nuestro Código Penal, y fué también el del código Tejedor. Pero sea que el duelo se reprima por sus resultados como delito de homicidio ó de lesiones, como lo pretende la jurisprudencia francesa, sea que se le reprima como delito *sui generis*, contra las personas ó contra la administración de justicia, ocurre en todas partes el mismo fenómeno: la ley es impotente para obligar á la justicia á que mande á la cárcel al que,

(1) Frank, Filosofía del derecho penal.

(2) Desde 1829 hasta 1883 han sido presentados á las Cámaras francesas ocho proyectos de ley sobre el duelo, y todos ellos han sido rechazados.



cediendo á un estímulo de honra propia, ó de honra de las personas más íntimamente ligadas por los más estrechos vínculos de la naturaleza ó del recíproco afecto, se ha visto obligado á provocar ó aceptar un duelo en condiciones regulares, con elección de armas, presencia de padrinos, etc. Se dirá que este es un medio brutal de obtener la reparación de una defensa, que es salvaje y antisocial, porque desconoce la institución de la justicia como medio reparador del derecho lesionado, y retrocede al estado de la justicia por mano propia. Pero si en una sociedad civilizada son personas cultas, y muchas veces, distinguidas por su alta ilustración y su honorabilidad las que procuran una reparación en un lance de armas, no puede tomarse en tanta consideración el argumento indicado, que impida ver que los medios de reparación de las ofensas que las leyes ofrecen, son insuficientes y que el modo de evitar los duelos no está en reprimir los inspirados en verdaderos móviles de honor, sinó en procurar los medios legales de reparación que los hagan totalmente innecesarios. Entre las ofensas que llevan más frecuentemente al duelo, deben contarse en primer término las injurias inferidas públicamente en la prensa, en el parlamento, especialmente por motivos políticos que á todos interesan, y que estimulan la curiosidad y la maledicencia general. Si no se deja al ofendido, según el sistema de nuestro Código, otro medio legal de alcanzar reparación de la injuria, que procurar la aplicación de una pena, que si castiga al autor no borra la imputación, quedará en la mente de todos la consideración de que es posible que el penado haya dicho la verdad y de que el ofendido tenga realmente el vicio ó falta de moralidad que se le imputa. ¿Puede quedar satisfecho el honor con la aplicación de un

arresto y multa al injuriante? Una alma grande y noble, con la seguridad de una reputación intachable puede considerarse superior á una injuria ruin. Franklin, injuriado injusta y públicamente en Londres, por el *solicitor general* Weddeburn, de haber obtenido por los medios ruines de un ladrón, las cartas de Hutchison, gobernador de Massachussetts que conspiraba contra el interés de las colonias, pudo decir que «nunca había sentido mejor el poder de una buena conciencia; pues si no hubiera considerado como una de las mejores acciones de su vida el acto que le había valido tales insultos, nunca hubiera podido soportar semejante ultraje». Pero no todos se encuentran en las mismas condiciones de aquel grande hombre. La pena al injuriante no repara el honor del injuriado. Por esto, si por una parte suprimimos la penalidad del duelo regular, por otra establecemos una legislación de las injurias que tendrá mayor eficacia en evitar duelos que la penalidad suprimida. Se puede observar que la imputación de un delito acusable por el ministerio fiscal, ó de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, lejos de dar lugar á un duelo, dá lugar al caso judicial cuando el imputado tiene interés en vindicarse. Es que en los casos de calumnia, la ley admite la prueba de la imputación, y el ofendido sabe que mejor testimonio de su inocencia será la declaración judicial de la falsedad de la imputación que la muerte en duelo del autor de la misma. Autorizando al imputado de un vicio ó falta de moralidad á consentir en que el autor de la imputación produzca prueba, si ella es falsa, tendrá mayor interés en recurrir á los tribunales que á la decisión por las armas, porque este último recurso no hará sino dar presunción y color de verdad á la



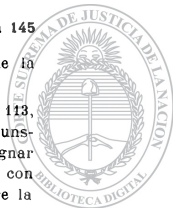


condición atribuída al ofendido. Por otra parte, si ésta es cierta, el ofensor podrá rehusar con toda razón el duelo, porque tendrá en su favor la presunción común de verdad contra el que pudiendo llevarlo á los tribunales y provocarlo á producir prueba, lo provoca á un lance de armas.

Muchas otras causas y circunstancias diversas pueden dar origen á los duelos. Creemos que las observaciones que preceden respecto del caso de las injurias presentado por vía de ejemplo, son aplicables á todos los demás. El duelo desaparecerá de la sociedad, cuando ésta pueda proporcionar todos los medios de reparación de las ofensas; las represiones directas quedarán escritas en la ley, para descrédito de la misma, mientras no se provea á aquellos medios; la falta de los mismos puede colocar al ofendido en un verdadero estado de legítima defensa, desde que no encuentre otro medio racionalmente necesario para contener la difamación, que el duelo; el estímulo del honor hará siempre que se mire con benevolencia y que se disculpe á los duelistas.

Las proporciones de este trabajo impiden un desarrollo más extenso de esta materia, y lo dicho basta á nuestro juicio, para justificar el proyecto de esta reforma.

En el Proyecto conservamos todas las disposiciones del capítulo que se refieren á los duelos irregulares, á aquellos en que se empleare alevosía, ó se faltase á las condiciones establecidas, conservando también la sanción penal contra los padrinos, aun de duelo regular, que lo concertaren á muerte. Las modificaciones que el Proyecto introduce en estos artículos afectan principalmente la clase y medidas de las penas



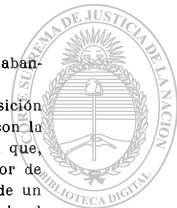
para ajustarlas á nuestras reglas generales de la penalidad.

No conservamos en el Proyecto los artículos 113, 114 y 115 del Código que determinan ciertas circunstancias agravantes que no es necesario consignar especialmente, porque al mismo resultado que con ellas, se llegará con las reglas generales sobre la aplicación de las penas.

Hemos trasladado al presente título las disposiciones del capítulo del *abandono de niños*, que en el Código Penal se encuentra en el título *Delitos contra las garantías individuales*, extendiendo á la vez aquellas en el sentido de que la protección que procuran asegurar, alcance á todas las personas desvalidas, como se establece en los códigos concordantes con nuestro Proyecto. La colocación dada en el Código Penal á esta materia es injustificada: la protección á que las personas desvalidas tienen derecho respecto de otras, solo en razón de una situación determinada, no debe confundirse con las garantías de libertad aseguradas á todos sin consideración á situación especial alguna.

El artículo 134 reproduce, con la extensión referida y con un aumento de la pena que reputamos conveniente, las disposiciones de los artículos 162 y 163 del Código Penal. El artículo 135 consigna las circunstancias agravantes derivadas del parentesco próximo, pues que, en estos casos, importando el delito una transgresión de mayores deberes, debe ser reprimido con una pena más severa. En el mismo, se consigna la atenuante de haber obrado por estímulo de honor.

No conservamos la disposición del artículo 164: los

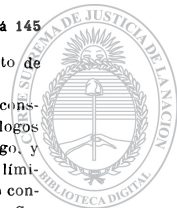


casos en él previstos no importan desamparo ni abandono del menor.

Introducimos en nuestro artículo 136 la disposición del 389 del código italiano, que tiene analogía con la del 290 del código Tejedor. Se pena por ella al que, encontrando perdido ó desamparado á un menor de diez años, ó á una persona herida, amenazada de un peligro cualquiera ó inválida, omitiese prestarle el auxilio necesario, cuando pudiese hacerlo sin riesgo personal, ó no diese aviso inmediatamente á la autoridad. Esta disposición se funda en ser, en ciertas circunstancias, un derecho exigible el de la mútua asistencia ó ayuda que se deben los hombres en su convivencia social

Transportamos asimismo al título de los *delitos contra las personas* el de los *delitos contra el honor*. Por una parte, los delitos contra el honor afectan íntima y directamente á la persona ofendida; por otra el móvil del agente es precisamente el de ofender á la persona. Muchos otros delitos hay que afectan á las personas, sin que por esto deban incluirse en este título; pero su separación está justificada desde que el impulso del agente no es en ellos el de ofender á la persona, sino el de satisfacer una pasión ó deseo criminal diverso. Esto explica, por ejemplo, el que los delitos contra la propiedad, contra el pudor etc., si bien, se constituyen por una ofensa á la persona, se repriman en otros títulos y queden sujetos á reglas y consideraciones especiales.

El artículo 137 del Proyecto reproduce los términos del 177 del Código Penal, fijándose aproximadamente la pena que señala el 178. Creemos supérfluo agregar, como al final de este último artículo, que si se probase la imputación, el autor quedará libre de pe-



na, desde que es un elemento esencial del delito de calumnia el de que la imputación sea falsa.

Consignamos en el artículo 138 los elementos constitutivos del delito de injuria, en términos análogos á la definición dada por el artículo 179 del Código, y establecemos como única pena la de multa, en límites suficientes para compensar la de arresto, que conjuntamente con la de multa establece el Código. Carece, en nuestra opinión, de objeto práctico, la sanción de dos penas principales para un solo delito, cuya aplicación puede, por otra parte, dar origen á dificultades que redunden en perjuicio de la ley y de la justicia.

No conservamos la división de las injurias en graves y leves, porque esta distinción sería inútil ó meramente doctrinaria desde que los límites que fijamos á la penalidad son suficientemente amplios, como son amplias también las facultades de apreciación de las circunstancias del delito que atribuimos á los jueces, y estos elementos bastarán para apreciar la gravedad relativa de la injuria y aplicar la pena que sea justa.

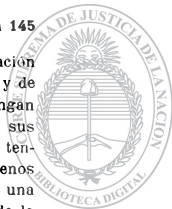
En el artículo 139, el Proyecto admite al acusado del delito de injuria la prueba de la excepción de verdad, en los tres casos que indica. La admisión de la prueba de verdad, excepcional y limitadamente, circunscrita á los casos en que media un interés público, en que el hecho imputado hubiere dado ya lugar á un proceso penal, ó en que el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él, es la solución más justa que puede darse á esta cuestión, y es la que adoptan los códigos concordantes, de Italia, Hungría y Holanda. Admitir la excepción de verdad en todos los casos, sería llevar las investigaciones de la justicia para satisfacer un simple deseo ó



pasión individual, á extremos en que la sociedad no sólo no tendría interés alguno, sino que invadiría los dominios de la moral y de la libertad de conducta del individuo en todo lo que no ofende ni pone en peligro el derecho ajeno. Negar en absoluto la excepción, como resulta actualmente del Código Penal, es ir más allá de lo que reclaman el interés público, ó aún el interés particular del ofendido.

La regla general es la no admisión de la prueba de verdad de la imputación: ésto se deduce de los términos restrictivos con que comienza el artículo 139 del Proyecto.

El primer caso de excepción es el de que la imputación hubiere tenido por objeto defender ó garantizar un interés público actual. Esta disposición es concordante con la del artículo 261, in fine, del código holandés, con la del inciso 4º del artículo 263 del código de Hungría y con la ley inglesa sobre libelos. El artículo 394, inciso 1º, del código italiano limita la disposición al caso en que el ofendido fuere un oficial público y el hecho imputado se refriese al ejercicio de sus funciones. La vida privada del funcionario público, del que lo hubiere sido, del candidato para serlo, del hombre público, del jefe de partido, queda por la disposición del código italiano completamente amurallada. Vamos más allá en nuestro Proyecto: la vida privada y las condiciones morales de los funcionarios ó de los hombres públicos tienen suficiente relación con el interés de la sociedad, especialmente en los países que aspiran á regirse por instituciones libres, que reclaman mayor honradez en los que han de practicarlas, para que pueda amurallarse la moralidad del individuo y no ser susceptible de crítica sino el funcionario en cuanto proceda como tal.



Es para la sociedad un asunto de propia conservación no poner sus destinos en manos de los viciosos y de los indignos. Si éstos son tales, que se mantengan en la obscuridad de la vida privada, de modo que sus actos no se rocen con los actos públicos, y allí tendrán derecho á ser, si no respetados, por lo menos olvidados. Que los que aspiran á la dirección de una sociedad ó á tomar ingerencia en las funciones de la administración, sean suficientemente honestos para que la sociedad no los pueda mirar como una amenaza ó un peligro para sus destinos. Agregaremos por último que la doctrina francesa encerrada en la frase: *la vie privée doit être murée*, no es propia de la austeridad republicana y tiene por consecuencia el que los unos conozcan los vicios de los otros y los disimulen con hipocresía. Preferimos, pues, la solución americana de esta cuestión, condensada en estas palabras del Juez Kent: "No es libelo lo que está escrito y publicado con buenos motivos y fines justificables; y para demostrarlo, puede probarse la verdad de los hechos calificados de libelo, ya se trate de medidas públicas, de funcionarios ó de ciudadanos particulares."

Esta solución ha sido modernamente admitida por el código de Hungría en el artículo citado, y en Inglaterra, en sustitución de la antigua doctrina que consignaba la máxima de Lord Mansfield: *the greater the truth, the greater the libel*. Hoy se admite en Inglaterra que la publicación de un libelo no constituye delito si la imputación difamatoria es cierta, y si el imputado puede demostrar que la ha publicado con un interés público.

Las dos disposiciones siguientes del mismo artículo no pueden ser objeto de discusión especial una vez



admitido el principio de la excepción de verdad. Si el hecho imputado al ofendido ha dado ya lugar á un proceso penal ¿qué interés ó qué consideración podría justificar la restricción de la prueba? Si el querellante ofendido, en cuyo beneficio se admite la regla general, la renuncia ¿qué interés tendría la sociedad en no permitirle que pidiera la prueba de la imputación, que en muchos casos le sería indispensable para destruir los efectos de la injuria?

En el artículo 140 del Proyecto conservamos la disposición del artículo 183 del Código.

El artículo 141 establece una regla consignada en los códigos citados en la concordancia; la de que la reproducción de una injuria ó calumnia inferida por otro, constituye al que la hace, en autor de injuria ó calumnia. No importa sino consignar expresamente un principio que podría decirse sobre-entendido en la ley actual. Poco importa que la imputación de un delito, vicio ó falta de moralidad sea original ó repetida; ofende del mismo modo el honor de la persona.

Los artículos 142 y 145 son reproducción del 184 y del 186 inciso 3º del Código.

No figuran en este Capítulo el artículo 185 y el 186 inciso 1º, porque sus disposiciones corresponden al título del ejercicio y extinción de las acciones penales.

La disposición del 186 inciso 2º del Código, que exime de pena al injuriante que ha sido provocado, se conserva en el Proyecto en la forma más amplia, para una buena justicia, adoptada por el art. 397 del código italiano, la de que en las injurias recíprocas, el tribunal pueda, según las circunstancias declarar exentas de pena á las dos partes ó á alguna de ellas.

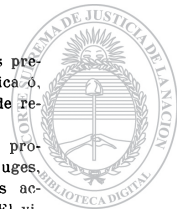


TÍTULO II

Delitos contra la honestidad

(Arts. 146 á 162)

En este título introducimos una reforma aparentemente trascendental. Suprimimos el capítulo del Código sobre el adulterio. El adulterio no es un delito, ni figura como tal en el Proyecto. El Ministro italiano Zanardelli decía, refiriéndose á la pena de muerte: «en Italia está abolida de hecho; ¿se puede vacilar en abolirla de derecho?»—Nos hallamos en presencia de un caso análogo. En la República Argentina no se persigue el adulterio como delito: no se intentan procesos contra los adúlteros; ó, si excepcionalmente se intentan, jamás se llega á la condenación y encarcelamiento de los culpables. Las pocas causas que se promueven, á veces, entre gentes de clases inferiores, concluyen por el abandono ó por transacciones más ó menos deshonestas é indelicadas. Los hábitos y las costumbres del país se oponen á la persecución del delito de adulterio. Nadie conoce mejor que los magistrados de lo criminal la verdad de estas aserciones. Ellos saben bien que los preceptos del Código penal sobre el adulterio son letra muerta; y que, por lo tanto, un cónyuge infiel nunca sufre una pena, si se encuentra en la eventualidad de sufrirla. Ante un hecho



semejante, ¿debíamos vacilar en suprimir esos preceptos? No, á menos que alguna razón jurídica ó, siquiera, alguna preocupación atendible, difícil de remover, nos hubiera inducido á ello.

El adulterio es seguramente un acto inmoral; produce graves consecuencias respecto de los cónyuges, de la familia y de la sociedad; pero no todos los actos inmorales son ni deben ser incriminados. El vicio es siempre inmoral, aunque muchas de sus manifestaciones no se califican de delitos. La discusión en la doctrina, sobre la incriminación ó no incriminación del adulterio, es vieja. Eminentes escritores de la escuela idealista, como Pessina, Tissot, Brusa (1) y otros antes y después que ellos defienden la negativa. Se sostiene la afirmativa, más con la fuerza de la tradición que con argumentos de verdadero peso. ¿Qué importa el adulterio? ¿Cuál es la relación que afecta? Importa una violación de la fidelidad que recíprocamente se han prometido los esposos y no una ofensa al cónyuge inocente, «El sentimiento de fidelidad ó de infidelidad, que es el objeto esencial de la promesa conyugal, pertenece exclusivamente á la moral» (Tissot). La ley no ha creado ese sentimiento, ni esa promesa; tampoco los ha creado el oficial público ó la autoridad que ha intervenido en la celebración del matrimonio. El oficial público ó la autoridad se ha limitado únicamente á hacer constar de una manera solemne la existencia de la unión ó del vínculo entre los contrayentes. El sentimiento de fidelidad y la promesa conyugal se hallan arriba y

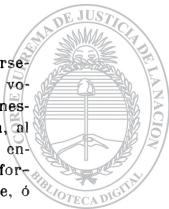
(1) *Enrico Pessina* Elementi di diritto Penale (Napoli, 1883) T. II, pag. 298 y siguientes.
Emitio Brusa L' Ultimo Progetto di Codice Penale olandese, etc. (Bologna, 1878) pag. CLXXIV y siguientes. La comision que preparó el Código penal holandés proyectó la supresion del adulterio como delito y fundó su protesta.

fuera del alcance de la ley. Por eso ésta no puede, con la sanción de la pena, remediar la ruptura de ese vínculo moral.

Se ha sostenido que el adulterio lesiona no solo al cónyuge inocente, sino también el derecho de los hijos, el de la familia y el de la sociedad, y que por esto debe ser incriminado. Encarar así la cuestión importa desconocer la naturaleza del acto y confundir este acto con sus efectos externos, posibles ó probables. La mejor prueba de que el perjuicio ocasionado, á veces, á los hijos del matrimonio, por la incertidumbre y la confusión que el adulterio introduce entre ellos, no es el fundamento de la incriminación, se halla en que las legislaciones al declararlo delito lo hacen en general, sin distinguir, sin exceptuar los casos en que, en el matrimonio de los cónyuges culpables, no hubiera hijos, ni resultaran á consecuencia del adulterio mismo. Y si el efecto producido respecto de los hijos no es la razón de incriminar, menos puede serlo evidentemente el agravio más remoto hecho á otros miembros de la familia ó á la sociedad. Para reprimir la suposición de filiación legítima hecha por la mujer casada en favor de un hijo adulterino, no es menester reprimir el adulterio, pues basta penar aquel acto, como lo proyecta la Comisión en el título sobre delitos contra el estado civil.

A parte de lo dicho, si el adulterio es un delito, para que la pena, como un medio de combatirlo, se aplique y se cumpla, es menester: «ó que se haga de él un delito público (ó que deba ser perseguido por acción pública) como sucedía en otro tiempo entre ciertos pueblos, delito en el cual el carácter ó el interés público sería bastante difícil de establecer, y sobre todo de justificar desde el punto de vista del



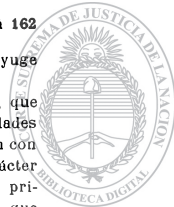


interés doméstico; y entonces se necesitaría perseguirle y castigarle con el beneplácito ó contra la voluntad del principal interesado: se conocen las funestas consecuencias de semejante sistema;—ó bien, al contrario, que no sea sinó un delito privado, y entonces será necesario, como ciertas legislaciones, forzar al esposo ofendido á perseguir á su cónyuge, ó castigarle y herirle por su indiferencia, ó su elevación de alma, ó su generosidad. ¡Bella moral verdaderamente la que castiga el justo desprecio ó la nobleza de los sentimientos!" (1)

Pero si ninguna de las alternativas precedentes se admite ni es defendible hoy; si se establece, como lo hacen los códigos argentino, oriental, español, italiano, holandés, alemán, húngaro (2) y la generalidad de los códigos contemporáneos, que el adulterio es un delito acusable únicamente por el cónyuge agraviado, que es un derecho de éste abstenerse ó promover el juicio, seguir el proceso hasta su conclusión ó abandonarlo, perdonar ó no perdonar al cónyuge adúltero y á su codelincuente (V. arts. 124 y 125 cód. pen. argentino); entónces todo depende del esposo ultrajado y entónces también se reconoce implícita, pero irrefutablemente, que la pena no es un remedio contra el adulterio, que buscar un remedio al mal no es —ó al ménos no resulta ser—el fin que la ley tiene en vista al incriminar y reprimir ese hecho, sino dar

¹ Tissot—*Le Droit Pénal, étudié dans ses principes, etc.*, 2^a édition, t. 2^o, (Paris 1880, pag. 325.

(2) Los códigos húngaro y alemán solo reprimen el adulterio cuando á consecuencia de él se ha decretado el divorcio (ó la separación segun el 1^o) y lo reprimen: el 1^o con tres y el 2^o con seis meses de prisión como máxima.



un medio de persecución y de venganza al cónyuge ofendido (1).

El adulterio, hemos dicho, es un acto inmoral, que genera efectos muy perniciosos. Las inmoralidades y los vicios que afligen á la sociedad se combaten con una doble série de medidas: con medidas de carácter civil y con medidas de carácter represivo. Las primeras desempeñan el principal papel y son las que deben practicarse ante todo. La pena es la última razón, es un recurso extremo, al cual solo se apela cuando las instituciones y los remedios civiles han sido ineficaces y se espera, por su aplicación, reparar, siquiera sea en parte, los males que se trata de combatir. Y bien, ¿se ha demostrado la ineficacia de las medidas civiles respecto del adulterio? No, sin duda. Se ha demostrado, al contrario, la bondad de las medidas represivas? Entre nosotros, esta última experiencia no se ha hecho, ni se hará jamás, por que la pena no se aplica y por las condiciones de que depende su aplicación. Pero, donde se ha aplicado, ningún efecto saludable ha producido.

Al suprimir las disposiciones legales sobre el adulterio no entendemos haber innovado. Desde luego hemos sancionado el hecho existente en el país, hemos aceptado la doctrina preferible á nuestro juicio; y, lo que es más, hemos seguido la dirección que llevan los códigos penales actualmente. Nada más variable

(1) Chauveau y Hélie dicen: «Parece que el legislador después de haber formulado el delito haya temido su persecución; se ha contentado en cierto modo con dictar una alta lección de moral, hiriendo el adulterio, atribuyéndole la calificación de delito, pero ha abandonado su represión á la acción caprichosa y arbitraria de la opinión y de las costumbres. Ha resultado de ahí que la represión de ese delito se ha hecho demasiado rara para que pueda ejercer efecto sensible sobre la depravación pública.» (Theorie du Code Penal, 5ª edición, Paris 1872, T. 4º pag. 316)



á través de las legislaciones históricas ó de las legislaciones y costumbres jurídicas de diferentes países, en una misma época, que la importancia que ha revestido el delito de adulterio y la gravedad de las penas con que ha sido reprimido. Desde la legislación de los pueblos en que el acto era calificado de delito capital y se reprimía con penas capitales también, hasta nuestros códigos contemporáneos, en que es ó nó delito, según la voluntad y los designios del cónyuge ofendido, y se reprime, si alguna vez se reprime, con penas leves, hay una distancia enorme; y, recorriéndola, se vería cómo el hecho es cada vez menos incriminado y más benignamente reprimido.

Añádanse ahora las dificultades insuperables que presenta la prueba del hecho consumado, pues jamás existen elementos bastantes de convicción, y se percibirá cuántos inconvenientes ofrece la incriminación del adulterio sin proporcionar ninguna ventaja.

Hemos reunido en un capítulo la violación, el estupro, y varios ultrajes al pudor de que no se ocupa la ley actual. El artículo 146 del proyecto refunde los tres artículos 127-129 del Código. Los casos del 146 son los mismos aludidos en el 127 del Código; pero introducimos varias enmiendas. Desde luego, establecemos que, para que haya violación, es menester el concubito ilegítimo, en las condiciones enunciadas, y no simplemente, como dispone el Código, que haya «aproximación sexual aunque el acto no llegue á consumarse». La violación requiere el acceso carnal, el acto de yacer. Así se ha entendido y se entiende en la doctrina; así



lo prescriben los códigos penales más adelantados, como el español, el holandés, el italiano, el húngaro, el chileno etc. El código Tejedor decía únicamente que «se comete violación cuando se obliga á una mujer á sufrir la aproximación sexual». Podía entenderse que, según este texto, la *aproximación sexual* equivale á la cópula misma; pero la frase «aunque el acto no llegue á consumarse», añadida á aquella en el precepto vigente (art. 127), indica que, ante el Código, la violación podrá existir, sin que haya verdadero concúbito, ó, por lo menos, originará dudas sobre el instante consumativo del delito. Todo eso se evitará con la enmienda.

En vez de entrar en las distinciones casuísticas en que entra el Código, al prescribir la pena, disponemos que ésta será de tres á diez años de penitenciaría, en los diversos casos—sea que la víctima fuere menor de doce años, sea que se hallare privada de razón ó de sentido ó imposibilitada de resistir por enfermedad, sea que se usare contra ella de fuerza ó intimidación. Es verdad que los casos son muy diferentes y que, en la práctica será á menudo necesario reprimir á un violador con más severidad que á otro; es verdad también que dos delincuentes comprendidos en el mismo precepto legal, dos violadores por haber ambos tenido concúbito con menores de doce años, merecerán, en virtud de su índole, de sus condiciones y de su perversidad distintas, ser reprimidos con penas desiguales; pero á esto se atiende perfectamente desde que la pena establecida tiene límites suficientemente distantes, dentro de los cuales oscilará el Juez, con arreglo á las cualidades del culpable y á los accidentes del hecho. La enmienda en la medida de la pena no requiere explicación.



El artículo 147 se refiere al estupro legislado en el 130 del Código. Las modificaciones que al respecto proyectamos consisten: 1ª En sustituir la palabra *virgen*, que califica á la mujer mayor de doce años y menor de quince, víctima del delito, por la voz *honesta*. La virginidad es una condición muy difícil de comprobar; y, tomado el término en su significado técnico, puede existir ó no existir en la mujer más casta é inocente. En efecto, si oímos á los médicos legistas, la ruptura del himen, indicio de la pérdida de la virginidad, puede ocurrir por cualquier accidente, y es posible también que no se efectúe en el primer acceso carnal. Entre tanto lo que la ley se propone amparar es la *honestidad* de las mujeres menores de quince años. En consecuencia, esta debe ser la condición exigible en la víctima del atentado. 2º En suprimir la cláusula «empleando la seducción», que indica el medio de cometer el delito. Esa cláusula es vaga y susceptible de originar dudas, ó alude á los engaños, á las maquinaciones de que se haya valido el estuprador. La ley no necesita mencionar estos medios, porque el hecho no puede ejecutarse por otros, desde que no se debe suponer que la mujer honesta, menor de quince años, sea capaz de consentir en ser prostituida, sinó que ha cedido á los halagos y artificios del seductor, y desde que, si el culpable empleara la fuerza ó el miedo, ó si la ofendida se hallara privada de razón ó de sentido ó en la imposibilidad resistir, el acto importaría violación. 3º En reemplazar la pena de prisión por la de penitenciaría conforme al plan de penalidad adoptado en el Proyecto.

El delito previsto en el artículo 148 del Proyecto consistente en abusar del error de una mujer casada y tener comercio carnal con ella, fingiéndose su ma-



rido, no ha sido legislado en el Código. Sin embargo constituye evidentemente, un grave ataque á la honestidad y un ultrage á ambos cónyuges, que debe ser reprimido, como lo es por las legislaciones de otros países.

Los artículos 149-151 establecen cuándo se aumentará ó cambiará la pena ordinaria de los delitos de violación ó estupro, á causa de ciertas cualidades y relaciones personales del agente, ó en razón de algunas consecuencias del hecho. El Código, á este respecto, se limita á prescribir el cambio de la pena por otra más grave y de mayor duración únicamente en dos casos: 1º en el de violación de una impúber, si resultare la muerte (nº 2º art. 128); 2º tratándose de estupro, siempre que el hecho se ejecute por persona investida de autoridad, por sacerdote, por individuo encargado de la educación ó guarda de la menor, ó su ascendiente ó hermano (art. 131). Con las alteraciones que se notan comparando los textos del Código con los del Proyecto, generalizamos estas reglas y las hacemos extensivas á ambos delitos: á la violación y al estupro.

Si la circunstancia de ser el culpable ascendiente, hermano, afín en línea recta, encargado de la guarda de la menor, etc., reclama un aumento de pena, en los casos de estupro, porque denota mayor criminalidad, debe reclamarlo también, por idéntico motivo, siempre que se trate de violación. De la misma manera, si es justo elevar la pena cuando, en el caso de violación de una menor de doce años, resultare la muerte de ésta, debe serlo igualmente en todos los demás de violación ó de estupro, en que se produzca esa consecuencia fatal, que es el motivo de la agravación



La calidad de sacerdote ó la de hallarse el agente investido de autoridad, no se menciona, en los artículos que explicamos, como causa de aumento de pena, porque esas cualidades no establecen vínculos entre el culpable y la víctima, ni acusan por sí solos, mayor perversidad en aquél.

En los arts. 152-153 del Proyecto, se prevén atentados al pudor, no previstos en el Código. Efectivamente esos atentados no entran en las violaciones, ni en los estupros. Sin embargo, constituyen ataques importantes á la honestidad, que reprueba y reprime buen número de códigos extranjeros. La conveniencia y aún la necesidad de penar á sus autores nos parecen tan evidentes, que toda explicación á su respecto sería supérflua.

El Código reprime la corrupción ó prostitución de menores en su artículo 132. Por este artículo se ha reformado en varias partes el 259 del código Tejedor. En el último se decía: «el que habitualmente ó con abuso de autoridad ó confianza promoviére ó facilitare la prostitución ó corrupción de menores de veinte años, *para satisfacer los deseos de otro*, será castigado con un año de prisión». En el artículo vigente se ha suprimido la cláusula subrayada. La supresión puede haber obedecido á uno de los dos motivos siguientes: ó se ha creído que la frase era supérflua, pues no podía ni debía entenderse que se facilitara ó promoviera la corrupción para satisfacer deseos propios, sinó que el acto se realizaría siempre para satisfacer deseos ajenos;—ó se ha pensado que la disposición debfa comprender también los casos en que se facilitase ó promoviese la prostitución para satisfacer los deseos propios del agente. Cualquiera que haya sido su fundamento, la enmienda es inconveniente. Si ha

sido el primer motivo enunciado, porque, lejos de mejorar la redacción del precepto, con la enmienda, se ha introducido un elemento de duda, y el artículo 132, tal como se halla concebido, dará lugar á interpretaciones contradictorias, como ha sucedido en Francia con un texto redactado análogamente. Si ha sido el segundo, porque se confunden dos casos muy diversos: el del mediador ó proxeneta, que desempeña un oficio vil y procura satisfacer pasiones ajenas y el del que sólo se propone alimentar las propias. Además, este caso se hallaba ya reprimido por los artículos anteriores sobre el estupro. Ahora bien, como lo que la ley debe proponerse reprimir es el lenocinio ejercido sobre menores, para satisfacer pasiones ajenas, porque constituye un ataque indudable á la honestidad, á fin de que las dudas desaparezcan, hemos restablecido la frase del código Tejedor copiada más arriba.

Por otra parte en el artículo transcrito del código Tejedor se decía simplemente *menores*, con lo que se expresaba claramente que el acto de facilitar ó promover la prostitución podía ejercerse en menores de uno ú otro sexo; pero el Código, al fijar la pena, dice *si la menor*, de manera que, según su texto, el delito sólo podrá cometerse en menores del sexo femenino. Esta modificación es también censurable. El acto puede realizarse en perjuicio de menores del sexo masculino ó del sexo femenino, y merece igual reprobación en uno y otro caso.

El Código, de acuerdo en ello con el proyecto Tejedor, reprime sólo al que «habitualmente ó con abuso de autoridad ó confianza» comete el delito. Hemos eliminado, asimismo, las palabras entre comillas, porque el ataque á la honestidad existe, desde que se promueve ó facilita la corrupción. El hábito, ó el





abuso de autoridad ó de confianza, por parte del que ejecute el hecho, donotarán, cuando concurren, su mayor perversidad y serán elementos de juicio que el magistrado deberá tener en cuenta al juzgar su responsabilidad.

Por último, hemos creído innecesario distinguir, para establecer la pena, si el menor tiene más ó menos de catorce años.

De conformidad con las observaciones anteriores, el artículo 154 del Proyecto prescribe sencillamente que «el que promoviére ó facilitare la prostitución ó corrupción de menores de diez y ocho años, para satisfacer deseos ajenos, será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años».

El artículo 155 establece un aumento de pena, para cuando el hecho se ejecute en las condiciones que enuncia. Nada más perceptible que la razón de elevar la pena siempre que se facilite ó promueva la prostitución de menores de doce años, ó siempre que el autor del delito sea ascendiente, afín en línea recta ascendiente, marido ó encargado de la educación ó guarda del menor, porque la tierna edad de la persona á quien se prostituye, en un caso, y las relaciones y vínculos entre el corruptor y la víctima, en el otro, revelan la mayor perversidad, la mayor vileza del culpable.

El Código no reprime el rapto en general, sinó casos especiales de rapto. Aunque el art. 136 parece general para el rapto no comprendido en los anteriores, no lo es en realidad, desde que se limita el ejecutado con violencia.

Esto se repite en el Código respecto de varios delitos. El art. 156 del Proyecto tiene por objeto caracterizar el rapto en género y establecer la pena que se



impondrá al autor del hecho, cuando no revista las condiciones especialmente determinadas en los artículos siguientes. Sin duda, el acto á que se refiere el art. 156, de sustraer ó retener á una mujer, con miras *deshonestas, contra su voluntad*, por medio de fuerza, intimidación ó fraude, es un atentado á las costumbres y á la libertad individual. Por eso hemos debido preverlo ó inculparlo en los términos en lo que ha sido.

El artículo 157 reproduce el inciso 1º del art. 133 del Código sin otras alteraciones que la de omitir la indicación del medio de cometer el delito y la de bajar el minimum de la pena. El inciso 2º de dicho artículo 133 ha sido eliminado, porque en el Proyecto no se inculpa el adulterio.

El artículo 158 refunde, con algunas modificaciones, los artículos 134 y 135 del Código. El primer párrafo de aquél contiene la primera parte del segundo párrafo del artículo 135 vigente, es decir, la disposición relativa al rapto de mujer menor de quince años y mayor de doce, ejecutado con su consentimiento; sin embargo se eleva el maximum de la pena conforme á nuestro plan. Se suprime el resto del art. 135, porque el rapto de viuda honesta ó de doncella mayor de doce años, ejecutado con violencia, de que trata su primer inciso, queda enteramente comprendido en los términos del art. 156 proyectado; y porque el rapto de mujer mayor de doce años y menor de quince *con su consentimiento y con intención de casarse*, á que alude la cláusula final, no es un ataque á las buenas costumbres, desde que el hecho se verifica con miras honestas—las de casarse. El segundo párrafo del art. 158 del Proyecto reproduce el artículo 134 vigente, sin otra modificación que la de bajar el minimum de la pena.



Por el art. 159 se dispone que si el rapto fuera seguido de violación, estupro ú otro delito contra la honestidad, éstos se considerarán hechos independientes á los efectos de la acumulación de penas. El rapto y la violación ó cualquier otro de esos delitos son hechos distintos, ejecutados en momentos diferentes. En consecuencia, es justo y es lógico que se rijan por las reglas relativas al concurso de ellos; y que, al juzgarse á sus autores, se aplique los preceptos referentes á la acumulación de penas.

Los artículos 160 á 162 reproducen casi textualmente en todas sus partes los artículos 139, 140 y 142 del Código. En el 161, idéntico al 140 vigente, que prescribe la exención de pena, en los casos de violación, estupro ó rapto, si el delincuente se casare con la ofendida, se ha añadido al final la cláusula «haya ó no mediado condena». Con estas palabras se aclara el precepto y se establece inequívocamente que el perdón de la pena deberá tener lugar en cualquier instante que se realice el casamiento, sea antes, sea después de ser juzgado y sentenciado el culpable y aunque este fuere condenado. En el artículo 162, entre los cooperadores de los delitos contra la honestidad, que el 142 del Código equipara á los autores del hecho, se ha incluido á los *descendientes*, á los *afines en línea recta* y á los *hermanos* de la víctima, porque para agravar la responsabilidad de estas personas existe un motivo igual ó semejante al que hay para agravar la de los ascendientes ú otros á quienes se refiere dicho artículo 142. Los *tutores*, *curadores* y *maestros* quedan comprendidos en la frase «y cualquier persona que, con abuso de autoridad, encargo ó confianza etc.» de modo que no es menester mencionarlos expresamente.



CAPÍTULO III

Delitos contra el estado civil

(Arts. 163 á 167)

El Código legisla en títulos separados los *matrimonios ilegales* y la supresión y suposición de estado, estos últimos hechos bajo el epígrafe « Delitos contra el estado civil de las personas, » como si fueran materias completamente distintas. Sin embargo, se trata en uno y otro caso de delitos de la misma naturaleza. Los matrimonios ilegales y la supresión y la suposición de estado atacan todos el estado civil de las personas. Efectivamente, un matrimonio ilegal, lo mismo que la supresión del nombre ó la suplantación del individuo, altera la condición de la persona en la familia y en la sociedad. Por eso, de acuerdo con los códigos español y otros, hemos reunido en un título, dividido en dos capítulos, dichos atentados.

Reformada la ley que regía el matrimonio, establecido el matrimonio civil en la República, quedó reformado de hecho el título del Código Penal sobre matrimonios ilegales, en todo aquello en que protegía, por medio de sanciones, reglas del orden civil ó canónico que no han sido conservadas en la nueva ley. De ahí que las enmiendas que proyectamos en el presente capítulo, se encaminen todas á armonizar la ley penal con la actual ley civil sobre el matrimonio.



El artículo 163 del Proyecto es sustancialmente igual á los 143 y 144 del Código. Hemos enmendado la redacción del 143, porque sus términos no serían ya correctos. En el n° 1° sustituimos la locución «estando casado válidamente ó sabiendo que existe otro impedimento dirimente *no dispensable*» por esta otra: «sabiendo que existe impedimento que cause su nulidad absoluta.» La razón del cambio es doble: en primer lugar, el casamiento anterior es un impedimento, por lo cual no es menester mencionarlo especialmente; en segundo, en la nueva ley civil los impedimentos dirimientes, ó que producen la nulidad, son todos indispensables

En el artículo 107 de la ley de matrimonio civil se pena con prisión de uno á dos años y con multa de cien á quinientos pesos, al oficial público que celebrar un matrimonio, sabiendo que existe un impedimento que pueda causar la nulidad del acto; y en el artículo 147 del Código se reprimen con arresto hasta tres meses, al eclesiástico (vale decir al oficial público) que autorizare un matrimonio ilegal sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber exigido los comprobantes de que los contrayentes estaban habilitados para el acto. Estas dos disposiciones, con enmiendas de importancia, forman el artículo 164 del Proyecto. Desde luego establecemos que, al oficial público que autorizare á sabiendas un matrimonio de los comprendidos en el artículo 163, se le impondrá la misma pena prescrita para los contrayentes (dos á seis años de penitenciaría) porque ese oficial será coautor del delito, pues sin su intervención habría sido imposible revestir el acto de solemnidades legales. Apoya esta solución entre otros códigos, el holandés. En la segunda parte del artículo dispo-



nemos que si el oficial autorizare el acta sin saberlo cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescribe para la celebración del matrimonio, se le impondrá multa de doscientos á dos mil pesos. Este precepto es, como hemos dicho, análogo al inciso segundo del artículo 147 del Código. En lugar de la pena de arresto (suprimida en el Proyecto) ponemos la de multa, porque, á nuestro juicio, ésta es más adecuada á la naturaleza del hecho y dará mejores resultados.

En el primer párrafo del artículo 165 se prescribe la reprensión del oficial público que, en casos distintos del previsto en el 164, procede á la celebración de un matrimonio, sin haber observado todas las formalidades legales. Por la primera parte del artículo 107 de la ley del matrimonio civil se reprime al oficial público que casare á un menor sin el conocimiento de sus padres, tutores, etc. Generalizamos esta disposición y la extendemos á los diversos casos en que el oficial público omita las solemnidades legales, pues existe el mismo motivo para penarlos por la omisión de una formalidad que por la de las otras. En vez de la pena de prisión (eliminada en el Proyecto) establecemos la de multa que será más eficaz. En el segundo párrafo del artículo 165 proyectamos que se aplique la misma pena de multa al representante legítimo de un menor impúber que consintiere en el matrimonio de éste. Un impúber es absolutamente incapaz de contraer matrimonio; no obstante, es posible que su representante consienta en su casamiento. Si esto sucede, el acto merecerá no solo la reprobación y la sanción de la ley civil, sinó también las de la ley penal. Por eso, el representante debe ser reprimido.

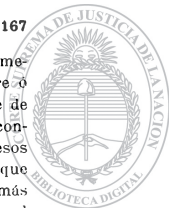
El Código distingue varios casos de suposición, al-



teración ó usurpación del estado civil, á saber: el de la mujer que fingiere preñez ó parto para dar á su supuesto hijo derechos que no le correspondan (artículo 150); el de que expusiere ú ocultare á un niño ó le supusiere filiación para hacerle perder su estado de familia ó los derechos que por él le correspondan, el del que supusiere filiación en favor de una persona para defraudar á otra (art. 151); el de la falsa filiación, cuyo objeto fuere favorecer á una persona, pero sin suplantarla en el lugar de otra (art. 152); y, en fin, todos los casos, no especificados antes, en que se usurpe el estado civil de otro (art. 153). En los diversos casos prescribe la aplicación de la misma pena: uno á tres años de prisión. La sola circunstancia de prescribir una misma pena para los diferentes casos que la ley menciona expresamente y aún para los comprendidos en su regla general, revela que la materia ha sido mal legislada. Además, el Código en algún caso considera la sola suposición ó alteración del estado, en otro considera también el propósito del culpable; defraudar derechos ajenos ó suplantar á otra persona.

Es evidente que todos los actos de alteración ó supresión del estado civil no pueden equipararse en gravedad, ni se verifican en las mismas condiciones. Por esto juzgamos que, al regular la materia, se debe establecer un precepto general que abarque todos los casos comunes; y, enseguida enunciar explícitamente los casos más importantes, por la mayor entidad ó el mayor número de los derechos violados y porque ofrecen mayor peligro y denotan mayor criminalidad en el agente, é imponer en estos casos una pena más grave. Es lo que hemos tratado de realizar en los artículos 166 y 167. En el primero se

proyecta reprimir á todo el que por cualquier medio ó por cualquier acto hiciere incierto, alterare ó suprimiere el estado civil de otra persona, porque de cualquier modo que esto suceda se lesionará la condición y los derechos ajenos. En el segundo de esos artículos mencionamos los casos más graves en que será menester aplicar á sus autores una pena más severa. En número 1º del art. 167 reproducimos el caso previsto en el artículo 150 del Código; y en el 2º el legislado en el inciso primero, del artículo 151 vigente; pero generalizamos los términos de la disposición; así, con arreglo á ella el delito existirá, siempre que de cualquier manera se altere, haga incierto ó suprima el estado civil de un niño; además limitamos la edad del niño á diez años, porque las personas mayores de esta edad tienen más medios de protegerse y contra ellas el delito no será tan grave. En el número 3º prevemos el caso en que se hiciere figurar en el registro del estado civil una persona que no exista. La inscripción en el registro importa constituir una prueba auténtica para encubrir el delito y asegurar su resultado, y denuncia, por lo mismo, la audacia del criminal. En el número 4º nos referimos á la mujer casada que supusiere filiación legítima al hijo que haya tenido en adulterio. La trascendencia de este acto de suposición de estado y os efectos que es susceptible de producir justifican su mención especial.





TÍTULO IV

Delitos contra la libertad

(Arts. 168 á 196)

Siguiendo el ejemplo del código italiano, hemos agrupado en un solo título, bajo el rubro de *delitos contra la libertad*, todas las disposiciones protectoras de la libertad individual, de la inviolabilidad del domicilio del secreto epistolar é industrial, de la libertad de trabajo, de la libertad de reunión, de la libertad de cultos y de la libertad política, porque, todas esas disposiciones tienen un solo objeto: garantizar la libertad del hombre

El código Tejedor había distribuido casi toda la materia en tres títulos: delitos contra las garantías individuales, abusos de autoridad y delitos contra la religión, previendo incidentalmente la violación del derecho de reunión en el título de los delitos contra la seguridad interior y el orden público, y dejando sin legislar las violaciones de la libertad de trabajo y de las franquicias políticas del ciudadano. El Código actual conservó esa distribución eliminando los delitos contra la libertad religiosa.

Nosotros restituimos á la materia de los delitos contra la libertad, los capítulos cercenados por los códigos referidos, porque no hallamos motivo razona-



ble que permita al Congreso dejar sin sanción penal una parte de las garantías acordadas por la Constitución á todos los habitantes del país. La libertad de sufragio no es menos digna de protección que la inviolabilidad del domicilio ó de la correspondencia.

El capítulo 1° de nuestro título, comprende bajo la denominación de delitos contra la libertad individual, la detención privada, la sustracción de menores, y las amenazas y coacciones del código actual, con las modificaciones exigidas por la diferencia de plan y de penalidad y con algunas enmiendas de detalle requeridas para la mejor inteligencia de la ley.

Hemos incluido además algunas adiciones imprescindibles. La Constitución Nacional, en su artículo 15, califica de crimen la esclavitud, y, sin embargo, el código vigente no establece pena alguna para el que pusiere ó mantuviere á una persona en servidumbre ó en otra condición análoga. Nosotros hemos previsto el caso en el artículo 168 del Proyecto, cuyos términos son análogos á los del 145 del código italiano y concuerdan con disposiciones contenidas en los códigos de los Países Bajos, del Imperio Alemán y Hungría.

En el artículo 171, inciso 1°, hemos establecido la pena de penitenciaría de un mes á un año con inhabilitación especial por doble tiempo, para el funcionario que, con abuso de sus funciones ó sin las condiciones ó las formalidades prescritas por la ley, privare á alguno de su libertad personal. Esta disposición es necesaria para asegurar la garantía declarada por el artículo 18 de la Constitución Nacional, de que nadie puede ser arrestado sinó en virtud de orden escrita de autoridad competente. Nos hemos servido de términos semejantes á los del artículo 147 del código

italiano, concordantes con los códigos de Hungría, España, Chile, Uruguay, Alemania y Bélgica.

En el inciso 9º del citado artículo 171, hemos establecido la misma pena para el juez que decretare prisión preventiva por delito á que no corresponda pena corporal ó que prolongare la prisión preventiva que, computada según el artículo 45, hubiere agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado por el delito que se le imputa. Tiene por objeto esta disposición reprimir injusticias harto frecuentes en los tribunales argentinos. La simple detención acordada durante las primeras investigaciones de un delito, se convierte con demasiada facilidad en prisión preventiva, y, una vez el procesado en la cárcel, su vuelta á la libertad queda indefinidamente aplazada. Con la enmienda que introducimos cesará este estado de cosas y no ocurrirá ya, como ha ocurrido, que procesados por delito que merezca un mes de arresto, permanezcan preventivamente detenidos durante tres ó cuatro años, sin mas motivo que el de no haberse dictado sentencia firme.

En el inciso 10 hemos establecido, como varios códigos extranjeros, una pena contra el funcionario competente que omitiere, retardare ó rehusare hacer cesar ó comunicar á la autoridad respectiva cualquier detención ilegal de que tuviere noticia. Quedará así mejor garantida la libertad individual.

En el artículo 172, hemos reproducido, disminuyendo la pena, una disposición contenida en el 278 del código holandés, que falta en el argentino, para reprimir al que condujere á una persona fuera de las fronteras de la República, con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otra.

Los artículos 173 á 176 de nuestro Proyecto corres-





ponden al capítulo del código actual sobre sustracción de menores. La modificación más importante que proponemos consiste en agravar la pena, llevando su máximun á diez años de penitenciaría, pues el máximun de la penalidad vigente, tres años de prisión, es demasiado reducido en atención á la perversidad que revela el delito y á la importancia de los derechos y afecciones lesionados. Otra enmienda digna de mención especial que proyectamos es la de extender á los menores de diez años la protección acordada por el código actual á los menores de nueve, pues creemos razonable llevar hasta aquella edad la presunción de falta de consentimiento del niño sustraído. Finalmente, hemos tomado del artículo 280 del código holandés la disposición de nuestro 176, por el que se reprime al que ocultare á las investigaciones de la autoridad á un menor que se hubiere sustraído á la potestad ó guarda á que estaba legalmente sometido, pero hemos limitado el caso á los menores de quince años, porque consideramos, como el código vigente, que es innecesaria una protección especial para los individuos que pasan de esa edad.

En los artículos 177 á 179 legislamos las amenazas y coacciones, de un modo análogo al de los códigos de Holanda é Italia, evitando las incertidumbres é incongruencias que la simple lectura revela en el capítulo respectivo del código argentino y que el Dr. Rivarola ha hecho notar en su *Exposición y Crítica*. El concepto del delito permanece, sin embargo, idéntico: ataque á la libertad de obrar ó de abstenerse dentro de los límites legales.

El capítulo II del título que explicamos comprende todas las disposiciones tendentes á asegurar la garantía constitucional de la inviolabilidad del domici-

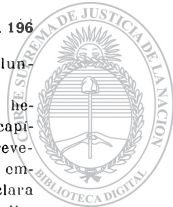


lio, incluso las que el código actual ha colocado entre los abusos de autoridad. A la expresión *morada ajena*, empleada por el código vigente, hemos sustituido los términos más explicativos de *morada ó casa de negocio ajena ó sus dependencias ó lugar cerrado*, para evitar las dudas que la práctica judicial ha suscitado sobre el alcance del concepto del domicilio en el derecho penal. El código holandés dice: habitación, recinto ó lugar cerrado de uso ajeno. El húngaro dice: habitación de una persona, lugar de sus negocios, pertenencias ó dependencias.

Con el mismo objeto de aclarar dudas suscitadas en la inteligencia del texto hemos reemplazado los términos: «contra la voluntad del morador», por estos otros: «contra la voluntad expresa ó presunta de quien tenga derecho de excluirlo». El código italiano dice: contra la voluntad de quien tenga derecho de excluirlo, ó clandestinamente ó con engaño. El húngaro dice: subrepticamente ó contra la voluntad de quien la habite ó de quien disponga de ella

Empleando el adjetivo *presunta* hemos creído innecesario conservar el inciso 2º del art. 165 relativo al que entra subrepticamente en casa ajena ocultándose en ella, como asimismo el art. 167 que exceptúa de la protección legal á las casas públicas mientras estuviesen abiertas, porque en el primer caso, el hecho, cuando la amistad no lo autoriza, se comete contra la voluntad presunta del morador, y en el segundo con su consentimiento presunto, á menos que existiera alguna prohibición expresa del dueño respecto del que pretende entrar.

Finalmente, como los códigos citados, hemos previsto el caso en que la violación del domicilio se co-



mete permaneciendo en él contra la expresa voluntad del dueño.

En el capítulo III, sobre violación de secretos, hemos refundido la materia contenida en los dos capítulos del código actual que llevan el rubro de revelación de secretos, aproximando la redacción á la empleada por los códigos húngaro é italiano, más clara y más amplia que la de aquél. Consignamos una disposición nueva, la del art. 185, penando al que publique una correspondencia no destinada á la publicidad, pues hay en ese caso una verdadera revelación de secretos ajenos, como lo ha comprendido el código italiano en su art. 161. En cuanto á las penas, hemos creído que no era necesario reprimir corporalmente á los particulares que se hicieren reos de violación de secretos, bastando para ellos la pena de multa, y hemos reservado la de penitenciaria para los empleados públicos que cometiesen el referido delito con abuso de sus funciones.

El capítulo IV del Proyecto bajo el rubro delitos contra la libertad de trabajo, prevé un delito que empieza á ser cometido en nuestro país, donde hasta hace poco era desconocido y que ha legislado en el art. 186 el código italiano. Nos referimos al empleo de violencias y amenazas para obligar á un obrero á tomar parte en una huelga.

Pudimos haber dejado comprendido el caso entre las amenazas y coacciones que constituyen delitos contra la libertad individual, pero estando la libertad del trabajo especialmente garantida por la Constitución, nos ha parecido propio considerar como un delito distinto la violación de esa garantía, sobre todo cuando ella asume los caracteres alarmantes de un delito colectivo.



Por razones análogas, y siguiendo el ejemplo del código Tejedor y de muchos extranjeros, hemos tratado también como un delito independiente la violación de la libertad de cultos, dedicándole el art. 188, único del capítulo V de este título.

Del mismo modo hemos procedido con la violación de la libertad de reunión, que la Constitución garante expresamente, y que el Código actual había tratado, de una manera incidental, en el art. 228 relativo á las asonadas. Nosotros le consagramos un capítulo separado, el VI, cuyo único artículo concuerda con los artículos 143 y 144 del código holandés.

El capítulo VII, sobre delitos contra la libertad política, es completamente nuevo, en el sentido de que el código actual no trata esa materia; pero, con excepción del art. 190, análogo al 139 del código italiano, todos los demás han sido tomados, en lo sustancial, de la ley de 1863 sobre crímenes contra la Nación y de las leyes electorales de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, teniendo presente lo dispuesto en los códigos extranjeros, especialmente en el húngaro, cuyo capítulo sobre crímenes y delitos contra la libertad electoral de los ciudadanos, trata extensa y acertadamente el punto referido.

Un país republicano no puede dejar de prever en su código penal las violaciones de la libertad política previstas en los suyos por los países monárquicos y mucho menos cuando ellas son tan frecuentes como en la República Argentina. Libertad tan esencial al funcionamiento del régimen representativo, debe estar protegida tan permanentemente como la vida, la seguridad, la propiedad y el honor de los ciudadanos, en el mismo cuerpo de legislación que estos derechos fundamentales, y no debe quedar librada á

las contingencias de una legislación especial, dictada casi siempre bajo la presión de los intereses y de las pasiones del momento.

Por lo demás, las distintas disposiciones del capítulo que proyectamos, se fundan por sí solas y no requieren más explicaciones que las concordancias anotadas al pie de cada artículo.

El capítulo VIII y último del título proyectado sobre los delitos contra la libertad comprende una disposición común á las violaciones de la libertad política, religiosa, de reunión y de trabajo, prohibiendo que en esos casos la pena corporal sea sustituida por multa. El fundamento de esta disposición es que, siendo generalmente esos delitos incitados ó ayudados por muchas personas, la pena de multa sería ilusoria, pues el condenado obtendría fácilmente el dinero necesario para pagarla, por medio de donaciones ó suscripciones de sus incitadores ó compañeros.





TÍTULO V

Delitos contra la propiedad

(Arts. 197 á 225.)

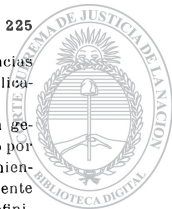
El capítulo *Robos y hurtos*, del Código Penal, es susceptible de las siguientes observaciones: 1º que carece de una disposición que reprima el robo fuera de los casos individualmente enumerados en los artículos 187 á 191, lo que puede dar lugar á que alguna vez quede sin reprimirse un hecho grave que merezca esta calificación; 2º que caracterizándose el robo por la violación ó intimidación en las personas, ó la fuerza en las cosas, el art. 190 enumera casos de robo en que falta la violencia ó intimidación en las personas comprendiendo casos en que tampoco concurre la fuerza en las cosas; 3º que ha incluido entre los casos de robo hechos que no pueden tener científicamente esta calificación, á los cuales la doctrina y la legislación general denomina de *estorsión*; 4º que ha caracterizado el hurto por la *sustracción clandestina*, noción demasiado estrecha para una disposición general, y que deja sin represión el apoderamiento de una cosa en presencia del poseedor.

Aparte de las modificaciones en detalles de menos trascendencia, hemos procurado salvar, con la autoridad y el ejemplo de la legislación comparada, que

indicamos en las concordancias, aquellas deficiencias cuyos malos resultados se experimentan en la aplicación práctica del Código Penal.

En el artículo 197 consignamos una disposición general que reprime el hurto, caracterizado este delito por los siguientes elementos constitutivos: apoderamiento ilegítimo—de cosa mueble—total ó parcialmente ajena,—con ánimo de lucro. Leyéndose nuestra definición del hurto se recordará la que dá del robo el art. 515 del código español, y los elementos que el mismo código atribuye al hurto en el artículo 530. El robo se distingue allí del hurto con las mismas distinciones de nuestro Proyecto: en el primero hay violencia ó intimidación en las personas ó fuerza en las cosas; en el segundo no concurre ninguna de estas circunstancias. Los demás elementos de estos delitos son comunes á ambos. Para precisar el distinto significado de estos términos *robo* y *hurto*, es necesario considerar que estas palabras no tienen una exacta correspondencia ideológica en sus correlativas de otros idiomas, y que es conveniente conservarle la acepción que les dan los códigos escritos en nuestra lengua. La *clandestinidad*, como característica del hurto, ha sido enunciada por el código Tejedor: pero si la nota de su proyecto indica la fuente de que tomó aquel término, solamente se propuso expresar la idea de *fraude*, que se considera esencial en el *vol* del código francés. Para mantener aquella circunstancia como característica de una de las formas del delito de que se trata, sería necesario adoptar la palabra *hurto* como genérica, y volver á la división ya abandonada del hurto en *manifiesto* y *clandestino*.

El artículo 198, enuncia las circunstancias agravantes del hurto derivadas del sitio en que se cometiere





el delito, de los objetos en que recayere, de la ocasión en que se ejecutare ó del medio que se empleare. La aplicación de una pena mayor cuando el delito se cometiere en oficinas, archivos ó establecimientos públicos, se funda en la consideración del mayor respeto y de la mayor seguridad que es necesario procurar á esos establecimientos por ser mayor ó más general el daño que en ellos podría causarse. Otra causa de agravación será la de que el hurto fuere de objetos ó de dinero de viajeros, en cualquier clase de vehículos ó en las estaciones ó escalas de las empresas de transporte. Esta agravación, admitida ya por varios códigos, tiene su explicación en la menor defensa que se puede oponer al delito en las circunstancias expresadas, y en las mayores dificultades y mayores perjuicios que recibiría el viajero que intentara procurar la represión del delincuente. Determina otra agravante la conveniencia de proteger contra el hurto los productos ó semovientes que por necesidad quedan en el campo, no siendo posible que el propietario tome respecto de ellos las precauciones que toma con objetos que pueden ser guardados en un recinto cerrado. El hurto ejecutado con auxilio de un doméstico ó dependiente de la casa, ha sido reprimido como robo en el art. 190, inciso 4º, del Código Penal. La agravante resulta en este caso de haberse aprovechado del abuso de confianza del doméstico; pero no aparece la característica de la violencia en las personas ó cosas, que hemos adoptado como distintivo del robo y del hurto. Corresponde, pues, incluir este caso en la última calificación. En fin, la circunstancia de cometerse el delito con ocasión de un desastre cualquiera, dá un carácter particularmente odioso al hurto y justifica la agravación consignada en el inciso 5º de este artículo.



Al final del art. 198 incluimos, con los números 6º y 7º, como circunstancias agravantes del hurto, el uso de ganzúa, llave falsa ú otro instrumento semejante para penetrar al lugar donde se halle la cosa ú objeto de la sustracción, ó de la llave verdadera que hubiere sido sustraída ó hallada; y el escalamiento, debiendo entenderse que lo hay cuando se penetra por vía que no está destinada á servir de entrada. Estas circunstancias son sin discrepancia reconocidas en la doctrina y en la legislación general como agravantes ó calificativas del hurto; nos limitaremos, en consecuencia, á consignar los motivos que justifican su inclusión en el capítulo del *hurto* y no en el del *robo*, ya que bajo esta última calificación la consagran el Código Penal y sus fuentes en esta materia, el código Tejedor y el código español. Creemos que, para proceder con lógica, es necerario ser consecuentes con las distinciones que hemos fundado como características de uno y otro delito. En el uso de la llave falsa, de la llave verdadera sustraída ó hallada, de la ganzúa ó de cualquier otro instrumento apto para abrir una puerta *sin fractura* de la cerradura, no hay propiamente *fuerza en las cosas*, y sería necesario para considerar aquel hecho como un caso de robo, extender, por una ficción, el concepto de *fuerza* al caso de la llave falsa y aún de la llave verdadera, ó crear excepciones que no estarían justificadas por ninguna razón ni por ninguna conveniencia. Si se dijera que estos casos revisten una gravedad especial, y que, en razón de la gravedad, deben ser equiparados al robo, tal argumento solo valdría para justificar un aumento de pena. El *escalamiento*, si este concepto queda limitado á expresar la idea de que se entre por vía no destinada al efecto, no es en sí mismo un acto de fuerza en las cosas, y no



basta para autorizar una calificación de robo. Esto se ha reconocido aún en la aplicación del código español, en la que es posible la calificación de hurto con la circunstancia agravante de escalamiento (1).

El artículo 199 reprime con dos á seis años de penitenciaría el caso general de robo, es decir, el apoderamiento de una cosa mueble, total ó parcialmente ajena, con ánimo de lucro y con fuerza en las cosas ó con violencia ó intimidación en las personas, sea que la violencia ó intimidación tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo, ó después de cometido. En este caso, como en el del hurto, decimos *total ó parcialmente ajenas*, frase que emplea el código holandés, porque es posible que el apoderamiento ilegítimo del *total* de la cosa se ejecute por quien tenga algún derecho en ella, ó sea dueño de una parte de la misma.

El Artículo 200 conserva como circunstancias agravantes las mismas del art. 187 del Código Penal, con las ligeras modificaciones cuya razón daremos brevemente. El número primero no ha sido alterado; en el segundo, modificamos la redacción, sin otra consecuencia importante que la de suprimir las palabras «ó si ha habido violación», del final del inciso. Ninguna relación de medio á fin hay entre la violación y el robo; ninguna conexión entre un hecho y otro. Si alguna vez aparecen juntos estos delitos deberán considerarse separadamente; y la penalidad se determinará con sujeción á las reglas generales sobre el concurso de hechos punibles. En el inciso 3º suprimimos los términos «ó complot», desde que en la

(1) VIADA.—*El Código Penal etc.*, art. 325 Cuestión 2ª.



parte general no hallamos mérito para la distinción entre la banda y el complot. En cuanto á la penalidad, si bien por lo general proyectamos algún aumento con relación á las penas que establece el Código vigente, en este caso bajamos á la pena de tres á quince años de penitenciaría la de presidio por tiempo indeterminado ó por diez á quince años que establece el art. 187 del Código Penal. El caso mas grave de los enunciados en el artículo es, sin duda alguna, el del número primero: si con motivo ú ocasión del robo resultare un homicidio. Se refiere la disposición al caso de que el homicidio fuese un resultado accidental del robo; no al caso en que el homicidio fuese medio de consumar el robo; ó de prepararlo ó ocultarlo, ó de asegurar sus resultados ó la impunidad para sí ó para los cooperadores, ó por no haberse obtenido el resultado propuesto, pues, para estos casos, la disposición clara y terminante que introducimos en el número 4° del art. 111, removiéndolo así toda duda que pudiera suscitarse, establece la pena de presidio perpetuo. Referida la disposición á un caso accidental, es en justicia necesario despojar á la pena de su actual dureza ó inflexibilidad, dándole toda la extensión requerida para que se atienda á todas las circunstancias que medien en lo que la ley no puede prever con precisión. Si estas razones valen para el caso más grave, no hay por qué insistir en cuanto á los otros dos.

Otras circunstancias agravantes que, por no revestir la importancia de las enumeradas en el artículo á que acabamos de referirnos, deben determinar la imposición de una pena cuyo máximo no sea tan elevado, son las consignadas en el artículo 201 del Proyecto. Comprendemos en este artículo, en los nú-



meros 1° y 2°, los mismos números del artículo 188 del Código Penal; en el 3° los casos del artículo 190 inciso 1° y 2°, y en el 4° todos los casos de agravación enunciados para el hurto en el artículo 198 del Proyecto. Se entenderá que todas estas circunstancias son simplemente agravantes de la pena del robo ó del hurto, y no calificativas, pues el robo y el hurto se constituirán en todos los casos con los elementos enunciados en la disposición general.

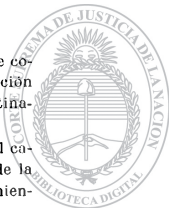
No incluimos en el capítulo del robo la disposición del artículo 188, número 3°, y las del artículo 189 vigentes por una razón común á todas, y es la de que aparece por ellas equiparada la tentativa al delito mismo. Una se refiere al caso en que se hiera ó maltrate á una persona para que descubra, entregue ó no defienda la cosa que se *intenta* robar; la otra, que se amenace ó intimide á una persona con el mismo objeto; la tercera que se detenga en rehenes á una persona para sacar rescate; y la última que se obligue por violencia á firmar un documento de obligación ó cancelación, casos todos estos en que no se ha efectuado el *apoderamiento* ilegítimo, que es uno de los elementos esenciales del delito en cuestión. Puede admitirse que se trata de una ambigüedad de redacción y no de disposiciones análogas á la del artículo 171 del código austriaco, que castiga como *rapiña* la violencia material sobre una persona, *aunque no hubiese tenido efecto la rapiña*: en este caso, algunas de las circunstancias expresadas, las violencias para que se entregue ó no defienda la cosa, estarán comprendidas en la disposición general; las otras pasarán al capítulo de la extorsión.

En el Capítulo III y bajo el rubro de *extorsión*, colocamos la represión de aquellos actos que teniendo,



como una de las formas del robo, el apoderamiento ilegítimo por medio de violencia sobre las personas, no pueden causar el apoderamiento sinó de una manera mediata ó indirecta, ó con un intervalo de tiempo. Preveimos en el artículo 202 el caso en que se obligare á otro con violencias ó amenazas, á depositar, entregar, suscribir ó destruir, en perjuicio propio ó ajeno, un documento capaz de producir efectos jurídicos, quedando así comprendida la disposición del inciso 3º, artículo 189 del Código Penal.

En el artículo 203 colocamos el caso de un delito que en algunas épocas se ha producido con frecuencia: el de que por medio de amenazas ó simulando orden de autoridad pública se obligare á otro á enviar, depositar ó á poner á disposición del culpable ó de un tercero, cosas, dineros ó documentos que produzcan efectos jurídicos. Sobre este caso el código no contiene sinó una disposición de muy difícil aplicación: el artículo 168 reprime la amenaza que se hiciere «exigiendo una suma de dinero ó la ejecución ó inejecución de un hecho *y el culpable hubiese conseguido su propósito*». Esta disposición está incluida en el Código, en el artículo con que comienza el Capítulo *Amenazas y coacciones*; haciéndose prevalecer para la calificación el medio de ejecución del delito, sobre el fin aún en el caso en que el fin se realizara, y no obstante ser el fin de mayor gravedad que el medio, todo lo que envuelve errores injustificables. Pero no nos referimos á estas circunstancias al calcular de difícil aplicación la penalidad del Código; sinó á la de que la pena que fija es la *inferior en grado* á la señalada por la ley al hecho con que se amenazare, lo que presenta el inconveniente de que la graduación de las penas no es un sistema que el Código haya adoptado, como lo

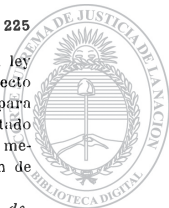


hemos demostrado en otro lugar, ni puede tomarse como graduación de las penas el orden de colocación del artículo 54 sin llegarse á consecuencias desatinadas.

El artículo 204 del Proyecto es una variante del caso anterior, que determina sólo una modificación de la pena, y cuya consignación especial es además conveniente bajo, otro aspecto en cuanto presenta los caracteres conocidos de un delito designado vulgarmente con la palabra francesa *chantage*.

El artículo 205 reproduce el caso del artículo 189 número 2º del Código Penal, en los mismos términos y con solo un aumento en el máximun de la pena, por tratarse de una forma de delito que, aunque no es frecuente, asume un carácter odiosísimo y alarmante, que puede en alguna ocasión requerir la aplicación de una pena mayor que la de seis años de penitenciaría actualmente fijada.

El artículo 206 prevé el caso del 195 del Código Penal, que en la reforma del Proyecto del Dr. Tejedor se incluyó para evitar la impunidad en la repetición de un hecho análogo al que ejecutó en Buenos Aires la banda llamada de los *Caballeros de la noche*. No adoptamos la frase del Código, *el que robase cadáveres para hacerse pagar su decolación*, porque este hecho no conviene con el concepto jurídico del robo que ya dejamos explicado; la intención del agente no se dirige á hacerse dueño del cadáver, sino á servirse de la ocultación ó sustracción como medio de ejercer una violencia moral para ejecutar un delito contra la propiedad. «Nadie puede decirse dueño ni poseedor de un cadáver, que no es cosa susceptible de expropiación. Liga á los vivos un sentimiento de respeto y afecto hacia los restos de los que fueron seres queridos, y es la libertad



de tener este sentimiento y este afecto lo que la ley penal debe garantizar con su sanción. Es, pues, incorrecto hablar de robo de cadáveres; y, si esto está bueno para el lenguaje vulgar, no lo está para el legal. El atentado á la propiedad aparece por la exigencia de dinero mediante la coacción que se impone por la violación de aquel respeto y de aquel efecto.» (1)

El capítulo IV se refiere á las *estafas y otras defraudaciones*. El artículo 207 del Proyecto corresponde al 202 del Código Penal, y corrige la viciosa redacción de este último, que puede dar lugar á una mala interpretación. Tampoco adoptamos el criterio de penalidad seguido por el Código, para este delito, al proporcionar la medida de la pena al importe de la suma defraudada. Si esta circunstancia debe tenerse en cuenta para la determinación de la pena en un caso particular, podrán tenerla los tribunales dentro de los límites más amplios de penalidad que presenta el Proyecto, sin que subsista el peligro de que circunstancias particulares de perversidad ó astucia, ó de daño realmente causado, desaparezcan ante el quantum de lo estafado. Por otra parte, una misma suma de dinero tiene la más diversa estimación según la condición y circunstancias en que se encuentra la víctima del delito. Bastará, pues, cuando la suma sea muy pequeña, dar mayor extensión á los límites de la pena, rebajando el *mfimum*, como se hace en el artículo 224 del Proyecto para todos los delitos contra la propiedad.

El artículo 208 enuncia en particular diversos casos de defraudación, que podrían no quedar comprendidos en el artículo anterior, conviniendo, por otra parte, más propiamente la denominación de estafas á los

(1) Rivarola—Exposición y crítica del Código Penal, num. 787.

casos del artículo 207, y la de defraudaciones á los del 208. Los ocho primeros números de este artículo son reproducción de los números 1º, 2º, 7º, 8º, 11º, 12º, 13º, 14º, del artículo 203 del Código Penal, y el último comprende el caso del artículo 204 del mismo Código.

El artículo 209 del Proyecto enumera los casos particulares que merecen alguna agravación de la pena en razón de la entidad del daño que se puede causar con el delito ó de la menor defensa que puede oponerse á éste. El número 1º incluye un caso que tomamos de algunos códigos extranjeros, no previsto en el Código Penal: el del que, para procurar á sí mismo ó á otro un provecho ilegal en perjuicio de un asegurador ó de un dador de préstamo á la gruesa, incendiare ó destruyere una cosa asegurada ó una nave asegurada, ó cuya carga ó flete estén asegurados ó sobre la cual se haya efectuado un préstamo á la gruesa. Los números 2º y 3º comprenden respectivamente los casos de los artículos 205 y 203 inciso 4º del Código. Hemos creído conveniente prever en seguida, como lo hace el código holandés, el caso del empresario ó constructor de una obra cualquiera, ó del vendedor de materiales de construcción, que cometiere en la ejecución de la obra ó en la entrega de los materiales un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes ó del estado. Es esta última circunstancia la causal de esta agravación, sin la cual el caso quedaría comprendido en la disposición respectiva del artículo anterior. El último inciso del artículo 209 se refiere al fraude cometido en perjuicio de una administración pública. No admitiendo la división de delitos en públicos y privados, ni la agrupación particular de delitos pecuniarios á empleados públicos, por la razón que hemos





dado oportunamente, ó sea, por que todo delito afecta directa ó indirectamente á la sociedad, y por consiguiente todos son delitos públicos, la clasificación del Proyecto toma en cuenta la naturaleza del derecho lesionado y no la calidad de la víctima. Hemos, pues, extendido la disposición del artículo 272 del Código Penal, particular para el caso del empleado que defraude á la administración, á cualquiera que la defraudare, solo que para este caso y para el anterior, como lo proyectamos para todos aquellos en que medie abuso de las funciones de un empleado público, á la pena principal se agrega la de inhabilitación.

Los tres primeros números del artículo 210 tomados principalmente de las disposiciones de los artículos 334, 335 y 336 del código holandés, prevén casos especiales que no se consignan en el Código actual, y que es de todo punto conveniente prever dado el gran desarrollo que el comercio y la especulación han adquirido en nuestro país, y el daño que puede causarse con la impunidad de hechos tales como las falsas noticias ó negociaciones fingidas para alzar ó bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos ó valores; la colocación de fondos públicos, acciones ú obligaciones de alguna sociedad ó persona jurídica, disimulando ú ocultando hechos ó circunstancias falsas; ó el caso de director ó síndico de una sociedad anónima ó cooperativa ó de otro establecimiento mercantil. El último inciso reproduce el caso del artículo 203 inciso 6º del Código Penal.

El artículo 211 es el 206 del Código Penal, con sustitución de la pena de arresto por la de multa.

En el artículo 212 comprendemos: 1º el caso del artículo 203, inciso 9º del Código Penal, que solo se refiere al que se negare á restituir la cosa ajena que

hubiere encontrado perdida, extendiéndola el Proyecto al caso del hallazgo de un tesoro sin observarse las prescripciones del Código Civil; 2º la apropiación de la cosa ajena en cuya tenencia se hubiere entrado á consecuencia de un error ó de un accidente fortuito, caso no previsto en el Código; y 3º la disposición del artículo 207 vigente.

En el Capítulo *Quebrados y otros deudores punibles* introducimos algunas nuevas disposiciones, cuya importancia se precibirá fácilmente. Comenzamos por reproducir en los artículos 213 y 214 las disposiciones del artículo 198, con la sola aclaración de que por quebrado fraudulento ó quebrado culpable se entenderá los que reputa tales la ley comercial.

El artículo 215 introduce la responsabilidad, como quebrado culpable ó fraudulento, en su caso, del director, administrador ó gerente de la sociedad ó establecimiento fallido cuando se trate de quiebra de una sociedad anónima ó cooperativa, ó de una persona jurídica que ejerza el comercio. El artículo 337 del Código de comercio establece que los directores de las sociedades anónimas debidamente constituidas no contraen responsabilidad alguna, personal ó solidaria, por las obligaciones; pero, agrega, responden personal y solidariamente para con ella y los terceros por la inejecución ó mal desempeño del mandato, y por violación de las leyes, estatutos ó reglamentos. Esta misma responsabilidad es la que funda la penal. Los actos de fraude ó de culpa no son actos de las personas jurídicas, y es necesario reconocer que si éstas llegan á ser declaradas en quiebra que se califique de culpable ó fraudulenta, ni el fraude ni la culpa son imputables á la persona jurídica, entidad ideal contra la cual no pueden entablarse acciones cri-



minales, conforme á la prescripción del artículo 43 del Código Civil. Son la obra de sus representantes y es necesario que la represión recaiga sobre éstos, como el Código de Comercio lo establece en el art. 1606.

El artículo 216 prevé los casos de defraudación por un deudor no comerciante á su acreedor. Los números 1º y 4º concuerdan con el 2º y 3º del artículo 200 del Código Penal. El 2º comprende el caso del que ha sido declarado en concurso civil y percibe ó aplica á sus usos particulares dinero, efectos, ó créditos de la masa ó por cualquier medio distrae de ésta alguna de sus pertenencias, y el 3º el del que concediere ventajas indebidas de cualquier género á algún acreedor. Estos actos ó medios de defraudación son perfectamente análogos á los que se reprimen en el comerciante fallido, y si los deberes profesionales de éste le imponen mayor buena fé, será esta una razón que justifique la imposición de una pena mayor, pero no un motivo para fundar la impunidad del deudor no comerciante.

Los artículos 217 y 218, que tomamos del 345 y del 347 del código holandés, reprime casos no previstos actualmente en el Código Penal: 1º el del acreedor que consintiere en un concordato judicial á causa de un convenio hecho con el deudor ó con un tercero, por el cual hubiere estipulado ventajas especiales para el caso de aceptación del concordato, haciendo extensiva esta disposición, por la razón antes dada, respecto de la responsabilidad de los representantes de las personas jurídicas, al caso en que uno de ellos concluyere una convención de tal género; 2º el del administrador ó representante de persona jurídica que, fuera de los casos de quiebra, prestare su concurso ó consenti-





miento á actos contrarios á los estatutos, leyes ú ordenanzas que la rijan, á consecuencia de los cuales la persona jurídica ó asociación quedare imposibilitada de satisfacer sus compromisos ó en la necesidad de ser disuelta.

No reproducimos la disposición del artículo 199 del Código Penal que fija una pena menor según el criterio de la entidad del daño, por una razón análoga á la expuesta respecto de las penas de la estafa: la circunstancia del valor de lo defraudado no puede ser calificativa, sino concurrente, para la determinación de la pena en el caso especial, dentro de los límites fijados. Tampoco comprendemos en el Proyecto la del artículo 200 inciso 1º, porque, para la reprensión del deudor que niega maliciosamente la deuda, sin artificio ó fraude, puesto que el caso no está comprendido entre los de estafa y defraudación, bastan los medios que proporcionan ó pueden proporcionar las leyes civiles.

El Capítulo de la *usurpación*, en el Código actual, se limita á prever los casos de despojo de una cosa raíz, ó del uso, usufructo, habitación ó servidumbre que en ella goce el despojado; y la remoción ó destrucción de términos ó linderos. Todos estos casos quedan previstos en nuestro Proyecto, en términos más generales, é introducimos otros no previstos en el Código Penal. En el número 1º del art. 219, comprendemos los casos del art. 196 del Código Penal, sin referencia al medio usado para el despojo, pues sea aquél la violencia, el fraude ó la astucia, los jueces encontrarán suficiente latitud en las disposiciones generales y en la medida de la pena para tomarlo en cuenta. El art. 197 del Código Penal, referente á la alternación ó destrucción de términos ó límites está reproducido en



el número 2º del 219 del Proyecto. La turbación de la posesión con violencias ó amenazas es un hecho no previsto como delito en el Código actual: no basta proteger la posesión en sí misma; es indispensable mantener ó asegurar la tranquilidad de la posesión. En cuanto á la pena, en estos casos el Código fija las de prisión y multa y las de arresto y multa. Siguiendo nuestro propósito, ya explicado, de no reprimir con dos penas principales un solo hecho, conservamos en este caso la multa, aumentada en compensación de las penas corporales suprimidas. El art. 220 prevé diversos casos de usurpación de aguas, tampoco previstos en el Código Penal, estableciendo así la sanción necesaria de hechos que son y pueden ser objeto de leyes y reglamentos especiales.

Introducimos en el mismo título las disposiciones penales de los *delitos contra la propiedad intelectual é industrial*, respecto de los cuales no contiene el Código vigente prescripción alguna, no obstante haberla tenido su antecedente el Código Tejedor. Esto último indica claramente que los legisladores no incurrieron en una omisión, sinó que decidieron una reforma, la de que el Código Penal guardara silencio sobre la propiedad intelectual é industrial. Respecto de la última, se comprende que, dado el sistema observado de no incluir en el Código las disposiciones penales que ya existían en leyes especiales, se haya considerado que estas bastaban; pero, no existiendo en ley alguna especial ni general la penalidad de los delitos contra la propiedad literaria ó artística, no se alcanza porqué razones se derogó el artículo 342 del código Tejedor. ¿Acaso porque una ley no había fijado, como no ha fijado aún el término de la propiedad literaria? Creemos que la fijación del término de la propiedad literaria es una



restricción que la ley puede imponer en conformidad con el artículo 17 de la Constitución; pero no puede sostenerse que la propiedad literaria ó artística no exista mientras la ley no fije el término de su duración. La disposición constitucional no puede tener otro objeto, como todas las leyes referentes á la propiedad literaria, que limitar en beneficio general el derecho de propiedad que es exclusivo y anterior á toda ley escrita. Si algo puede ser objeto de discusión en esta materia, no es, precisamente, si la propiedad intelectual existe, sinó, si es justo que el carácter general de perpétua y exclusiva, inherente á la propiedad de todas las cosas, ceda ante una razón de otro orden. En consecuencia de estos principios, consignamos en el artículo 221 del Proyecto, en términos análogos al 342 del código Tejedor y demás concordantes indicados al pié del artículo, la represión del que, sin consentimiento de su autor ó de su sucesor, reprodujere una obra literaria, científica ó artística ó explotase un invento ó descubrimiento ajeno, á menos que la propiedad exclusiva de la obra, invento ó descubrimiento se encuentre extinguida.

El artículo 222 prevé los casos de delitos contra la propiedad industrial, teniendo en consideración los que pueden ocurrir en esta materia, para lo cual hemos tenido presente las diversas disposiciones penales contenidas en las leyes especiales de patentes y marcas de fábrica y comercio.

En el capítulo *de los daños*, el Código Penal ha declarado, en el artículo 219, que todo daño no comprendido en el capítulo de los incendios y otros estragos, será reprimido por las disposiciones que le siguen; ha enumerado en el artículo 220 diversos casos particulares de daño; ha establecido en el artículo



221 una regla de penalidad fundada en el criterio del importe del daño, y ha concluido con una disposición general para todos los casos no comprendidos en los artículos anteriores. Creemos innecesaria esta articulación para proveer á la represión de ese delito, desde que los casos particulares caben dentro de los términos generales y de los límites de represión que fijamos en el artículo 223 del Proyecto.

Dos *disposiciones comunes á los capítulos anteriores* constituyen el último capítulo de este título. De la primera ya hemos hablado incidentalmente: si el daño causado por un delito contra la propiedad es de corta entidad conviene dar mayor elasticidad á la pena, bajo el mínimum fijado para los casos ordinarios, á fin de que se pueda estimar equitativamente lo que tal circunstancia importe en beneficio del reo.

El artículo 225 introduce una disposición enteramente nueva en nuestra legislación y en los proyectos formulados en nuestro país, pero que no es una novedad en la ciencia y en la legislación general; la de que la reparación del daño, en ciertos delitos contra la propiedad en que es posible que sea completa, por tratarse de formas de delincuencia que no causan otra lesión que la del derecho de propiedad, atenúe ó exima de pena, mediante algunas otras circunstancias concurrentes á la reparación. A semejanza de lo que ocurre en la retractación de una injuria, en el matrimonio del autor con la víctima en algunos delitos contra la honestidad, si todo el mal puede ser reparado en ciertos delitos contra la propiedad, alguna eficacia debe atribuirse á esta reparación relativamente á la pena. Si la restitución de lo robado es espontánea, si el delincuente la verifica antes de iniciarse procedimiento judicial alguno, debe admitirse que predomina en



él un impulso de arrepentimiento que da indicio de cierta condición honesta en su personalidad, motivo que disminuye considerablemente el interés que la sociedad tendría en la represión. Los temores de repetición del delito desaparecen, porque no se concibe un ladrón que sea tal, solo para efectuar enseguida la reparación y restitución de lo robado. No tener en consideración alguna el arrepentimiento, la reparación y la restitución, es mantener los rigores de una injusticia implacable, que castiga *quia peccatum*, cualquiera que sea la utilidad social. Directa ó indirectamente, casi todas las leyes penales conceden alguna atenuación, cuando no exclusión de pena, al esfuerzo espontáneo por la reparación del mal del delito. Aún el Código Penal ha declarado en el inciso 5° del art. 83 la circunstancia atenuante de "haber procurado con celo reparar el mal causado ó impedir su consumación". Esto es ya la mitad del camino para llegar á nuestra conclusión. Si el solo hecho de *haber procurado* reparar el mal, lo que admite la posibilidad de que el esfuerzo no haya sido seguido del éxito, causa atenuación, bien puede llegarse, cuando la reparación es completa, á una exención de pena. Se dirá que se trata de un delito ya consumado, de una acción ilícita y punible ya perfecta, cuya delincuencia no puede desaparecer por la conducta posterior del delincuente, la cual, en el mejor de los casos solo podría justificar una disminución de pena. Esta lógica es buena; pero puede ceder ante la mayor conveniencia social. Si el delincuente arrepentido y pronto á reparar el mal, tiene que elegir entre ocultar su delito exponiéndose á una pena mayor, y confesarlo con la seguridad de sufrir una pena menor, es posible que opte por lo primero. Preferible será, pues, incitarlo por la se-

guridad del perdón, que, al fin, traerá mayor bien particular y general; y por esto consignamos en el Proyecto la exención de pena (1).

(1) Sobre la materia de este artículo puede verse la importante monografía del Prof. E. Brusa, en la *Revista Penal*, 1888 y 1889.





TÍTULO VI

Delitos contra la seguridad pública

(Arts. 226 á 250)

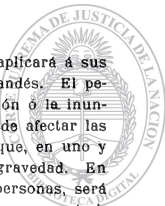
Bajo el título «delitos contra la seguridad pública» agrupamos, en capítulos separados, las prescripciones relativas á diversos hechos punibles que afectan la tranquilidad general: á los incendios, explosiones, inundaciones y otros estragos, á los delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación, á los delitos contra la salud pública, á la piratería y á otros ataques á la navegación. Las disposiciones referentes á la mayor parte de esos hechos, previstos en la legislación nacional, se hallan en distintos títulos del Código Penal ó en leyes federales, como la ley penal de 14 de Setiembre de 1863, la ley de ferro-carriles de 18 de Setiembre de 1872, ó la ley de telégrafos de 7 de Octubre de 1875. El Código incluye el incendio y otros estragos entre los delitos contra la propiedad y dedica un título especial, el último, á los hechos que afectan la salud pública. La ley federal del 63 prevé la piratería, pero no otros delitos contra la navegación; y las leyes sobre los ferro-carriles y telégrafos nacionales se ocupan de ciertos delitos que atacan estos medios de transporte y de comunicación.

Para justificar la inclusión en el Proyecto de las disposiciones concernientes á todos los hechos aludidos, aunque actualmente algunos estén legislados en leyes especiales, se ha dicho lo bastante en varios puntos de esta exposición para que sea menester agregar una palabra más.

La razón que hemos tenido para agrupar en un título las prescripciones sobre los hechos mencionados es que todos ellos producen un peligro común inmediato, de mucha trascendencia, todos afectan ó lesionan la seguridad pública, en cuya conservación se hallan interesados los diferentes miembros de la sociedad. porque es un bien que á todos pertenece. Es cierto que el incendio, la inundación, el naufragio, la piratería, otros estragos y la totalidad ó casi totalidad de esos delitos hieren la propiedad ajena; pero también es cierto que pueden no hierirla, aunque siempre producen un gran peligro para los bienes ó para las personas. Ese peligro es el elemento común del conjunto de hechos punibles á que nos referimos. Por este motivo, y de acuerdo con el ejemplo que nos presentan los códigos holandés, italiano, alemán y uruguayo, incluímos, entre los delitos contra la seguridad pública, el incendio, la inundación, el naufragio, etc.

El primer capítulo del título de que tratamos contiene los preceptos relativos á los hechos que el Código incrimina en sus artículos 208 á 214, capítulo V del título «Delitos contra la propiedad particular». En el artículo 226 proyectamos las penas que se impondrán á los que causaren incendio, explosión ó inundación. Estos hechos por su magnitud, por sus consecuencias desastrosas, por la intranquilidad que producen y por la audacia que revelan en el criminal, pueden y deben ser colocados en la misma línea, des-





de el punto de vista de la pena que se aplicará á sus autores. Así lo establece el código holandés. El peligro común que el incendio, la explosión ó la inundación son susceptibles de producir puede afectar las propiedades ó las personas; y es claro que, en uno y otro caso, el delito revestirá diversa gravedad. En el último, en el de peligro para las personas, será más grave y demostrará que el agente es un criminal más temible, pues el número y la importancia de los derechos violados serán mayores. Al establecer las penas, en el artículo 226, hemos tenido en cuenta las distinciones indicadas. Desde luego nos referimos al caso de peligro para las propiedades en general; y establecemos una pena con límites suficientemente distantes (tres á diez años de penitenciaría) á fin de que los jueces puedan, en la práctica, adoptar la medida adecuada á cada criminal y á cada hecho. Pero hay bienes que, en virtud de su naturaleza, del destino á que están consagrados, de los servicios que prestan á la comunidad, ó de la grande alarma que si se incendiaran, inundaran, etc., se originaría, requieren mayor protección, ó más bien dicho, que se declaren más graves y se repriman más severamente los delitos ejecutados en ellos.

Por eso, elevamos á quince años el máximun de la pena mencionada, siempre que el hecho pusiere en peligro un archivo público, museo, biblioteca, arsenal, astillero, fábrica de pólvora ó de pirotécnia militar ó parque de artillería. Toda vez que el delito afecte ó amenace cualquiera de estos bienes existirá la misma razón para aumentar la pena.

Respecto del incendio, la inundación ó la explosión que afecta á las personas, distinguimos el caso en que existe peligro de muerte de aquel en que el he-



cho es causa inmediata de la muerte. Esta distinción netamente consagrada en el código holandés, se halla también en el Código Penal. En efecto, en su artículo 209 dispone que «será castigado (el autor de incendio) con diez á quince años de presidio, cuando se ejecute en casa *habitada*». El motivo de reprimir especialmente y con más severidad el delito, si se comete en casa habitada, es, sin duda, el peligro en que pone á las personas. Si esto es verdad, mejor es redactar el precepto claramente, de modo que comprenda todos los casos en que haya peligro para las personas, donde quiera y como quiera que se realice el delito. El Código prevé el caso en que el hecho es causa inmediata de la muerte de alguien, en el número 1º de su artículo 208. Esta disposición se reproduce en el número 4º de nuestro artículo 226, sin otra alteración que la relativa á la medida de la pena. Los cambios en la pena que, en este número y en otros del mismo artículo 226, se introduce respecto de lo establecido en los artículos 208 y 209 vigentes, se explican si se considera lo preceptuado en el Proyecto en cuanto á otros delitos, como el homicidio.

El artículo 227 es en el fondo idéntico al 212 del Código. Las modificaciones en la redacción eran indispensables y se explican fácilmente. El artículo vigente dice: «Incurrirá respectivamente en las penas señaladas, etc., el que causa estragos por medio de *explosión* de minas, bombas ó máquinas de vapor, *inundación*,» etc. Desde que en el artículo 226 nos referimos á la explosión y á la inundación, sería redundante aludir de nuevo á ellas en el 227; y, por otra parte, desde que la inmersión ó varamiento de nave y el derrumbe de edificios son medios poderosos de destrucción,

fáciles de prever y de que se puede usar con preferencia á otros, hemos debido mencionarlos expresamente.

Al reglar delitos tan importantes y de tanta magnitud como el incendio, la inundación y los demás estragos de que tratamos, la ley debe preocuparse de reprimir no solamente á los que los causaren, sinó también á los que, por hechos positivos perjudiciales, dieron lugar á la amenaza, á la probabilidad real de que se produzcan; ó inutilizaren ó pusieren fuera de servicio los medios de combatirlos y detener sus efectos, una vez producidos. De una y otra cosa se ocupan los artículos 228 y 229 del Proyecto. La destrucción ó inutilización de diques ó de obras diferentes, destinadas á la defensa contra las inundaciones ú otros desastres, perturba la seguridad pública y origina un daño y un peligro común efectivo. Esto basta para incriminar el acto é imponer una pena á su autor. Otro tanto y más aun puede decirse del hecho, realizado con el fin de impedir la extinción de un incendio ó las obras de defensa contra una inundación, un naufragio, etc.,—de sustraer, ocultar ó inutilizar materiales, aparatos ú otros medios destinados á la extinción ó á la defensa mencionada.

En el artículo 230 establecemos la pena que se aplicará al que, sin intención, pero por culpa, cometiere alguno de los estragos estudiados precedentemente. Esta disposición es análoga á las consignadas en otros títulos, como en el de los delitos contra las personas, sobre los homicidios cometidos por culpa ó imprudencia; y responde al sistema, ya fundado, que hemos creído preferible para legislar la culpa.

El gran papel que los ferro-carriles y otros medios de transporte y de comunicación por tierra ó por





agua, representan en las relaciones de la vida contemporánea es un dato suficiente para juzgar de la importancia que revisten los desastres en la vías férreas, en los buques, en las construcciones flotantes etc., y hasta dónde alcanzan la intranquilidad y el peligro común, para las propiedades y para las personas, que originan. Por eso era menester considerar especialmente los delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación. En el capítulo segundo, dedicado á esta materia, prevemos ante todo los ataques, en general, ó los actos por los que se destruyera total ó parcialmente ó de cualquier modo se inutilizaran las vías ú obras destinadas á la comunicación pública, ó se impidiera ó alterara la ejecución de las medidas ó el funcionamiento de los objetos destinados á la seguridad de las mismas (art. 231.) Observamos en ésto el procedimiento, seguido hasta aquí, de proyectar, siempre que la materia se presta á ello, un precepto común ó general que abarque todos los casos posibles de una clase dada de delitos, que no reclamen, por su gravedad singular ó las condiciones en que se ejecuten, una disposición especial.

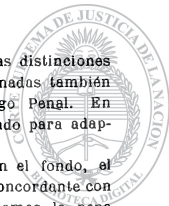
En el artículo 232 del Proyecto refundimos los artículos 71 y 72 de la ley nacional de 18 de Setiembre de 1872 sobre ferro-carriles. Esta ley prevé el hecho de destruir una barra-carril ó de emplear cualquier otro medio para detener ó entorpecer la marcha de un tren, ó para hacerlo descarrilar, y distingue explícita ó implícitamente, los casos siguientes: si se ha producido ó no el fin ó accidente que el criminal se proponía causar; si se ha ocasionado contusiones, heridas ó fracturas á alguna persona; si se ha causado la muerte á alguien. Conservamos y precisamos

más claramente, á nuestro juicio, estas distinciones que, por otra parte, se hallan consignadas también en los artículos 215 y 216 del Código Penal. En cuanto á la penalidad la hemos alterado para adaptarla al sistema del Proyecto.

Por el artículo 233 reproducimos, en el fondo, el 76 de ley de ferro-carriles nacionales, concordante con el 217 del Código. No obstante, cambiamos la pena y prescribimos que, según el caso respectivo, será la misma establecida en el artículo 232. Equiparamos el delito del que ejecutare cualquier acto tendente á interrumpir el funcionamiento de un telégrafo ó teléfono, destinado al servicio de un ferro-carril, previsto en el referido artículo 233, con el legislado en el 232, porque juzgamos que en uno y otro serán idénticos el móvil del agente y los efectos que pueden producirse.

El delito á que se refiere el artículo 234 no es de consideración, ni expone á grandes peligros. En esta virtud proyectamos, para sus agentes, una pena relativamente benigna.

En el artículo 235 prevemos, para proteger la seguridad de una nave ó construcción flotante ó la seguridad de su marcha—vale decir, la seguridad de los medios de comunicación por agua—hechos análogos á los legislados en el 232 contra los ferro-carriles. Sin embargo, como no existe paridad entre los diversos caso de éste y los de aquél, alteramos los límites de la pena respecto de algunos de esos casos. Así, á nuestro juicio, origina mayor peligro y mayor intranquilidad el acto por el cual se produjere un naufragio ó varamiento de un buque que el que ocasionare el descarrilamiento de un tren, sin causar daño de ningún género á las personas. Por eso hemos elevado el





máximun y el mínimun de la pena en el primero. Una consideración semejante explica los otros aumentos.

El artículo 236 reproduce la primera parte del artículo 75 de la ley de ferro-carriles nacionales, con las siguientes modificaciones: 1ª variamos algo la redacción para que comprenda no solamente á los empleados de un tren ó ferro-carril que abandonaren su puesto, durante el servicio, sinó también á los de un buque; 2ª reducimos la pena á penitenciaría de un mes á un año, porque, dada la naturaleza del hecho y la condición de sus autores, esta pena es suficiente sanción; 3ª excluimos los casos en que el abandono produjere algún accidente ó daño á las personas ó las cosas, porque si se causare el accidente ó el daño, el hecho caerá bajo otra de las disposiciones establecidas.

El artículo 287 prevé los descarrilamientos, naufragios ú otros accidentes, cometidos por culpa ó imprudencia, contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación. Es obvia la necesidad de reprimir la culpa en esto casos, pues, por las grandes desgracias que cualquier accidente en los trenes ó en los buques puede causar, se requiere la mayor atención y prudencia en todo lo relativo á éstos.

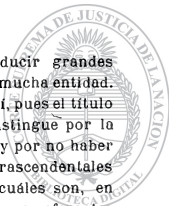
El artículo 238 es una reproducción del 50 de la ley de 7 de Octubre de 1875, sobre telégrafos nacionales, con estos dos cambios: 1º la agregación de las palabras *ó telefónica*, después de la cláusula: *el que interrumpe la comunicación telegráfica*, porque la comunicación telefónica, muy extendida hoy en la República, merece igual protección que la telegráfica; y 2º la sustitución de las penas que el artículo vigente establece por la de penitenciaría de conformidad con el plan del Proyecto.

Los delitos ó, si se quiere, ciertos delitos contra la

salud pública son susceptibles de producir grandes estragos y generan un peligro común de mucha entidad. En el Código Penal no se ha entendido así, pues el título que se consagra á esta materia se distingue por la lenidad suma de las penas que prescribe y por no haber previsto los actos más importantes y trascendentales de ataques á la salud. Esto expresa cuáles son, en esencia, las enmiendas á las disposiciones referentes á esos delitos, que proyectamos: prevemos los casos omitidos actualmente y establecemos una penalidad más severa. El Código, salvo el caso de mezclar en las bebidas ó comestibles sustancias nocivas, de que trata su artículo 296, que podría tomarse como un caso de adulteración de alimentos, no prevé la corrupción, envenenamiento ó adulteración de un modo peligroso para la salud, de aguas potables ó sustancias alimenticias ó medicinales, destinadas al uso público ó al consumo de una colectividad de personas, como un cuerpo de ejército, el personal de un hospicio, etc.

En el artículo 239 del Proyecto se prevén esos hechos, de conformidad con los códigos holandés, alemán, húngaro, italiano, etc. y se establece para sus autores una penalidad adecuada.

El expendio de sustancias nocivas, de bebidas ó comestibles mezclados con sustancias nocivas y de medicamentos deteriorados ó adulterados ó distintos de los que se deben entregar, de que se ocupa el Código (art. 295, 296 y 297) quedan incluidos en los términos generales y amplios de nuestro artículo 240, por el que se reprime al que vendiere, pusiere en venta, entregare ó distribuyere *mercaderías* peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo. La palabra *mercaderías* comprende los medicamentos, los comestibles, las sustancias nocivas y toda clase de efectos perjudiciales





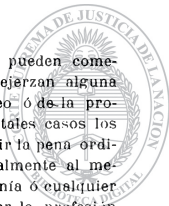
ó peligrosas para la salud pública, que pueden ser objeto de expendición, venta, distribución ó entrega.

El Código no prevé el hecho del que, como los farmacéuticos ú otros, hallándose autorizados para vender sustancias medicinales, las suministrar en especie, calidad ó cantidad no correspondiente á las prescripciones médicas, ó diversa de la declarada ó convenida, pues este acto no está comprendido en el de la venta de medicamentos deteriorados ó adulterados, que reprime en su art. 297, desde que no se trata del suministro ó expendio de sustancias medicinales adulteradas ó deterioradas, sinó legítimas, pero en especie, calidad ó cantidad diferente de la prescrita, ni, en rigor, está tampoco comprendida de un modo claro é indudable, en el de sustituir unos medicamentos con otros, á que se refiere el mismo artículo. Sin embargo, es un hecho susceptible de repetirse muy á menudo con peligro para la salud, pues una medicina puede ser un remedio en un caso indicado y un veneno en otro. un medicamento puede ser benéfico á ciertas dosis y matar á otras, etc. Ese hecho queda previsto en el artículo 251. En el artículo 242 establecemos la pena que deberá imponerse, según los casos, al que por culpa ó imprudencia corrompiere ó envenenare aguas potables ó cometiere algún otro de los delitos mencionados en el artículo 239.

El Código, en el artículo 299, reprime á los que violaren las cuarentenas. La misma razón existe para reprimir á todos los que violaren cualesquiera medidas sanitarias destinadas á impedir la introducción ó propagación de una epidemia. Por eso, de acuerdo con el derecho comparado, sustituimos el art. 299 vigente por el precepto general consignado en el 243 del Proyecto.

Los delitos contra la salud pública pueden cometerse por empleados ó individuos que ejerzan alguna profesión ó arte, saliéndose del empleo ó de la profesión ó arte para consumarlos. En tales casos los agentes de esos delitos, además de sufrir la pena ordinaria, deben ser inhabilitados, temporalmente al menos, para desempeñar el empleo que tenía ó cualquier otro del mismo género ó para ejercer la profesión ó arte de que han hecho tan mal uso. A esto responde el artículo 244 del Proyecto.

Respecto del delito de piratería hemos conservado, con pocas diferencias, las prescripciones de la ley penal de 1863. Los números 2º, 3º, 4º, 5º, 7º y 8º del art. 245 son, salvo en cuanto á la forma, idénticos á los números 2º, 3º, 4º, 5º, 7º y 8º del art. 11 de dicha ley. Damos una forma distinta á la disposición del número 1º de este artículo, á fin de extender su alcance de modo que comprenda no sólo los casos de depredación, en la mar ó en los ríos de la República, contra argentinos ó subditos de otro país que no se halle en guerra con la Nación Argentina, sino todos los actos de depredación ó de violencia contra un buque ó contra las personas ó cosas que en él se encuentren, siempre que el ejecutor no esté autorizado por alguna potencia beligerante ó que no pertenezca su nave á la marina de guerra de una potencia reconocida. Cualquiera que sea la nación á que pertenezcan el buque ó las personas ó cosas atacadas el acto de depredación ó de violencia, realizado en esas condiciones, será criminal y lo será aunque se cometa contra súbditos ó cosas de una nación con la cual se halla en guerra la República Argentina. Entre los medios de hostilizar ó de hacer la guerra no se admite, ni es admisible, la depredación ó la violencia





ejercida, sobre personas ó bienes, por quién no ha recibido autorización para ello ó por una embarcación sin bandera, que no depende de potencia alguna. No sucede lo mismo cuando el acto se lleva á cabo con autorización ó por un buque de guerra de una potencia reconocida, porque entonces es responsable del hecho la nación autorizante ó aquella á la cual pertenece el buque. Suprimimos el número 6º del mencionado art. 11 de la ley vigente; y, en lugar del caso que en él se incrimina, prevemos el de equipar, por cuenta propia ó ajena, un buque destinado á la piratería (nº 6º art. 245). No basta que una embarcación armada navegue sin pasaporte, sin matrícula del equipaje, ú otro documento que pruebe la legitimidad de su viaje para que se le considere pirática, pues la falta de esos documentos puede provenir de pérdida ó extravío, ó de cualquier otra causa, sin que por eso haya culpa de parte del comandante, ni de la tripulación. Pero si no se justificara la falta de documentos, ni la legitimidad del viaje de la embarcación, entonces ésta se consideraría como un buque equipado con destino á la piratería y quedaría comprendida en la disposición que proyectamos.

La otra modificación que proponemos se refiere á las penas. Establecemos como pena ordinaria la de penitenciaría de tres á quince años; y, para los casos de agravación, cuando de los actos de piratería resulte la muerte de alguna persona, que se encuentre en el buque atacado (art. 246), la de presidio de diez á veinte años. Estas penas armonizan con la naturaleza del delito, con las que prescribimos para hechos análogos y con el sistema de penalidad observado en el Proyecto.



Completamos la legislación de la materia de que trata el presente título con varias disposiciones encaminadas á reprimir diversos hechos contrarios á la navegación. Las amenazas ó violencias de un tripulante ó pasajero contra el capitán; ó de un tripulante contra un superior, previstas en el artículo 247, constituyen un acto de insubordinación, que puede originar sérios trastornos en el buque. Por eso deben reprimirse á fin de establecer y garantizar la disciplina. Las amenazas ó violencias que no se cometen contra el capitán, ni por un tripulante contra un superior, sino contra cualquiera otra persona, no constituirán actos de insubordinación y entrarán en las disposiciones comunes sobre amenazas ó violencias, de que trata el título respectivo.

Es evidente que el hecho, como lo presume la segunda parte del artículo, será más grave cuando se ejecute por dos ó más personas reunidas.

La negativa á servir antes de terminar el viaje, á pesar de lo convenido en la contrata ó de lo dispuesto en la ley comercial, y la desobediencia á una orden superior, por parte de un tripulante, de que se ocupan los artículos 248 y 249, perturban la regularidad de los servicios y aún la regularidad de la marcha del buque y son también actos de indisciplina, que reclaman represión.

Finalmente, en el artículo 250 establecemos una sanción en contra del capitán ó patrón de un buque que omitiese auxiliar embarcaciones ó gentes de mar en peligro, siempre que pudiese hacerlo sin riesgo para su buque, para sus compañeros ó para sí mismo, porque en semejante situación el auxilio es un deber estricto, impuesto, más que por humanidad, por las necesidades de la navegación y cuyo cumplimiento es menester asegurar por medio de sanciones penales



TÍTULO VII

Delitos contra el orden público.

(Arts. 251 á 256)

El Código Penal vigente no contiene ninguna disposición encaminada á proteger el orden social contra las perturbaciones ocasionadas intencionalmente, cuando ellas no inferen alguna lesión inmediata á un derecho determinado. Es una deficiencia manifiesta, en que no incurren las legislaciones extranjeras y que la Comisión Revisora ha salvado proyectando un título de los delitos contra el orden público, denominación usada por los códigos italiano, holandés y otros.

El primero de esos delitos es la instigación criminal, que legislamos en el artículo 251. El que públicamente instiga á cometer un hecho punible, aunque no asuma el carácter de autor cómplice de un delito tentado ó consumado, comete un acto digno de represión, porque ocasiona un verdadero peligro para la tranquilidad general, excitando las pasiones ó tendencias criminales de un número indeterminado de personas, entre las cuales puede haber muchas á quienes la instigación mueva, tarde ó temprano, á ejecutar el delito á que se refiere ú otro análogo. La libertad de la palabra hablada ó escrita no puede ra-



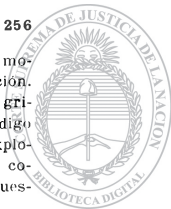
zonablemente extenderse hasta esos extremos. Como los principales códigos extranjeros, reprimimos, pues, la instigación, aunque no vaya seguida de un efecto inmediato, y declaramos, para evitar dudas de interpretación, que, si produjera efecto, el instigador debe ser penado como autor del hecho ejecutado, porque es lo que corresponde con sujeción á los principios de la responsabilidad criminal.

En los artículos 252 y 253, prevemos las asociaciones ilícitas, comprendiendo en el primero, las que tienen por objeto cometer delitos y, en el segundo, las prohibidas por la ley. Aquí también hemos procedido de acuerdo con los principios de la legislación comparada, que ponen un justo límite á la libertad de asociación. La constitución nacional solo garante, en su artículo 14, la asociación que tenga fines útiles, calificativo que no conviene, por cierto, al propósito de violar las leyes, característico del delito que nosotros prevemos.

Hemos tratado separadamente de los cuerpos armados, que son una forma particular de asociación, en los artículos 254 y 255. La formación de cuerpos armados es atribución gubernativa, y nadie que carezca de legítima autorización, puede llevarla á cabo, sin trastornar el régimen institucional del país ó sin exponer á la sociedad á graves peligros. Distinguiamos, naturalmente, como las legislaciones que nos sirven de ejemplo, los cuerpos formados para cometer delitos, de los que no tienen ese destino, pues éstos constituyen una infracción de menor importancia.

En el artículo 256 del Proyecto amplía y precisa una disposición contenida incidentalmente en el artículo 228 del Código actual: la que pena á los que se reúnen en número que no baje de cuatro para causar

alboroto en el pueblo. Pero no solamente de ese modo puede turbarse la tranquilidad de una población. Puede llegarse al mismo resultado por medio de gritos de alarma ó señales falsas, como dice el código holandés, ó por medio del estallido de materias explosivas ó de la amenaza de un desastre de peligro común, como dice el italiano. La redacción dada á nuestro artículo comprende todos esos casos.



—



TITULO VIII

Delitos contra la seguridad de la Nación

(Arts. 257 á 268)

Tratamos bajo el título de *contra la seguridad de la Nación* la materia comprendida en los dos primeros títulos de la ley de 14 de Setiembre de 1863 sobre crímenes justiciables ante los Tribunales Nacionales, con excepción de las violaciones del patronato nacional sobre la iglesia católica, porque ellas no comprometen la seguridad del país y tienen su lugar adecuado en el título de los delitos contra los poderes públicos.

El primer capítulo comprende la traición. Este delito ha sido definido por el artículo 103 de la Constitución, traducido de la de los Estados Unidos, haciéndolos consistir únicamente en el hecho de tomar las armas contra la Nación ó en el de unirse á sus enemigos: prestándoles ayuda y socorros. En los Estados Unidos, se ha entendido que los términos *levying war against the United States*, equivalentes á «tomar las armas contra la Nación,» implican todo movimiento de fuerzas ó reunión de personas armadas con el objeto de atacar ó resistir al gobierno nacional. Este concepto de la traición, comprensivo de toda insurrección interna, es el que prevalece también en



Inglaterra, Alemania y otros países de origen germánico, donde aún se conserva la noción histórica del crimen de infidelidad cometido contra el soberano por quien le debe obediencia.

La mayoría de la comisión ha creído que, no obstante la identidad de los textos, la Constitución Argentina no ha tenido la intención de dar á la palabra traición el mismo significado que tiene en la constitución norte-americana, sino el que le atribuye el uso en nuestro país, es decir, el de atentado contra la seguridad exterior ó integridad de la Patria, que es como lo entiende también la ley de 1863.

Resuelta así esta cuestión, la Comisión ha estimado por unanimidad que la ley penal debe mantener exactamente los términos empleados por la Constitución al definir el delito de traición, pues lo único que el Poder Legislativo está autorizado á hacer en esta materia es fijar la pena aplicable á los hechos definidos por la Constitución, ley suprema del país. Rechaza por consiguiente el método seguido por la ley de 1863, que, á los términos *tomar las armas contra la Nación* agrega *bajo las banderas enemigas*, y que suprime la expresión *unirse á sus enemigos prestándoles ayuda y socorro*, para poner en su lugar una enumeración incompleta de casos de protección prestada al enemigo.

La Comisión ha restablecido el texto constitucional en el art. 257 del Proyecto, imponiendo la pena de presidio por diez á veinticinco años á todo individuo argentino, ó que deba obediencia á la Nación argentina, que tomare las armas contra ésta ó se uniere á sus enemigos prestándoles ayuda y socorro.

En el artículo 258, siguiendo el método observado en el Proyecto respecto de todos los delitos, prevenimos á la concurrencia de ciertas circunstancias agravantes



y establecemos para esos casos la pena de presidio perpetuo. El caso más grave es, sin duda alguna, el del traidor que se propone someter, total ó parcialmente, la Nación al dominio extranjero, ó menoscabar la independencia ó la integridad de la Patria. Este caso, contenido en los códigos de Alemania, Italia, Holanda, Hungría, Chile y Uruguay, no lo está en la ley penal argentina. Forma el n° 1° de nuestro artículo. Otro caso, que falta también en la ley vigente, y que incluimos bajo el n° 2° del expresado art. 258, es el que induce ó decide á una potencia extranjera á hacer la guerra contra la República, delito previsto por los códigos de las principales naciones. El n° 5°, relativo al que favoreciere al enemigo impidiendo, retardando ó inutilizando cualquier trabajo militar proyectado ó ejecutado para la defensa ó el ataque, y el n° 8°, referente al que sirviere de espía al enemigo ó recogerle, ocultare ó socorriere á un espía del enemigo, son asimismo disposiciones nuevas que tomamos de los códigos de Holanda, Alemania Hungría, Chile y otros países. Los demás incisos del artículo, salvo modificaciones de forma que se expliquen por sí solas, contienen los casos de protección al enemigo enumerados en el artículo 1° de la ley vigente.

Suprimimos el art. 2° de dicha ley, en que se clasifican los responsables de la traición en tres categorías á los efectos de la penalidad, porque no hallamos motivo suficiente para apartarnos del principio generalmente seguido en las legislaciones extranjeras, según el cual se aplica en la materia de traición las reglas ordinarias de responsabilidad y complicidad que rigen para todos los delitos. Por otra parte, si la traición se efectuase por una colectividad de perso-



nas demasiado numerosa, lo que rara vez sucede la dificultad de reprimir eficazmente á todos no se obviaría por su clasificación en categorías, sino por el indulto ó la amnistía, que, en circunstancias tales y después de pasado todo peligro público, es el medio político de restablecer la tranquilidad.

En el art. 259, penamos, como el 3º de la ley vigente, la conspiración para cometer el delito de traición; pero, por las razones que acabamos de exponer, suprimimos la clasificación de delincuentes; dejando subsistente las reglas ordinarias para la graduación de la pena aplicable á cada uno según su mayor ó menor criminalidad.

El artículo 260 del Proyecto es nuevo. Consagra un principio inconcuso en la materia de traición, declarando que, para los efectos del capítulo referente á este delito, son considerados como nacionales los ejércitos y elementos bélicos de las potencias aliadas á la República Argentina en guerra contra un enemigo común.

No está ésto en la letra de la ley de 1863, como se halla en casi todos los códigos extranjeros, pero lo está en su espíritu, pues las fuerzas aliadas son en realidad, fuerzas de que la Nación se vale para hacer la guerra contra sus enemigos.

El art. 261 del Proyecto es idéntico al 4º de la ley.

El segundo capítulo proyectado para el título de los delitos contra la seguridad de la Nación tiene por objeto *los delitos que comprometen la paz ó la dignidad de la Nación.*

Los arts. 262, 263 y 264 son análogos á los arts. 7, 8 y 9 de la ley penal de 1863, sin más modificación fundamental que la de haberse previsto la violación de las inmunidades de los jefes de estados extranjeros, llenándose así una deficiencia notable de nuestra

legislación. Suprimimos el art 10 de la ley, que establece la satisfacción pública ó privada y la suspensión de empleo como pena en el caso de que la violación de las inmunidades diplomáticas haya sido cometida por funcionarios, en vez de la pena corporal ordinaria, porque esa disposición quebranta el principio de la igualdad ante la ley. Si alguna diferencia debiera hacerse, sería en contra de los funcionarios, puesto que el carácter que éstos invisten les obliga á una conducta más legal y más circunspecta.

Los arts. 265 á 268 llenan deficiencias de la ley de 1863. Están destinados á reprimir la revelación y violación de secretos políticos ó militares de la Nación y la infidelidad de sus agentes diplomáticos, casos en que evidentemente se compromete la seguridad de la República.





TÍTULO IX

Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional

(Arts. 269 á 281)

Bajo el rubro de *delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional*, hemos tratado las infracciones que la ley de 1863 y el Código Penal llaman *delitos contra la seguridad interior*, es decir, todos aquellos hechos punibles que, sin comprometer la independencia é integridad de la Nación, atacan su organización política.

Esos ataques, dada la naturaleza del sistema federativo que rige á nuestro país, pueden y deben dividirse en dos categorías: los que constituyen alzamiento contra el gobierno nacional y los que constituyen alzamiento contra las autoridades provinciales. Como el objeto y las trascendencia de estas dos categorías de delitos son diferentes, la Comisión ha creído necesario y propio darles distinta denominación, llamando rebelión á la primera clase y sedición á la segunda. Así conserva á dichas palabras casi el mismo significado con que las emplea la ley de 1863 y evita la confusión de nomenclatura introducida posteriormente por el Código Penal, que llama también rebelión al alzamiento contra un gobierno provincial. Merced á esta incorrecta nomenclatura, tenemos hoy casos de sedición

más graves que una rebelión. Por ejemplo, si bandadas armadas salen de una provincia con su consentimiento y atacan el gobierno de otra, hay sedición según la ley nacional; pero si las hostilidades no han sido consentidas, no obstante ser entonces menos peligrosas para la paz y ménos ofensivas al régimen constitucional, hoy rebelión según el Código Penal. Escalonando por orden descendente de gravedad los delitos de rebelión y sedición que ahora existen, encontramos cuatro grados: rebelión de la ley de 1863, sedición de la misma ley, rebelión del Código Penal, sedición del mismo Código. No habria en nuestra legislación estas incongruencias, si los autores del Código Penal hubieran respetado el significado que la Constitución Nacional atribuye á la palabra *sedición*, en sus artículos 6º, 22º y 109. La Constitución califica de sedición al alzamiento tendente á deponer las autoridades constituidas de una provincia, la invasión de una provincia por otra y el hecho de toda fuerza armada ó reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y petición á nombre de éste. Nosotros hemos creído que el Código Penal no puede prescindir de esta calificación hecha por la ley suprema del país y la hemos mantenido en el Proyecto.

El capítulo primero del título que explicamos está destinado á la *rebelión*. El artículo 269 del Proyecto comprende los tres últimos casos del art. 14 de la ley penal de 1863, pero la redacción ha sido alterada con el objeto de que la disposición quede más clara y ménos casuística. Con el primer caso de dicho artículo 14, hemos formulado el art. 270, en el que se reprime cualquier acto tendente á alterar la Constitución Nacional por medios ilícitos. La ley actual solo reprime esa clase de actos cuando ellos asumen el carácter





de alzamiento público en abierta hostilidad contra el gobierno. Pero no hay razón atendible para dejar impunes los demás medios ilícitos de que pudiera echarse mano con el fin de alterar las instituciones fundamentales, como lo sería, por ejemplo, la convocatoria de una convención revisora decretada por un número de miembros del Congreso inferior á los dos tercios requeridos por la Constitución.

Es también un atentado directo contra la Constitución Nacional y, por consiguiente, importa el delito de rebelión, el hecho de los miembros del Congreso que concedieren al presidente de la República y de los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren á los gobernadores de provincia facultades extraordinarias ó les otorgaren sumisiones ó supremacías por las que la vida, el honor ó la fortuna de los argentinos queden á merced de algún gobierno ó de alguna persona. El artículo 29 de la Constitución hace extensiva para este caso la pena del delito de traición, y así lo consigna el art. 271 del Proyecto.

El artículo 272 es casi idéntico al 5º de la ley de 1863. Prevé el caso de violación del patronato nacional establecido por la Constitución sobre la Iglesia católica, caso que la ley citada colocó entre los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, pero que importa, en realidad, una rebelión, porque no tiende á lesionar la independencia ni la integridad de la Nación, sinó tan solo el libre ejercicio de las facultades constitucionales de su gobierno.

El capítulo segundo del título que explicamos comprende la *sedición*.

El artículo 273 prevé los casos consignados en los artº. 6 y 109 de la Constitución, en el 19 de la ley de 1863 y en los incisos 2º, 3º, 4º y 6º del art. 226 del



Código Penal, es decir, todo alzamiento armado cuyo fin sea impedir el libre ejercicio de las facultades legales de cualquiera de los poderes públicos de una provincia, aunque no sea la misma en que el alzamiento tiene lugar, ó la formación ó renovación legal de esos poderes. Asimilamos á las provincias los territorios federales, porque después de la ley de 1863 han sido éstos constituidos con autoridades locales hasta cierto punto análogas á las de aquellas, siendo, por consiguiente, necesario protegerlas también contra cualquier alzamiento armado que no llegare á asumir el carácter de rebelión contra el gobierno nacional.

No consignamos los casos de reforma y alteración violentas de las instituciones locales, á que se refieren los incisos 1º y 5º del artículo 226 del Código Penal vigente, por que, ó ese atentado se propone alterar la forma republicana representativa, prescripta por la Constitución Nacional, y entonces está previsto como rebelión en el art. 270, ó se encamina á una modificación sin importancia fundamental, y entonces está previsto como sedición, si hay alzamiento para impedir el funcionamiento, formación ó renovación de alguno de los poderes públicos locales, ó como atentado contra la autoridad, si no hay alzamiento, y como usurpación ó abuso de autoridad, si el hecho es ejecutado, sin alzamiento armado, por alguna de las autoridades. Además, cualquiera de estas circunstancias que concurra, si el hecho no constituye rebelión, ni ha habido derrocamiento de las autoridades legales, no es grave, por que sus consecuencias pueden ser fácilmente evitadas mediante la intervención del Gobierno Nacional, conforme á los artículos 5º y 6º de la Constitución.

El artículo 274 del Proyecto contiene casos de sedi-

ción en que, sin atentarse directamente contra ninguno de los poderes públicos nacionales ni provinciales, se perturba indirectamente y de un modo grave su tranquilidad ó la eficacia de sus resoluciones. El primero, relativo á toda fuerza armada ó reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y petición á nombre de éste, no figura en el Código Penal ni en la ley de 1863, pero está previsto en el art. 22 de la Constitución. El segundo, referente á todo alzamiento que, sin constituir delito más grave, se proponga impedir la ejecución de las leyes ó el cumplimiento de las resoluciones de los funcionarios públicos, está consignado en el art. 20 de la ley de 1863 y en los artículos 227 y 228 del Código Penal. Hemos simplificado la redacción, eliminando la enumeración, demasiado casuística, que los textos vigentes hacen de las distintas formas que puede revestir este delito.

El capítulo tercero comprende las disposiciones comunes á los dos precedentes. El artículo 275 que proyectamos conserva la división en autores, oficiales subalternos y meros ejecutores que, para los efectos de la penalidad de la rebelión y de la sedición hacen la ley de 1863 (artículos 15, 16, 17, 21, 22 y 23) y el Código Penal (artículos 229 y 233). Solo variamos las penas vigentes en lo necesario para armonizarlas con el sistema adoptado en el Proyecto. En el art. 276, se ordena la doble intimación que el 26 de la ley de 1863 prescribe se haga á los sublevados para que se disuelvan y retiren, intimación que el Código actual no establece expresamente, pero que supone en el artículo 230.

El art. 277, igual al 230 del Código, reduce á la mitad la pena de los autores y exime de represión á



los subalternos y ejecutores cuando el alzamiento termina sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, disposición concordante con lo establecido para el mismo caso por los códigos de España, Chile, Uruguay, Hungría, Francia, Italia y Bélgica.

El art. 278 es nuevo. Concuerdá con los códigos de España, Chile, Hungría, Italia, Francia y otros países, y tiene por objeto reprimir la conspiración para cometer los delitos de rebelión ó sedición. La falta de una disposición análoga en la legislación argentina, impidiendo la intervención judicial en las conspiraciones, ha dado margen á infinidad de abusos y vejaciones cometidas por la policía contra los conspiradores reales ó supuestos, y todos esos atentados de la autoridad contra la libertad se han excusado por la necesidad de mantener la paz pública. Convertida legalmente la conspiración en un delito, ya que es evidente su propósito de conseguir un resultado criminal, la autoridad tendrá medio legal de reprimirla sin echar mano de arbitrariedades incompatibles con nuestras instituciones políticas.

El art. 279 del Proyecto reproduce lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la ley de 1863, sobre seducción de tropas para cometer una rebelión ó una sedición, y agrega, á ejemplo del código chileno, la usurpación y retención ilegal de un mando político ó militar, medio tan eficaz y tan usado como aquél, para preparar un alzamiento armado.

El art. 280 del Proyecto agrava la pena de los funcionarios públicos que hubiesen promovido ó ejecutado alguno de los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, y reprime á los funcionarios que no hubieren resistido una rebelión ó una sedición



por todos los medios que estuviesen á su alcance. Quedan así reunidas y armonizadas con el sistema del Proyecto las disposiciones relativas á la intervención de funcionarios en los delitos políticos que se hallan dispersas en los artículos 15, 21 y 29 de la ley de 1863 y 229 y 232 del Código Penal.

En reemplazo de los artículos 18 y 24 de la ley de 1863 y 231 del Código Penal, que no guardan conformidad entre sí respecto á la manera de penar los delitos particulares cometidos durante una rebelión ó sedición ó con motivo de ellas, hemos proyectado el art. 281, en el cual se dispone que, en tales casos, se observe las reglas establecidas para el concurso de hechos punibles, puesto que no hay razón alguna que induzca á hacer en esta materia una excepción á los principios generales.





TÍTULO X

Delitos contra la Administración Pública

(Arts. 282 á 327)

La Comisión ha formado un solo grupo con todos los delitos que, sin alcanzar la gravedad de la rebelión y de la sedición, perturban el funcionamiento regular de la administración pública en cualquiera de sus ramas, sea que provengan de los particulares, sea que emanen de los mismos funcionarios. Es el plan seguido por el código holandés y por el italiano, tan metódicos en la distribución de las materias que legislan. Quedan así comprendidos en el título de los *delitos contra la administración pública* los que el código argentino llama delitos peculiares á los empleados públicos, los que denomina atentado y desacato contra la autoridad y falso testimonio, como asimismo las disposiciones relativas al encubrimiento y á las demás infracciones ofensivas de la administración de justicia.

El capítulo primero prevé el *atentado y la resistencia contra la autoridad*. Estos delitos tienen de común con el *desacato*, tratado en el capítulo segundo, que su objeto es ofender á los funcionarios públicos. Su diferencia, en el Código actual, no está bien marcada, ni por el medio empleado, ni por el resultado



inmediato que el delincuente se propone. La intimidación aparece indistintamente en uno y otro delincuente, al tiempo de practicarse las funciones públicas ó á causa de haberse practicado. La Comisión, siguiendo los consejos de la legislación comparada, ha adoptado una distinción más precisa. Lo que, en el Proyecto, caracteriza el atentado ó resistencia contra la autoridad es el propósito de impedir el libre ejercicio de las funciones propias de ella. Cuando la defensa hecha al funcionario no es, por su naturaleza ú oportunidad, capaz de influir en los actos oficiales que la motivan, no hay atentado ni resistencia contra la autoridad: sólo hay un ataque á la dignidad ó decoro del funcionario, es decir, solo hay desacato.

De acuerdo con estas consideraciones, hemos sustituido los artículos 234 y 235 del Código por el art. 282 del Proyecto. En cuanto á las circunstancias agravantes, el Código sólo tiene en cuenta, para establecer una pena más severa, la de que el atentado se haya cometido con armas. El Proyecto agrega cuatro más: la de cometerse por una reunión de más de cinco personas, la de ser el culpable funcionario público, la de ponerse manos en la autoridad y la de haber accedido la autoridad á las exigencias del delincuente. La primera de estas agravaciones está tomada del código italiano y las tres restantes del español.

Suprimimos el art. 236, que considera como atentado contra la autoridad la extracción de presos por astucia ó mediante cohecho ó seducción de sus guardianes, porque ese hecho tiene su colocación propia en el capítulo relativo á la evasión, cualquiera que sea el medio por el cual se ejecute.

El art. 283 del Proyecto reemplaza el n° 5° del art. 237 del Código, que pena como desacato la resistencia

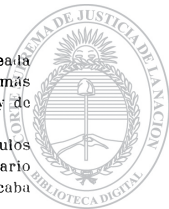
á la autoridad, y su redacción, análoga á la empleada por el Código holandés, es más comprensiva y más precisa que la sustituida y que el art. 38 de la ley de 1863.

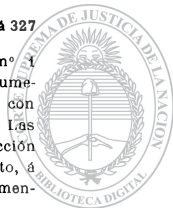
El art. 284 reproduce la disposición de los artículos 38 y 40 de la ley penal de 1863, que repulga funcionario público al ciudadano que trata de aprehender ó acaba de aprehender un delincuente en flagrante delito.

En el art. 285 prevemos dos casos leves de atentado contra la autoridad, que el Código considera desahato en los números 2º y 4º del art. 237: el del que perturba el orden en el local donde una autoridad está ejerciendo sus funciones y el del que impide, fuera de los casos del art. 282, que un funcionario cumpla un acto propio de su oficio.

En el art. 286 hemos generalizado la disposición del art. 37 de la ley de 1863 sobre arresto ó enjuiciamiento ilegal de un senador ó diputado al Congreso Nacional, extendiendo la protección de la ley á todos los miembros de los poderes públicos, de una convención constituyente ó de un colegio electoral porque la violación de las formas prescriptas para el arresto ó formación de causa de cualquiera de esos funcionarios es un atentado capaz de perturbar la administración pública.

El art. 287 contiene una disposición nueva tomada del código de Holanda y concordante con análogas de los códigos de Italia, España, Alemania y otros países. Está destinada á reprimir á los testigos, peritos ó intérpretes que, siendo legalmente citados, se abstuvieron de prestar el servicio requerido. Esa clase de abstención, retardando ó paralizando la administración pública, debe ser apreciada como una verdadera resistencia á la autoridad.





El artículo 288 del Proyecto corresponde al n° 1 del artículo 237 del Código, único caso de los enumerados en él que puede ser calificado de desacato con arreglo á los principios que acabamos de exponer. Las enmiendas que hemos introducido en la redacción tienden á precisar el concepto del delito de desacato, á ejemplo de las legislaciones extranjeras, especialmente de la española, la francesa y la italiana,

El artículo 289, tomado del código italiano, prohíbe la prueba de la verdad ó notoriedad de los hechos ó calidades atribuidas al funcionario desacatado, prohibición implícita en el Código actual, que sólo admite la prueba de las imputaciones cuando ellas afirman la existencia de un delito, es decir, cuando el caso deja de ser de injuria ó desacato y pasa á ser de calumnia.

El capítulo proyectado sobre usurpación de autoridad, títulos ú honores corresponde al que el Código contiene sobre usurpación de autoridad y comprende, además, el uso indebido de insignias ó distintivos oficiales, grados académicos, títulos profesionales ú honores, infracción que el Código actual no prevé, pero que conviene prever, como lo hacen muchas legislaciones extranjeras, pues afecta el buen orden de la administración pública. Hemos eliminado de este capítulo el ejercicio de atribuciones ajenas, hecho por un empleado público, porque ese caso entra en el concepto del abuso de autoridad, tratado en el capítulo siguiente, siendo, como es, una extralimitación de la autoridad que se inviste. Los otros dos casos han sido conservados en el art. 290, modificándose la redacción en cuanto ha sido necesario para resolver dudas de interpretación. La disposición del artículo 242 del Código, ha sido suprimida, porque ella está



comprendida en las reglas generales sobre concurso de hechos punibles

Bajo la denominación de *abusos de autoridad*, el Código vigente enumera una serie de hechos cometidos por funcionarios públicos con violación de sus deberes y contra el derecho de los particulares. En el método que la comisión ha adoptado, de clasificar los delitos según la naturaleza del derecho lesionado, la calidad oficial del delincuente no determina la calificación del delito, cuando el mismo derecho puede ser violado por particulares, siendo una mera circunstancia susceptible, según los casos, de producir una agravación en la pena. Por eso, todos los hechos enumerados entre los abusos de autoridad por el Código, han sido trasladados á otros capítulos del Proyecto, especialmente al de delitos contra la libertad individual. En su reemplazo, la Comisión ha agrupado en el capítulo IV del título que explica, bajo la denominación de *abusos de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos*, todos los hechos que importando un ejercicio abusivo de la autoridad confiada á los funcionarios públicos, perturban el orden regular de la administración, sin tener los caracteres de algunos de los otros delitos previstos en el Código proyectado.

El caso más genérico y más grave de abuso de autoridad, enunciado en el artículo 292 del Proyecto, es, sin duda alguna, el del funcionario público que, traicionando la confianza depositada en él por el pueblo ó por alguno de los poderes públicos, emplea la autoridad recibida como un instrumento para violar la constitución ó las leyes cuyo guardián celoso debiera ser. El espíritu de las instituciones argentinas condena incuestionablemente actos de esa naturaleza



y por lo tanto, es extraño que el Código Penal no consigne para ellos alguna disposición. El vacío ha sido llenado por la Comisión en términos análogos á los usados por el Código holandés al reprimir los mismos actos cometidos por los jefes de los departamentos ministeriales. Los artículos restantes del capítulo (293 á 297) contienen otros casos de abuso de autoridad ó de violación de deberes oficiales que el Código actual no ha previsto y que la Comisión ha consignado siguiendo el ejemplo de las legislaciones extranjeras citadas al pié de cada disposición.

El capítulo quinto de este título del Proyecto prevé el delito de *violación de sellos y documentos*, incompletamente legislado por el Código actual bajo la denominación de *infidelidad en la custodia de documentos*. El Código sólo reprime el hecho cuando los culpables son empleados públicos que tengan á su cargo la custodia de los sellos ó documentos violados. Pero es obvio que el mismo delito puede ser cometido por particulares y que no hay razón alguna para dejarlo impune en esos casos, abandonando indefensa la administración contra ataques que la hieren en una de sus funciones inherentes. En consecuencia, hemos sustituido los artículos 258 á 261 del Código por los 298 y 299, cuyos términos comprenden los casos omitidos y consignados por aquéllos, con excepción de la disposición relativa al que consiente la violación, que es innecesaria, pues está regida esa hipótesis por las reglas de la coparticipación en los delitos.

El capítulo sexto, relativo al cohecho, contiene con pequeñas variaciones, la materia del que lleva el mismo rubro en el Código vigente. Hemos suprimido la atenuación especial respecto del cohecho para el cumplimiento de sus deberes y del que soborna para



favorecer á sus próximos parientes, porque la pena divisible es suficientemente elástica para permitir al juez la admisión de esa atenuación, cuando las circunstancias de la causa lo aconsejen, sin necesidad de que la ley se muestre de antemano benévola con los autores de un delito tan depresivo de la dignidad de la administración pública. Hemos abandonado también el sistema de aplicar al juez cohechado la misma pena que impuso en la sentencia injusta, porque, no sólo es una excepción inconveniente al sistema de penas divisibles y graduables según las circunstancias de la causa, sinó que, en el Código actual, dá margen al absurdo de que, cuando la sentencia es absolutoria, el juez debe sufrir el mínimun de tres años de penitenciaría, por más insignificante que sea la responsabilidad del delincuente absuelto, mientras que, si fuera condenatoria, podría suceder que sólo tuviera que sufrir un mes de arresto, no obstante tratarse de un caso realmente más grave.

El art. 304 del proyecto es nuevo y está tomado del código español. Prevé el caso, por desgracia har-to frecuente para despreciarlo, del funcionario que admite regalos que le son presentados en consideración á su oficio. Este caso se asemeja á los demás de cohecho, en que el delincuente se propone corromper la conducta del funcionario, predisponiéndolo á su favor, y se distingue en que no aparece manifiesto el propósito de obtener inmediatamente un acto ilícito determinado de parte del funcionario. En un país republicano, con más razón que en cualquier otro país civilizado, los funcionarios públicos deben estar á cubierto de toda sospecha de inmoralidad, y, para ello, la ley penal debe reprimir los hechos que tiendan á arrojar esa clase de sospechas, como los

regalos que la amistad particular no justifica y que son, por decirlo así, la forma más refinada del cohecho.

El capítulo proyectado sobre *malversación de caudales públicos* es, con ligeras modificaciones, igual al que lleva el mismo epígrafe en el Código vigente.

El artículo 306 del Proyecto correspondiente al 266 del Código, se diferencia de él en que disminuye el mínimum de la pena, para facilitar su graduación judicial, en que elimina la innecesaria calificación de *públicos* dada á los caudales ó efectos de que trata, y en que, en vez de las palabras «aplicación pública distinta de la señalada *por las leyes*», emplea como el código español, las de «aplicación pública diferente de aquella *á que estuvieren destinados*», expresión más correcta y que comprende los casos en que la aplicación de los valores no esté regida por las leyes, sino por otras disposiciones generales ó particulares.

En el art. 307, que reemplaza al 267 del Código se ha suprimido el requisito de espontaneidad que éste exige en el reintegro de caudales malversados sin daño ni entorpecimiento del servicio público, porque el motivo del reintegro es una de las circunstancias que el juez debe tener en cuenta al graduar la pena y porque el Código no ha previsto la hipótesis de que el reintegro se efectúe contra la voluntad del malversador, aunque sin daño ni entorpecimiento del servicio público. Además hemos declarado, para evitar dudas, que, cuando el reintegro no se verifique, el hecho se reprima como sustracción. Cuando el uso indebido de los fondos, fuese sin daño ni entorpecimiento del servicio público, creemos innecesaria la pena de multa y la hemos suprimido, cambiando, según nuestro plan, la de suspensión por la de inhabilitación especial.





El artículo 298 del código contiene, á nuestro juicio, dos defectos: 1° que reprimiendo con la misma pena al autor de una sustracción de caudales públicos y al que lo consiente, introduce una excepción inconveniente á la regla general de la codelinuencia; 2° que no determina con precisión la pena, pues decir que se aplique la señalada para los ladrones, es dejar al intérprete en la mayor incertidumbre para elegir entre las penas de los distintos casos de robos, de hurtos y de defraudaciones, ya que no hay en el Código ninguna disposición en que llame ladrones á una clase de criminales y les señale pena. Nuestro artículo 308 obvia estos inconvenientes.

El artículo 309 del proyecto, tomado del 406 del Código español, prevé el caso de que un funcionario público, por imprudencia ó por inobservancia de los reglamentos diere ocasión á que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales ó efectos de que se trata en el artículo anterior. La hipótesis es muy posible y era menester consignarla en el título que explicamos, puesto, que, por las razones que hemos dado en otro lugar, nuestro proyecto no contiene, como el Código actual, una disposición general destinada á reprimir todas las especies de culpa ó negligencia.

El artículo 310 es, en el fondo, idéntico al 269 del Código, cuya redacción ha sido ligeramente enmendada para darle mayor claridad.

El artículo 311 comprende las disposiciones de los 270 y 271 del Código, sin más enmiendas que el reemplazo de la doble pena de multa y suspensión por la de inhabilitación especial, hecho conforme á nuestro plan de penalidad.

El capítulo octavo de este título reprime á los funcionarios que se interesan en las negociaciones in-



compatibles con las funciones públicas. El código actual ha dedicado á esta materia dos artículos, el 272 y el 273; pero ha dado al delito el nombre de fraude sea que consista en un concierto fraudulento con los acreedores ó deudores del estado, sea que consista en interesarse en contratos ú operaciones con el estado, sin defraudarlo. El primer caso, que es el del art. 272, ha pasado en nuestro Proyecto al título de las defraudaciones por razón de la materia. El segundo caso forma el art. 312 del Proyecto, único del capítulo que explicamos y casi idéntico al 273 del Código, cuyos términos apenas han sido alterados para aclararlos, salvo en lo relativo á la pena, que hemos agravado por creer insuficiente la actual para delito tan peligroso.

Los artículos 313, 314 y 315 del capítulo proyectado sobre *exacciones ilegales*, corresponden respectivamente á los artículos 274, 275 y 276 del Código vigente. Las enmiendas introducidas consisten en precisar la redacción, en ajustar la penalidad al sistema del Proyecto y sustituir, como en el caso del artículo 268, y por razones idénticas, la alusión hecha en el artículo 275 á las penas señaladas para los ladrones por la expresión de una pena determinada: penitenciaría de tres á diez años con inhabilitación absoluta y perpetua.

En el capítulo sobre *prevaricato*, mantenemos el concepto que de este delito fija el Código actual; atentado contra la administración de justicia cometido por los jueces ó abogados, con violación de sus deberes esenciales. El artículo 316 del Proyecto reemplaza á los artículos 245 y 246 del Código, modificándolos en el sentido que expondremos. El Código reprime al juez que expide *sentencias definitivas é interlocuto-*



rias con fuerza de tales, si fuesen contrarias á la ley expresa invocada en autos. Quedan sin reprimir las demás resoluciones judiciales contrarias á la ley invocada. No creemos que haya motivo bastante para sancionar esa impunidad, puesto que el daño causado y la malicia revelada en un auto ilegal, aunque no definitivo, como lo sería, por ejemplo, el que ordenase un embargo no autorizado por la ley, pueden ser igualmente graves y aún más, que una sentencia definitiva injusta, según la entidad del pleito y la situación personal de las partes. Por eso el Proyecto emplea los términos más extensos de *resoluciones contrarias á la ley expresa*; y en vez de *invocada en autos*, dice: *invocada por las partes ó por el mismo*, locución que creemos más precisa. Eliminamos el inciso final del n.º 1.º del artículo 245, que pone á cargo del juez la prueba de haber procedido por error, porque no estimamos justificada esa excepción á la regla general que establece la presunción de voluntad criminal en el autor de cualquier hecho punible, mientras no resulte la presunción contraria de las circunstancias particulares de la causa. Por la misma razón suprimimos las palabras *á sabiendas* del n.º 3.º. El Código incrimina al juez que cita hechos ó resoluciones falsas, pero no consigna el objeto de la cita. Es esta una deficiencia, porque no hay utilidad en reprimir citas falsas cuando éstas no perjudiquen á los litigantes, es decir, cuando no sean hechas para fundar una resolución judicial. Nuestra redacción salva esa deficiencia. Suprimimos el n.º 2.º, que declara delincuente al juez que conoce en causa que patrocinó como abogado, porque contra ese hecho hay remedios bastantes en las leyes reglamentarias de las recusaciones é impedimentos de los jueces, sin necesidad de recurrir al derecho penal,



desde que la existencia de una causa de excusación en el juez no trae aparejada la injusticia de sus resoluciones. Los mismos autores del Código lo han comprendido así, al abstenerse de incriminar el conocimiento de causas de parientes próximos, de amigos íntimos ó de enemigos manifiestos y demás pleitos para cuya decisión están los jueces impedidos por razones particulares. La pena señalada al juez prevaricador por el art. 246 del código es la destitución é inhabilitación especial perpetua, para los casos ordinarios, y, para el caso de haberse ejecutado una sentencia condenatoria injusta, la misma pena impuesta por dicha sentencia. La primera pena, siendo fija, no es susceptible de ajustarse á las modalidades del delito. La hemos sustituido por la de multa agravada con inhabilitación absoluta perpetua, considerando que el que ha sido juez indigno se halla moralmente incapacitado para desempeñar cualquier otra función pública. La segunda pena del citado art. 246 sería lógica en el sistema del talión, pero no lo es en el nuestro; de suerte que hemos debido reemplazarla por otra compatible con el plan del Proyecto: la de penitenciaría de tres á quince años, agravada con inhabilitación absoluta perpetua.

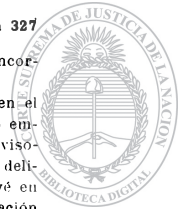
El art. 317 del Proyecto corresponde á los artículos 246 y 248 del Código y reproduce sus disposiciones sobre el prevaricato de los abogados y procuradores, con leves enmiendas en la redacción y en la penalidad, eliminado el n.º 1.º del art. 247 por estar comprendido en el capítulo sobre violación de secretos. Contiene además, para completar la enumeración de casos, una frase que menciona al que, de cualquier modo, perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada, locución análoga á la empleada para



la misma hipótesis por el código italiano. Finalmente nuestro artículo consigna una circunstancia agravante, omitida en el código argentino y mencionada en el de Italia, la de que el defendido ó representado hubiera sufrido pena corporal á consecuencia del prevaricato. Cuando esa circunstancia concurre, y la pena impuesta á la víctima pasa de dos años de penitenciaría, consideramos insuficiente la pena de multa y la sustituimos por penitenciaría de dos á seis años é inhabilitación especial por doble tiempo.

Suprimimos del art. 249 del Código la declaración de ser aplicable á los jueces árbitros ó arbitradores y á los peritos las disposiciones relativas al prevaricato; porque es innecesaria respecto de los primeros, ya comprendidos en la designación genérica de jueces empleada en los artículos anteriores, y porque es inconveniente respecto de los peritos, cuyo mal desempeño está reprimido en el capítulo referente al falso testimonio. Conservamos la declaración respecto de los asesores y la extendemos á los fiscales y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades, puesto que éstos también pueden contribuir con consejos maliciosos á que los negocios sean injustamente decididos. He ahí el fundamento del art. 318 del Proyecto.

En el capítulo undécimo, compuesto de los artículos 319 y 320, proyectamos la represión de la denegación y retardo de justicia, hechos que el Código actual no ha previsto, pero que son evidentemente punibles, por cuanto tienden á paralizar ó enervar la acción protectora del poder judicial sobre los derechos individuales y colectivos. Por lo demás, las disposiciones que le dedicamos están fundadas en la le-



gislación comparada, como lo demuestran las concordancias puestas al pie de los artículos.

El Código vigente trata del *falso testimonio*, en el título de las falsedades, atendiendo sólo al medio empleado para cometer el delito. La Comisión Revisora, consecuente con su sistema de clasificar los delitos según la naturaleza del derecho lesionado, vé en el falso testimonio un delito contra la administración pública, de que el testigo, el perito ó el intérprete á quienes se pide declaración ó informe, no son más que funcionarios auxiliares. Hé aquí porque tratamos esta materia en el título que estamos explicando.

Los artículos 286, 287, 288, 289, 291 y 292 del Código contienen una enumeración casuística de hipótesis diversas de falso testimonio, con una enumeración paralela de penas diferentes. El Proyecto sustituye todas esas disposiciones por el artículo 321, que precisa los caracteres del delito, haciéndolo consistir en afirmar una falsedad, negar la verdad ó callar, en todo ó en parte, lo que se sabe respecto de los hechos sobre que se depone ó informa. El Código solo dice testigo falso, falsa exposición, falsa declaración ó falso testimonio dejando abierto el camino para la duda sobre el alcance del adjetivo *falso*. En cuanto á la penalidad, establecemos, como hemos hecho respecto de todos los delitos, una pena graduable para los casos ordinarios, y señalamos después una pena más severa para el caso de concurrir las circunstancias agravantes más notables de que el hecho es susceptible. En la hipótesis del artículo 321, consideramos agravante la circunstancia de cometerse el delito en perjuicio de un procesado, como también lo considera el Código actual, y determinamos dos penas, la más grave para el caso en que el falso testimonio



ocasionase la condenación del procesado á más de diez años de penitenciaría, y la más leve para los demás casos. Entre el máximo y el mínimo de las tres penas, hay espacio suficiente para que los jueces proporcionen la represión á la mayor ó menor criminalidad del agente. El artículo 322 es igual al 290 del Código.

El título de los *encubridores* incluido en la parte general del Código, no obstante que legisla realmente sobre un delito particular, forma en el Proyecto, bajo el epígrafe de *encubrimiento*, el capítulo décimotercio del título de los delitos contra la administración pública, donde debe ser colocado en razón de la naturaleza del derecho lesionado. No ha sufrido ninguna alteración fundamental. El artículo 42 ha pasado á ser el 323, perdiendo el inciso 6° por estar comprendido en el 2° y en el 7°. El art. 324 del Proyecto conserva la circunstancia agravante del art. 43 del Código. La penalidad en ambas disposiciones ha sido variada lo suficiente para ajustarla al plan del Proyecto. El art. 325 comprende las circunstancias eximentes del art. 44 del Código, con excepción de las relativas á los sacerdotes, médicos, abogados y domésticas. Contiene además la declaración del art. 45 acerca del alcance de la exención de pena. Finalmente, hemos incluido en él dos disposiciones nuevas. La una declara exentos de pena por ocultación, á los afines en segundo grado, como lo están los consanguíneos, pues no hay razón para negar á tan próximos parientes la franquicia concedida á los amigos íntimos del autor del delito. La otra declara la misma exención en favor de los encubridores de delitos leves, porque no hay interés social en emplear los recursos de la autoridad, pública en la persecución de hechos que más revelan



benevolencia que maldad, dirigiéndose, como se dirigen, á proteger los delincuentes menos peligrosos. En cuanto á las supresiones proyectadas, pocas palabras bastan para fundarlas. La relación del doméstico con el patrón no puede equipararse al vínculo del parentesco cercano ó de la amistad, formado por afectos íntimos y por deberes de orden más elevado. El servicio doméstico no debe entonces obtener la misma exención que el parentesco ó la amistad. Concedérsela no es más que fomentar la impunidad de los delincuentes, proporcionándoles auxiliares obedientes é irresponsables. La exención de pena por ocultación á favor de los sacerdotes, médicos y abogados, cuando el secreto les haya sido confiado en ejercicio de sus funciones, no es necesario declararla, puesto que, siendo un delito la violación de esos secretos, no puede serlo también su encubrimiento.

El capítulo proyectado sobre *evasión* sustituye al del Código sobre infidelidad en la custodia de presos. La diferencia fundamental consiste en que el Código no incrimina la evasión del condenado ó preso en ningún caso, ni la simple connivencia en ella, limitándose á reprimir la cometida por el guardián del fugitivo, mientras que el Proyecto incrimina, como el código italiano, la evasión acompañada de violencia en las personas ó de fuerza en las cosas y toda connivencia en cualquier clase de evasión. Puede admitirse la impunidad del detenido no sentenciado que procura y obtiene por la fuga su libertad, sin causar daño ni ofensa material; pero el respeto del instinto de la libertad, no debe llevarnos á sancionar la irresponsabilidad del que se evade usando medios punibles. Por eso, reprimimos, en el art. 327, aunque levemente, la evasión practicada con esas circunstancias agravantes.

Tampoco es razonable autorizar el favorecimiento de la evasión ajena, hecho á todas luces ofensivo contra la administración de justicia, la cual tiene derecho de contar con la cooperación de todos los miembros de la sociedad. En consecuencia, el art. 328, proyectado en sustitución de los 255, 256 y 257 del Código, elimina de éstos la condición de que el autor de connivencia esté encargado de la custodia ó conducción del preso ó condenado. Por lo demás, hemos proporcionado la penalidad conforme al sistema del Código, es decir, teniendo en cuenta la entidad del delito por el cual el fugitivo estaba preso ó condenado. En cuanto al quebrantamiento de la condena ejecutada por el mismo reo, no está previsto por el Código ni por el Proyecto en los capítulos que acabamos de considerar. El Código solo prevé delito en la parte general respecto de todas las penas, menos en cuanto á la de inhabilitación, cuyo quebrantamiento está previsto en el libro de las faltas.





TÍTULO XI

Delitos contra la fé pública

(Arts. 328 á 346)

En consecuencia del sistema adoptado en el Proyecto, de clasificar los hechos punibles según la naturaleza del derecho lesionado, y no según el medio de ejecución, damos al título *de las falsedades*, del Código Penal, el de delitos contra la fé pública, como lo hacen varios códigos modernos. La *falsedad*, esto es, el engaño, la mentira, como medio de ejecución, interviene en varios otros delitos; pues todas las malas acciones se ejecutan con intervención de la violencia ó de la astucia. Es peculiar á las estafas el que intervienga la simulación de la verdad; el estupro no puede cometerse si no interviene el engaño necesario para la seducción; la calumnia no existe sin la falsa imputación. El derecho preeminente que ha sido lesionado en estos casos es el de la propiedad, el de la honestidad ó el del honor. En muchos de los hechos previstos en el presente título aparecerá también la lesión del derecho de propiedad; pero un interés superior al de un daño causado á un particular es el que recibirá la ofensa de este delito: la manifestación de verdad pública y forzosamente aceptada por todos, impuesta por ciertos signos exteriores del objeto que



los lleva, ó por la condición ó funciones de la persona de quien emanan. Alguien es perjudicado cuando recibe en pago una moneda falsa, ó se le opone un instrumento ó certificado falso; pero al lado de este daño privado aparece el daño mayor que recibe la fe pública.

En el primer capítulo de este título hemos reunido la *falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito*, que por las razones que en seguida indicaremos, deben ser equiparados.

El Código Penal no ha previsto la falsificación de moneda, consecuente en esto con su sistema de ser un código para las provincias, y no el código penal de la Nación. Como sólo al Congreso corresponde hacer sellar moneda y fijar su valor y el de las extranjeras, el delito se cometería contra la soberanía nacional quedando, en consecuencia, suficientemente previsto en la ley sobre crímenes justiciables por los tribunales federales. El error no está en este detalle sino en el sistema, y á este respecto, agregaremos á lo que ya hemos dicho oportunamente, algunas consideraciones al terminar esta *Exposición*.

En el artículo 328, el Proyecto prevé el delito de que falsificare ó adulterare moneda que tenga curso legal en la República y el del que la introdujere, expendiere ó pusiere de cualquier modo en circulación. Estos casos son los previstos en el art. 60 de la ley penal de 1863. No seguimos á esta ley en sus distinciones de penalidad para los casos en que la falsificación fuese de moneda de oro, plata ó cobre; pero aproximando el mínimum de la pena en el artículo del Proyecto al mínimum del artículo de la ley federal, el primero permitirá tener como circunstancias de apreciación para la medida de la pena, concurrentemente



con otras ó con accidentes particulares, las de la clase, cantidad, calidad, y valor de la moneda en que hubiere recaído la falsificación, si en el caso particular estas circunstancias debieran tomarse en cuenta.

En el artículo 329 se prevé el cercenamiento de la moneda legal, que presentando una adulteración más fácil de percibir y conservando parcialmente la moneda legítima, debe tenerse por causa suficiente para la imposición de una pena menor. Es la disposición del art. 91 de la ley federal.

Otro motivo admitido por este último artículo, como por la generalidad de las leyes penales, para una atenuación mayor aún de la pena, es el del artículo 330 del Proyecto, de que la moneda falsificada, adulterada ó cercenada se hubiere recibido de buena fé y se pusiere en circulación conociendo la falsedad ó cercenamiento.

En el Código Penal, la falsificación de documentos de crédito y la de billetes de banco, aunque colocadas en distintos capítulos del mismo título, están reprimidas con la misma pena: tres á ocho años de presidio y quinientos á cinco mil pesos de multa. La Ley federal que fija cuatro á siete años de presidio por la falsificación de moneda, señala la misma pena para la falsificación de documentos de crédito. Es que la naturaleza y funciones del objeto sobre que recae la falsificación son los mismos, la representación del valor. Si por una parte pudiera pensarse que la falsificación de moneda importa un delito mayor por la falta de respeto á la soberanía de que emana la moneda, por otra el peligro de un mal mayor se presenta en la falsificación de billetes de banco ó de documentos de crédito, por la más extensa circulación de aquéllos, el mayor valor de las operaciones que



tienen por objeto los segundos. Esta modificación no es propiamente una reforma, en cuanto equipara documentos expresados á la moneda, puesto que el hecho ya resulta de las leyes actuales; pero ella tiene una importancia más trascendental. Desde luego, el artículo 285, que forma el capítulo de la falsificación de billetes de banco, reprime la falsificación de billetes de bancos *autorizados*. La autorización para emitir billetes no puede emanar sinó del Congreso, si se recuerda la disposición del artículo 108 de la Constitución, que quitando á las provincias la facultad de emitir billetes sin autorización del Congreso, les prohíbe implícitamente el que ellas confieran esa autorización á particulares. La disposición del artículo 285 del Código Penal se refería, pues, al mismo caso del artículo 62 de la ley federal, que habla de billetes de un banco erigido *con autorización del Gobierno Nacional*, y como disposición posterior, emanada del mismo legislador sobre el mismo punto, se la hubiera creído ya derogada, cuando el artículo 30 de la ley de 3 de Noviembre de 1887 restableció su vigencia, al someter á las disposiciones del título X de la ley federal, la falsificación de billetes de los bancos garantidos. Estas inconsecuencias son propias de la dispersión de leyes penales que hoy existe en el país. Nuestro artículo salva, además, una gravísima omisión del Código penal, al extender la equiparación de los documentos de crédito á los títulos y cédulas al portador emitidos legalmente. De la enumeración del artículo 283 resulta que han quedado excluidas de represión las falsificaciones de títulos al portador emitidos con autorización legal por empresas de crédito. «Si la falsificación de títulos de crédito público es un delito tan grave como la fal-



sificación de billetes de banco, y quedan equiparados por la medida de la pena; si por otra parte se imponía una severa sanción á la falsificación de billetes de banco, no se concibe porqué no tendrán igual protección de la ley las emisiones de otros títulos al portador, hechas con la autorización del estado. La objetividad del delito es la misma: tanto es un gravísimo atentado á la fé pública garantida por la autorización del estado, la falsificación de cédulas hipotecarias como la falsificación de billetes de banco.» (1)

El artículo 332 establece una disminución de la pena para el caso de la falsedad cometida en monedas *extranjerías que no tengan curso legal* en la República, ó con respecto á billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito extranjeros. Esta disminución de pena se justifica por la menor extensión del daño posible, desde que la falsificación no se opera en monedas ó billetes que tengan fuerza cancelatoria contra todos, y por no hallarse comprometida ó afectada la autoridad de una ley, que acompaña siempre á la moneda ó al billete autorizado en el país.

La falsificación de billetes de banco, títulos, cédulas ó acciones de compañía puede presentarse también por una emisión ilegal. El billete, el título ó la cédula no representa un valor sino en los límites de la autorización legal. Las emisiones extra-legales, aun cuando no se hagan con propósito de lucro personal, constituyen un hecho gravísimo y fácil de producirse en las épocas de gran actividad comercial ó de especulación.

El capítulo *falsificación de sellos, timbres y mar-*

(1) RIVAROLA, *Exposición y crítica del Código Penal*, n° 1155.



cas, reemplaza en el Proyecto al de falsificación de sellos, *firmas* y marcas del Código Penal, convenientemente ampliado para que pueda sustituir también las disposiciones penales de las leyes especiales. No aparece en nuestro capítulo la falsificación de firmas, como no aparece en la generalidad de los códigos que tenemos presentes. El código Tejedor preveía la falsificación de «la firma del Gobernador de la provincia y sus ministros ó de los presidentes de las cámaras», en documentos públicos (art. 424), y en el artículo siguiente la falsificación de la firma de cualquier otro empleado público, sobreentendiéndose que también lo fuera en documento público. La ley federal no habla sino de la falsificación de la firma «del Presidente de la Nación ó de sus ministros de estado». Tanto esta disposición como la del artículo 424 del código de Tejedor fueron tomadas del código español de 1850, que ha mantenido en el de 1870 sus disposiciones sobre la firma del rey, del regente del reino y de los ministros de la corona. En buena lógica parecía que la disposición debía generalizarse, y así lo hizo el Código Penal, creando el delito de falsificación de firmas de funcionarios públicos, sin que estuvieran puestas en documentos públicos, como lo decía el Código Tejedor. Ni una ni otra disposición son admisibles. La imitación aislada de una firma no viola ningún derecho ni causa ningún perjuicio. La importancia de toda firma nace del escrito á que está aplicada; y no de todo escrito, sino del que constituye un *documento*. La firma no es entonces sino un requisito esencial del documento, y su falsificación cae bajo las disposiciones del capítulo siguiente. El código español ha creado el delito de falsificación de la firma del rey, pero no tiene otras concordancias que



las de nuestras leyes, que sustituyeron en este caso el rey por el Presidente de la República ó el Gobernador de la Provincia. Fuera del documento, solo bajo un aspecto puede preverse el delito de falsificación de firma de un funcionario público: cuanto se la aplicare oficialmente á la identificación de un objeto cualquiera, caso en que reemplaza á cualquier otra contraseña, y es el excepcionalmente referido en el artículo 335.

La falsificación de sellos oficiales puede aplicarse á todos los usados como signo de autenticidad de los documentos públicos; á los sellos ó timbres usados como medio de percepción de los impuestos, y á las marcas y contraseñas de que se use en las oficinas públicas para identificar ó contrastar cualquier objeto, peso ó medida. El Código Penal no menciona sino la falsificación de *sellos oficiales*, que reprime con prisión de uno á tres años. Si bien en los términos usados por el Código puede entenderse que se contienen implícitamente los otros, no sería difícil que sólo se entendiera por *sellos oficiales* los primeros de las categorías que hemos expresado. Tanto por este motivo como por ser conveniente establecer distintas penas para los primeros casos, que pueden importar un daño mayor y que tienen un objeto más trascendental, que para el último que cuida un interés de orden más secundario, como es el de prevenir defraudaciones á particulares ó cualquier engaño, es que distribuimos esta materia en los artículos 334 y 335, proyectando que se reprima con penitenciaría por uno á cuatro años al que falsificare sellos oficiales, papel sellado, sellos de correos ó telégrafos ó cualquier otra clase de efectos timbrados, cuya emisión esté reservada á la autoridad ó tenga por objeto asegurar



el pago de los impuestos; y con penitenciaría por seis meses á dos años al que falsificare marcas, contraseñas ó firmas de que se use en las oficinas ó por funcionarios públicos para contrastar ó identificar cualquier medida, peso ú objeto.

El artículo 278 del Código Penal prevé la falsificación de sello, firma, marca ó contraseña de individuos ó establecimientos particulares. La ley federal limita el caso al de que la falsificación de estos sellos, marcas y contraseñas tuviera por objeto defraudar la renta nacional. El artículo 28 de la ley de marcas de fábrica y de comercio reprime á los que falsifiquen ó adulteren de cualquiera manera una marca de fábrica ó de comercio, ó pongan sobre sus productos ó los efectos de su comercio una marca ajena. Queda prevista la especialidad de este artículo de la ley de marcas, en el capítulo de los *delitos contra la propiedad intelectual é industrial*; y sustituimos las otras disposiciones por nuestro artículo 336 que prevé la falsificación ó adulteración, de cualquiera manera, de un sello; marca, billete ó contraseña de empresas ó establecimientos particulares

El artículo 237 del Proyecto, reprime, como el artículo 220 del código holandés, al que empleare, vendiere, pusiere en venta, circularé ó introdujere en la República, sellos, timbres ó marcas falsas, adulteradas ó confeccionadas ilegalmente, ó los objetos á los cuales estén ilegalmente aplicados, como si fuesen legítimos. Si el Código Penal ha previsto en el artículo 294, como el Proyecto en el 347, el delito del que fabrica ó introduce en el país ó conserva en su poder cualquier clase de útiles ó instrumentos conocidamente destinados á la falsificación, con mayor razón debe preverse el caso de nuestro artículo 337, pues si en



el artículo 294 del Código Penal hay un acto que puede reputarse preparatorio de la falsificación, en el de Proyecto existe la tentativa ó la falsificación misma.

La falsificación puede realizarse no solo por la creación ó adulteración del sello, timbre ó marca, sinó también por la restauración de los mismos cuando hubieren sido inutilizados. Este es un punto reconocido sin disputa en la ciencia y consignado en algunos Códigos; por lo que lo incluimos en el artículo 338 del Proyecto.

El capítulo del Código Penal, *de la falsificación de documentos en general*, contiene numerosos errores, que creemos salvados con la forma que presentamos en el Proyecto. Está equivocado el inciso 1º del artículo 280, porque emplea de una manera impropia la palabra *suplantar*, que es la esencial, porque indica la acción que quiere reprimir, construyendo sobre ella una frase incorrecta y equivoca. Está también equivocado el inciso 3º que indica otros modos de falsificación, porque en el primer número del inciso emplea la redacción: «alterando documentos verdaderos de algunas de las maneras siguientes: 1º agregando cláusulas, suprimiéndolas, variándolas *sustancialmente*, ó borrándolas,» debiendo en todo caso, haberse aplicado el adverbio, á los demás modos enumerados en el período. Además de esto, el artículo deja subsistente, en el inciso 3º por su redacción viciosa la duda sobre si ha querido ó no penar lo que en la doctrina se llama *falsedad intelectual ó ideológica*, ó si castiga solamente la falsedad *material*. Aparte de estos defectos de detalle, hemos creído inconveniente la forma adoptada de determinar en particular cuales son los modos con que debe realizarse la falsificación para que constituya delito. Este sistema es defectuo-



so y se corre el riesgo de una enumeración viciosa ó incompleta. Bastará comparar el artículo 314 del código español; para que se vea cuantos otros casos podrían incluirse en el primero.

Por las consideraciones que dejamos ligeramente apuntadas, presentamos en el Proyecto la nueva forma del capítulo á que nos referimos. Distribuimos la parte fundamental de esta materia en los artículos 339, 340 y 341, comprendiendo en el primero la falsedad por *creación* material del documento, en el segundo la falsedad *ideológica* esto es, aquella en que el instrumento de formas verdaderas consigna declaraciones falsas; y en el último la falsedad por supresión en todo ó en parte de un documento, forma también de falsedad, por cuanto afecta la *verdad*, á cuya prueba de existencia está destinado aquél. El dos artículos del Proyecto no se determina al modo particular por el que se haya realizado la falsificación: cualquiera que sea el modo, el delito existirá si concurren las otras circunstancias esenciales indicadas también en los artículos, y la circunstancia general del dolo, que no se menciona especialmente, á mérito de la disposición de la parte general sobre este punto. Circunstancia esencial enunciada en los tres artículos es la de que la falsedad pueda resultar perjuicio. La posibilidad del perjuicio, y no sólo el perjuicio realmente producido, dá lugar en este delito á su consumación; pero es indispensable y esencial que esa posibilidad exista, porque en el caso contrario se trataría de una acción que siendo totalmente inocua, no habría porqué reprimir.

El artículo 342 consigna un caso especial, determinado no solo por la conveniencia de establecer una modificación de la pena, sinó porque no se requiere



en él como *esencial* la posibilidad del perjuicio. El médico que da un certificado falso concerniente á la existencia ó inexistencia presente ó pasada de alguna enfermedad, da forma de verdad á una mentira, que aún en el caso de no presentar la posibilidad de perjuicio, pues, más ordinariamente puede darse en beneficio de alguna persona, importa una grave violación de sus deberes profesionales.

El artículo 282 del Código Penal reprime el uso del documento falso con pena menor que la impuesta al falsificador. Lo mismo hacen el código español y algunos otros; pero preferimos la disposición del código italiano que equipara el uso de la falsedad á la falsedad misma, pues el que pone en acción la falsedad preparada por otro, el que hace efectivo el daño que existía virtualmente en la obra de otro, comete un hecho que merece una represión por lo menos igual á la del primero. Por esto, el artículo 343 del Proyecto, modificando el 282 del Código Penal, dispone que el que hiciere uso de un documento ó certificado falso, sea reprimido como si fuera autor de la falsedad.

El artículo 344 declara equiparados para los efectos de este capítulo, á los instrumentos públicos, los testamentos ológrafos ó cerrados, las letras de cambio y los títulos de crédito transmisibles por endoso ó al portador, no comprendidos en el artículo 331. La fé atribuida por distintas consideraciones á estos documentos, que les hace revestir un carácter semejante al de los instrumentos públicos, determina esta disposición.

El artículo 345 establece la agravante de la inhabilitación absoluta para el caso en que el autor del delito fuera un funcionario público que lo hubiera cometido

con abuso de sus funciones, pena necesaria que el Proyecto fija en todos los casos análogos.

En cuanto al art. 346 del Proyecto, se limita á reproducir el 294 del Código Penal. El 293 no se reproduce, por quedar comprendido en las prescripciones de los tres primeros artículos del capítulo.

El capítulo del *falso testimonio* no figura en este título, porque ha pasado, como se explica en su lugar, al título de los delitos contra la administración.



LIBRO TERCERO

De las faltas

MOTIVOS DE SU INCLUSIÓN EN EL CÓDIGO PENAL.

El Código Penal define en el artículo 1º la *falta* á la vez que el delito, á imitación del código español y algunos otros, pero no contiene hecho alguno previsto en tal carácter. Creemos que sería propio invertir los términos de la definición del citado artículo del Código Penal, y decir que las acciones ú omisiones penadas por la ley se llaman *delitos* ó se llaman *faltas*. Pero, sea que se atienda á la definición directa, sea á su inversión, hay que reconocer que cierto género de hechos punibles presentan algunas particularidades que los separan, por lo menos, si no los distinguen de los *delitos*, y que estos hechos están previstos en la casi totalidad de los códigos extranjeros, bajo la denominación genérica de *faltas*. ¿Porqué motivo el Código Penal, después de haber definido las faltas guarda silencio sobre ellas, y no contiene su enumeración y su represión? El Proyecto Tejedor, en una nota copiada de la Introducción del código de Baviera, después de haber distinguido, como éste y el código francés, los hechos



punibles en crímenes, delitos y contravenciones de policía, y de haber dicho que las disposiciones del código no comprendían las últimas, decía: «Hay actos ilícitos que perturban directamente el orden exterior del estado, que encierran un ataque á los derechos del estado ó de los particulares, ó que, según su carácter extrínseco y la intención del agente, tienden á la realización de ataques de esta naturaleza ó á la violación de derechos análogos. Pero hay también actos que, sin encerrar directamente la violación de un derecho, no son, sin embargo, indiferentes al legislador, á causa de sus consecuencias desagradables para el orden público, ó su influencia sobre la seguridad, la moralidad y el bienestar del estado; por lo que deben ser sancionados ó prohibidos con una pena. Los actos de la primer especie son ilícitos por motivos de justicia absoluta; lo son en todo tiempo y en todos los lugares Los actos de la segunda son muchas veces considerados en sí mismos indiferentes para el derecho, que sólo los prohíbe por motivos de utilidad relativa, y dependen de los tiempos, de la circunstancias, del carácter y costumbre de las naciones, como de las instituciones particulares y otras circunstancias accidentales». Después de estas consideraciones tendentes á definir el campo respectivo del delito y de la falta, continúa la misma nota con estas otras de un orden diverso: «Los actos ilícitos de la primera clase, por lo mismo que ofenden directamente un derecho, forman el objeto del poder judicial, mientras que las acciones ú omisiones de la segunda pertenecen al dominio de la policía. Esta diferencia, sacada de la sustancia misma de los actos en cuestión, debe manifestarse en la naturaleza de las penas, en sus consecuencias lega-





les, en el procedimiento etc., por desemejanzas tan considerables que toda legislación que no quiera mezclar cosas distintas entre sí y que tema confundir el sentido moral del pueblo, debe separar también las dos clases por códigos especiales y distintos.» (1) Pero á estas últimas consideraciones, los autores del proyecto de código de Baviera agregaban: «Por esto se ha juzgado necesario aislar completamente las *contravenciones de policía*, y formar de ellas un código particular que seguirá al presente código y formará la tercera y la última parte de la legislación criminal». (2)

Estas observaciones, vertidas por el Dr. Tejedor y aceptadas implícitamente por el Congreso, son el único precedente que explica porqué no aparece en el Código Penal un libro sobre faltas. En la legislación general extranjera no encontramos sino el Código de Baviera, el de Hungría y algún otro que haya dejado las contravenciones para un código particular, pero que forme parte de un sistema de legislación penal. Los demás códigos legislan las contravenciones como una parte especial del código penal. Así aparecen legisladas en los códigos francés, belga, español de 1850 y 1870, en el nuevo código italiano y en el que regía con anterioridad en el Reino, y en los de Alemania, Holanda, Chile, República Oriental del Uruguay, Estados Unidos del Brasil, etc.

¿Correspondía que la Comisión aceptara el precedente legado por el código Tejedor, del que podría decirse que ha adquirido mayor importancia por la doble sanción de las legislaturas locales primero y

(1) Proyecto Tejedor, anotación al art. 4º.

(2) Código Penal de Baviera, traducción francesa de Vatel, página 11.



del Congreso después? Si se aceptaba, como hasta hoy, que las faltas ó contravenciones no fueran incluidas en el Código Penal ¿á qué autoridad correspondería dictar el código de las faltas? Si el código de las faltas fuera una cosa distinta del código penal, ó mejor, si no fuera aquél también un código penal, podría dudarse de que estuviera en las facultades del Congreso dictarlo, puesto que el artículo 67, inciso 11 de la Constitución habla solo del código penal, y no del código de las faltas. Pero sería ésta una duda sin otro fundamento que el del error cometido en la preparación del proyecto Tejedor; del de la Comisión revisora del mismo presentado en 1881, y del Código Penal. Para fijar el sentido de la frase *dictar el código penal*, empleada en el artículo 67 inciso 11 de la Constitución Nacional, bastará recordar que en la época en que fué empleada, como antes y después, los códigos en general, colocaban las contravenciones ó faltas como un libro especial del código penal; que si las leyes bávaras lo hacían separadamente, las colocaban, sin embargo como formando parte de un sistema de legislación criminal, sistema que sería imposible realizar confiándose á distintas soberanías la amplia legislación sobre cada una de sus partes; que la disposición constitucional se refiere también, y á la vez, á los códigos civil, de comercio y de minería, lo que demuestra que ha reservado al Congreso toda la legislación de fondo, y un código de faltas sería también una ley de fondo; que aparte de algunas circunstancias especiales que pueden fundar respecto de las faltas excepciones á las reglas generales de responsabilidad, la naturaleza jurídica del delito y de la falta es la misma, acción ú omisión penada por la ley, y pueden ser comprendidos en la misma defi-



nición, como lo ha hecho el artículo 1° del Código Penal. El código penal de Hungría al tratar separadamente los delitos y las contravenciones, llama al de los primeros *Código penal de los crímenes y delitos* y al segundo *Código penal de las contravenciones*, declarando en el artículo 12 de este último que las disposiciones generales del código penal de los crímenes y delitos son también aplicables á los casos de contravenciones, salvo disposiciones en contrario del segundo código.

En las observaciones transcritas por el proyecto Tejedor, del código de Baviera no se consigna una distinción de importancia para la inclusión de una categoría de faltas y la exclusión de otras en el Código Penal: la de que «unas tienen el doble carácter de referirse á un conjunto de relaciones y de personas y de no estar expuestas á inestables apreciaciones y frecuentes modificaciones legislativas, y otras son contravenciones particulares al régimen de cualquier institución ó de un ramo determinado de actividad ó de personas, que deben preverse por leyes especiales.»(1)

La seguridad general de las personas, el orden público, el respeto á la autoridad, la conservación de la administración pública, la de las buenas costumbres, la de la propiedad, son sin duda alguna, intereses generales de todo el país que es indispensable proteger de una manera eficaz por medio de una penalidad adecuada y sistemada; se trata de reprimir hechos que lo mismo son perjudiciales en un extremo que en otro del país, y que no se refieren solo á una costumbre ó conveniencia local. La necesidad de proteger intereses generales, ó idénticos en cualquier

(1) ZANARDELLI—*Relazione ministeriale CLXXIX.*

punto del país, demuestran una vez más, que se trata de una materia de legislación general que debe corresponder al Congreso. Esto no priva á las provincias ó á las jurisdicciones locales de usar como sanción de sus disposiciones, leyes ó reglamentos de la penalidad, indispensable para hacer coercitiva su observancia. Sobre este particular nos remitimos á lo dicho en esta *Exposición* sobre el art. 6º del Proyecto.





TÍTULO I

Disposiciones generales

(Art. 347)

Queda dicho en lo que precede que, aparte de ciertas circunstancias especiales que puedan fundar respecto de las faltas algunas excepciones á las reglas generales de responsabilidad, la naturaleza jurídica del delito y de la falta es la misma. De aquí que la primera parte de nuestro Proyecto consigne las disposiciones generales con respecto á los *hechos punibles*, frase que se aplica á los delitos como á cualquier clase de contravenciones.

Le primera de las excepciones que consigna el artículo 347 excluye la represión de la tentativa de falta. En el artículo 65 ya se había dicho que la tentativa es la *resolución* de cometer un delito, manifestada por actos exteriores que tienen relación directa é inequívoca con el mismo. La resolución de cometer una falta no implica la existencia de un peligro efectivo, puesto que, en general, aún la misma falta no se constituye sino por una acción que implica un peligro meramente *posible*, pero no efectivo. Por otra parte, no hay interés ni conveniencia para la sociedad en llevar la sanción represiva á extremos tan remotos como el del peligro en que pudiera ponerla la intención de cometer una falta.



El número segundo del mismo artículo entrega á la corrección doméstica de sus superiores, á los menores de catorce años que cometieren alguna falta, sin perjuicio de la cooperación y vigilancia de la autoridad. Bastará recordar como explicación de esta disposición, que en el inciso 3° del artículo 59 se ha declarado exento de responsabilidad criminal á los menores de catorce años, determinándose en el mismo las medidas de prevención que puedan tomarse respecto de aquéllos, en consideración al peligro que resultaría de su completa libertad. Este peligro es de poca entidad en las faltas, para que sea necesario observar á este respecto las reglas allí consignadas.

En el número 3° del mismo artículo se consigna una disposición análoga á la del artículo 60 del código italiano, que dispone la responsabilidad penal de la persona bajo cuya potestad, dirección ó vigilancia se encontraba el autor de una falta, si se tratara de faltas á disposiciones que el guardador estuviera obligado á hacer observar, y si la falta pudo ser impedida por el mismo, empleando la debida diligencia. Lo que se reprime en este caso no es sino la negligencia de aquel á cuyo cargo estaba el evitar la falta de la persona subordinada.

El número 4° contiene una regla que es concordante con la del artículo 37 que autoriza la sustitución de la pena corporal por la pecuniaria, admitiendo, en razón de la escasa importancia del hecho, que el imputado de falta pueda hacer cesar el procedimiento penal pagando el máximun de la pena establecida para la falta de que se trate, las costas y la indemnización reclamada, lo que abreviará la terminación del juicio para todo el que reconociéndose autor de la falta se hallara dispuesto á la pena y reparación.

Se dispone en seguida que la reincidencia en la falta no da lugar á deportación, en razón de que esta medida tiene por objeto excluir de la sociedad á los delinquentes habituales, á causa de la amenaza constante de peligro en que los constituye su hábito de delinquir; y esa amenaza carece de importancia cuando resultare de la repetición de faltas, que pueden cometerse sin demostrar por ello una permanente intención perversa.

Los números 6º y 7º, entregan á la discreción de los jueces, como es necesario para armonizar la justicia y equidad con la aplicación de la ley, tanto el decretar el comiso de los instrumentos y efectos de las faltas, como la apreciación de la medida de la pena según las circunstancias particulares de cada caso.





TÍTULO II

Faltas contra la seguridad general

(Art. 348)

En este título agrupamos todas aquellas disposiciones relativas á los hechos que más ó menos directamente importen una posibilidad de peligro para la seguridad general de las personas. La convivencia social no solamente exige una sanción penal para proteger la vida y la salud de las personas contra todos los hechos que puedan ofenderlas, ejecutados con voluntad criminal ó por negligencia, sinó también contra todos los actos que importen tal posibilidad de peligro, desde que el daño que materialmente se podría recibir sería el mismo. Con este punto de vista general, y con la comparación de los códigos indicados en las concordancias, el Proyecto reprime en el título de que nos ocupamos, los hechos que excusamos analizar ó explicar en particular, para abreviar esta Exposición, y por que consideramos que manifiestamente se revela en ellos el carácter que dejamos indicado.



TÍTULO III

Faltas contra el orden público

(Art. 349)

Al título de *faltas contra el orden público* corresponde la represión de todos aquellos hechos que pueden afectar más á la sociedad en general, que particularmente á los individuos que la forman, más al interés público que al interés privado, más al estado que al ciudadano.

Creemos que tienen este carácter la publicación no autorizada de un plano, dibujo ó descripción de una obra de defensa militar, hecho que podría en circunstancias determinadas reportar un grave perjuicio al país; la fabricación, distribución, expendio ó venta de impresos ó piezas de metal cuya forma los haga confundibles á primera vista con monedas, billetes de banco, timbres ó especies amonedadas, hecho que tendría la posibilidad de causar un daño análogo al de la falsificación de moneda; los alborotos en el pueblo con gritos, cencerradas, ú otros ruidos, hecho que turba la tranquilidad general ó el orden público en una acepción concreta, etc.



CAPÍTULO IV

Faltas contra la autoridad y administración pública.

(Art. 350)

Enumeramos en el título de *faltas contra la autoridad y administración pública*, todos aquellos hechos que no constituyendo delito, tienen, sin embargo, suficiente gravedad para que su represión se justifique por la necesidad de mantener el funcionamiento regular de la autoridad y de la Administración pública. Tienen este carácter la infracción á una orden legalmente dada por la autoridad competente para objetos de justicia ó de seguridad; la negativa á prestar á la autoridad, pudiendo hacerlo sin riesgo personal, el auxilio que reclama en caso de flagrante delito ó de peligro para la seguridad general de las personas ó de los bienes; el acto de arrancar, hacer ilegible ó romper un anuncio fijado en paraje público por autoridad competente, y demás consignadas en el título.



CAPÍTULO V

Faltas contra las buenas costumbres

(Art. 351)

Deben tambien las buenas costumbres ser tuteladas no solo contra los hechos graves que importan delitos reprimidos con severas sanciones penales, sinó también contra todos los actos de menor entidad que ofenden el pudor, y por lo mismo que no importan la violación de un gran deber moral, tienen mayor facilidad de propagación, si se les deja impunes. Esta consideración bastará para justificar cada una de las disposiciones que comprende este título.



TÍTULO VI

Faltas contra la propiedad

(Art. 352)

Análogamente á los delitos contra la propiedad, hay *faltas contra la propiedad* cuya represión es necesaria, para mantener debidamente protegido un derecho tan importante. Unas se fundan en la presunción derivada de las condiciones personales del que ha sido condenado por mendicidad, robo, hurto, estorsión ó estafa de que una cantidad de dinero ú objetos no correspondientes á su estado y cuya procedencia legítima no justifique, sean ilícitamente adquiridos; de que la posesión en el mismo de llaves falsas ó instrumentos aptos para abrir ó forzar cerraduras, tengan por objeto la comisión de delitos; otras reprimen el caso del cerrajero que fabrica llaves de cualquier especie para quien no fuere poseedor ó legítimo tenedor del objeto ó edificio á cuya cerradura se destina, ó del herrero ó cerrajero ú otro artesano que abriere cerraduras de cualquier especie, á pedido de alguien, sin asegurarse de que éste sea el poseedor ó legítimo tenedor del edificio ú objeto que se pretende abrir; otras el uso de medidas ó pesas diferentes de las establecidas por la ley, que envuelve la facilidad de una defraudación, casos todos, como los demás, previstos en el título, en que el hecho ejecutado contiene la posibilidad del peligro para la propiedad.

CONCLUSIÓN



Queda terminada la exposición de los motivos que fundan las reformas al Código Penal, que presentamos en cumplimiento de nuestro encargo. Después de muchos meses de no interrumpida labor, tenemos la satisfacción de entregar nuestro trabajo al Poder Ejecutivo, en tiempo para ser presentado al H. Congreso de este año, si se considera que los esfuerzos de la Comisión han alcanzado el propósito que se tuvo en vista al instituirlo.

Quizás pueda observarse al examinar en general y en particular el Proyecto de reformas, que más que tal es un código nuevo el que presenta la Comisión. Desde luego, esto no sería un defecto si el nuevo código respondiera efectivamente á las necesidades del país, y desde este punto de vista como desde el de las doctrinas científicas en él aplicadas, fuera un cuerpo de leyes más eficaz para una buena acción de la justicia represiva. No puede la Comisión juzgar por sí misma del mérito relativo de su propia obra; pero dirá que considera justificadas plenamente, por otros motivos, las diferencias entre el Código proyectado y el vigente, si acaso el espíritu conservador que recibe con temor y prudente desconfianza toda noticia de innovación, se sintiera alarmado ante una comparación superficial



entre ambas leyes. Para desempeñar la Comisión su mandato en los términos del decreto en que le fué conferido, era indispensable que, aparte de la consideración general de que «el Código Penal vigente adolece de defectos que es indispensable hacer desaparecer por los peligros que entrañan para la sociedad y para los que sufren su aplicación», se tuviera en cuenta las recientes reformas de la legislación penal de otros «países que han dictado sus códigos como el resultado de estudios minuciosos y completos». Después de la sanción del Código Penal, se ha dictado con verdadera autoridad científica el código penal de Italia, prolijamente preparado y ámpliamente discutido en aquel país, que es sin duda el que mayor empeño ha puesto en el progreso de los estudios penales y de las ciencias directamente relacionadas con ellos. Se ha sancionado también el código penal de la República Oriental del Uruguay que, aunque más completo que el Código vigente, no está científicamente á la altura de los códigos europeos, pudiendo observarse de él que ha seguido alternativamente las huellas del código español de 1870, de los proyectos italianos anteriores al código actual de Italia, y las de nuestro propio Código vigente. En el momento de escribir estas últimas páginas de nuestra exposición, nos llega el reciente código penal de los Estados Unidos del Brasil, del cual sin tiempo para un estudio detenido como el que hemos hecho de los demás, podemos anticipar que ha resuelto de la misma manera que nosotros ciertas cuestiones que hemos discutido en el curso de esta Exposición, como las relativas á la extensión de la aplicación de la ley penal; las que nacen de la coexistencia de potestad legislativa en la nación y en las provincias, con motivo de la unidad de código penal y de la forma federal;



las de la inclusión de las faltas como parte de la ley de fondo, etc. Aparte de estos tres códigos sancionados con posterioridad al de la República, y los muy anteriores de Francia, Baviera, Bélgica, Alemania, España, de 1850, Chile, etc., que la Comisión presume que fueron consultados por los autores del Código penal, creemos no equivocarnos al afirmar, que aunque anteriores, no se tuvo en cuenta: 1° el código español de 1870; ciertos errores de detalle que se notaban en el de 1850 han sido copiados por el Código Penal; 2° el código holandés sancionado en 3 de Marzo de 1881, quizás el más perfecto de todos, y que por consideraciones particulares, relativas á nuestro carácter nacional, no hemos imitado tanto como lo merece: de este código ha podido decirse, con justicia, que «ha traducido en ley los principios hoy reconocidos y proclamados por los más célebres criminalistas, y dado, en cierto modo, la última palabra de la ciencia del derecho criminal en 1881»; 3° el código penal húngaro de los crímenes y delitos, de 1878, y el de las contravenciones de 1879, que ocupa un lugar muy distinguido en la codificación moderna. Nuestro Código Penal vigente, transcripto del Proyecto Tejedor con novedades tomadas del código español de 1850, no ha podido resistir la comparación con todos estos códigos, y de aquí que nuestro Proyecto, fiel á la indicación consignada en el decreto que le dió origen, aunque esforzándonos en conservar todo lo que fuera posible, de la ley vigente, porque no desconocemos cuanto conviene la estabilidad de los principios legales, haya extendido la reforma tanto en la materia que debe abarcar el código penal, como en la manera de aplicarse y cumplirse las penas, como en ciertas reglas relativas á la responsabilidad.



La sola circunstancia de no comprenderse en el Código todas las acciones punibles que aparecían, por falta de lógica, distribuidas en distintos cuerpos legales que sancionaban diversos sistemas de penalidad, estableciendo una represión incoherente y chocante entre sí, es por lo menos, uno de los grandes defectos que nuestro Proyecto corregirá, guardándose á la vez una obediencia hasta hoy no prestada á la ley suprema del país, la Constitución nacional, que en el artículo 67 inciso 11, como final del artículo 17, ha dado á entender bien claramente que *uno solo* tiene que ser el «*código penal argentino*»

Disponía, además, el decreto que se tuviera presente «que la ciencia penal se ha enriquecido con nuevas doctrinas que, si bien son objeto de discusión y no se imponen como verdades inconcusas, deben tomarse en consideración, para aceptar de ellas lo que pudiera importar un progreso para nuestra legislación». Era esta, sin duda, la consideración más delicada del decreto, por hallarse actualmente en controversia y análisis los principios que informan la ciencia del derecho penal, y especialmente los de la responsabilidad. La comisión cree haberse desempeñado con discreción y prudencia en el uso de aquella recomendación, anteponiendo los dictados de la experiencia, y los ejemplos legislativos de otros países, á toda preocupación ó consejo de escuela. Se ha dado cuenta de que no debía hacer un código teórico, ni dar forma articulada á las doctrinas de una escuela filosófica: ha querido hacer un código práctica y fácilmente aplicable en la República Argentina; y si el éxito no correspondiera á sus afanes no sería por falta de serenidad en este propósito. Su solución sobre la pena de muerte, el duelo y el adulterio, tres materias más propias de



disertaciones académicas que de discusiones legislativas, y que constituyen los tres puntos en que nuestro Proyecto se presenta más divergente de la legislación general, nada tienen que ver con las escuelas clásicas ó positivistas. Por otra parte siempre que se crea notar en el Proyecto la influencia de una escuela cualquiera, se encontrará al pié de la disposición la concordancia con otro código ó ley extranjera, que demuestre que la disposición es viable

La última consideración formulada en el decreto de nuestra institucion, se fundaba en que «además de las deficiencias apuntadas existen vacíos que las legislaciones modernas han previsto en sus disposiciones, vacíos que es menester llenar por el carácter mismo de la leyes penales, que no dejan impunes ciertos hechos criminosos, omitidos en sus disposiciones, y que pueden ser de gravedad tal que comprometan las relaciones internacionales». En su lugar respectivo quedan fundadas las reglas y disposiciones relativas á este objeto, que consideramos llenado, sin que sea necesario agregar una palabra más.

Si todos estos objetos hubieran sido debidamente atendidos en nuestro Proyecto, confiaremos en que nuestra obra podrá merecer la aprobación y sanción legislativa. Agregaremos, para terminar, que así en la declaración de los hechos punibles, como en la adopción de las penas y en su aplicación á los casos particulares, hemos tratado de tener en cuenta las circunstancias peculiares del país, su forma de población, los medios de que dispone para el cumplimiento de las penas, etc. En cuanto á la dureza de las penas, no es la índole de nuestros connacionales solamente la que debíamos tener en cuenta. A este respecto se ha pensado alguna vez que las penas, aún



de corta duración, eran bastante graves y temibles para el hombre libre acostumbrado á vagar en una campaña extensa. Esta observación podría valer treinta años atrás. Nuestro país se está poblando por inmigraciones europeas, y todos los extranjeros saben que en su país las penas son duras y fuertes y se hacen efectivas. Por esto, nos hemos determinado en muchos casos á alzar el máximun de las penas, y á adoptar la de presidio perpétuo, que en su lugar fundamos. La experiencia diaria demuestra, á falta de comprobación estadística, que el delito ordinario y frecuente en los hijos del país, es el de homicidio ó lesiones en riña, producto del orgullo nativo y del hábito de cargar armas. Los grandes criminales que en estos últimos tiempos han conmovido la atención pública, han sido extranjeros; que la Europa al derramar sobre nuestro país sus excedentes de población que vienen con su civilización y con su industria á enriquecerlo, nos comunica por una ley inevitable de todas las inmigraciones, sus vicios y sus males. Pero de nada valdrán las disposiciones de la ley, dado nuestro organismo constitucional y los recursos de que disponen las provincias, si la Nación no se apresura á cooperar, por la fundación de un presidio y de un sitio de deportación, en la forma indicada en el Proyecto, á que sea una verdad la seguridad común por el afianzamiento de la justicia.

Tenemos el honor de saludar á V. E. con nuestra más distinguida consideración.

NORBERTO PIÑERO.—RODOLFO RIVAROLA.

—JOSÉ NICOLÁS MATIENZO.

Buenos Aires, Junio de 1891.

PROYECTO

DE

CÓDIGO PENAL





LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I

APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

ARTÍCULO 1º

Este Código se aplicará á los delitos y faltas cometidos en el territorio de la República, en los buques que lleven su bandera y en los buques mercantes de bandera extranjera que se hallen en aguas jurisdiccionales de la República, cualquiera que sea la nacionalidad del agente, de la víctima ó del damnificado.

Se considerará cometido en la República todo hecho punible cuyos efectos deban producirse dentro de su jurisdicción, aunque el acto se haya ejecutado ó preparado y el agente se encuentre fuera de ella.

Concordancias

Cód. Civil, art. 1º; tratado de Montevideo, 1, 2, 7, 9, 10, 11 y 12; código holandés, 2, 3, 4, 5, y 7; italiano, 3, 4 y 6; chileno, 5 y 6; belga, 3 y 4; alemán, 3 y 4; uruguayo, 3, 4, 5, 6 y 7 ecuatoriano 5 y 6.





ARTÍCULO 2º

Serán asimismo juzgados por las leyes de este Código los delitos de piratería, siempre que los responsables cayeren bajo el poder de la República.

Concordancias

Tratado de Montevideo, 14; código holandés 4, núm. 4º.

ARTÍCULO 3º

También se aplicará este Código a los hechos punibles cometidos en el extranjero por agentes ó empleados de autoridades argentinas en el desempeño de las funciones de su cargo.

Concordancias

Cód. holandés, 6; alemán, 4, inc. 1º.

ARTÍCULO 4º

Los que hubieran cometido en el extranjero hechos ú omisiones calificados de delitos por este Código, que no estén comprendidos en los artículos precedentes, serán expulsados del territorio de la República, siempre que se encontraren en él sin haber sido juzgados y cumplido su condena, y que las autoridades competentes para su juzgamiento, requeridas para su extradición, no la verificaren.

Concordancias

Tratado de Montevideo 5.



ARTÍCULO 5°

Las disposiciones de este Código no se aplicarán á los delitos del fuero militar, ni á las infracciones de las leyes aduaneras y de impuestos.

Concordancias

Cód. Tejedor, 4, núm. 3°; belga, 5; francés, 5.

ARTÍCULO 6°

Las infracciones de las leyes y disposiciones locales de las provincias, municipios y territorios federales, que no tuvieran pena señalada en este Código, serán reprimidas, como faltas, con las penas que en ellas mismas se determine, siempre que no impongan multa mayor de mil pesos, ni establezcan otra inhabilitación que la de ejercer cargos públicos locales ó profesiones, dentro de la jurisdicción territorial, ni restrinjan la libertad de locomoción sinó en en caso de falta de pago de la multa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.

Concordancias

Ley alemana de 31 de Mayo de 1870, art. 5°.

ARTÍCULO 7°

La ley penal tendrá efecto retroactivo en cuanto deje sin represión un hecho reprimido por una ley anterior; y cuando en virtud de esta última se hubiere impuesto condena, cesarán su ejecución y sus efectos penales.

Si la ley del tiempo en que se cometió el delito y las posteriores fueren diversas, se aplicará aquella cuyas disposiciones fueren más favorables al acusado.

En cuanto al cómputo de la detención preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado.



Concordancias

Cód. penal, 48; Tejedor, 82; italiano 2; belga 2; portugués, 70; holandés, 1°; chileno 18; uruguayo 29; venezolano 41; ecuatoriano 4.

ARTÍCULO 8°

Las disposiciones generales de este Código serán aplicadas aún á las materias regidas por otras leyes penales, en cuanto éstas no dispusieren lo contrario.

Concordancias

Cód. italiano, 10; holandés 91.



TÍTULO II

DE LAS PENAS

ARTÍCULO 9º

Las penas que este Código establece son las siguientes:

- 1º Muerte.
- 2º Presidio.
- 3º Deportación.
- 4º Penitenciaria.
- 5º Multa.
- 6º Inhabilitación.
- 7º Destierro.

Concordancias

Cód. penal, 54; Tejedor, 90.

ARTÍCULO 10

No se impondrá pena de muerte cuando solo haya prueba de presunciones, por vehementes que sean, aunque las leyes de procedimientos admitan este género de prueba para los delitos en general.

Concordancias

Cód. penal, 55; Tejedor 91.



ARTÍCULO 11

La ejecución de la pena de muerte tendrá lugar por medio de la electricidad ó del fusilamiento, dentro del establecimiento en que se encuentre el condenado, quien será asistido por el sacerdote ó ministro del culto cuyo auxilio hubiere solicitado.

El Juez de la causa ó el director de la cárcel, en su defecto, hará constar la ejecución de la pena en una acta que se unirá al proceso y se dará á la publicidad.

Concordancias

Cód. penal, 56;—en cuanto á determinar el medio de ejecución de la pena: francés, 12; belga, 8; español, 102; brasileiro. 38; Canton de Vaud, 14; alemán, 13; chileno, 82; uruguayo, 88; húngaro, 21.

ARTÍCULO 12

La ejecución de la pena de muerte tendrá lugar dos días después de la notificación de la sentencia irrevocable, sin perjuicio de la suspensión que el Poder Ejecutivo podrá decretar á los efectos del ejercicio del derecho de gracia. La ejecución no podrá hacerse en Domingo ni en día de fiesta religiosa ó nacional.

Concordancias

Cód. penal, 57; Tejedor, 93;—según el chileno, art. 82, la pena se ejecutará tres días después de la notificación; según el uruguayo, 88, dos días después; español, 102.

ARTÍCULO 13

El cadáver del ejecutado será entregado á sus parientes, si lo pidieren al juez de la causa; pero no

podrán enterrarlo con pompa, incurriendo de lo contrario, en la pena de penitenciaría por cuatro á ciento veinte días.

Concordancias

Cód. penal, 58; Tejedor, 94; español, 104; chileno, 84; uruguayo, 90.

ARTÍCULO 14

No se impondrá pena de muerte á las mujeres, á los menores de diez y ocho años ni á los mayores de setenta.

Concordancias

Cód. penal, 59; Tejedor, 95; uruguayo, 84.

ARTÍCULO 15

La pena de presidio se cumplirá con trabajos forzados en un establecimiento destinado especialmente al efecto, y situado á la mayor distancia posible de los centros poblados. El Gobierno de la Nación fundará en alguna de las islas del sud de la República un presidio al que deberán ser destinados los condenados á esa pena por los tribunales nacionales, y al cual podrán ser remitidos los condenados por los tribunales provinciales.

Concordancias

Cód. penal, 60; el proyecto de Mancini, para Italia, propuso también que la *ergástula* se cumpliera en una isla, "lo que, además de aumentar, extrinsecamente por lo ménos, decía el informe, el terror y la eficacia de la pena, hace más difíciles las evasiones."





ARTÍCULO 16

Los condenados á presidio estarán sujetos á reclusión celular en las horas destinadas al sueño y á la alimentación, reuniéndose durante el día en clases separadas para el trabajo, dentro ó fuera del establecimiento, con arreglo á los reglamentos que dicte la autoridad competente. Los reglamentos podrán imponer, entre las correcciones disciplinarias, la reclusión absoluta por un término que no exceda de treinta días, durante el cual los reclusos trabajarán en la celda.

Concordancias

Prescribe la segregación del condenado, por término más ó menos largo ó durante las horas del sueño, el código italiano, 12 y 15.

ARTÍCULO 17

La pena de presidio lleva consigo las siguientes:

- 1º Inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena;
- 2º Interdicción civil que priva, mientras se sufre la pena, del ejercicio de todos los derechos civiles, con excepción del de testar, y sujeta al condenado á la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces.

Concordancias

Cód. Penal, 63; Tejedor, 101. El código italiano, artículo 33, priva expresamente de la facultad de testar.



ARTÍCULO 18

La pena de presidio es perpétua ó temporal. En el segundo caso durará de diez á veinticinco años.

Concordancias

Establecen la pena perpétua los códigos siguientes: francés, 7; español, 26; alemán, 14 y 17; belga, 7; chileno, 21; holandés, 10; italiano, 12; húngaro, 22; bávaro, 8.

ARTÍCULO 19

El condenado á presidio temporal que hubiere cumplido los dos tercios de su condena observando con regularidad los reglamentos del establecimiento, obtendrá de la autoridad judicial competente, la libertad condicional, previo informe motivado de la dirección del presidio, y con audiencia del ministerio público.

Concordancias

Cód. italiano, 16; uruguayo, 93; húngaro, 48; alemán, 23; holandés, 15.

ARTÍCULO 20

Esta libertad se concederá bajo las siguientes condiciones:

- 1º Residir en el distrito en que esté situado el presidio, durante el resto de la condena.
- 2º Observar las reglas de inspección que fije el auto de soltura.

3° Adoptar oficio, arte, industria ó profesión, si no
tuviere medios propios y conocidos de subsis-
tencia.

4° No cometer nuevos delitos ó faltas.

Concordancias

Cód. uruguayo, 94 y 47; húngaro 50.

ARTÍCULO 21

El auto de soltura será revocado cuando el penado
cometiere un nuevo delito, ó se evadiere ó intentare
evadirse del distrito del presidio; y en este caso el
tiempo que haya durado la libertad condicional no se
computará en el término de la pena, sin perjuicio de
la acumulación de penas que correspondiere por el
nuevo delito.

La revocación se entenderá pronunciada el día del
arresto.

Concordancias

Cód. italiano, 17; uruguayo, 94; alemán, 24.

ARTÍCULO 22

Si el penado infringiere cualquiera de las demás con-
diciones establecidas en el artículo 20, el auto de
soltura será también revocado, pero en este caso el
tribunal competente podrá descontar del término de
la pena el todo ó parte del tiempo que hubiere durado
la libertad condicional.

Concordancias

Cód. húngaro, 50.





ARTÍCULO 23

Ningún individuo cuya libertad condicional haya sido revocada podrá obtenerla nuevamente.

Concordancias

Código holandés, 15.

ARTÍCULO 24

Cuando el término de la condena transcurriere sin que el auto de soltura sea revocado, la pena quedará extinguida.

Concordancias

Cód. italiano, 17; uruguayo, 50; húngaro, 50; alemán, 26; holandés, 15.

ARTÍCULO 25

La pena de deportación consistirá en la relegación por tiempo indeterminado en la Isla de los Estados, ú otra que se destine al efecto.

Concordancias

Proyecto presentado por el por el P. E. en 27 de Junio de 1893: ley francesa de 27 de Mayo de 1885.

ARTÍCULO 26

Los deportados estarán sujetos:

- 1° A la vigilancia de la autoridad;
- 2° A observar las reglas de inspección que fije la sentencia;
- 3° A adoptar oficio, arte, industria ó profesión.



ARTÍCULO 27

Después de seis años de condena, el deportado podrá solicitar del juez de la causa, por motivos justificados, licencia para trasladarse á otro punto de la República, por un tiempo que no exceda de tres meses, mediante caución pecuniaria y bajo la vigilancia de la autoridad policial. Las licencias posteriores no podrán ser acordadas sinó con intervalo de dos años entre una y otra.

Concordancia

Ley francesa, art. 13.

ARTÍCULO 28

La pena de deportación lleva consigo la inhabilitación absoluta.

ARTÍCULO 29

El deportado que justificare haber observado buena conducta durante veinte años, obtendrá de la autoridad judicial competente la exoneración de la pena.

Concordancia

Ley francesa cit., art 16.

ARTÍCULO 30

La pena de penitenciaría durará de un día á quince años, y se cumplirá en establecimientos destinados al efecto, distintos de los presidios, con reclusión celular durante las horas que los reglamentos respectivos no destinen al trabajo y la instrucción. Ca-

da penado elegirá, con intervención de la dirección del establecimiento, el género de trabajos á que deberá dedicarse, designándolo la dirección, en su defecto. Cuando la pena no excediere de un año se cumplirá en una sección especial de la cárcel de detenidos, siempre que el condenado no fuere reincidente.

Concordancias

Cód. penal 65; Tejedor, 104; bávaro, 15; italiano; 15; uruguayo 91 y 93; húngaro, 37.

ARTÍCULO 31

Las mujeres cumplirán la pena de penitenciaría en establecimientos distintos de los destinados á los hombres.

Concordancias

Cód. italiano 23; venezolano 56.

ARTÍCULO 32

Es aplicable á los condenados á penitenciaría lo dispuesto para los presidarios respecto á inhabilitación é interdicción.

Concordancias

Cód. penal 67; Tejedor, 107.

ARTÍCULO 33

Los condenados á penitenciaría, después de cumplir con regularidad la tercera parte de la condena, podrán ser sacados á petición suya, durante el día, á



trabajar en establecimientos agrícolas ó industriales, bajo la vigilancia de la administración de la penitenciaría.

Concordancias

Cód. italiano, 14.

ARTÍCULO 34

Los condenados á penitenciaría, por más de dos años, que hayan cumplido los dos tercios de su condena, observando con toda regularidad los reglamentos del establecimiento, obtendrán de la autoridad judicial competente la libertad condicional, previo informe motivado de la dirección de la penitenciaría, y con audiencia del ministerio público.

Concordancias

Citas del art. 19.

ARTÍCULO 35

Esta libertad se concederá bajo las condiciones siguientes:

- 1º Fijar la residencia en el lugar que determina el auto de soltura, y no variarla sin previa autorización del tribunal competente.
- 2º Observar lo prescripto en los incisos 2º, 3º, y 4º del artículo 20.

ARTÍCULO 36

Son aplicables á la libertad condicional de los condenados á penitenciaría, las disposiciones de los artí-



culos 21, 22, 23 y 24, reputándose evasión la violación ó tentativa de violación de la residencia obligatoria.

ARTÍCULO 37

Cuando la pena de penitenciaría no exceda de dos años, podrá sustituirse, á petición del condenado, por la de multa, á razón de cuatro á diez pesos por cada día de condena, salvo en los casos en que este Código dispone expresamente lo contrario; pero no podrá suspenderse la ejecución de la pena de penitenciaría mientras el condenado no haya oblado la multa y las indemnizaciones pecuniarias.

Concordancias

Ley de 16 de Octubre de 1890.

ARTÍCULO 38

El producto del trabajo del condenado á presidio ó penitenciaría se aplicará;

- 1º A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, si no tuviese medios propios para satisfacerlos ó no los hubiere satisfecho de otra manera.
- 2º A la prestación de alimentos á que estuviere obligado con arreglo al código civil.
- 3º A costear los gastos que causare en el establecimiento y los del proceso.
- 4º A formarle un fondo propio que se le entregará á su salida.

Esta aplicación se hará en el orden de preferencia que queda consignado.

Concordancias

Cód. penal, 65, Tejedor, 104; chileno, 88.





ARTÍCULO 39

La pena de multa obligará al reo al pago de una cantidad de dinero que será determinada en la sentencia, dentro del máximo y mínimo establecidos para el delito, teniendo en cuenta la situación económica del penado.

Concordancias

Cód. penal, 79, Tejedor, 128 y 130.

ARTÍCULO 40

Si el multado fuese solvente, la multa se hará efectiva por la vía de apremio.

En caso de insolvencia total ó parcial, el tribunal competente fijará prudencialmente el tiempo durante el cual deba el condenado satisfacer la multa, pudiendo señalarle plazos y cuotas para pagos parciales. Si al vencimiento de un período ó del término total, el condenado no hubiere cumplido su obligación, será puesto en penitenciaría y obligado á trabajar hasta que pague la cantidad debida, siendo á su costa los gastos de manutención, sin que la detención pueda exceder de tres años, ni produzca los demás efectos de la pena de penitenciaría.

Concordancias

Cód. italiano, 17; holandés, 23; húngaro, 53. ~

ARTÍCULO 41

El destierro durará de uno á diez años, y consistirá en expulsión del condenado del territorio de la República.



Al desterrado que entrare de nuevo en el territorio de la República, sin haber cumplido su condena, se le reagrarará la pena con la mitad más del tiempo de la primera condenación.

En caso de nueva violación del destierro, sufrirá la pena de penitenciaría por la tercera parte del tiempo que le falte para completar el destierro.

Concordancias

Cód. penal, 71 y 72; Tejedor 108 y 109; español 129, 5°.

ARTÍCULO 42

La inhabilitación será absoluta ó especial, y perpetua ó temporal.

Concordancias

Cód. penal, 54, incisos 9 y 10.

ARTÍCULO 43

La pena de inhabilitación absoluta importa:

- 1° La pérdida de los empleos ó cargos públicos que ejerza el penado, aunque provengan de elección popular;
- 2° La privación del derecho de elegir y ser elegido. en comicios populares.
- 3° La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas.
- 4° La pérdida de toda jubilación, pensión ó goce de montepío de que disfrute.

Concordancias

Cód. penal, 75; Tejedor. 118; español, 32; italiano 20; chileno, 38; uruguayo, 41.



ARTÍCULO 44

La inhabilitación especial importa:

- 1º La privación del empleo, cargo, comisión pública, función electoral ó profesión en cuyo ejercicio se cometió el hecho punible.
- 2º La incapacidad para ejercer otra función, cargo ó profesión del mismo género.

Concordancias

Cód. penal 76; Tejedor, 119; español, 34; uruguayo, 42; chileno, 39.

ARTÍCULO 45

La detención preventiva que hubiere sufrido el condenado se computará así: por dos días de detención uno de presidio; por un día de detención, uno de deportación, ó de penitenciaría, ó de inhabilitación temporal, ó tres de destierro, ó la cantidad de multa que el tribunal fije entre cuatro y diez pesos.

Concordancias

Cód. penal, 49; el chileno, 26, cuenta la duración de las penas temporales desde la aprehensión del reo; el código Tejedor, art. 171, cuando la prisión preventiva excedía de seis meses, autorizaba á rebajar proporcionalmente el tiempo de detención sufrido;— holandés, 24 y 27; italiano, 40.

ARTÍCULO 46

Toda pena que se imponga producirá el comiso de los efectos provenientes del hecho que la motiva, y el de los instrumentos con que se ejecutó ó destinados á ejecutarlo, á no ser que pertenecieren á un



tercero no responsable. Los instrumentos decomisados no podrán ser enajenados.

Cuando se trate de cosas cuya fabricación, uso, conducción, tenencia ó enajenación tuvieron manifiestamente por objeto la comisión de delitos, se decretará siempre el comiso, aunque no haya condenación ni pertenezcan al tenedor.

Concordancias

Cód. penal, 80; Tejedor, 133; español, 63; italiano, 36; holandés, 33; belga, 43; húngaro, 61.

ARTÍCULO 47

La condena penal trae aparejada la obligación de reparar el daño material y moral causado por el hecho punible á la víctima ó á tercero, mediante una indemnización pecuniaria que el juez fijará al aplicar la pena, teniendo en cuenta la condición social y económica del ofensor y del ofendido, con arreglo á los artículos siguientes.

Concordancias

Cód. Tejedor, 68 y 136; italiano 38.

ARTÍCULO 48

La reparación á que se refiere el artículo anterior comprenderá: 1º la restitución de la cosa obtenida por el delito; 2º la indemnización de los daños y perjuicios; 3º el resarcimiento de los gastos del juicio.

Concordancias

Cód. Tejedor, 137; español 121.



ARTÍCULO 49

Si la cosa no existiere ó si, hallándose en poder de un tercero, fuera irreivindicable, la restitución se hará con el precio corriente de ella, agregándose el de estimación si lo tuviere.

Concordancias

Cód. Tejedor, 139; español, 122 y 123.

ARTÍCULO 50

La indemnización de perjuicios comprenderá no sólo los que se causaron al ofendido, sinó también los que, por razón del delito, se hubiesen irrogado directamente á su familia ó á un tercero. Su regulación se efectuará prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba.

Concordancias

Cód. Tejedor, 142; español, 124.

ARTÍCULO 51

La obligación de indemnizar es preferente á todas las que contrajere el responsable después de haber cometido el delito.

Concordancias

Cód. Tejedor, 143; peruano, 94.

ARTÍCULO 52

En caso de que los bienes del culpable no fueren bastantes para cubrir todas las responsabilidades pe-



cuniarías, se satisfarán éstas por el orden siguiente:

- 1º La indemnización de los daños y perjuicios.
- 2º El resarcimiento de los gastos del juicio.
- 3º La multa.

Concordancias

Cód. Tejedor, 144; español, 49; francés, 54; belga 49.

ARTÍCULO 53

Estarán solidariamente obligados á la reparación todos los responsables del hecho punible.

Cuando uno solo hubiere satisfecho todo el daño, no tendrá derecho para demandar á los otros cuota alguna.

Concordancias

Cód. Civil, 1081 y 1082; Tejedor, 69; español, 51; belga, 50.

ARTÍCULO 54

El que por título lucrativo participare de los efectos de un hecho punible estará obligado á la reparación hasta la cuantía en que hubiere participado.

Concordancias

Cód. Tejedor, 71; español, 128.

ARTÍCULO 55

La reparación se hará efectiva por la vía de apremio. En caso de insolvencia total ó parcial se observarán las reglas siguientes:

- 1º Tratándose de los condenados á las penas de presidio y penitenciaría, en la forma determinada en los artículos reglamentarios de esas penas.

2º Tratándose de condenados á otras penas, el tribunal señalará la parte de entradas ó emolumentos de los mismos que deban depositar periódicamente hasta el pago total.

Concordancias

Cód. Tejedor, 145; español 50.

ARTÍCULO 56

No se reputan penas la detención ó prisión preventiva de los procesados; ni la suspensión de empleo ó cargo público, acordada durante el proceso ó para instruirlo.

Concordancias

Cód. penal, 51; Tejedor, 89; español, 25.

ARTÍCULO 57

Si durante la condena el penado se volviere loco, el tiempo que dure la locura se computará para el cumplimiento de la pena, debiendo el enfermo ser atendido en una sección especial del establecimiento penal en que se encuentre.

Concordancias

Cód. penal, 50; Tejedor, 88.





TÍTULO III

DE LA RESPONSABILIDAD

ARTÍCULO 58

En la ejecución de un hecho punible se presume la intención de cometerlo, á no ser que resulte lo contrario de las circunstancias particulares del proceso, ó que las causas alegadas por el imputado ó en su nombre, para excluir ó modificar su responsabilidad, sean verosímiles y no exista prueba en contrario.

Concordancias

Cód. Penal 6; Tejedor 13.

ARTÍCULO 59

Estan exentos de responsabilidad criminal:

- 1º El que ha cometido el hecho bajo la influencia de una enajenación ó enfermedad mental cualquiera.

Si la perturbación no es momentánea ó si puede temerse su repetición, y el hecho ejecutado es de los que la ley reprime con pena de muerte, presidio, deportación ó penitenciaría, el juez decretará la reclusión del agente en un establecimiento de alienados criminales, ó en un departamento especial de los manicomios comunes,



del que no saldrá sinó por resolución judicial en que se declare, con audiencia del ministerio público, y previo dictamen de peritos, que ha desaparecido el peligro que motivó la reclusión.

En el mismo caso, si se tratare de un hecho reprimido con pena diferente de las mencionadas, el agente será puesto en libertad bajo fianza de custodia, que garantice su buena conducta ulterior, observándose mientras dicha fianza no se prestare, lo dispuesto en el párrafo precedente.

2º El que ha resuelto y ejecutado el hecho en estado de embriaguez completa y accidental, sobrevenida sin culpa suya.

3º El que ha ejecutado el hecho en virtud de una sugestión hipnótica á que no ha prestado su consentimiento

4º El menor de catorce años.

Si de las circunstancias de la causa y de las condiciones personales del agente resultare peligroso devolverlo á sus padres ó guardadores, el juez ordenará su colocación en un establecimiento agrícola, industrial ó de enseñanza, destinado á la corrección de menores. El menor no podrá salir del establecimiento antes de la edad de 18 años, sino mediante resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento sobre su buena conducta.

5º El que obra violentado por fuerza física irresistible, ó impulsado por amenazas de sufrir un mal grave é inminente.

6º El cónyuge que, sorprendiendo á su consorte en flagrante adulterio, hiere ó mata á los culpables ó á uno de ellos, con tal que la mala



conducta del agente no hiciera excusable aquel hecho.

7º El padre ó hermano que hiere ó mata al que encuentra yaciendo con su hija ó hermana menor de quince años.

8º El que obra en defensa de su persona ó de sus derechos, siempre que concurren las circunstancias siguientes:

1ª Agresión ilegítima;

2ª Necesidad racional del medio empleado para impedirla ó repelerla;

3ª Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechaza el escalamiento ó fractura de los cercados, paredes ó entradas de una casa ó departamento habitado ó de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor.

9º El que obra en defensa de la persona ó derechos de otro, mediando las dos primeras circunstancias del inciso anterior, y la de no haber participado el tercero en la provocación suficiente que hubiera hecho el agredido.

10. El que obra en cumplimiento de un deber ó en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad ó cargo, ó en virtud de obediencia debida.

La obediencia es debida cuando la orden emana de quien ejerce sobre el agente autoridad directa, corresponde al género de sus funciones y reviste las formas legales.

11. El que causa un mal por evitar otro mayor inminente á que es extraño.



12. El que, en ocasión de ejecutar un acto lícito con la debida diligencia causa un mal por mero accidente.

Concordancias

1º Cód. penal 81, núm. 1º; Tejedor 147; español 8, núm. 1º; uruguayo 17; chileno 10, inc. 1º; italiano 46; francés 64; venezolano 19, 1º.

2º Cód. penal 81, núm. 1º.

4º Cód. penal 81, 2º y 3º; español 8, 3º; italiano 55; holandés 39; húngaro 84; uruguayo 17, 2º; belga 73; alemán 55.

5º Cód. penal 81, 5º; Tejedor, 148, 2º; español 8, 9º y 10,

6º Cód. penal 81, 12º; uruguayo. 17, 14º, y chileno 10, 11º sólo excusan el acto del marido; italiano 377; francés 324.

7º Cód. penal 81, 13º.

8º Cód. penal 81, 8º y 11º; chileno, 10, 3º; uruguayo 17, 6º; español 8, 4º.

9º Cód. penal 81, 9º y 10º; uruguayo 17, 7º y 8º; español 8, 5º y 6º.

10. Cód. penal 81, 7º y 15º; español 8, 11º y 12º; uruguayo 17, 12º y 13º.

11. Cód. penal 81, 4º.

12. Cód. penal 81, 7º; español 8, 8º; uruguayo 17, 10º.

ARTÍCULO 60

En las penas divisibles por razón del tiempo ó de la cantidad, la pena ordinaria del delito será el término medio entre el máximo y el mínimo, pero los tribunales podrán abreviarla ó prolongarla dentro de estos límites, motivando la medida de la pena en las circunstancias expresadas en los artículos siguientes.

Concordancias

Cód. penal 52.

ARTÍCULO 61

A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta, en primer término, la edad, la educación, los



hábitos y las costumbres, la naturaleza de la acción y de los medios empleados, la importancia y calidad de sus motivos determinantes, la mayor ó menor participación tomada en el hecho, las reincidencias en que hubiere incurrido y demás antecedentes y condiciones personales del procesado que demuestren su mayor ó menor perversidad.

Concordancias

Cód. Tejedor, 167.

ARTÍCULO 62

Desde el punto de vista de la naturaleza de la acción y de los medios empleados, la criminalidad aumenta ó disminuye en razón de la extensión del daño ó del peligro causado.

Concordancias

Cód. Tejedor, 186; bávaro, 91.

ARTÍCULO 63

La criminalidad aumenta, desde el punto de vista de la intención:

- 1º Cuando existen motivos más numerosos é importantes de observar la ley, ó los deberes violados por el culpable son más numerosos é imperiosos, y el mismo es más capaz de comprender claramente esos motivos y esos deberes.
- 2º Cuando son más grandes los obstáculos para la ejecución del delito, ó se necesita emplear más audacia ó coraje, más inteligencia ó malicia, ó más fuerza corporal para preparar ó consumar la acción.



- 3º Cuando las acciones exteriores y accidentales que han arrastrado, extraviado ó seducido al culpable, son menores, ó éste se ha determinado más espontáneamente, ó ha buscado personalmente la ocasión.
- 4º Cuando el culpable está más desmoralizado ó empeñado en la carrera de los delitos por la práctica constante de las malas acciones, por hábito, desarreglo de costumbres ú otros motivos semejantes.
- 5º Cuando los deseos y pasiones que lo hacen obrar son más perversos y peligrosos.

Concordancias

Cód. Tejedor, 187; bávaro, 92.

ARTÍCULO 64

La criminalidad disminuye:

- 1º Cuando por una debilidad natural de la inteligencia, el culpable no ha comprendido toda la gravedad del peligro ni la extensión de la prohibición.
- 2º Cuando se ha determinado á cometer el delito por persuasión, promesas artificiosas, orden ó amenaza, en los casos en que estas circunstancias no eximen de toda pena.
- 3º Cuando ha sido impelido por una miseria apremiante ó cualquier otra necesidad urgente, con la misma reserva del número anterior.
- 4º Cuando ha obrado, arrebatado instantáneamente por una pasión ó perturbación intelectual sobrevvenida casualmente, y sin que de su parte haya culpa.

5° Cuando resulta de los antecedentes, ó de su conducta durante ó después del hecho, que su perversidad y desmoralización son todavía poco avanzadas.

Concordancias

Cód. Tejedor, 198; bávaro, 93.





TÍTULO IV

DE LA TENTATIVA

ARTÍCULO 65

Hay tentativa cuando la resolución de cometer un delito ha sido manifestada por actos exteriores que tengan relación directa é inequívoca con el delito.

Concordancias

Cód. penal 8; Tejedor 15; bávaro 57.

ARTÍCULO 66

La tentativa no está sujeta á pena alguna cuando se desiste voluntariamente del delito.

Concordancias

Cód. penal 9; Tejedor 16; bávaro 58.

ARTÍCULO 67

La ley presume voluntario el desistimiento, á menos que se trate de una reincidencia, en cuyo caso regirá la presunción contraria.

Concordancias

Cód. penal 10; Tejedor, 17.

ARTÍCULO 68

La pena que correspondería al agente si hubiese consumado el delito se disminuirá en un tercio. Si la pena es perpetua, la de la tentativa no excederá de veinte años ni bajará de diez. Si fuera de muerte, corresponderá á la tentativa presidio desde quince hasta veinte años.

Concordancias

Cód. holandés 45.





TÍTULO V

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES

ARTÍCULO 69

Se consideran autores:

- 1º Los que toman parte en la ejecución del hecho.
- 2º Los que prestan al ejecutor un auxilio ó cooperación sin los que el hecho no habría podido tener lugar.
- 3º Los que instigan y determinan á otros á cometerlo.

Concordancias

Cód. penal 21; español 13; Tejedor 31.

ARTÍCULO 70

Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo precedente, cooperan á la ejecución del hecho por actos anteriores ó simultáneos.

Concordancias

Cód. penal 32; español, 15.

ARTÍCULO 71

Las circunstancias, cualidades y relaciones personales que excluyan ó aumenten la criminalidad no se

tomarán en cuenta, en la aplicación de las penas, sinó respecto del autor ó del cómplice á quien conciernen. Sin embargo, cuando las circunstancias, cualidades y relaciones personales que agraven la criminalidad, concernientes á uno de los partícipes, hayan servido para facilitar la ejecución del hecho, se tomarán en cuenta también para establecer la responsabilidad de los coautores y cómplices que las conocían en el momento en que concurrieron al hecho.

Concordancias

Cód. italiano, 65; húngaro 74; holandés 50.

ARTÍCULO 72

Las circunstancias materiales que aumentan la criminalidad, aunque hagan cambiar la especie del hecho punible, se tomarán en cuenta respecto de todos los partícipes, á menos que resulte que no las conocían ni podían preverlas en el momento en que concurrieron á la ejecución del hecho.

Concordancias

Cód. italiano, 66.

ARTÍCULO 73

El cómplice será reprimido con la pena correspondiente al hecho á que ha cooperado, no pudiendo aplicársele el máximun.

Si la pena que le correspondería como autor fuera la de muerte, sufrirá la de presidio perpétuo. En sustitución de la de presidio perpétuo, sufrirá la de presidio temporal





ARTÍCULO 74

Si de las circunstancias particulares de la causa resulta que el acusado de complicidad no quiso cooperar sinó á un hecho menos grave que el cometido por el autor principal, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del hecho á que tuvo intención de prestar ayuda.

Concordancias

Cód. Penal, 38; Tejedor, 56.

ARTÍCULO 75

Si el hecho al cual se ha cooperado no se consumase, la pena del cómplice se determinará conforme á las prescripciones de este título y del de la tentativa.

Concordancias

Cód. Penal, 39, párrafo 1°; Tejedor, 57, párrafo 1°; bávaro, 81 párrafo 1°

ARTÍCULO 76

Cuando un cómplice no preste la cooperación que había convenido dar ó desista de la que hubiere comenzado, antes de que haya podido ser útil al autor principal, habrá complicidad tentada; y siempre que su cooperación sea punible, según los principios sentados, se aplicará las disposiciones referentes á la tentativa.

Concordancias

Cód. Tejedor, 58; bávaro, 82.

ARTÍCULO 77

No se considera cómplices ni autores de los hechos punibles cometidos por la prensa, á los editores, impresores y demás personas que prestan al autor del escrito ó grabado la cooperación material necesaria para su publicación.

Concordancias

Cód. español, 12 y 14; constitución belga, 18.





TÍTULO VI

CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES

ARTÍCULO 78

Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal se aplicará solamente la que fije pena mayor.

Si un hecho estuviere diferentemente reprimido por una disposición general y por una disposición especial, se aplicará la última.

Concordancias

Cód. holandés, 55; belga, 65.

ARTÍCULO 79

Si varios hechos, aunque cada uno de ellos tomado aisladamente fuere punible, son de tal modo conexos que deban ser considerados como una sola acción continua, se aplicará la disposición legal que fije la pena mayor.

Concordancias

Cód. holandés 56.

ARTÍCULO 80

Cuando concurren varios hechos independientes, reprimidos con una misma especie de pena, se aplicará



una pena igual á la suma de las penas correspondientes á los diversos hechos; pero la acumulación en los casos de penas restrictivas de la libertad no excederá del máximo de duración fijada por este Código á la especie de pena de que se trate, y en los casos de pena pecuniaria no excederá del cuádruplo de la multa que corresponda al hecho más severamente reprimido.

Concordancias

Cód. holandés, 57.

ARTÍCULO 81

Cuando concurren varios hechos independientes, reprimidos con penas divisibles de diferente naturaleza, se impondrá cada una de éstas, reducidas á la especie de la más grave, según las proporciones del artículo 45, siempre que la suma resultante no exceda del máximo legal de aquella especie de pena.

Si alguna de las penas no fuere divisible, se aplicará la más grave de éstas.

La pena de inhabilitación se aplicará, cuando proceda, sin la reducción á que se refiere el párrafo primero de este artículo.

Concordancias

Cód. holandés, 58.

ARTÍCULO 82

La gravedad relativa de las penas de diferente naturaleza se determinará por el orden en que se hallan enumeradas en el artículo 9°.

Concordancias

Cód. holandés, 61.

ARTÍCULO 83

Las reglas precedentes se aplicarán en el caso en que, después de una condena pronunciada por sentencia firme, se deba juzgar á la misma persona por otro hecho cometido antes de dicha condenación.

Concordancias

Cód. holandés, 63; italiano, art. 76 párrafo 1°.





TÍTULO VII

DE LA REINCIDENCIA

ARTÍCULO 84

Habrá reincidencia siempre que el condenado por sentencia firme, aunque haya mediado indulto ó conmutación, cometa un solo hecho punible de cualquier naturaleza que fuere. No se contará para los efectos de la reincidencia los delitos amnistiados.

ARTÍCULO 85

El condenado á presidio perpétuo que reincidiere en un delito por el que merezca la misma pena, sufrirá la de muerte.

ARTÍCULO 86

La pena de deportación será impuesta como accesoria de la última condena, cuando concurren las condenaciones siguientes:

- 1º Dos condenaciones á presidio temporal.
- 2º Una condenación á presidio temporal y dos á penitenciaría.

- 3° Cuatro condenaciones á penitenciaría.
- 4° Cuatro condenaciones, de las cuales una sea á presidio.
- 5° Cinco condenaciones, de las cuales dos por lo menos sean á penitenciaría.
- 6° Siete condenaciones á penas inferiores á las de presidio ó penitenciaría.



Concordancias

Ley francesa de 27 de Mayo de 1885, art. 4.



TÍTULO VIII

DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES PENALES

ARTÍCULO 87

Puede iniciarse de oficio todas las acciones penales, excepto las que nacen de los siguientes hechos punibles:

- 1º Violación, estupro, rapto ó ultraje al pudor de las personas púberes cuando no resultare la muerte de la persona ofendida.
- 2º Calumnia ó injurias.
- 3º Violación de domicilio.
- 4º Amenazas y coacciones comprendidas en los artículos 177 y 179.
- 5º Descubrimiento y revelación de secretos, fuera de los casos del artículo 184.
- 6º Usurpación.
- 7º Daños.
- 8º Lesiones previstas en los artículos 120 y 124.
- 9º Abuso de armas á que se refiere el artículo 133.
- 10º Suposición de filiación en el caso del artículo 167 inciso 4º.
- 11º Extorsión en el caso del artículo 204.

Las acciones provenientes de delito contra la libertad política pueden ser iniciadas por cualquier ciudadano.

Concordancias

- 1º Cód. holandés, 245 y 281; ecuatoriano, de enjuiciamiento en materia criminal, 9, 2ª y 3ª; italiano, 336, párrafo 1º y 344; húngaro 238, 245, 322
- 2º Cód. holandés, 269; ecuatoriano de enjuiciamiento, etc., 9, 4ª; italiano, 400; húngaro, 268.
- 3º Cód. italiano, 157 in fine; húngaro, 332.
- 4º Cód. holandés, 284; italiano, 156 in fine.
- 5º Cód. holandés, 272 y 273, párrafos segundos; italiano, 164; húngaro, 327 in fine y 328.
- 7º Cód. ecuatoriano de enjuiciamiento etc., 9, 6ª; italiano, 424, párrafo primero, 426 párrafo segundo, 427, 428, 429, 430; húngaro, 418, 420 y 421.
- 8º Cód. italiano 372, último párrafo, y 375 inciso 1º; ecuatoriano de enjuiciamiento, etc., 9, 5ª; húngaro, 312.
- Párrafo último, Ley de elecciones nacionales de 16 de octubre de 1877, 71

ARTÍCULO 88

Los delitos mencionados en las excepciones del artículo anterior solo podrán ser perseguidos por acusación ó denuncia del agraviado ó de sus representantes legales ó guardadores.

Si se tratase de un delito contra una persona impúber que no tenga padres ni guardadores, se procederá de oficio, lo mismo que en el caso de que el delito fuese cometido por un ascendiente, tutor ó guardador de la persona impúber.

Si se tratere de injurias ó calumnias, la acción penal solo podrá ejercitarse por el ofendido, y, después



de su muerte, por el cónyuge, hijos ó nietos sobrevivientes.

Concordancias

Cód. Penal, 141 y 185; Cod. Tejedor, 266 y 314; español, 463; ecuatoriano de enjuiciamiento, etc., 10; húngaro, las citas del artículo anterior; holandés 64 y 65.

ARTÍCULO 89

No podrán ejecutar acciones penales entre sí:

- 1º Los cónyuges, á no ser por delito cometido por el uno contra la persona del otro, ó la de sus hijos, y por el delito de bigamia.
- 2º los ascendientes, descendientes, afines en línea recta, hermanos y cuñados; á no ser por delito cometido por los unos, contra las personas de los otros ó la de sus hijos.

Concordancias

Cód. Penal, 223; Cód. Tejedor, 353; español, 580; Ley española de enjuiciamiento en lo criminal, 103; italiano, 433; holandés, 316 y 353; ecuatoriano de enjuiciamiento, etc., 13.

ARTÍCULO 90

Nadie será obligado á responder por delito que se le impute sin que el tribunal competente declare antes haber lugar á la acusación.

Concordancias

Enmienda 5ª á la Constitución de los Estados Unidos de Norte América.





ARTÍCULO 91

La acción penal deberá entablarse ante el juez competente del lugar donde el hecho se haya cometido.

Concordancias

Constitución argentina, 102; Constitución de los Estados Unidos, enmienda 6ª; Ley española de enjuiciamiento en lo criminal, 14; Cód. ecuatoriano de enjuiciamiento, etc., 7, 1ª; ley chilena de organización de los tribunales, 227.

ARTÍCULO 92

Cuando no conste el lugar en que se haya cometido el hecho, ó se hubiere preparado ó ejecutado fuera de la República, la acción deberá instaurarse:

- 1º Ante el juez del lugar en que se haya descubierto pruebas materiales del hecho.
- 2º Ante el del lugar en que el presunto reo haya sido aprehendido.
- 3º Ante el de la residencia del presunto reo.

Si se suscitare competencia entre estos jueces, se decidirá dando la preferencia por el orden en que quedan expresados.

Concordancias

Ley española de enjuiciamiento en lo criminal, 15; Código nacional de procedimientos en lo criminal, 35 y 36; ley orgánica de los tribunales de Chile. 232.

ARTÍCULO 93

Cuando se impute al procesado diversos hechos cometidos en distintos lugares, será juez competente

el que lo sea para juzgar el hecho á que esté señalada pena mayor y, en el caso de que á los hechos esté señalada igual pena, el que hubiere prevenido en el conocimiento de la causa.

Concordancias

Cód. nacional de procedimientos en lo criminal, 37 y 40; Ley española de enjuiciamiento en lo criminal, 18, 1º y 2º.

ARTÍCULO 94

La acción criminal no depende en ningún caso de cuestiones prejudiciales. Las cuestiones civiles propuestas con motivo del hecho punible serán resueltas en el mismo proceso, al solo efecto de la condenación ó absolución del acusado.





TÍTULO IX

EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES Y DE LAS PENAS

ARTÍCULO 95

La acción penal se extingue:

- 1° Por la muerte del imputado.
- 2° Por la amnistía.
- 3° Por la prescripción.
- 4° Por la renuncia del agraviado respecto de los hechos punibles que no pueden perseguirse de oficio.

Concordancias

1° Cód. español, 132, n° 1°; italiano, 85; holandés, 69; húngaro, 105, n° 1°; chileno, 93, 1°.

2° Cód. español, 132 n° 2°; italiano, 86; chileno, 93, 3°.

3° Cód. español, 132, n° 6°; penal, 89; Tejedor, 192; italiano, 91; alemán, 66; húngaro, 105 n° 3°; chileno, 93, 6°.

4° Cód. italiano, 88; Cód. nacional de procedimientos en lo criminal, 15; chileno, 19; español, 24.

ARTÍCULO 96

La renuncia de la persona ofendida, al ejercicio de la acción penal, solo perjudica al renunciante y á sus herederos.



Concordancias

Cód. nacional de procedimientos en lo criminal, 15; Cód. húngaro, 114.

ARTÍCULO 97

La amnistía extingue la acción penal y hace cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas á particulares.

Concordancias

Cód. italiano, 86; español, 132 n° 3°.

ARTÍCULO 98

La acción penal se prescribirá por la buena conducta del imputado durante el tiempo fijado á continuación:

- 1° A los veinte años, cuando se tratare de delitos cuya pena máxima sea la de muerte ó presidio perpétuo.
- 2° A los quince años, si se tratare de delitos penados con presidio temporal ó deportación.
- 3° Después de transcurrido el máximun de duración de la pena señalada para el hecho punible, si se tratare de hechos reprimidos con penitenciaría ó destierro, no pudiendo en ningún caso el término de la prescripción exceder de doce años, ni bajar de dos meses.
- 4° A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con pena de inhabilitación perpétua.



- 5° Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con la pena de inhabilitación temporal.
- 6° A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa mayor de dos mil pesos.
- 7° Al año, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa de quinientos á dos mil pesos.
- 8° A los dos meses, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa que no exceda de quinientos pesos.

Concordancias

1° Cód. italiano, 91, 1°; español, 133, párrafo 1°; alemán, 67, inc. 1°; húngaro, 106, n° 1°; holandés, 70, n° 4°.

2° Cód. italiano, 91, 2°; español, 133, párrafo 2°; alemán 67, inc. 2°; húngaro, 106, n° 2°.

ARTÍCULO 99

Las penas se prescribirán por la buena conducta del condenado en los términos siguientes:

- 1° Á los treinta años, la de muerte ó presidio perpétuo.
- 2° Á los veinticinco años, la de deportación.
- 3° La de presidio temporal, en un tiempo igual al de la condena y una tercera parte más, no pudiendo exceder el término total de veinticinco años.
- 4° Las de penitenciaría y destierro, en un tiempo igual al de la condena.
- 5° Á los cinco años, la pena de multa mayor de dos mil pesos.
- 6° Al año, la pena de multa que no excediere de dos mil pesos.



Concordancias

1º Cód. alemán, 7º, n° 1º; italiano, 95, n° 1º.

5º Cód. alemán, 70, n° 5º.

ARTÍCULO 100

La prescripción de la acción empezará á correr desde la media noche del día en que se cometió el delito. ó si éste fuere continuo, en que cesó de cometerse.

Concordancias

Cód. penal, 91; Tejedor, 194; italiano, 92; español, 133, párrafo 7º; chileno, 95; alemán, 67 in fine; húngaro, 107; uruguayo, 102, párrafo 1º; Cód. civil, 34, en cuanto al momento de empezar á contar el término.

ARTÍCULO 101

La prescripción de la pena comenzará á correr desde la media noche del día en que se notifique al reo la sentencia firme, ó desde el quebrantamiento de la condena, si esta hubiere comenzado á cumplirse.

Concordancias

Cód. español, 134, párrafo, 8º; chileno, 98; italiano, 96, párrafo 1º; Penal, 91; Tejedor, 194; holandés, 77; alemán, 70, in fine; húngaro, 121, uruguayo, 106, párrafo 1º; Cód. Civil 34, en cuanto al momento de empezar á contar el término.

ARTÍCULO 102

Si antes de vencido el término comete el reo otro delito, de cualquier naturaleza que fuere, la prescripción de la acción penal ó de la pena queda sin efecto.



Concordancias

Cód. Penal, 92; español, 134, párrafo 7°; Tejelor, 194; italiano, 96; párrafo 3°; uruguayo, 106, párrafo 2°; chileno, 99.

ARTÍCULO 103

Todo acto del procedimiento judicial para la represión del delito ó para la ejecución de la pena, interrumpe la prescripción.

Concordancias

Cód. penal, 93; español, 133, párrafo 8°; italiano, 93 y 96, párrafo 2°; holandés, 72; alemán, 68, párrafo 1° y 72; húngaro, 108, párrafo 1° y 124; uruguayo, 102, párrafo 2°.

ARTÍCULO 104

La prescripción corre ó se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes de un hecho punible.

Concordancias

Cod. alemán, 68, párrafo 2°; húngaro, 108, párrafo 2°.

ARTÍCULO 105

La acción penal por hecho reprimido con pena de multa se extingue en cualquier estado del juicio, por el pago voluntario del máximo de la multa correspondiente al hecho y de las indemnizaciones á que hubiere lugar.

Concordancias

Cod. holandés, 74; italiano, 101.



ARTÍCULO 106

El indulto del reo extingue la pena y sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas á particulares.

Concordancias

Cód. chileno, 93, núm. 4°.

ARTÍCULO 107

El perdón de la parte ofendida extingue la pena impuesta por hecho que no pueda reprimirse de oficio.

Concordancias

Cód. español, 132, núm. 5°; italiano, 88; chileno, 93, 5°.

ARTÍCULO 108

Las indemnizaciones pecuniarias inherentes á la pena pueden hacerse efectivas sobre los bienes propios del condenado, aún después de su muerte.

Concordancias

Cód. Tejedor, 70; español, 125.



TÍTULO X

SIGNIFICACIÓN DE ALGUNOS TÉRMINOS EMPLEADOS EN ESTE CÓDIGO

ARTÍCULO 109

Para la inteligencia del texto de este Código se tendrá presente las siguientes reglas:

La unidad monetaria á que este Código se refiere al expresar sumas en dinero, es el peso nacional de oro ó su equivalente en moneda de curso legal.

Los plazos señalados en este Código se contarán con arreglo á las disposiciones del Código Civil.

La expresión *reglamentos ú ordenanzas* comprende todas las disposiciones de carácter general dictadas por la autoridad competente en la materia de que traten.

Por los términos *funcionario público y empleado público*, usados en este Código, se designa á todo el que, por disposición de la ley, participa accidental ó permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular ó por nombramiento de autoridad competente.

La expresión *hecho punible* comprende todo delito, ó falta prevista en este Código ó en cualquiera otra ley penal.

Se entiende por *banda* la asociación de dos ó más individuos para cometer delitos indeterminados.

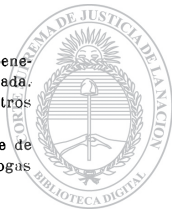
Se entiende que hay escalamiento cuando se penetra por vía que no está destinada á servir de entrada.

En el término *jueces* se comprende á los árbitros y arbitradores.

Con la palabra *mercadería* se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio, incluso las drogas ó medicamentos.

Concordancias

Cod. holandés, tit. IX, libro I.



LIBRO SEGUNDO

TÍTULO I

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS



CAPÍTULO I

Delitos contra la vida

ARTÍCULO 110

Se impondrá la pena de presidio de diez á veinticinco años al que matare á otro, siempre que el hecho no esté de otra manera reprimido en este Código.

Concordancias

Cod. penal, 96; italiano, 364; holandés, 287; húngaro, 279; alemán, 212; uruguayo, 317; belga, 393; español, 419; francés, 295.

ARTÍCULO 111

Corresponderá la pena de presidio perpétuo:

- 1° Al que matare á su padre, madre ó hijo, ó á cualquier otro ascendiente ó descendiente, ó á su cónyuge, ó á su bienhechor, sabiendo que lo son.



2º Al que matare á otro por precio ó promesa remuneratoria, ó con alevosía ó ensañamiento, ó por impulso de perversidad brutal, ó por medio de incendio, inundación, descarrilamiento ó explosión, ó cualquier otro medio capaz de causar grandes estragos.

3º Al que matare á la vez á dos ó más personas.

4º Al que matare á otro para preparar, facilitar, ó consumir ú ocultar otro hecho punible; ó para asegurar sus resultados ó la impunidad, para sus cooperadores, ó por no haber obtenido el resultado que se propuso al intentar el otro hecho punible.

Concordancias

1º Cód. penal, 94; húngaro, 280; alemán, 215; belga, 395; chileno, 390; español, 447; uruguayo, 318.

2º Cód. penal, 95; español, 418; italiano, 306; uruguayo, 319; y 320; chileno, 391.

3º Cód. húngaro, 280.

4º Cód. francés, 304; italiano, 306, 6º; holandés, 288; alemán, 214.

ARTÍCULO 112

Corresponderá la pena de penitenciaría por tres á diez años:

1º Al que matare á otro en el acto de ser provocado por una injuria inmerecida, ó cuando la víctima, con anterioridad, le hubiere provocado con una injuria ú ofensa igualmente inmerecida y grave.

2º A la madre que, para ocultar su deshonra, matare á su hijo durante el nacimiento ó hasta tres días después, y á los padres, hermanos, marido ó hijos que, para ocultar la deshonra



de su hija, hermana, esposa ó madre. cometieren el mismo delito.

3° Al ascendiente ó hermano que matare á la descendiente ó hermana en el acto de sorprenderla en ilegítimo concubito.

4° Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo ó en la salud, causare la muerte de alguna persona.

Concordancias

1° Cód. penal, 97; Tejedor, 197; húngaro, 281; alemán, 213.

2° Cód. penal, 100; Tejedor, 214; italiano, 309; húngaro, 284; holandés, 290; español, 424; belga, 396; uruguayo, 338, 339; chileno, 394; alemán, 217.

3° Cód. italiano, 377.

4° Cód. Tejedor, 169; francés, 309; italiano, 308; uruguayo, 323; húngaro, 306; alemán, 226.

ARTÍCULO 113

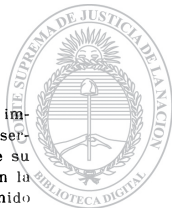
Cuando, en los casos del artículo 111, concurre alguna de las circunstancias de los incisos 1° y 4° del artículo 112, la pena será de presidio por diez á veinticinco años.

ARTÍCULO 114

El que instigare á otro al suicidio, ó le ayudare á cometerlo, será reprimido, si el suicidio tuviere lugar, con la pena de uno á cuatro años de penitenciaría.

Concordancias

Cód. Tejedor, 220; italiano, 370; holandés, 294; húngaro, 283; español, 421; chileno, 393; uruguayo, 324.



ARTÍCULO 115

El que, por imprudencia ó negligencia, ó por impericia en su propio arte ó profesión, ó por inobservancia de los reglamentos ó de los deberes de su cargo, causare á otro un daño en el cuerpo ó en la salud, del que se siguiere la muerte, será reprimido con multa de quinientos á dos mil pesos, é inhabilitación especial en su caso, por cinco á diez años.

Concordancias

Cód. italiano, 371; belga, 418, 419; francés, 319; uruguayo, 325.

ARTÍCULO 116

El que causare un aborto será reprimido:

- 1º Con penitenciaría de tres á diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.
- 2º Con penitenciaría de uno á cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. La pena será de dos á seis años, si el hecho fuera seguido de la muerte de la mujer.

Concordancias

Cód. penal, 102; 1º y 2º; Tejedor, 217; italiano, 383; holandés, 296; húngaro, 286; español, 425; alemán, 220; belga, 348; chileno, 342.

2º Cód. penal, 102; 3º; Tejedor, 217; italiano, 382, 383; holandés, 297; español, 425; alemán, 218; belga, 350; chileno, 342; húngaro, 285.

ARTÍCULO 117

Los médicos, cirujanos, parteras ó farmacéuticos que abusaren de su ciencia ó arte para causar abor-

to, ó cooperaren á causarlo, incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior, y sufrirán además inhabilitación especial por tiempo doble que el de la condena.

Concordancias

Cód. penal, 105; Tejedor, 218; italiano, 384; holandés, 298; español, 428; belga, 353; chileno, 345.

ARTÍCULO 118

Será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años el que con violencia causare un aborto, sin que haya tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio ó le constare.

Concordancias

Cód. penal, 103; belga, 349; chileno, 343; español, 426; húngaro, 304.

ARTÍCULO 119

La mujer que causare su propio aborto ó consintiere en que otro se lo causare, será reprimida con penitenciaría de uno á cuatro años.

En este caso, la tentativa de la mujer no es punible.

Concordancias

Cód. penal, 104; húngaro, 285; español, 427; alemán, 218; belga, 351; chileno, 344.





CAPÍTULO II

Lesiones

ARTÍCULO 120

Se impondrá la pena de penitenciaría de un mes á un año al que causare á otro, en el cuerpo ó en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este código.

Concordancias

Cód. penal, 120, 2º; italiano, 372; alemán, 223.

ARTÍCULO 121

Se impondrá la pena de penitenciaría de dos á seis años, si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido ó de un órgano, ó una dificultad permanente de la palabra, ó si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, ó lo hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes, ó le hubiere causado una deformación permanente del rostro.

Concordancias

Cód. italiano, 372, 1º; alemán, 224; húngaro, 303; penal, 115.



ARTÍCULO 122

Se impondrá la pena de penitenciaría de tres á diez años si la lesión produjere una enfermedad mental ó corporal, cierta ó probablemente incurable, inutilidad permanente para el trabajo, pérdida de un sentido, ó de un órgano ó del uso de un órgano, de la palabra ó de la capacidad de engendrar ó concebir.

Concordancias

Cód. penal, 119; italiano, 372, 2º; húngaro, 303; belga,^f 400; alemán, 224.

ARTÍCULO 123

Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 111, la pena, en el caso del artículo 120, será de seis meses á dos años; en el del artículo 121, de tres á diez años y en el del artículo 122, de tres á quince años.

Concordancias

Cód. italiano, 373; francés, 312.

ARTÍCULO 124

El que por imprudencia ó negligencia, ó por impericia en su propio arte ó profesión, ó inobservancia de los reglamentos ó de los deberes de su cargo, causare á otro un daño en el cuerpo ó en la salud, sufrirá la pena de doscientos á mil pesos de multa é inhabilitación especial por uno á cuatro años.

Concordancias

Cód. francés, 320; italiano, 375; húngaro, 310; uruguayo, 329.

CAPÍTULO III

Disposiciones comunes á los dos Capítulos anteriores

ARTÍCULO 125

Cuando en riña, pelea ó agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare muerte ó lesiones de las determinadas en los artículos 121 y 122, sin que constare quienes las causaron, se tendrá por autores á todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido, y se les aplicará la pena de uno á cuatro años de penitenciaría.

Si las lesiones fueran las del artículo 120, la pena aplicable será de cuatro á ciento veinte días de penitenciaría

Concordancias

Cód. penal, 98 y 121; Tejedor, 201 á 204, 241, 242; español. 420 y 435; chileno. 392; italiano, 378; húngaro, 308; alemán, 227.



CAPÍTULO IV

Duelo

ARTÍCULO 126

Los que se batieren sin la intervención de padrinos, mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos:

- 1º El que matare á su adversario, con la pena señalada para el homicida.
- 2º El que causare heridas, con la pena señalada para el autor de lesiones.

Concordancias

Cód. penal, 109; Tejedor, 225; español, 446.

ARTÍCULO 127

El que instigare á otro á provocar ó á aceptar un duelo, y el que desacreditare públicamente á otro por no desafiar ó por rehusar un desafío, será reprimido:

- 1º Con multa de doscientos á mil pesos, si el duelo no se realizare ó si, realizándose, no se produjere muerte ni lesiones.
- 2º Con penitenciaría de uno á cuatro años si se produjere muerte ó lesiones.





Concordancias

Cód. penal, 110; Tejedor, 223; español, 443; austriaco, 145; holandés, 152; húngaro, 295; chileno, 407.

ARTÍCULO 128

El que provocare ó diere causa á un desafío, proponiéndose un interés pecuniario ú otro objeto inmaterial, será reprimido:

- 1° Con penitenciaría de uno á cuatro años, si el duelo no se efectuare, ó si, efectuándose, no resultare muerte ni lesiones.
- 2° Con penitenciaría de tres á diez años, si el duelo se realizare y resultaren lesiones.
- 3° Con presidio de diez á veinticinco años, si se produjere la muerte.

Concordancias

Cód. penal, 111; Tejedor, 226.

ARTÍCULO 129

El combatiente que faltare, en daño de su adversario, á las condiciones ajustadas por los padrinos será reprimido:

- 1° Con penitenciaría de tres á diez años, si causare lesiones á su adversario.
- 2° Con presidio de diez á veinticinco años, si le causare la muerte

Concordancias

Cód. penal, 112; Tejedor 226, 2°.



ARTÍCULO 130

Los padrinos de un duelo que usaren cualquier clase de alevosía en el arreglo ó en la ejecución del desafío, serán reprimidos con las penas señaladas en el artículo anterior, según sean las consecuencias que resultaren.

Concordancias

Cód. penal, 116; Tejedor, 224.

ARTÍCULO 131

Cuando los padrinos concertasen el duelo á muerte, serán reprimidos con penitenciaría de uno á cuatro años, si se verificare la muerte de alguno de los combatientes. Si no se verificase la muerte de alguno de ellos, la pena será de multa de doscientos á mil pesos

Concordancias

Cód. penal, 117; Tejedor, 224, 2º.

CAPÍTULO V

Abuso de armas

ARTÍCULO 132

El que dispare una arma de fuego contra una persona, sin hierirla, será penado con seis meses á dos años de penitenciaría. Esta pena se aplicará aunque se causare herida á que corresponda pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave.

Concordancias

Cód. penal, 99; español, 423; italiano, 380; uruguayo, 330.

ARTÍCULO 133

La agresión con otra clase de arma, cuando no se causare herida, será penada con penitenciaría de cuatro á ciento veinte días.





CAPÍTULO VI

Abandono de personas

ARTÍCULO 134

El que abandonare ó dejare en desamparo á una persona incapaz, enferma ó menor de diez años, á quien deba mantener ó cuidar, será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años.

Si á consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo ó en la salud, la pena será de dos á seis años de penitenciaría.

Si ocurriere la muerte, la pena será de penitenciaría de tres á diez años.

Concordancias

Cód. penal, 162 y 163; Tejedor, 288, 289; italiano, 386; francés, 349, 352; húngaro, 287; holandés, 255, 256 y 257; belga, 354; español, 501; chileno, 346, 352; uruguayo, 346.

ARTÍCULO 135

El máximo y el mínimo de las penas establecidas en el artículo precedente serán aumentados en un tercio cuando el delito fuere cometido por los padres contra sus hijos, ó por éstos contra aquéllos, ó por el cónyuge. Serán disminuidas á la mitad cuando el abandono fuere de un menor de tres días, aún no ins-



cripto en el registro civil, para salvar el honor propio ó de la esposa, de la madre, de la hija ó de la hermana.

Concordancias

Cód. italiano, 387, 388; francés, 350, 353; holandés, 258, 259; belga, 355; chileno, 347; uruguayo, 347.

ARTÍCULO 136

El que, encontrando perdido ó desamparado á un menor de diez años ó á una persona herida, amenazada de un peligro cualquiera ó inválida, omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiese hacerlo sin riesgo personal, ó no diere aviso inmediatamente á la autoridad, será reprimido con multa de cien á quinientos pesos.

Concordancias

Cód. Tejedor, 290; italiano, 389; francés, 347.



CAPÍTULO VII

Delitos contra el honor

ARTÍCULO 137

La calumnia ó falsa imputación de un delito que dé lugar á la acción pública, será reprimida con penitenciaría de uno á cuatro años.

Concordancias

Cód. penal, 177; Tejedor, 310.

ARTÍCULO 138

El que deshonnare, desacreditare, menospreciare ó ridiculizare á otro por medio de palabras, escritos ó dibujos que no constituyan calumnia, ó por medio de hechos ó acciones que no importen otro delito más grave, será reprimido con multa de quinientos á dos mil pesos.

La pena será de mil á cuatro mil pesos cuando la injuria se hiciere por medio de la prensa, ó en presencia del injuriado, ó en escrito dirigido á él.

Concordancias

Cod. penal, 179; Tejedor, 309.



ARTÍCULO 139

El acusado del delito de injuria solo podrá probar la verdad de su imputación en los casos siguientes:

- 1º Si la imputación hubiere tenido por objeto defender ó garantir un interés público actual.
- 2º Si el hecho atribuido á la persona ofendida hubiere dado lugar á un proceso penal.
- 3º Si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra él.

En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena.

Concordancias

Cód. italiano, 394; húngaro, 263; holandés, 261 y 263; ley inglesa 6 y 7, Victoria, c. 96, *Act for amending the law respecting defamatory words and libel*.

ARTÍCULO 140

El reo de calumnia ó injuria equívoca ó encubierta que rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre ella, sufrirá del mínimun á la mitad de la pena correspondiente á la calumnia ó injuria manifiesta.

Concordancias

Cód penal, 183; Tejedor, 312.

ARTÍCULO 141

El que publicare ó reprodujere por cualquier medio, injurias ó calumnias inferidas por otro, será reprimi-

do como autor de las injurias ó calumnias de que se trate.

Concordancias

Cód. francés, 368; holandés, 271; belga, 451.

ARTÍCULO 142

Cuando la injuria ó calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, el juez ó tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos ó periódicos, á costa del culpable, la sentencia ó satisfacción.

Concordancias

Cód. penal, 184; Tejedor, 313; alemán, 200.

ARTÍCULO 143

Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados ó defensores en los escritos, discursos ó informes producidos ante los tribunales, quedarán sujetas únicamente á las correcciones disciplinarias, á menos que se las diera á la publicidad, en cuyo caso será responsable como autor de la injuria el que lo sea de su publicación.

Concordancias

Cód. italiano, 393; francés, 377; húngaro, 266; belga, 452; chileno, 426.

ARTÍCULO 144

Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena á las dos partes ó á alguna de ellas.



Concordancias

Cód. italiano, 397.

ARTÍCULO 145

El culpable de injuria ó calumnia contra un particular quedará exento de pena si se retractare públicamente.

Concordancias

Cód. penal, 186, 3º; Tejedor, 315, 3º.





TÍTULO II

DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD

CAPÍTULO I

Violación, estupro y ultrajes al pudor

ARTÍCULO 146

Será reprimida con penitenciaría de tres á diez años, la persona que tuviere concúbito fuera de matrimonio, con persona de uno ú otro sexo, en los casos siguientes:

- 1º Cuando la víctima fuere menor de doce años;
- 2º Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón ó de sentido, ó por enfermedad ó cualquiera otra causa no pudiera resistir.
- 3º Cuando se usare de fuerza ó intimidación.

Concordancias

Cód. penal, 127, 128; Tejedor, 252; italiano, 331; holandés, 242, 243, 244; húngaro, 235; francés, 332; español, 453; alemán, 177; chileno, 361; uruguayo, 276; belga, 375.



ARTÍCULO 147

Se impondrá la pena de penitenciaría de uno á cuatro años cuando la víctima fuere mujer honesta, mayor de doce años y menor de quince, y no se encontrare en las circunstancias de los números 2º y 3º del artículo anterior.

Concordancias

Cód. penal, 130; Tejedor, 257; húngaro, 236; holandés, 245; alemán, 182; uruguayo, 284; chileno, 363; español, 458; italiano, 335.

ARTÍCULO 148

Se impondrá la pena de penitenciaría de dos á seis años al que abusare del error de una mujer fingiéndose su marido, y tuviere con ella comercio carnal.

Concordancias

Cód. húngaro, 245.

ARTÍCULO 149

La pena será de penitenciaría por tres á quince años, cuando, en los casos del artículo 146, resultare un grave daño en la salud de la víctima ó se cometiere el hecho por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano ó encargado de la educación ó guarda de aquélla, ó con el concurso de dos ó más personas.

Concordancias

Cód. penal, 131; Tejedor, 258; italiano, 332.



ARTÍCULO 150

Cuando en el caso del artículo 147 mediere alguna de las circunstancias expresadas en el artículo anterior, se impondrá penitenciaría de tres á diez años.

Concordancias

Cód. penal, 131; Tejedor, 258; italiano, 335.

ARTÍCULO 151

Si en los casos de los artículos 146 y 147 resultare la muerte de la persona ofendida, se impondrá la pena de presidio por diez á quince años.

Concordancias

Cód. penal, 128, 2º; Tejedor, 258; italiano, 351.

ARTÍCULO 152

Sufrirá la pena de penitenciaría de uno á cuatro años el que abusare deshonestamente de persona de uno ú otro sexo, concurriendo alguna de las circunstancias del artículo 146, sin que haya cópula.

Si el autor del hecho fuere alguna de las personas mencionadas en el artículo 149, la pena será de tres á diez años de penitenciaría.

Concordancias

Cód. italiano, 333; chileno, 366; belga. 372, 373.

ARTÍCULO 153

Sufrirá la misma pena del artículo anterior la persona que obligare á otra á tener acceso carnal ó á cometer ó sufrir otro acto impúdico con un tercero.

Concordancias

Cód. holandés, 246.





CAPÍTULO II

Corrupción de menores

ARTÍCULO 154

El que promoviére ó facilitare la prostitución ó corrupción de menores de diez y ocho años, para satisfacer deseos ajenos, será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años.

Concordancias

Cód. Tejedor, 259; penal, 132; italiano, 345 y 346; español, 459, francés, 334; belga, 379.

ARTÍCULO 155

La pena será de dos á seis años de penitenciaría, si el hecho se hubiere cometido con alguna de las circunstancias siguientes:

- 1º Si el menor no tuviere doce años cumplidos.
- 2º Si el autor fuere ascendiente, afín en línea recta ascendente, marido ó persona encargada de la educación ó guarda de la víctima.

Concordancias

Cód. italiano, 347; francés, 334; belga, 380, 381; húngaro, 247.



CAPÍTULO III

Rapto

ARTÍCULO 156

El que con miras deshonestas, sustrajere ó retuviere á una mujer por medio de fuerza, intimidación ó fraude, sufrirá penitenciaría de uno á cuatro años.

Concordancias

Cód. penal, 136; español, 430; italiano, 340; uruguayo, 291; chileno, 358.

ARTÍCULO 157

Si la robada fuere una mujer casada, la pena será de dos á seis años de penitenciaría.

Concordancias

Cod. penal, 133; Tejedor, 260; italiano, 341; uruguayo, 288.

ARTÍCULO 158

El que cometiere rapto de una menor de quince años y mayor de doce, con el consentimiento de ella, será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años.

Si el rapto fuere de una menor de doce años, con ó sin su consentimiento, el culpable será reprimido con penitenciaría de dos á seis años

Concordancias

Cód. penal, 134 y 135; Tejedor, 261; español, 461; italiano, 341; francés, 356; uruguayo, 289, 290; chileno, 359.

ARTÍCULO 159

Cuando el rapto fuere seguido de violación, estupro ú otro delito contra la honestidad, éstos se considerarán hechos independientes á los efectos de la acumulación de las penas.





CAPÍTULO IV

Disposiciones comunes á los capítulos anteriores

ARTÍCULO 160

El reo de violación, estupro ó raptó, será, además, condenado á dotar á la ofendida, si fuere soltera ó viuda, en proporción á sus facultades, y á mantener la prole que resulte.

Concordancias

Cód. penal, 139; Tejedor, 264; español, 464.

ARTÍCULO 161

En los casos de violación, estupro ó raptó de una mujer soltera, quedará exento de pena el delincuente si se casare con la ofendida, prestando ella su consentimiento, después de restituida á poder de sus padres ó guardador, ó á lugar seguro, haya ó nó mediado condena.

Concordancias

Cód. penal, 140; Tejedor, 265; italiano, 352; francés, 357.

ARTÍCULO 162

Los ascendientes, descendientes, afines en línea recta, hermanos y cualesquiera personas, que, con abuso de autoridad, encargo ó confianza, cooperaren á la perpetración de los delitos comprendidos en este título, serán reprimidos con la pena de los autores.

Concordancias

Cód. penal, 142; Tejedor, 267; español, 465.



TÍTULO III

DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL

CAPÍTULO I

Matrimonios ilegales

ARTÍCULO 163

Será reprimido con penitenciaría de dos á seis años:

- 1º El que contrajere matrimonio sabiendo que existe impedimento que cause su nulidad absoluta.
- 2º El que engañando á una persona simulare matrimonio con ella.

Concordancias

1º Cód. penal, 143; Tejedor, 268; belga, 391; holandés, 237, 238; alemán, 171; italiano, 359; uruguayo, 306; húngaro, 251 y 255; chileno, 382; español, 455; francés, 340.

2º Cód. penal, 144; alemán, 179; chileno, 383.

ARTÍCULO 164

El oficial público que á sabiendas autorizare un matrimonio de los comprendidos en el artículo ante-



rior, sufrirá la misma pena; pero, si lo autorizare sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescribe para la celebración del matrimonio, la pena será de multa de doscientos á mil pesos.

Concordancias

Cod. penal, 147; ley de matrimonio, 107 y 110; Tejedor, 272; holandés, 379; alemán, 338; uruguayo, 310; chileno, 388; español, 493.

ARTÍCULO 165

El oficial público que, fuera del caso del artículo 164, procediere á la celebración de un matrimonio, sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley, sufrirá la pena de multa de doscientos á mil pesos.

En la misma pena incurrirá el representante legítimo de un menor, impúber que diere su consentimiento para el matrimonio del mismo.

Concordancias

Cod. penal, 147; ley de matrimonio, 110; belga, 264; alemán, 337, uruguayo, 311; chileno, 388.



CAPÍTULO II

Suposición y supresión de estado civil

ARTÍCULO 166

Se aplicará penitenciaría de seis meses á dos años al que por un acto cualquiera hiciere incierto, alterar ó suprimiere el estado civil de otra persona.

Concordancias

Cód. holandés, 236.

ARTÍCULO 167

Se aplicará de uno á cuatro años de penitenciaría:

- 1º A la mujer que fingiere preñez ó parto para dar á su supuesto hijo derechos que no le correspondan, y al médico ó partera que cooperare á la ejecución del delito.
- 2º Al que por un acto cualquiera hiciere incierto, alterar ó suprimiere el estado civil de un menor de diez años.
- 3º Al que hiciere figurar en el registro del estado civil una persona que no exista.



4° A la mujer casada que supusiere filiación legítima al hijo que haya tenido en adulterio.

Concordancias

1° Cód. penal, 150; Tejedor, 274; español, 483; chileno, 353; uruguayo, 312.

2° Cód. penal, 151; Tejedor, 275; italiano, 362; francés, 348; húngaro, 254; uruguayo, 313.

3° Cód. italiano, 361; francés, 345.





TÍTULO IV

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

CAPÍTULO I

Delitos contra la libertad individual

ARTÍCULO 168

El que redujere á una persona á servidumbre ú otra condición análoga, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella, será reprimido con penitenciaría de tres á quince años.

Concordancias

Const. Nacional, 15; cód. italiano, 145; holandés, 274; alemán, 234; húngaro, 324, 2º.

ARTÍCULO 169

El que ilegalmente privare á otro de su libertad personal será reprimido con penitenciaría de un mes á un año.



Concordancias

Cód. penal, 155, 156 y 157; Tejedor, 281 y 282; holandés, 282; español, 495; italiano, 146; húngaro, 323; chileno, 141; uruguayo, 152; francés, 341; alemán, 239.

ARTÍCULO 170

Se impondrá penitenciaría de uno á cuatro años cuando concorra alguna de las circunstancias siguientes:

- 1º Si el hecho se cometiere con violencias ó amenazas, ó por lucro, ó con fines ó pretextos religiosos.
- 2º Cuando se cometiere en la persona de un ascendiente, del cónyuge ó de otro individuo á quien se deba respeto particular.
- 3º Cuando resultare grave daño á la persona, ó á la salud, ó á los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importare delito á que la ley señale pena mayor.
- 4º Si se hubiere ejecutado el hecho simulando autoridad pública ú orden de autoridad pública.
- 5º Cuando la privación de la libertad haya durado más de un mes.

Concordancias

1º Cód. penal, 155, 3º; Tejedor, 279, 4º; italiano, 146; húngaro, 323; uruguayo, 152.

2º Cód. penal, 155, 2º; Tejedor, 279, 3º; italiano, 146.

3º Cód. italiano, 146; holandés, 282; húngaro, 324; español, 496, 3º; chileno, 141; alemán, 239; belga, 438.

4º Cód. penal, 155, 1º; Tejedor, 279, 2º; español, 496, 2º; uruguayo, 152; belga, 437.

5º Cód. penal, 155, 4º; Tejedor, 279, 1º; español, 496, 1º; chileno, 141; uruguayo, 152; alemán, 239; belga, 436.

ARTÍCULO 171

Será reprimido con penitenciaría de un mes á un año é inhabilitación especial por doble tiempo:

- 1º El funcionario público que, con abuso de sus funciones ó sin las condiciones ó las formalidades prescriptas por la ley, privare á alguno de su libertad personal.
- 2º El funcionario que retuviere á un detenido ó preso cuya soltura haya debido decretar ó ejecutar.
- 3º El funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona sin ponerla á disposición del juez competente.
- 4º El funcionario que incomunicare indebidamente á un detenido.
- 5º El funcionario que impusiere á los presos que estén bajo su guarda, severidades, vejaciones ó apremios ilegales, ó los colocare en lugares del establecimiento que no sean los señalados al efecto.
- 6º El jefe de presidio, penitenciaría, ú otro establecimiento penal, ó el que haga sus veces, que recibiere algún reo sin testimonio de la sentencia firme en que se le hubiere impuesto la pena.
- 7º El alcaide ó empleado de las cárceles de detención ó seguridad que recibieren un preso sin orden de juez competente, salvo el caso de flagrante delito.
- 8º El funcionario que, desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquiera vejación contra las personas ó les aplicare apremios ilegales.





9º El juez que decretare prisión preventiva por delito á que no corresponda pena corporal, ó que prolongare la prisión preventiva, que computada según el artículo 45, hubiere agotado la pena máxima que podría corresponder al procesado por el delito imputado.

10. El funcionario competente que, teniendo noticia de una detención ilegal, omitiere, retardare ó rehusare hacerla cesar ó dar cuenta á la autoridad que debiere resolver.

Concordancias

1º Const. Nacional, art. 18: cód. italiano, 147; húngaro, 193; español, 210; chileno, 148; uruguayo, 153, 2º; alemán, 341; belga, 147.

2º Cód. penal, 243, 1º; Tejedor, 383, 5º; húngaro, 194; español, 211; italiano, 150; alemán, 341; belga, 155.

3º Cód. penal, 243, 2º; Tejedor, 383, 6º; español, 212; chileno, 149, 2º

4º Cód. penal, 243, 4º; Tejedor, 383, 9º; español, 213, 5º; chileno, 150, 1º.

5º Cód. penal, 243, 5º; Tejedor, 383, 10º; italiano, 152; español, 213, 6º; chileno, 150; uruguayo, 158; belga, 159.

6º Cód. penal, 243, 6º; Tejedor, 383, 11º; italiano, 150; holandés, 464; español, 213, 3º; chileno, 149, 1º; uruguayo, 156; belga, 157.

7º Cód. penal, 243, 7º; Tejedor, 383, 12º; italiano, 150; holandés, 464; español, 213, 1º; chileno, 149, 1º; uruguayo, 156; belga, 157.

8º Cód. penal, 243, 8º; Tejedor, 383; español, 213, 6º; chileno, 150, 1º; uruguayo, 158.

10. Cód. italiano, 151; holandés, 368; chileno, 149, 5º; uruguayo, 157.

ARTÍCULO 172

Será reprimido con penitenciaría de dos á seis años, el que condujere á una persona fuera de las fronteras de la República, con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro, ó alistarla en un ejército extranjero.



Concordancias

Cód. holandés, 278; italiano, 146; húngaro, 324, 2º; alemán, 234.

ARTÍCULO 173

El que sustrajere á un menor de diez años de poder de sus padres, tutor ó persona encargada de él, será reprimido con penitenciaría de tres á diez años.

Concordancias

Cód. penal, 158; Tejedor, 283; italiano, 148; francés, 354; holandés, 279; húngaro, 317; español, 498; chileno, 142; alemán, 235; belga, 368; uruguayo, 154.

ARTÍCULO 174

En la misma pena incurrirá el que, hallándose encargado de la persona de un menor de diez años, no lo presentare á sus padres ó guardadores que lo solicitaren, ó no diere razón satisfactoria de su desaparición.

Concordancias

Cód. penal, 159; Tejedor, 285; español, 499.

ARTÍCULO 175

El que indujere á un mayor de diez años y menor de quince á fugar de casa de sus padres, guardadores ó encargados de su persona, será reprimido con penitenciaría de un mes á un año.

Concordancias

Cód. penal, 160; Tejedor, 286; español, 500.



ARTÍCULO 176

El que ocultare á las investigaciones de la justicia ó de la policía á un menor de quince años que se hubiere sustraído á la potestad ó guarda á que estaba legalmente sometido, será reprimido con penitenciaría de un mes á un año. Si el menor no tiene diez años cumplidos la pena será de seis meses á dos años.

Concordancias

Cód. holandés, 280.

ARTÍCULO 177

El que usare de violencia ó amenaza para compeler á una persona á hacer ó no hacer ó tolerar algo, será reprimido, si el hecho no importa otro delito más severamente penado, con multa de doscientos á mil pesos.

Concordancias

Cód. penal, 171; Tejedor, 299; italiano, 154; español, 510; uruguayo, 159; alemán, 240; holandés, 284, 1°.

ARTÍCULO 178

La amenaza de violencia pública con fuerzas reunidas, contra las personas ó las propiedades, ó de un delito que ponga en peligro la seguridad de las personas ó de las propiedades, ó de un delito contra la honestidad, será reprimida con penitenciaría de seis meses á dos años.

Concordancias

Cód. holandés, 285; italiano, 154.

ARTÍCULO 179

El autor de violencias ó amenazas no comprendidas en los artículos anteriores será reprimido con multa de cien à quinientos pesos.

Concordancias

Cód. penal, 169.





CAPÍTULO II

Violación de domicilio

ARTÍCULO 180

El que entrare en morada ó casa de negocio ajeno, ó en sus dependencias, ó en un lugar cerrado, contra la voluntad expresa ó presunta de quien tenga derecho de excluirlo. ó permaneciere allí después de recibir de éste la intimación de salir. será reprimido, si no resultare otro delito más severamente penado, con penitenciaría de un mes á un año.

Concordancias

Cód. penal, 165; Tejedor, 293; húngaro, 332; italiano, 157; español, 504; uruguayo, 162; belga, 439; chileno, 144; holandés, 138.

ARTÍCULO 181

Se impondrá la misma pena é inhabilitación especial por doble tiempo al funcionario público ó agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley, ó fuera de los casos que ella determina.

Concordancias

Cód. penal, 243, 3°; Tejedor, 383, 7°; italiano, 158; francés, 184; holandés, 370; húngaro, 199; español, 215, 1°; chileno, 155; uruguayo, 163; alemán, 342; belga, 148.

ARTÍCULO 182

Las disposiciones de los artículos anteriores no se aplicarán al que entrare en los sitios expresados para evitar un mal grave á sí mismo, á los moradores ó á un tercero, ni al que lo hiciere por cumplir un deber de humanidad ó prestar auxilio á la justicia.

Concordancias

Cód. penal, 166; Tejedor, 294; español, 505.





CAPÍTULO III

Violación de secretos

ARTÍCULO 183

El que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado, ó un despacho telegráfico, telefónico ó de otra naturaleza, que no le esté dirigido, ó se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho, ó de otro papel privado, aunque no estén cerrados, ó suprimiere una correspondencia que no le esté dirigida, será reprimido con multa de doscientos á mil pesos.

Si el culpable comunicare á otro ó publicare el contenido de la carta, escrito ó despacho, la multa será de quinientos á dos mil pesos.

Concordancias

Cód. penal, 173; Tejedor, 301; húngaro, 327; chileno, 146; uruguayo, 164; holandés, 201; italiano, 159 y 160.

ARTÍCULO 184

El empleado de correos ó telégrafos ó de otra repartición encargada de la correspondencia, que abusando de su empleo se apoderase de una carta, de un pliego, de un telegrama ó de otra correspondencia cualquiera, para enterarse de su contenido, ó la entregare ó comunicare

á otro que no sea el destinatario, ó la suprimiere, será reprimido con penitenciaría de uno á cuatro años.

Concordancias

Ley penal de 1863, 52; cód. penal, 263; Tejedor, 409; holandés, 374; italiano, 162; húngaro, 200 y 201; chileno, 156; uruguayo, 166; alemán, 354 y 355; belga, 149; español, 219 y 220.

ARTÍCULO 185

El que, hallándose en posesión de una correspondencia no destinada á la publicidad, aunque haya sido dirigida á él, la hiciere publicar, será reprimido con multa de doscientos á mil pesos.

Concordancias

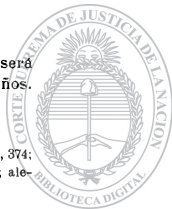
Cód. italiano, 161.

CAPÍTULO 186

El que, teniendo noticia por razón de su propio estado, oficio, empleo, profesión ó arte, de un secreto cuya relación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa, será reprimido con multa de doscientos á mil pesos é inhabilitación especial por seis meses á tres años.

Concordancias

Cód. penal, 174, 262, 264 y 265; Tejedor, 410 y 411; holandés, 272; italiano, 163; francés, 378; húngaro, 328; chileno, 247.



CAPÍTULO IV

Delitos contra la libertad del trabajo

ARTÍCULO 187

El que obligare á un obrero, con violencias ó amenazas, á tomar parte en una huelga, será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años.

Concordancias

Cód. italiano, 166.



CAPÍTULO V

Delitos contra la libertad de cultos

ARTÍCULO 188

El que impidiere ó estorbare la celebración de una función ó ceremonia de un culto, será reprimido con penitenciaría de un mes á un año.

Concordancias

Cód. Tejedor, 443; italiano, 140; francés, 261; húngaro, 191; holandés, 145; chileno, 138; español, 239; uruguayo, 147; alemán, 167; belga, 143.





CAPÍTULO VI

Delitos contra la libertad de reunión

ARTÍCULO 189

El que impidiere ó turbare una reunión lícita será reprimido con penitenciaría de un mes á un año.

Concordancias

Cód. penal, 228; holandés, 143 y 144; español, 230.



CAPÍTULO VII

Delitos contra la libertad política

ARTÍCULO 190

El que, con violencia, amenaza, tumulto ó fraude, impidiere ó turbare el ejercicio de algún derecho político, no hallándose comprendido en otra disposición de este código, será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años é inhabilitación absoluta por triple tiempo.

Concordancias

Cód. italiano, 139; francés, 109; belga, 137.

ARTÍCULO 191

Serán reprimidos con penitenciaría de un mes á un año é inhabilitación absoluta por triple tiempo:

- 1º El que impidiere á alguien ejercer su derecho de sufragio en una elección nacional, provincial ó municipal.
- 2º El que se inscribiere en más de una sección electoral, ó votare ó se presentare á votar más de una vez en la misma elección.
- 3º El que votare ó pretendiere votar, haciéndose pasar por otra persona.



- 4° El que, por medio de dádivas ó promesas de terminare á alguien á no ejercer su derecho electoral ó á ejercerlo de cierta manera; y el elector que consintiere en cometer estos delitos.
- 5° El que se presentare armado en un comicio público.

Concordancias

1° Ley electoral de Buenos Aires, 69, 3°; húngaro, 178; holandés, 125; alemán, 107.

2° Ley electoral de la Nación, 67; húngaro, 184.

3° Ley electoral de la Nación, 67; ley de Buenos Aires, 69, 1°; húngaro, 184; holandés, 128; belga, 139.

4° Ley electoral de Buenos Aires, 72; húngaro, 185; holandés, 126; belga, 140; francés, 113; alemán, 109.

5° Ley electoral de la Nación, 68; ley de Buenos Aires, 69, 5°.

ARTÍCULO 192

Será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años é inhabilitación absoluta por triple tiempo:

- 1° El encargado de la formación del registro de electores nacionales, provinciales ó municipales, que maliciosamente omitiere la inscripción de un elector ó inscribiere el nombre de una persona supuesta ó que no deba ser inscripta.
- 2° El receptor de votos que dejare de consignar un sufragio emitido, ó que lo consignare adulterándolo, ó que supusiere la emisión de un voto que no ha tenido lugar, ó que admitiere como legítimo el voto de una persona que no sea elector ó que se presente con nombre ajeno.
- 3° El que sustrajere, destruyere ó falsificare las listas de votos, ó por cualquier medio hiciere imposible ó defectuoso el escrutinio.



- 4° El que cometiere cualquier fraude en el escrutinio particular de un comicio ó en el escrutinio general de una elección.
- 5° El que perturbare el orden de un comicio ó impidiere su celebración.

Concordancias

- 1° Ley electoral de Buenos Aires, 67; húngaro 179.
- 2° Ley penal de 1863, 34; ley electoral de Buenos Aires, 68; húngaro, 180 y 181; holandés, 127; belga, 139; francés, 111.
- 3° Cód. húngaro, 180; holandés, 127; belga, 139.
- 4° Ley electoral de Buenos Aires, 68; holandés, 129; alemán, 108.
- 5° Ley electoral de Buenos Aires, 73, 2°

ARTÍCULO 193

Los empadronadores, receptores de votos y demás funcionarios que dejaren de cumplir los deberes relativos á las elecciones ó á sus actos preparatorios, sufrirán la pena del artículo 191; y, si por su culpa la elección no tuviere lugar, sufrirán la pena del artículo 192.

Concordancias

Ley nacional de elecciones, 63 y 64; ley electoral de Buenos Aires, 66 y 67.

ARTÍCULO 194

El que hiciere ostentación de fuerza armada, en el día de una elección, sin ser requerido por los encargados de guardar el orden del comicio, será reprimido con la pena del artículo 191, si no impidiere el

acto electoral, y con la del artículo 192, si lo impidiere.

Concordancias

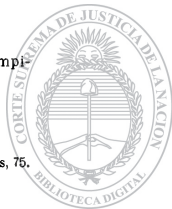
Ley nacional de elecciones, 59 y 65; ley electoral de Buenos Aires, 75.

ARTÍCULO 195

Todo acto de dolo ó fraude, no comprendido en los artículos anteriores, que se cometa por cualquiera de las personas llamadas á desempeñar funciones públicas, desde la organización del padrón electoral hasta la aprobación de la elección, será reprimido con penitenciaría de cuatro á ciento veinte días é inhabilitación absoluta por triple tiempo.

Concordancias

Ley electoral de Buenos Aires, 68.





CAPÍTULO VIII

Disposición común á los cuatro capítulos precedentes

ARTÍCULO 196

La pena de penitenciaría por delitos contra la libertad del trabajo, la libertad de cultos, la libertad de reunión y la libertad política, no será sustituible por multa.



TÍTULO V

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

CAPÍTULO I

Hurto

ARTÍCULO 197

El que, con ánimo de lucro, se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total ó parcialmente ajena, será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años.

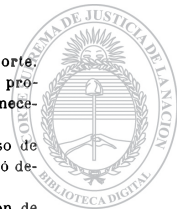
Concordancias

Cód. italiano, 402; holandés, 310; húngaro, 333; español, 530; uruguayo, 369; chileno, 432 *in fine*; alemán, 242; belga, 463.

ARTÍCULO 198

Se aplicará penitenciaría de uno á cuatro años en los casos siguientes:

- 1º Cuando el hurto fuere de cosas custodiadas en oficinas, archivos ó establecimientos públicos.
- 2º Cuando fuere de objetos ó dinero de viajeros, en cualquier clase de vehículos, ó en las es-



- taciones ó escalas de las empresa de transporte.
- 3º Cuando fuere de animales en rebaño ó de productos separados del suelo y dejados por necesidad en el campo.
- 4º Cuando el delito se cometiere con abuso de confianza ó con auxilio de un doméstico ó dependiente de la casa.
- 5º Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferro-carril, asonada ó motín, ó aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre ó conmoción pública, ó de un infortunio particular del damnificado.
- 6º Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa, ú otro instrumento semejante, para penetrar al lugar donde se halle la cosa objeto de la sustracción, ó de la llave verdadera que hubiere sido sustraída ó hallada.
- 7º Cuando se perpetrare con escalamiento.

Concordancias

- 1º Cód. italiano, 403, 1º; uruguayo, 370, 1º.
- 2º Cód. italiano, 403, 5º; alemán, 243, 4º; uruguayo, 370, 3º.
- 3º Cód. italiano 403, 6º; francés, 388; holandés, 311, 1º; uruguayo, 370 4º; chileno, 449.
- 4º Cód. penal, 190, inciso 4º; Tejedor, 319, 4º; italiano, 404, 1º; francés, 386, 3º; húngaro, 336, 7º; uruguayo, 371, 2º; chileno 440, 3º; español, 533, 2º; belga, 464.
- 5º Cód. italiano, 404, 2º; húngaro, 336, 5º; holandés, 311, 2º; uruguayo, 371, 3º.
- 6º Cód. penal, 190, 3º; Tejedor, 319, 3º; italiano, 404, 5º; húngaro, 336, 4º; español, 525, 3º; holandés, 311, 5º; alemán, 243, 3º; belga 467; uruguayo, 372, 2º; chileno, 442, 3º.
- 7º Cód. penal, 190, 1º; Tejedor, 319, 1º; español, 521, 1º; italiano, 404, 6º; alemán, 243, 2º; belga, 467; holandés, 311, 5º; uruguayo, 372, 1º; húngaro, 336, 3º; chileno, 440, 1º.



CAPÍTULO II

Robo

ARTÍCULO 199

El que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total ó parcialmente ajena, con ánimo de lucro y con fuerza en las cosas, ó con violencia ó intimidación en las personas, sea que la violencia ó intimidación tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo, ó después de cometido para procurar su impunidad, será reprimido con penitenciaría de dos á seis años.

Concordancias

Cód. español, 515; alemán, 249; belga, 468; italiano, 406; húngaro, 344; uruguayo, 373, 1°.

ARTÍCULO 200

Se aplicará penitenciaría de tres á quince años:

- 1° Si con motivo ú ocasión del robo resultare un homicidio.
- 2° Si por las violencias ejercidas para consumir el robo se pusiere en peligro de muerte á una persona, ó se alterare permanentemente su salud.
- 3° Si el robo se cometiere en despoblado y en banda.



Concordancias

1° Cód. penal, 187, 1°; Tejedor, 323; alemán, 251; húngaro, 349; *in fine*; belga, 474; español, 516, 1°; chileno, 433, 1°.

2° Cód. penal, 187, 2°; Tejedor, 323; alemán, 251, 2°; húngaro, 349, 2°; belga, 473; español, 516, 2° y 3°; chileno, 433, 2° y 3°.

3° Cód. penal, 187, 3°; Tejedor, 317, 3°; alemán, 250, 2°; belga, 472; chileno, 433, 3°; español, 517.

ARTÍCULO 201

Se aplicará penitenciaría de tres á diez años:

1° Si se cometiere el robo en despoblado y con armas.

2° Si se cometiere en lugares poblados y en banda.

3° Si se perpetrare el robo con perforación ó fractura de pared, cerco, puerta ó ventana de un lugar habitado.

4° Si concurriere alguna de las circunstancias del artículo 198.

Concordancias

1° Cód. penal, 188, 1°; Tejedor, 317, 2°; alemán, 250, 1° y 3°; belga, 471 y 472; español, 521 y 522.

2° Cód. penal, 188, 2°; español, 521.

3° Cód. penal, 190, 1°; Tejedor, 319, 1°; italiano, 404, 4°.



CAPÍTULO III

Extorsión.

ARTÍCULO 202

Será reprimido con penitenciaría de uno á cuatro años el que, con violencia ó intimidación, obligare á otro á depositar, entregar, suscribir ó destruir, en perjuicio propio ó ajeno, un documento capaz de producir cualquier efecto jurídico.

Concordancias

Cód. penal, 189, 3°; italiano, 407; francés, 400; holandés, 317; belga, 170.

ARTÍCULO 203.

En la misma pena incurrirá el que, por medio de amenazas ó simulando orden de autoridad pública, obligare á otro á enviar, depositar ó poner disposición del culpable ó de un tercero, cosas, dinero ó documentos que produzcan efectos jurídicos.

Concordancias.

Cód. Tejedor, 324; italiano, 409; francés, 400.



ARTÍCULO 204.

Sufrirá penitenciaría de seis meses á dos años el que obligare á otro, por amenaza de imputaciones contra el honor ó de violación de secretos, á la entrega de una cosa que no sea del culpable, ó á contraer una obligación, ó á extinguir un crédito.

Concordancias.

Cód. holandés, 318, húngaro, 351.

ARTÍCULO 205.

El que detuviere en rehenes á una persona, para sacar rescato, sufrirá penitenciaría de tres á diez años.

Concordancias

Cód. penal, 189, 2°; Tejedor, 317, 4°; italiano, 110.

ARTÍCULO 206

El que sustrajere un cadáver, para hacerse pagar su devolución, sufrirá penitenciaría de dos á seis años.

Concordancias.

Cód. penal 195.



CAPÍTULO IV

Estafas y otras defraudaciones

ARTÍCULO 207

El que defraudare á otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida ó abuso de confianza, ó aparentando bienes, créditos, comisión, empresa ó negociación, ó valiéndose para el efecto de cualquier otro ardido ó engaño, será reprimido con penitenciaría de uno á cuatro años.

Concordancias

Cód. penal, 202; Tejedor, 334; italiano, 413; francés, 405; holandés, 326; húngaro, 379; belga, 496; alemán, 263; español, 548, 1ª y chileno, 468.

ARTÍCULO 208

Sufrirá la misma pena del artículo anterior:

- 1º El que defraudare á otro en la sustancia, calidad ó cantidad de las cosas que le entregue en virtud de un contrato ú otro título obligatorio.
- 2º El que cometiere defraudación alterando la calidad, ley ó peso de los metales que vendiere ó le hubieren sido confiados, ó cambiando los diamantes ú otras piedras preciosas con falsos ó de inferior calidad, ó vendiendo perlas ó piedras falsas por finas.



- 3° El que defraudare haciendo suscribir con engaño algún documento.
- 4° El que cometiere alguna defraudación abusando de firma en blanco y extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo que la dió ó de tercero.
- 5° El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo ó de tercero.
- 6° El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado ó falsos recibos.
- 7° El comisionista, capitán de buque ó agente de comercio que cometiere defraudación, alterando en sus cuentas los precios ó las condiciones de los contratos, suponiendo gastos ó exagerando los que hubiese hecho.
- 8° El que cometiere defraudación, sustituyendo, ocultando ó mutilando algún proceso, expediente, documento ú otro papel importante.
- 9° El que vendiere como bienes libres los que fueren litigiosos ó estuvieren embargados ó gravados, y el que vendiere, gravare ó arrendare como propios, bienes ajenos.

Concordancias

1° Cód. penal, 203, 1°; Tejedor, 335, 1°; italiano, 295; francés, 423; holandés, 329, 1°; chileno, 467.

2° Cód. penal, 203, 2°; Tejedor, 335, 2°; italiano, 295; francés, 423; holandés, 329, 2°; belga, 498, 499; español, 548, 2°; chileno, 469, 1°.

3° Cód. penal, 203, 7°; Tejedor, 335, 7°; español, 548, 7°; chileno, 470, 4°.

4° Cód. penal, 203, 8°; Tejedor, 335, 8°; italiano, 418; francés, 407; español, 548, 6°; chileno, 470, 3°.

5° Cód. penal, 203, 11°; Tejedor, 335, 11°; español, 551; chileno, 471, 1°.

6° Cód. penal, 203, 12°; Tejedor, 335, 12°.

- 7º Cod. penal, 203, 13º; chileno, 469, 3º y 4º.
8º Cod. penal, 203, 14º; Tejedor, 336; belga, 495; español, 548, 9º;
chileno, 470, 5º.
9º Cód. penal, 204; Tejedor, 337.

ARTÍCULO 209

Sufrirá penitenciaría de dos á seis años:

- 1º El que para procurar á sí mismo ó á otro, un provecho ilegal en perjuicio de un asegurador ó de un dador de préstamo á la gruesa, incendiare ó destruyere una cosa asegurada ó una nave asegurada, ó cuya carga ó flete estén asegurados, ó sobre la cual se haya efectuado un préstamo á la gruesa.
- 2º El que abusare de las necesidades, pasiones ó inexperiencia de un menor ó de un incapaz, declarado ó no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico en daño de él ó de otro, aunque el acto sea civilmente nulo.
- 3º El que defraudare usando de pesos ó medidas falsas.
- 4º El empresario ó constructor de una obra cualquiera, ó el vendedor de materiales de construcción que cometiere en la ejecución de la obra ó en la entrega de los materiales, un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas, de los bienes ó del estado.
- 5º El que cometiere fraude, en perjuicio de alguna administración pública.

En los casos de los dos números precedentes, si el culpable fuere empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpétua.





Concordancias.

- 1º Cód. italiano, 414; holandés, 328; húngaro, 382; alemán, 265.
2º Cód. penal, 205; Tejedor, 338; italiano, 415; francés, 406; húngaro, 385; belga, 493; español, 553.
3º Cód. penal, 203, 4º; Tejedor, 335, 4º; italiano, 294; francés, 423; español, 548, 3º; chileno, 469, 2º.
4º Cód. holandés, 331.
5º Cód. penal, 272; Tejedor, 418; holandés, 332.

ARTÍCULO 210

Será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años.

- 1º El que para procurarse ó procurar á otro un provecho ilícito, hiciere alzar ó bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos ó valores, por medio de noticias falsas ó negociaciones fingidas.
- 2º El que colocare fondos públicos, ó acciones ú obligaciones de alguna sociedad ó persona jurídica, disimulando ú ocultando hechos ó circunstancias verdaderas, ó afirmando ó haciendo entrever hechos ó circunstancias falsas.
- 3º El director, administrador ó síndico de una sociedad anónima ó cooperativa, ó de otro establecimiento mercantil que publicare un estado ó balance falso ó incompleto.
- 4º El que con perjuicio de otro negare haber recibido, ó se apropiare ó distrajere dineros, efectos ó cualquier otra cosa mueble que se le hubiera dado en depósito, comisión, administración ú otro título que produzca obligación de entregar ó devolver



Concordancias

- 1º Cód. italiano, 293; francés, 419; holandés, 334; español, 556, 557.
2º Cód. holandés, 335.
3º Cód. holandés, 336.
4º Cód. penal, 203, 6º; Tejedor, 335, 6º; italiano, 417; francés, 408; holandés, 331; húngaro, 355; belga, 491; alemán, 246; español, 548, 5º; chileno, 470, 1º.

ARTICULO 211

Será reprimido con multa de quinientos á dos mil pesos el que solicitare dádivas ó promesas, y el que las ofreciere, para no tomar parte en una subasta ó licitación pública, ó fingidamente se presentare como postor.

Concordancias

Cod. penal, 206; español, 555.

ARTÍCULO 212

Será reprimido con multa de quinientos á dos mil pesos:

- 1º El que encontrare perdida una cosa que no le pertenezca, ó un tesoro; y se la apropiare sin observar las prescripciones del Código Civil.
- 2º El que se apropiare una cosa ajena en cuya tenencia hubiere entrado por consecuencia de un error ó de un caso fortuito.

3º El que vendiere la prenda sobre que prestó dinero, ó se la apropiare ó dispusiere de ella sin las formalidades legales.

Concordancias

Cód. penal, 203, 9º; italiano, 420; húngaro, 365 y 366; belga, 508; español, 530, 2º.

2º Cód. italiano, 420, 3º; húngaro 367.

3º Cód. penal, 207.



CAPÍTULO V

Quebrados y otros deudores punibles

ARTÍCULO 213

El quebrado que con arreglo á las disposiciones de la ley comercial, se reputa fraudulento, será reprimido con penitenciaría de dos á seis años é inhabilitación absoluta por doble tiempo.

Concordancias

Cód. penal, 198; español, 537; Tejedor, 328; húngaro, 414 y 415; belga, 489; alemán, 281; chileno, 463.

ARTÍCULO 214

El quebrado que, con arreglo á las disposiciones de la ley comercial se reputa culpable, será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años é inhabilitación especial por doble tiempo.

Concordancias

Cód. penal, 198; Tejedor, 328; húngaro, 416; belga, 489; chileno, 464; español, 538.

ARTÍCULO 215

Cuando se tratare de quiebra de una sociedad anónima ó cooperativa, ó de una persona jurídica que



ejerza el comercio, todo director, administrador ó gerente de la sociedad ó establecimiento fallido, será reprimido con la pena del quebrado culpable ó fraudulento en su caso, si hubiere intervenido en los actos que motivaron la quiebra.



Concordancias

Cód. húngaro, 417.

ARTICULO 216

Será reprimido con penitenciaría de uno á cuatro años el deudor no comerciante que, para defraudar á sus acredores, cometiere alguno de los actos siguientes:

- 1º Si contrajere, reconociere ó pagare deudas ficticias, otorgare escrituras simuladas, remitiere ó disimulare créditos, pusiere á nombre de otro, enajenare gratuitamente ú ocultare todos ó parte de sus bienes.
- 2º Si después de haber sido declarado en concurso civil, percibiere y aplicare á sus usos particulares dinero, efectos ó crédito de la masa, ó por cualquier medio distrajere de ésta alguna de sus pertenencias.
- 3º Si concediere ventajas indebidas de cualquier género á algún acreedor.
- 4º Si presentare como bienes responsables los que no puedan ser gravados, ú ocultare ó callare sus gravámenes.

Concordancias

1º Cód. penal, 200, 2º; holandés, 346; húngaro, 414; 2º chileno, 466

2º Cód. español, 543, 6º; holandés, 346, 1º.

3º Cód. holandés, 346; húngaro, 414, 3º.

1º Cód. penal 200, 3º; Tejedor, 331, 1º.



ARTICULO 217

Será reprimido con penitenciaría de un mes á un año el acreedor que consintiere en un concordato judicial á causa de un convenio hecho con el deudor ó con un tercero, por el cual hubiere estipulado ventajas especiales para el caso de aceptación del concordato.

La misma pena sufrirá en igual caso, todo director, administrador ó gerente de una sociedad anónima, ó cooperativa ó de una persona jurídica, en estado de quiebra, que concluyere una convención de ese género.

Concordancias

Cód. holandés, 345.

ARTICULO 218

Será reprimido con multa de cuatro mil á veinte mil pesos el director, gerente ó administrador de una sociedad anónima ó cooperativa, ó de una persona jurídica cualquiera, que prestare su concurso ó consentimiento á actos contrarios á los estatutos, leyes ú ordenanzas que las rijan, á consecuencia de los cuales la persona jurídica ó asociación quedare imposibilitada de satisfacer sus compromisos, ó en la necesidad de ser disuelta.

Concordancias

Cód. holandés, 347.

CAPÍTULO VI

Usurpación

ARTÍCULO 219

Será reprimido con multa de mil á cuatro mil pesos:

- 1º El que despojare á otro de algún bien inmueble ó de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre ó anticresis, constituido sobre un inmueble.
- 2º El que, para apoderarse de todo ó parte de un inmueble, destruyere ó alterare los términos ó límites del mismo.
- 3º El que, con violencias ó amenazas, turbare la posesión sobre un inmueble.

Cóncordancias

1º Cód. penal, 196; Tejedor, 326; español, 534; chileno, 457.

2º Cód. penal, 197; Tejedor, 327; belga, 545, 546; francés, 456; español, 535; chileno, 463; italiano, 422.

3º Cód. italiano, 423.

ARTÍCULO 220

Será reprimido con penitenciaría de un mes á un año:

- 1º El que ilícitamente sacare aguas de represas, estanques ú otros depósitos; de ríos, arroyos



ó fuentes; de canales ó acueductos; ó la sacare en mayor cantidad que aquella á que tenga derecho.

2º El que pusiere embarazo al ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas.

3º El que ilícitamente represare, desviare ó detuviere las aguas de los ríos arroyos, canales ó fuentes ó usurpare un derecho cualquiera referente al curso de ellas.

La pena se aumentará hasta dos años si, para cometer los delitos expresados en los incisos anteriores, se rompieren ó alterasen diques, esclusas, compuertas, marcos ú otras obras semejantes, hechas en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales ó acueductos.

Concordancias

1º Cód. chileno, 459, 1º.

2º Cód. chileno, 459, 3º.

3º Cód. chileno, 459, 2º y 4º.





CAPÍTULO VII

Delitos contra la propiedad intelectual é Industrial

ARTÍCULO 221

Será reprimido con multa de mil á cuatro mil pesos el que, sin consentimiento del autor ó de su cesor, reprodujere una obra literaria, científica ó artística, ó explotare un invento ó descubrimiento ajeno, á menos que la propiedad exclusiva de la obra, invento ó descubrimiento se encuentre extinguida.

La disposición anterior comprende la representación de piezas teatrales.

Concordancias

Cód. chileno, 471, 3º; Tejedor, 342.

ARTÍCULO 222

Será reprimido con multa de quinientos á dos mil pesos:

- 1º El que falsificare ó adultare de cualquier modo una marca de fábrica ó de comercio.
- 2º El que pusiere sobre sus productos ó sobre los efectos de su comercio, una marca ajena.
- 3º El que vendiere, pusiere en venta ó se prestare á vender ó á circular artículos con marca de

fábrica ó de comercio falsificada ó fraudulentamente aplicada.

- 4º El que hiciere uso, sin derecho, del nombre de un comerciante, ó de una razón social, ó de la muestra ó designación de una fábrica ó de una casa de comercio.

Concordancias

1º Ley de marcas de fábrica y de comercio de 19 de Agosto de 1876, 28 n° 1º.

2º Ley de marcas cit. 28 n° 2º.

3º Ley de marcas, cit. 28 n° 3º.

4º Ley de marcas cit. 37.





CAPÍTULO VIII

Daños

ARTÍCULO 223

Será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer ó de cualquier modo dañar, una cosa mueble ó inmueble, ó un animal, total ó parcialmente ajenos, siempre que el hecho no constituya delito penado más severamente.

Concordancias

Cód. penal, 219 á 222; español 575.



CAPÍTULO IX

Disposiciones comunes á los capítulos anteriores

ARTÍCULO 224

Cuando el valor del daño ó de la cosa objeto del delito, en cualquiera de los casos del presente título, fuere inferior á la suma de cincuenta pesos, el juez podrá disminuir hasta la mitad el *infinimum* de la pena correspondiente al delito.

ARTÍCULO 225

Quedará exento de pena el agente de alguno de los delitos previstos en este título, con excepción del robo, la extorsión y la usurpación con violencia en las personas, si antes de iniciarse procedimiento judicial contra él, restituyere espontáneamente el objeto en que se cometió el delito, é indemnizare todos los perjuicios causados, ó si, en caso de no ser posible la restitución, resarciere íntegramente al perjudicado.

Concordancias

Cód. italiano, 432.



TÍTULO VI

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO I

Incendios y otros estragos

ARTÍCULO 226

El que causare incendio, explosión ó inundación será reprimido:

- 1º Con penitenciaría de tres á diez años, si hubiere peligro común para las propiedades.
- 2º Con penitenciaría de tres á quince años, si hubiere peligro para un archivo público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora ó de pirotecnia militar ó parque de artillería.
- 3º Con penitenciaría de tres á quince años, si hubiere peligro de muerte para alguna persona.
- 4º Con presidio de diez á veinte años, si el hecho fuese causa inmediata de la muerte de alguna persona.



Concordancias

- 1º Cód. holandés, 157, n° 1º; penal, 210 y 211 núm. 1.
2º Cód. español, 561, n° 1º; chileno, 475 n° 2º; penal, 208 n° 2º.
3º Cód. holandés, 157, n° 2º; penal, 209.
4º Cód. penal, 208 n° 1º; holandés, 157 n° 3º.

ARTÍCULO 227

Incurrirá respectivamente en las penas señaladas en el artículo precedente el que causare estragos por medio de inmersión ó varamiento de nave, derrumbe de edificio ó cualquier otro medio poderoso de destrucción.

Concordancias

Cód. penal, 212; español, 572.

ARTÍCULO 228

Será reprimido con penitenciaría de uno á cuatro años el que, destruyendo ó inutilizando diques ú otras obras destinadas á la defensa común contra las inundaciones ú otros desastres, hiciere surgir el peligro de que estos se produzcan.

Concordancias

Cód. holandés, 161.

ARTÍCULO 229

Sufrirá la pena del artículo anterior el que, para impedir la extinción de un incendio ó las obras de defensa contra una inundación, sumersión, naufragio ú otro desastre, sustrajere, ocultare ó hiciere inservibles

materiales, aparatos ú otros medios destinados á la extinción ó á la defensa referidas.

Concordancias

Cód. italiano, 307; holandés, 159 y 160.

ARTÍCULO 230

Será reprimido con penitenciaría de un mes á un año el que por imprudencia ó negligencia, ó con impericia en su propia arte ó profesión, ó por inobservancia de los reglamentos ú ordenanzas, causare un incendio ú otro estrago.

Sí el hecho ú omisión culpable pusiere en peligro de muerte á alguna persona, ó causare la muerte de alguna persona, la pena será de penitenciaría por seis meses á dos años.

Concordancias

Cód. italiano, 311; holandés, 158.





CAPÍTULO II

Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación

ARTÍCULO 231

El que destruyere, en todo ó en parte, ó de cualquier modo inutilizare las vías ú obras destinadas á la comunicación pública por tierra ó por agua, ó impediré ó alterare la ejecución de las medidas ó el funcionamiento de los objetos destinados á la seguridad de las mismas, será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años.

Si resultare peligro para las personas, la pena será de uno á cuatro años, y si se causare la muerte de alguna persona, de tres á quince años.

Concordancias

Cód. italiano, 317; holandés, 162.

ARTÍCULO 232

El que destruyere una barra-carril ó empleare algún otro medio para detener ó entorpecer la marcha de un tren ó para hacerlo descarrilar, será reprimido:

1º Con penitenciaría de uno á cuatro años, si no se produjere el descarrilamiento ó accidente que se propuso el culpable.



- 2º Con penitenciaría de dos á seis años si el accidente se produjere.
- 3º Con penitenciaría de tres á diez años si, á consecuencia del accidente, resultare lesionada alguna persona.
- 4º Con presidio de diez á veinte años, si resultare la muerte de alguna persona.

Concordancias

Ley de 18 de Setiembre de 1872, sobre ferro-carriles nacionales, 71 y 72; Cód. penal, 215 y 216; holandés, 164; alemán, 315; italiano, 312; húngaro, 434, 435 y 436.

ARTÍCULO 233

El que ejecutare cualquier acto tendente á interrumpir el funcionamiento de un telégrafo ó teléfono, destinado al servicio de un ferro-carril, será reprimido con la pena del artículo anterior, en el caso respectivo.

Concordancias

Ley de 18 de Setiembre de 1872, sobre ferro-carriles nacionales 76; Cód. penal, 217.

ARTÍCULO 234

El que arrojaré cuerpos contundentes ó proyectiles contra un tren ó tranvía en marcha, será reprimido con penitenciaría de un mes á un año, si el hecho no importare un delito más severamente penado.

Concordancias

Cód. italiano, 313; párrafo 2º.



ARTÍCULO 235

El que ejecutare cualquier acto tendente á poner en peligro la seguridad de una nave ó construcción flotante, ó á detener ó entorpecer su marcha, será reprimido con penitenciaría de uno á cuatro años.

Si el hecho hubiere producido naufragio, avería ó varamiento, la pena será de tres á diez años de penitenciaría.

Si el accidente ocasionare lesión de alguna persona, la pena será de tres á quince años de penitenciaría, y si ocasionare la muerte, de diez á veinte años de presidio.

Concordancias

Cód. aleman, 322 y 323; holandés, 166, 168 y 170.

ARTÍCULO 236

Los conductores, capitanes, pilotos, mecánicos y demás empleados de un tren ó de un buque, que abandonaren su puesto durante su servicio respectivo, serán reprimidos con penitenciaría de un mes á un año, si del abandono no resultare accidente ni daño alguno á las personas ó á las cosas, ni importare hecho penado más severamente.

Concordancias

Ley de 18 de Setiembre de 1872, sobre ferro-carriles nacionales, 75; cód. holandés, 404.



ARTÍCULO 237

Será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años el que, por imprudencia ó negligencia, ó por impericia en su propia arte ó profesión, ó por inobservancia de los reglamentos ú ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio ú otro accidente previsto en este capítulo. Si del hecho hubiere resultado lesionada ó muerta alguna persona, se impondrá penitenciaría de uno á cuatro años.

Concordancias

Cód. italiano, 314; uruguayo, 265.

ARTÍCULO 238

El que interrumpiere la comunicación telegráfica ó telefónica, ya sea por rotura de los hilos, destrucción de los postes, inhabilitación de las máquinas ó por cualquier otro medio, ó se resistiere violentamente al restablecimiento de la comunicación interrumpida, será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años.

Concordancias

Ley de 7 de Octubre de 1875, sobre telégrafos nacionales, 150;
Cód. italiano, 315; uruguayo, 266.

CAPÍTULO III

Delitos contra la salud pública

ARTÍCULO 239

Será reprimido con penitenciaría de tres á diez años el que corrompiere, envenenare ó adulterare de un modo peligroso para la salud, aguas potables ó sustancias alimenticias ó medicinales, destinadas al uso público ó al consumo de una colectividad de personas

Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez á veinte años de presidio.

Concordancias

Cód. holandés, 172; alemán, 324; húngaro, 315; italiano, 318 y 319; español, 357, n.º 2.º.

ARTÍCULO 240

Las penas del artículo precedente serán aplicadas, en su caso, al que vendiere, pusiere en venta, entregare ó distribuyere mercaderías peligrosas para la salud disimulando su carácter nocivo.

Concordancias

Cód. holandés, 174; alemán, 324; húngaro, 315; italiano, 319 y 320; cod. penal, 295, 296 y 297.





ARTÍCULO 241

El que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad ó cantidad no correspondiente á las prescripciones médicas, ó diversa de la declarada ó convenida, será reprimido con multa de quinientos á dos mil pesos.

Si del hecho resultare lesión ó muerte de alguna persona, la pena será de dos á seis años de penitenciaría.

Concordancias

Cód. italiano, 321.

ARTÍCULO 242

Cuando alguno de los hechos previstos en el artículo 239 fuere cometido por imprudencia ó negligencia, ó por impericia en la propia arte ó profesión, ó por inobservancia de los reglamentos ú ordenanzas, será reprimido con multa de quinientos á dos mil pesos, si no resultare lesión ó muerte de alguna persona, y con penitenciaría de seis meses á dos años si resultare lesión ó muerte.

Concordancias

Cód. holandés, 173; italiano, 323.

ARTÍCULO 243

El que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción ó

propagación de una epidemia, será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años.

Concordancias

Cód. alemán, 327; húngaro, 316; penal, 299.

ARTÍCULO 244

En el caso de condenación por un delito previsto en este capítulo, el culpable, si fuere funcionario público ó ejerciere alguna profesión ó arte, sufrirá, además, inhabilitación especial por tiempo doble del de la condena. Si la pena impuesta fuera la de multa, la inhabilitación será de un mes á un año.

Concordancias

Cód. italiano, 325, in fine.



CAPÍTULO IV

Piratería

ARTÍCULO 245

Será reprimido con penitenciaría de tres á quince años:

- 1º El que practicare en la mar ó en los rios de la República, algún acto de depredación ó violencia contra un buque ó contra personas ó cosas que en él se encuentren, sin estar autorizado por alguna potencia beligerante ó sin que el buque por medio del cual ejecute el acto, pertenezca á la marina de guerra de una potencia reconocida.
- 2º El que abusando de una patente de corso legítimamente concedida, practicare algún acto de depredación ó cualquier hostilidad contra los buques de la República ó de otra nación, para hostilizar la cual no se hubiere recibido autorización.
- 3º El que se apoderare de algún buque ó de lo que perteneciere á su equipaje, por medio de fraude ó violencia cometidos contra su comandante.
- 4º El que entregare á piratas un buque ó lo que perteneciere á su tripulación.





- 5° El que, con amenazas ó violencias, se opusiere á que el comandante ó la tripulación defendiera el buque atacado por piratas.
- 6° El que, por cuenta propia ó ajena, equipare un buque destinado á la piratería.
- 7° El argentino ó extranjero residente en la República que traficare con piratas ó les suministraré auxilios.
- 8° El comandante de un buque armado que navegare con dos ó más patentes de diversas potencias.

Concordancias

- 1° Ley penal de 14 de Setiembre de 1863, 11 núm. 1°; código holandés, 381.
- 2° Ley de 14 de Setiembre de 1863, 11 núm. 2°.
- 3° Ley cit., 11 núm. 3°.
- 4° Ley cit., 11 núm. 4°; holandés, 385.
- 5° Ley cit., 11 núm. 5°.
- 6° Cód. holandés, 383.
- 7° Ley cit., 11 núm. 7°.
- 8° Ley cit., 11 núm. 8°.

ARTÍCULO 246

Si los actos de violencia ú hostilidad mencionados en el artículo anterior fueren seguidos de la muerte de alguna persona, que se encontrare en el buque atacado, la pena será de diez á veinte años de presidio.

Concordancias

- Cód. holandés, 382.

—

CAPÍTULO V

Otros delitos relativos á la navegación

ARTÍCULO 247

Será reprimido con penitenciaría de un mes á un año, cuando el hecho no importe delito más severamente penado, el tripulante ó pasajero de un buque que cometiere amenazas ó violencias contre el capitán, y el tripulante que las cometiere con un superior.

Lo pena será de seis meses á dos años cuando el hecho se cometiere por dos ó más personas reunidas.

Concordancias

Cód. holandés, 395 y 396; italiano de la marina mercante, 286, 290.

ARTÍCULO 248

Será reprimido con penitenciaría de un mes á un año el individuo de la tripulación de un buque que rehusare servir antes de terminar el viaje, contra lo convenido en la contrata de enrolamiento ó lo dispuesto, para el caso, en el Código de Comercio.

Concordancias

Cód. holandés, 392; italiano de la marina mercante, 283.





ARTÍCULO 249

El individuo de la tripulación de un buque que desobedeciere una orden superior relativa al servicio, será reprimido con penitenciaría de cuatro á ciento veinte días.

Concordancias

Cód. italiano de la marina mercante, 381, 382.

ARTÍCULO 250

El capitán ó patrón de buque que omitiere auxiliar buques ó gentes de mar que se hallen en peligro, cuando pudiere hacerlo sin riesgo para su buque, para sus compañeros ó para sí mismo, será reprimido con penitenciaría de un mes á un año.

Concordancias

Cód. holandés, 414.

TÍTULO VII

DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

CAPÍTULO I

I n s t i g a c i o n á c o m e t e r d e l i t o s

ARTÍCULO 251

El que públicamente instigare á cometer un hecho punible, será reprimido, por la sola instigación, con multa de doscientos á mil pesos, según la gravedad del delito incitado y demás circunstancias establecidas para la graduación de las penas.

Si la instigación produjere efecto, el instigador será penado como autor del hecho ejecutado.

Concordancias

Cód. italiano, 246; holandés, 131; español, 592; húngaro, 171; alemán, 111; uruguayo, 134; francés, 293.





CAPÍTULO II

Asociación ilícita

ARTÍCULO 252

El que tomare parte en cualquier asociación ó banda destinada á cometer delitos, será reprimido con pena de penitenciaría de uno á cuatro años.

Concordancias

Cód. holandés, 140, inciso 1º; francés, 265, 267; español, 198, inciso 2º, y 201; italiano, 248, 251; uruguayo, 136; belga, 322; chileno, 292.

ARTÍCULO 253

La participación en cualquiera otra asociación prohibida por la ley, será reprimida con multa de doscientos á mil pesos.

Concordancias

Cód. holandés, 140, inciso 2º; francés, 292; español, 198, inciso 1º y 201.

CAPITULO III

Formación de cuerpos armados é intimidación pública

ARTÍCULO 254

El que, para cometer delito, formare un cuerpo armado, ó ejerciere en el mismo un mando superior ó una función especial, será reprimido con penitenciaría de uno á cuatro años. Los demás individuos que formaren parte del cuerpo serán reprimidos con penitenciaría de seis meses á dos años.

Concordancias

Cód. italiano, 253; francés, 96; belga, 128, 130.

ARTÍCULO 255

El que, sin legítima autorización, formare un cuerpo armado no destinado á cometer delitos, será reprimido con multa de doscientos á mil pesos.

Concordancias

Cód. italiano, 254; francés, 92; húngaro, 161; alemán, 127.

ARTÍCULO 256

El que para infundir un temor público ó suscitar tumultos ó desórdenes, hiciere señales ó diere gritos



de alarma, ó hiciere estallar materias explosivas, ó amenazare con un desastre de peligro común, sufrirá penitenciaría de un mes á un año.

Concordancias

Cód. italiano, 255; holandés, 142; Cód. penal, 228; chileno 369.





TÍTULO VIII

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN

CAPÍTULO I

Tratado

ARTÍCULO 257

Será reprimido con presidio de diez á veinticinco años é inhabilitación absoluta perpétua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este Código, todo individuo argentino ó que deba obediencia á la Nación Argentina, que tomare las armas contra ésta ó se uniere á sus enemigos prestándoles ayuda y socorro.

Concordancias

Constitución Nacional, 103; ley penal de 1863, art. 1º, inciso 1º; Estatutos revisados de los Estados Unidos, sección 5331; Cód. francés, 75; español, 138, 1º; italiano, 105; holandés, 101 y 102; húngaro, 143; alemán, 88, 89; belga, 113; chileno, 107.

ARTÍCULO 258

El que cometiére el delito previsto en el artículo precedente sufrirá presidio perpétuo:



- 1° Si ejecutare un hecho inmediatamente encaminado á someter, total ó parcialmente, la Nación al dominio extranjero, ó á menoscabar su independencia ó su integridad.
- 2° Si indujere ó decidiere á una potencia extranjera á hacer la guerra contra la República.
- 3° Si entregare al enemigo plazas fuertes, ciudades, puertos, fortalezas, posiciones militares, medios de comunicación, embarcaciones, armamentos, arsenales, municiones, víveres, caudales ú otros medios eficaces para hostilizar á la Nación.
- 4° Si facilitare al enemigo la entrada en el territorio nacional ó el progreso de sus armas.
- 5° Si para favorecer al enemigo impidiere, retardare ó inutilizare cualquier trabajo militar proyectado ó ejecutado para la defensa ó el ataque.
- 6° Si reclutare ó levantara gente dentro del territorio nacional para el servicio de una potencia enemiga, ó sedujere tropas nacionales para engrosar las filas enemigas, ó produjere una revuelta, motín ó desertión en las tropas argentinas para ayudar al enemigo.
- 7° Si comunicare al enemigo mapas, planos, descripciones ó noticias conducentes á facilitar las hostilidades.
- 8° Si sirviere de espía al enemigo ó recogiere, ocultare ó socorriere á un espía del enemigo.
- 9° Si impidiere que las tropas nacionales reciban los auxilios y noticias necesarias.

Concordancias

1° Cód. italiano, 104; holandés, 93; alemán, 81, 3° y 4°: uruguayo, 110, 1°; chileno, 108; húngaro, 127, 3°.



2º Cód. holandés, 97; italiano, 106; español, 136; francés, 76; húngaro, 142; alemán, 87; belga, 114; uruguayo, 110, 3º; chileno, 109.

3º Ley de 1863, 1, inciso 2º y 3º; Cód. español, 138, 3º; francés, 77, holandés, 102, 1º; húngaro, 144, 1º y 4º; alemán, 90, 1º y 2º; belga, 115; uruguayo, 110, 4º y 111, 2º; chileno, 109.

4º Ley de 1863, 1, inciso 2º; Cód. español, 137, 1º y 138, 3º; francés, 77; húngaro, 144, 3º; belga, 115.

5º Cód. holandés, 102, 1º; húngaro, 144, 6º; alemán, 90, 2º chileno, 109.

6º Ley de 1863, 1, inciso 4º; Cód. español, 137, 2º y 3º; holandés, 102, 3º; húngaro, 144, 5º; alemán, 90, 3º; y 6º; belga, 115, uruguayo, 111, 3º; chileno, 109.

7º Ley de 1863, 1, inciso 4º; Cód. holandés, 102, inciso 2º; español, 138, 4º; italiano, 107, húngaro, 144, 2º; alemán, 90, 4º; uruguayo, 111, 1º; chileno, 109.

8º Cód. holandés, 102, 4º; francés, 83; húngaro, 144, 7º; alemán, 90, 5º; belga, 121; chileno, 109.

9º Ley de 1863, 1, 5º; Cód. español, 138, 5º; uruguayo, 111, 4º; chileno 109.

ARTÍCULO 259

Será reprimido con penitenciaría de tres á diez años el que tomare parte en una conspiración de dos ó más personas, para cometer el delito de traición, en cualquiera de los casos designados en los artículos precedentes, si la conspiración fuere descubierta antes de empezar su ejecución.

Concordancias

Ley de 1863, 3; Cód. español, 139; holandés, 96, 103; italiano, 134; húngaro, 148; alemán, 83; belga, 115; uruguayo, 116; chileno, 111.

ARTÍCULO 260

Para los efectos de este capítulo, serán considera-

dos como nacionales los ejércitos y elementos bélicos de las potencias aliadas á la República, en guerra contra un enemigo común.

Concordancias

Cód. holandés, 107; español, 141; francés, 79; húngaro 144, 8°; belga, 116; uruguayo, 115; chileno, 110.

ARTICULO 261

Quedará eximido de toda pena el que revelare la conspiración á la autoridad pública, antes de haber comenzado el procedimiento.

Concordancias

Ley de 1863, 4; Cód. italiano, 134; francés, 108; húngaro, 151; belga, 136.





CAPÍTULO II

Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación

ARTÍCULO 262

El que por enrolamientos ú otros actos hostiles, no aprobados por el gobierno nacional, diere motivo al peligro de una guerra contra la Nación, ó expusiere á sus ciudadanos ó habitantes á experimentar vejaciones ó represalias en sus personas ó en sus bienes, ó alterare las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero, será reprimido con penitenciaría de uno á cuatro años.

Si por efecto de dichas hostilidades resultare la guerra, la pena será de tres á quince años de penitenciaría.

Concordancias

Ley de 1863, 7; Cód. español, 147; italiano, 113; francés, 84 y 85; holandés, 100; uruguayo, 139.

ARTÍCULO 263

Sufrirá penitenciaría de seis meses á dos años el que violare los tratados legítimamente concluidos con naciones extranjeras, las treguas ó armisticios acordados entre la Nación Argentina y una enemiga, ó entre sus fuerzas beligerantes de mar ó de tierra, y los salvoconductos debidamente expedidos.



Concordancias

Ley de 1863, 8; cód. español, 148; chileno, 113; uruguayo, 141, 2°.

ARTÍCULO 264

Será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años el que violare las inmunidades del jefe de otro estado ó de un representante de otra potencia

Concordancias

Ley de 1863, 9; cód. español, 154; holandés, 115-120; italiano, 128-130; alemán 102-104; uruguayo, 141, 3°; chileno, 120.

ARTÍCULO 265

Será reprimido con penitenciaría de uno á cuatro años el que revelare secretos políticos ó militares concernientes á la seguridad ó las relaciones exteriores de la Nación, sea comunicando ó publicando documentos, diseños, planos, hechos ú otros datos relativos á los materiales de guerra, fortificaciones ú operaciones militares, sea facilitando de cualquier modo su conocimiento.

En la misma pena incurrirá el que obtuviere la revelación del secreto.

Concordancias

Cód. italiano, 107; holandés, 98; francés, 80-82; húngaro, 146-147; alemán, 92, 1°; belga, 119-120.

ARTÍCULO 266

El que, por imprudencia ó negligencia, diere á conocer los secretos mencionados en el artículo anterior,

de los cuales estuviere en posesión por razón de su oficio, será reprimido con multa de doscientos á mil pesos.

Concordancias

Cód- italiano, 109.

ARTÍCULO 267

Será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años el que indebidamente levantare planos de fortificaciones, buques, establecimientos, vías ú otras obras militares, ó se introdujere con tal fin clandestina, ó engañosamente en dichos lugares, cuando su acceso estuviere prohibido al público.

Concordancias

Cód. italiano, 110; holandés, 430.

ARTÍCULO 268

El que, encargado por el gobierno argentino de una negociación con un estado extranjero, la condujere de un modo perjudicial á la Nación, apartándose de sus instrucciones, será reprimido con penitenciaría de tres á diez años.

Concordancias

Cód. holandés, 99; italiano, 111; español, 149; alemán, 92, 3°.



TÍTULO IX

DELITOS CONTRA LOS PODERES PÚBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL



CAPÍTULO I

R e b e l l ó n

ARTÍCULO 269

Serán reprimidos con destierro de tres á diez años los que se alzaren en armas para impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de alguno de los poderes públicos de la Nación, ó la formación ó renovación de éstos en los términos y formas legales.

Concordancias

Ley de 1863, 14, 2º, 3º y 4; italiano, 118 y 120; chileno, 121, húngaro, 152; belga, 104; uruguayo, 118 y 119.

ARTÍCULO 270

El que ejecutare cualquier acto tendente á alterar

la Constitución Nacional, por medios ilícitos, será reprimido con penitenciaría de tres á quince años.

Concordancias

Ley de 1863, 14, 1°; cód. italiano, 118, 3°; español, 181.

ARTÍCULO 271

Serán reprimidos con la pena establecida en el artículo 257, para los traidores á la patria, los miembros del Congreso que concedieren al poder ejecutivo nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren á los gobernadores de provincias facultades extraordinarias, ó la suma del poder público, ó les otorgaren sumisiones ó supremacías por las que la vida, el honor ó la fortuna de los argentinos quedan á merced de algún gobierno ó persona.

Concordancias

Constitución Nacional, 29.

ARTÍCULO 272

El que ejecutare ó mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos del Papa, de aquellos que, para su ejecución, necesiten del pase del gobierno, sin haberlo obtenido, quedará sujeto á la pena de uno á cuatro años de destierro; y el que los ejecutare ó mandare ejecutar, á pesar de haber sido negado ese pase, quedará sujeto á la de tres á diez años de destierro.

Concordancias

Ley de 1863, 5; cód. español, 144 y 145.





C A P Í T U L O I I

Sedición

ARTÍCULO 273

Serán reprimidos con destierro de dos á seis años los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, se alzaren en armas para impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades legales de cualquiera de los poderes públicos de una provincia ó territorio, ó de otra provincia ó territorio federal, ó la formación ó renovación de estos poderes en los términos y formas legales.

Concordancias

Constitución Nacional, 6 y 109; ley de 1863, 19; código penal, 226; holandés, 123.

ARTÍCULO 274

Sufrirán destierro de uno ó cuatro años:

- 1º Los individuos de una fuerza armada ó reunión de personas que se atribuyere los derechos del pueblo y peticionare á nombre de éste.
- 2º Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes ó de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales ó pro-

vinciales, cuando el hecho no constituya delito reprimido más severamente por este código.

Concordancias

1°—Constitución Nacional, 22.

2°—Ley de 1863, 20; Cód. penal, 227; español, 250, 1° y 2°; chileno, 126; uruguayo, 121, 2° y 3°; húngaro, 163; italiano, 189; francés, 210.





CAPÍTULO III

Disposiciones comunes á los capítulos precedentes

ARTÍCULO 275

El máximo y el mínimo de las penas señaladas para la rebelión y sedición serán disminuidos en un tercio para los que hubieran ejercido un mando subalterno, y en dos tercios para los meros ejecutores.

Concordancias

Ley de 1863, 15, 17, 21, 23; cód. penak, 329 y 333; español, 244, 246, 251, 252.

ARTÍCULO 276

Luego que se manifieste la rebelión ó la sedición, la autoridad competente más inmediata intimará hasta dos veces á los sublevados que inmediatamente se disuelvan y retiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo necesario para ello.

Si los sublevados no se retiraren inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la fuerza para disolverlos.

No serán necesarias respectivamente la primera y segunda intimación, desde el momento en que los sublevados hicieren uso de las armas.



Concordancias

Ley de 1863, 26; cód. español, 257; chileno, 128.

ARTÍCULO 277

En caso de disolverse el tumulto sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, sea que la dispersión se verifique espontáneamente por los mismos sublevados ó bien por obediencia á la intimación de la autoridad, solo serán enjuiciados los promotores ó directores, á quienes se reprimirá con la mitad de la pena señalada para el delito.

Concordancias

Cód. penal, 230; español, 258; chileno, 129; uruguayo, 131; húngaro, 159; francés, 100; italiano, 133; belga, 134.

ARTÍCULO 278

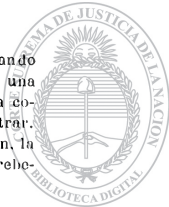
El que tomare parte como promotor ó director en una conspiración de dos ó más personas para cometer el delito de rebelión ó sedición, será reprimido, si la conspiración fuere descubierta antes de ponerse en ejecución, con la cuarta parte de la pena correspondiente al delito que se trataba de ejecutar.

Concordancias

Cód. español, 249 y 254; chileno, 125; húngaro, 156; italiano, 134; francés, 89.

ARTÍCULO 279

El que sedujere tropas, usurpare el mando de ellas, de un buque de guerra, de una plaza fuerte ó de un



puesto de guardia, ó retuviere ilegalmente un mando político ó militar, para cometer una rebelión ó una sedición, será reprimido con la mitad de la pena correspondiente al delito que se trataba de perpetrar. Si llegaren á tener efecto la rebelión ó la sedición, la pena será la establecida para los autores de la rebelión ó de la sedición en los casos respectivos.

Concordancias

Ley de 1863, 27 y 28; cód. español, 248 y 255; chileno, 124.

ARTÍCULO 280

Los funcionarios que hubieren promovido ó ejecutado alguno de los delitos previstos en este título, sufrirán inhabilitación especial por un tiempo doble del de la condena; y los que no hubieren resistido una rebelión ó sedición por todos los medios que estuvieren á su alcance, sufrirán inhabilitación especial de uno á cuatro años.

Concordancias

Ley de 1863, 15, 21 y 29; cód. penal, 229, 232; uruguayo, 132, y 133; español, 260; chileno, 134.

ARTÍCULO 281

Cuando al ejecutar los delitos previstos en este título, el culpable cometiere algún otro delito, se observará las reglas establecidas para el concurso de hechos punibles.

Concordancias

Ley de 1863, 18 y 24; cód. penal, 231; español, 259; chileno, 131; uruguayo, 130; italiano, 136; húngaro, 155



TÍTULO X

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO I

Atentado y resistencia contra la autoridad

ARTÍCULO 282

El que empleare intimidación ó fuerza sobre un funcionario ó empleado público, para exigirle la ejecución ú omisión de un acto propio de sus funciones, será reprimido con multa de quinientos á dos mil pesos.

La pena será de seis meses á dos años de penitenciaría:

- 1º Si el hecho se cometiere á mano armada.
- 2º Si el hecho se cometiere por una reunión de más de cinco personas.
- 3º Si el culpable fuere funcionario ó empleado público.
- 4º Si el delincuente pusiere manos en la autoridad.
- 5º Si la autoridad hubiere accedido á las exigencias del delincuente.



Concordancias

Cód. penal, 234 y 235; español, 263 y 264; italiano, 187 y 188; holandés, 179; húngaro, 163 y 165; alemán, 114; chileno, 261 y 262; uruguayo, 190 y 191.

ARTÍCULO 283

El que resistiere ó desobedeciere á un funcionario ó empleado público en el ejercicio legítimo de sus funciones, ó á los que les prestaren asistencia á su requisición, ó en virtud de una obligación legal, será reprimido con multa de doscientos á mil pesos.

La pena será de un mes á un año de penitenciaría si mediare alguno de los casos de agravación enumerados en el artículo anterior.

Concordancias

Cód. penal 237, 5°; holandés, 180; italiano, 190; alemán, 113; español, 265.

ARTÍCULO 284

Para los efectos de los dos artículos precedentes se reputará funcionario público al particular que tratase de aprehender ó hubiere aprehendido á un delincuente en flagrante delito.

Concordancias

Ley de 1863, 38 y 40.

ARTÍCULO 285

Será reprimido con multa de doscientos á mil pesos:

- 1° El que perturbare el orden de las sesiones de los cuerpos legislativos ó donde quiera que una



autoridad esté ejerciendo públicamente sus funciones.

2º El que, sin estar comprendido en el artículo 282, impidiere á un funcionario público el cumplimiento de un acto propio de sus funciones.

Concordancias

1º Cod. penal, 237, 2º; ley de 1863, 30, 1º, y 33; chileno, 264 1º y 2º.

2º Cód. penal, 237, 4º; ley de 1863, 36; chileno, 267.

ARTÍCULO 286

El juez ó funcionario que, en el arresto ó formación de causa contra un miembro de los poderes públicos nacionales ó provinciales, de una convención constituyente ó de un colegio electoral, no guardare la forma prescripta por las constituciones y leyes respectivas, sufrirá multa de quinientos á dos mil pesos é inhabilitación especial por uno á cuatro años.

Concordancias

Ley de 1863, 37.

ARTÍCULO 287

Será reprimido con penitenciaría de cuatro á ciento veinte días el que, siendo legalmente citado como testigo, perito ó intérprete, se abstuviere de hacer la exposición ó declaración respectiva.

Concordancias

Cód. holandés, 192; italiano, 210; francés, 236; español, 383; alemán, 138.



CAPÍTULO II

D e s a c a t o

ARTÍCULO 288

Será reprimido con multa de doscientos á mil pesos el que provocare á duelo, amenazare, injuriare ó de cualquier modo ofendiere en su dignidad ó decoro á un funcionario público, á causa del ejercicio de sus funciones ó al tiempo de practicarlas.

Si el ofendido fuere el Presidente de la República, un miembro del Congreso, un gobernador de provincia, un ministro nacional ó provincial, un miembro de las legislaturas provinciales, ó un juez, la pena será de un mes á un año de penitenciaría.

Concordancias

Cód. penal, 237, 1º; ley de 1863, 30; francés, 222; italiano, 194-197; español, 266-270; belga, 275, 276; chileno, 264, 3º; uruguayo, 192 1º.

ARTÍCULO 289

Al culpable de desacato no se le admitirá la prueba de la verdad ó notoriedad de los hechos ó cualidades atribuidas al ofendido.

Concordancias

Italiano, 198.



CAPÍTULO III

Usurpación de autoridad, títulos ú honores

ARTÍCULO 290

Será reprimido con penitenciaría de un mes á un año é inhabilitación especial por doble tiempo:

- 1° El que asumiere ó ejerciere funciones públicas sin títulos ó nombramientos expedido por autoridad competente.
- 2° El que, después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público, ó después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que lo hizo cesar ó lo suspendió en sus fuciones, continuare ejerciéndolas.

Concordancias

Cód. penal, 240; italiano, 185; francés, 258 y 197; español, 385, 342; holandés, 196; belga, 227, 262; chileno, 213 y 217; uruguayo, 183.

ARTÍCULO 291

El que públicamente llevare insignias ó distintivos de un cargo público que no ejerza ó se arrogare grados académicos, títulos profesionales ú honores que no le correspondan, será reprimido con multa de cien á quinientos pesos.

Concordancias

Cód. italiano, 186; francés, 259; holandés, 196; uruguayo, 184.

CAPÍTULO IV

Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.

ARTÍCULO 292

Será reprimido con multa de mil á cuatro mil pesos ó inhabilitación especial de un año á cuatro, el funcionario público que dictare resoluciones ú órdenes contrarias á las constituciones ó leyes nacionales ó provinciales, ó mantuviere las existentes pudiendo derogarlas.

Concordancias

Cód. holandés, 355; Código penal, 240, inciso 3º; chileno, 221; español, 388; francés, 127.

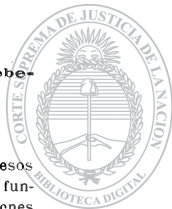
ARTÍCULO 293

Será reprimido con multa de doscientos á mil pesos el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer ó retardare algún acto de su oficio.

En la misma pena incurrirá el que rehusare, sin excusa legal admitida por autoridad competente, desempeñar un cargo público para el cual fuere legalmente designado.

Concordancias

Cód. italiano, 178; español, 382, 383; húngaro, 480, 481; uruguayo, 182.





ARTÍCULO 294

El jefe ó agente de la fuerza pública que rehusare, omitiere ó retardare sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente, será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años é inhabilitación especial por doble tiempo.

Concordancias

Cód. holandés, 357; italiano, 179; francés, 334; belga, 259; chileno, 253.

ARTÍCULO 295

El funcionario público que requiriere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones legales de la autoridad pública, sufrirá la pena de penitenciaría de seis meses á dos años é inhabilitación especial por doble tiempo.

Concordancias

Cód. holandés 358; húngaro 472; belga 254; francés 188.

ARTÍCULO 296

El funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público, será reprimido con multa de cien á quinientos pesos é inhabilitación especial de un mes á un año.

Concordancias

Cod. español, 387; Tejedor, 398; chileno, 254.

ARTÍCULO 297

El funcionario público que propusiere ó nombrare para cargo público á persona en quien no concurren los requisitos legales, será reprimido con multa de doscientos á mil pesos é inhabilitación especial de seis meses á dos años. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales.

Concordancias

Cód. Tejedor, 423: español, 303; chileno, 220.





CAPÍTULO V

Violación de sellos y documentos

ARTÍCULO 298

El que rompiere, quitare ó violare de cualquier modo los sellos puestos por la autoridad pública para asegurar la conservación ó la identidad de una cosa, será reprimido con la pena de seis meses á dos años de penitenciaría. Si el culpable fuere funcionario público y hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo.

Si el hecho se hubiere cometido por imprudencia ó negligencia del funcionario público, la pena será de multa de cien á quinientos pesos.

Concordancias

Cód. penal, 259; italiano, 201; holandés, 199; francés, 249, 252; alemán, 136; chileno, 243, 270; uruguayo, 178; húngaro, 360.

ARTÍCULO 299

El que sustrajere, ocultare, destruyere, alterare ó inutilizare objetos destinados á servir de prueba ante la autoridad competente, registros ó documentos confiados á la custodia de un funcionario ó de otra persona en el interés del servicio público, será reprimido

mido con penitenciaría de uno á cuatro años. Si el culpable fuere el mismo depositario. sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo.

Si el hecho se cometiere por imprudencia ó negligencia del depositario, éste sufrirá la pena de multa de cien á quinientos pesos.

Concordancias

Cód. penal, 258 y 260; holandés, 200; italiano, 202; francés, 254, 255; alemán, 133, belga, 241; chileno, 242; uruguayo, 188.



CAPÍTULO VI

Cobhecho

ARTÍCULO 300

El funcionario público que, por sí ó por persona interpuesta, recibiere dinero ó cualquier otra dádiva, ó aceptare una promesa directa ó indirecta, para hacer ó dejar de hacer alguna cosa relativa á sus funciones, será reprimido con multa de mil á cuatro mil pesos é inhabilitación absoluta por tres á diez años.

Concordancias

Cód. penal, 350; ley de 1863, 75; italiano, 171 y 172; francés, 177; holandés, 362, 363; alemán, 331 y 332; español, 396, 398; húngaro, 465; belga, 246; uruguayo, 173 y 174.

ARTÍCULO 301

El juez que aceptare dádiva ó promesa para dictar una resolución justa, incurrirá en la pena establecida en el artículo anterior.

Si la resolución fuere injusta, en causa civil, ó si lo fuere en causa criminal, siendo absolutoria, la pena será de penitenciaría de dos á seis años.

Si por la sentencia injusta se impusiere pena, el juez culpable será reprimido con penitenciaría de tres á quince años.



En todos los casos, el juez culpable sufrirá inhabilitación absoluta y perpétua.

Concordancias

Cód. penal, 251; ley de 1863, 76; holandés, 364; francés, 181 y 182; alemán, 334; húngaro, 468, 469; belga, 249.

ARTÍCULO 302

Lo dispuesto en los artículos precedentes de este capítulo tendrá aplicación á los árbitros, jurados, arbitradores, peritos, intérpretes, testigos y cualesquiera personas que, desempeñando un servicio público, aceptare la dádiva ó promesa de una retribución que no les fuere debida.

Concordancias

Cód. español, 300; italiano, 171.

ARTÍCULO 303

El que directa ó indirectamente diere ú ofreciere dádivas á un funcionario público, para que haga ú omita un acto relativo á sus funciones, será reprimido con la pena de quinientos á dos mil pesos de multa é inhabilitación absoluta por dos á seis años.

Si la dádiva se hiciera ú ofreciere á un juez, la pena será de uno á cuatro años de penitenciaría é inhabilitación por triple tiempo.

Concordancias

Cód. penal, 253; ley de 1863, 78; húngaro, 470; holandés, 177 y 178; alemán, 333 y 334; francés, 179; italiano, 173; español, 402; uruguayo, 175.



ARTÍCULO 304

El funcionario público que admitiere regalos que le fueren presentados en consideración á su oficio, será reprimido con inhabilitación absoluta de uno á cuatro años.

Concordancias

Cód. español, 401.

ARTÍCULO 305

En todos los casos de este capítulo, las dádivas ó presentes caerán en comiso.

Concordancias

Cód. penal, 254; español, 404; italiano, 174; alemán, 335; francés, 180; belga, 253; chileno, 251 uruguayo, 176.





CAPÍTULO VII

Malversación de caudales públicos

ARTÍCULO 306

El funcionario público que diere á los caudales ó efectos que administrare una aplicación pública diferente de aquella á que estuvieren destinados, será reprimido con inhabilitación especial de un mes á un año.

Si de ello resultare daño ó entorpecimiento del servicio á que estuvieren consignados, se impondrá además al culpable la pena de multa del cinco al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.

Concordancias

Cód. penal, 306; español, 408; chileno, 336.

ARTÍCULO 307

El funcionario público que, con daño ó entorpecimiento del servicio público, aplicare á usos propios ó ajenos los caudales ó efectos puestos á su cargo, será reprimido con inhabilitación absoluta por uno á cuatro años y multa del veinte al sesenta por ciento de los valores usados, si verificare el reintegro.

Si no verificare el reintegro, se le impondrá la pena señalada en el artículo siguiente.

Si el uso indebido de los fondos fuere sin daño ni entorpecimiento del servicio público, incurrirá en inhabilitación especial por uno á cuatro años.

Concordancias

Cód. penal, 267; ley de 1863, 83 y 84; Cód. Tejedor 413; español, 407; chileno, 235; uruguayo, 168.

ARTÍCULO 308

El funcionario público que sustrajere caudales ó efectos cuya administración, percepción ó custodia le hayan sido confiados por razón de su cargo, será reprimido con penitenciaría de tres á diez años é inhabilitación absoluta perpétua.

Concordancias

Cód. penal 268; ley de 1863, 80; español, 405; italiano, 168; holandés, 359; alemán, 350; francés, 169-172; húngaro, 462; belga, 240; chileno, 233; uruguayo, 168.

ARTÍCULO 309

El funcionario público que, por imprudencia ó negligencia, ó por inobservancia de los reglamentos ó deberes de su cargo, diere ocasión á que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales ó efectos de que se trata en el artículo anterior, incurrirá en la pena de multa de veinte al sesenta por ciento del valor sustraído.

Concordancias

Cód. español, 406; chileno, 234.





ARTÍCULO 310

Quedan sujetos á las disposiciones anteriores los que administraren ó custodiaren bienes pertenecientes á establecimientos de instrucción pública ó de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados ó depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan á particulares.

Concordancias

Cód. penal, 269; español, 410; chileno, 238.

ARTÍCULO 311

El funcionario público que, teniendo fondos expedidos, demorare injustificadamente un pago ordinario ó decretado por autoridad competente, será reprimido con inhabilitación especial por uno á seis meses.

La misma pena se aplicará al funcionario público que, requerido por autoridad competente, rehusare entregar una cantidad ó efecto depositado ó puesto bajo su custodia ó administración.

Concordancias

Cód. penal, 270 y 271; español, 409; chileno, 237.

CAPÍTULO VIII

Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

ARTÍCULO 312

El funcionario público que directamente, ó por persona interpuesta, ó por acto simulado, se interesare en cualquier contrato ó operación en que interviniere por razón de su cargo, será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años é inhabilitación absoluta por doble tiempo.

Esta disposición es aplicable á los peritos, árbitros y contadores particulares respecto de los bienes ó cosas en cuya tasación, partición ó adjudicación hubieren intervenido, y á los tutores, curadores, albaceas y síndicos, respecto de los pertenecientes á sus pupillos, testamentarías ó concursos.

Concordancias

Cód. penal, 273; ley de 1863, 86; español, 412; italiano, 176; francés, 175; belga, 245; chileno, 240; uruguayo, 178.



CAPÍTULO IX

Exacciones ilegales

ARTÍCULO 313

El funcionario público que exigiere una contribución no autorizada por autoridad competente, ó, abusando de su cargo, reclamare, recibiere ó retuviere dinero ú otros valores, será reprimido con multa de doscientos á mil pesos é inhabilitación especial por un mes á un año.

La inhabilitación será de uno á cuatro años si la exacción se verificare empleando fuerza.

Concordancias

Cód. penal, 274; ley de 1863, 87 y 89; alemán, 353; francés, 171; belga, 243.

ARTÍCULO 314

El funcionario público que convirtiere en provecho propio las exacciones expresadas en el artículo anterior, será reprimido con penitenciaría de tres á diez años é inhabilitación absoluta perpétua.

Concordancias

Cód. penal, 275; ley de 1863, 88; holandés, 366; italiano, 169-170; uruguayo, 171-172.



ARTÍCULO 315

El funcionario público que exigiere, por sí ó por persona interpuesta, derechos ó propinas por lo que debiere practicar gratuitamente en virtud de su oficio ó cobrar mayores derechos que los que le correspondiere, será reprimido con multa del duplo al cuádruplo de la cantidad que hubiere percibido; y, si, para efectuar la exacción, supusiera orden superior, comisión, mandamiento judicial ú otra autorización legítima, sufrirá, además, inhabilitación especial por uno á cuatro años.

Concordancias

Cód. penal, 276; español, 413; chileno, 241; uruguayo, 179.



CAPÍTULO X

P r e v a r i c a t o

ARTÍCULO 316

El juez que expidiere resoluciones contrarias á la ley expresa invocada por las partes ó por él mismo, ó citare, para fundarlas, hechos ó resoluciones falsas, sufrirá multa de mil á cuatro mil pesos é inhabilitación absoluta perpétua.

Si la sentencia se hubiere ejecutado, siendo condenatoria en causa criminal, {sufrirá penitenciaría de tres á quince años é inhabilitación absoluta perpétua.

Concordancias

Cód. penal, 245-246; español, 361-367; uruguayo, 207, 1°; alemán, 336.

ARTÍCULO 317

El abogado, ó procurador, ó mandatario judicial que defendiere ó representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea ó sucesivamente, ó que, de cualquier otro modo no previsto especialmente en este Código, perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada, sufrirá multa de doscientos á mil pesos é inhabilitación especial por dos á seis años.

Si á consecuencia del prevaricato, se hubiere impuesto al defendido ó representado pena superior la



dos años de penitenciaría, el prevaricador sufrirá la de dos á seis años de penitenciaría é inhabilitación especial por doble tiempo.

Concordancias

Cód. penal, 247-248; Tejedor, 387; español, 371-372; italiano, 232-233; alemán, 356; húngaro, 482 y 483; chileno, 231-232; uruguayo, 310.

ARTÍCULO 318

La disposición del artículo anterior es aplicable á los fiscales, asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades.

Concordancias

Cód. penal 249.





CAPÍTULO XI

Denegación y retardo de justicia

ARTÍCULO 319

El juez que se negare á juzgar, so pretexto de oscuridad, insuficiencia ó silencio de la ley, será reprimido con inhabilitación absoluta por uno á tres años.

En la misma pena incurrirá el juez que retardare la administración de justicia después de requerido por las partes y vencidos los términos legales, salvo la prueba de un inconveniente insuperable.

Concordancias

Cód. Tejedor, 385, inc. 4º y 396, inc. 1º; español, 368; francés, 185; belga, 258; italiano, 178.

ARTÍCULO 320

El funcionario público que, faltando á la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes, sufrirá la pena de inhabilitación absoluta por seis meses á dos años, á menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable.

Concordancias

Cód. Tejedor, 396, inciso 3º y 397; español, 370; húngaro, 478; alemán, 346.



CAPÍTULO XII

Falso testimonio

ARTÍCULO 321

El testigo, perito ó intérprete que afirmare una falsedad, negare la verdad ó callare, en todo ó en parte, lo que supiere acerca de los hechos sobre los cuales fuere interrogado por la autoridad competente, será reprimido con penitenciaría por seis meses á dos años.

Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno á cuatro años de penitenciaría. Si, en su consecuencia, se impusiere al culpado pena superior á diez años de penitenciaría, el testigo, perito ó intérprete falso sufrirá tres á diez años de penitenciaría.

En todos los casos, se le impondrá, además, inhabilitación absoluta por tiempo doble del de la condena.

Concordancias

Cód. penal, 286-289 y 291; italiano, 214 y 217; holandés, 207; español, 332-336; francés, 361, 363; alemán, 154; húngaro, 213-217; belga, 215-223; chileno, 206-210; uruguayo, 199, 200, 204, 206.

ARTÍCULO 322

La pena del testigo, perito ó intérprete falso cuya declaración fuere dada mediante cohecho, se agravará

con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida ó recibida.

El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso.

Concordancias

Cód. penal, 290; español, 337; francés, 364; uruguayo, 205; belga, 234.





CAPÍTULO XIII

Encubrimiento

ARTÍCULO 323

Será reprimido con penitenciaría de un mes á un año el que, sin promesa anterior al delito, cometiere, después de su ejecución, alguno de los hechos siguientes:

- 1º Ocultar ó facilitar la fuga del delincuente para sustraerlo á la justicia;
- 2º Procurar la desaparición de los rastro del delito;
- 3º Guardar, esconder, comprar ó vender los efectos sustraídos, para que aprovechen á los autores del delito ó á los encubridores mismos;
- 4º Negar á la autoridad sin motivo legítimo el permiso de penetrar en el domicilio para tomar la persona del delincuente que se encuentre en él;
- 5º Guardar habitualmente armas ó efectos de malhechores, aunque no tuviere conocimiento determinado de los delitos;
- 6º Dejar de comunicar á la autoridad las noticias que tuviere acerca de la comisión de algún delito, cuando estuviere obligado á hacerlo por su profesión ó empleo;



Concordancias

Cód. penal, 42; italiano, 225, 180 y 431; holandés, 189 y 416-417; húngaro, 370-377; francés, 62 y 248; alemán, 257-260.

ARTÍCULO 324

La pena en los casos enunciados en el artículo anterior, será de seis meses á dos años de penitenciaría, cuando se trate de delito á cuyo autor corresponda la de muerte, presidio ó penitenciaría por más de seis años.

Concordancias

Cod. penal, 43.

ARTÍCULO 325

Estarán exentos de pena por ocultación los consanguíneos y afines en línea ascendente y descendente, los hermanos, los cónyuges, los afines colaterales en segundo grado, los amigos íntimos y los que hubiesen recibido grandes beneficios del responsable del delito, antes de su ejecución.

Esta exención no se aplicará cuando la ocultación se haya hecho por precio ó participando de los efectos del delito.

Quedarán también exentos de pena los encubridores de delitos reprimidos con penitenciaría que no exceda de un año, multa no mayor de quinientos pesos, destierro ó inhabilitación especial.

Concordancias

Cód. penal, 44-45; holandés, 189; italiano, 225; húngaro, 378; francés, 248; español, 17; uruguayo, 24.



CAPÍTULO XIV

Evasión

ARTÍCULO 326

Sufrirá penitenciaría de un mes á un año, el que, hallándose legalmente detenido, se evadiere usando violencia en las personas ó mediante fractura en las cosas.

Concordancias

Cód. italiano, 226; francés, 245; uruguayo, 212.

ARTÍCULO 327

El culpable de connivencia en la evasión de algún detenido ó condenado, será reprimido:

- 1º Con penitenciaría por dos á seis años, si el fugitivo estuviere condenado por sentencia ejecutoriada, á la pena de muerte ó de presidio;
- 2º Con penitenciaría por seis meses á dos años, si el fugitivo estuviere condenado por sentencia ejecutoriada, á penitenciaría, por más de seis años ó se hallare procesado por delito que merezca pena de muerte ó de presidio;
- 3º Con penitenciaría de un mes á un año si el fugitivo estuviere condenado por sentencia ejecutoriada, á penitenciaría por uno á seis años.

ó se hallare procesado por delito que merezca pena de penitenciaría cuyo término medio exceda de seis años.

4° Con penitenciaría de cuatro á ciento veinte días, si el fugitivo estuviere condenado ó procesado por delito que merezca pena menos grave que las espresadas.

En todos los casos anteriores, si el culpable fuere empleado público, se le impondrá además inhabilitación absoluta por triple tiempo.

Si la evasión fuere imputable á negligencia de un empleado público, éste incurrirá en la pena de multa de doscientos á mil pesos .

Concordancias

Ley de 1863, 39-43; Cod. penal, 255-257 y 236; italiano, 228-229; holandés, 191 y 367; húngaro, 447-448; belga, 332-337; francés, 237-244; uruguayo, 214-215; chileno, 299-304; español, 274 y 373-374.





TITULO XI

DELITOS CONTRA LA FÉ PÚBLICA

CAPÍTULO I

Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito público.

ARTÍCULO 328

Será reprimido con penitenciaría de tres á diez años el que falsificare moneda que tenga curso legal en la República y el que la introdujere, expendiere ó pusiere de cualquier modo en circulación.

Concordancias

Ley penal de 1863, 60; cód. italiano, 256; francés, 132; español, 294; holandés, 208 y 209; húngaro, 203, 1º y 2º; belga, 160 y 162; alemán, 146; chileno, 163; uruguayo, 230.

ARTÍCULO 329

El que cercenare moneda de curso legal y el que introdujere, expendiere ó de cualquier modo pusiere en

circulación moneda cercenada, sufrirá la pena de uno á cuatro años de penitenciaría.

Concordancias

Ley penal de 1863, 61; cód. italiano, 257; español, 205; holandés, 210; húngaro, 203, 3°; alemán, 150; chileno, 164.

ARTÍCULO 330

Si la moneda falsa, adulterada ó cercenada se hubiere recibido de buena fé, y se expendiere ó circulare con conocimiento de la falsedad, adulteración ó cercenamiento, la pena será de doscientos á mil pesos de multa.

Concordancias

Ley penal de 1863, 60 y 61; cód. francés, 135; español, 301; italiano, 258 *in fine*; holandés, 213; húngaro, 209; belga, 170; alemán, 148; chileno, 170; uruguayo, 222.

ARTÍCULO 331

Para los efectos de los artículos anteriores quedan equiparados á la moneda los billetes de banco legalmente autorizados, los títulos de la deuda nacional, provincial ó municipal, y sus cupones, los bonos ó libranzas del tesoro nacional, provincial ó municipal, los títulos, cédulas ó acciones al portador emitidos legalmente por los bancos ó compañías autorizadas para ello.

Concordancias

Ley penal de 1863, 62; cód. italiano, 263; holandés, 208; húngaro, 203, 210 y 211; alemán, 149; uruguayo, 225.





ARTÍCULO 332

Si la falsedad ó cercenamiento se cometiere con respecto á monedas extranjeras que no tengan curso legal en la República, ó con respecto á billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito extranjeros, la pena será de uno á cuatro años de penitenciaría en el caso del artículo 328, de seis meses á dos años en el caso del artículo 329, y de cincuenta á doscientos pesos de multa en el caso del artículo 330.

Concordancias

Cód. holandés, 212; belga, 164 y 166; chileno, 165 y 166.

ARTÍCULO 333

El funcionario público ó el director ó administrador de banco ó compañía que hiciere ó autorizare la emisión de moneda, billetes de banco ó cualesquiera títulos, cédulas ó acciones al portador en cantidad superior á la autorizada por la ley, sufrirá penitenciaría por dos á seis años, é inhabilitación absoluta por doble tiempo.

CAPÍTULO II

Falsificación de sellos, timbres y marcas

ARTÍCULO 334

Será reprimido con penitenciaría por uno á cuatro años:

- 1º El que falsificare sellos oficiales.
- 2º El que falsificare papel sellado, sellos de correos ó telégrafos ó cualquiera otra clase de efectos timbrados cuya emisión esté reservada á la autoridad, ó tenga por objeto ásegurar el pago de impuestos.

En estos casos, como en los de los artículos siguientes, se considerará como falsificación la inscripción fraudulenta del sello verdadero.

Concordancias

Cód. penal, 277; Tejedor, 424 y 426; italiano, 264, 265, 268, 269 y 272; holandés, 316; húngaro, 412.

ARTÍCULO 335

Será reprimido con penitenciaría de seis meses á dos años el que falsificare marcas, contraseñas ó firmas de que se use, en las oficinas públicas ó por funcionarios públicos, para contrastar pesas ó medidas ó identificar cualquier objeto.





Concordancias

Cód. penal, 278; holandés, 218.

ARTÍCULO 336

Sufrirá penitenciaría por un mes á un año el que falsificare ó adulterare de cualquier manera un sello, marca, billete ó contraseña de empresas ó establecimientos particulares.

Concordancias

Cód. penal, 278; Tejedor, 427; ley penal de 1863, 59; cód. español, 291; italiano, 273; uruguayo, 237-238; chileno, 185.

ARTÍCULO 337

El que empleare, vendiere, pusiere en venta, circularre ó introdujere en la República sellos, timbres ó marcas falsas, adulteradas ó confeccionadas ilegalmente ó los objetos á los cuales estén ilegalmente, aplicados, como si estos sellos, timbres ó marcas fueren legítimos, sufrirá la pena señalada por los artículos anteriores en sus casos respectivos.

Concordancias

Cód. holandés, 220; italiano, 270.

ARTÍCULO 338

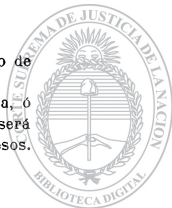
Sufrirá penitenciaría de un mes á un año el que hiciere desaparecer de cualesquiera sellos, timbres, billetes ó contraseñas, la marca ó signo que indique

haber ya servido ó sido inutilizado para el objeto de su expendición.

El que usare á sabiendas, ó pusiere en venta, ó hiciere usar esta clase de sellos ó contraseñas, será reprimido con multa de doscientos á cinco mil pesos.

Concordancias

Cód. holandés, 222; italiano, 274; uruguayo, 236; chileno, 189.



CAPÍTULO III

Falsificación de documentos en general

ARTÍCULO 339

El que hiciere en todo ó en parte un documento falso, ó adulterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con penitenciaría de dos á seis años, si se tratare de un instrumento público, y con penitenciaría de seis meses á dos años, si se tratare de un instrumento privado.

Concordancias

Cód. holandés, 225; italiano, 275, 278, 280; húngaro, 391 y 401; uruguayo, 240 y 243; belga, 194; alemán, 267.

ARTÍCULO 340

El que insertare ó hiciere insertar en un instrumento público, declaraciones falsas, concernientes á un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con penitenciaría de dos á seis años.

Concordancias

Cód. holandés, 227; italiano, 276 y 279; húngaro, 400; uruguayo, 241; belga, 195; alemán, 271.





ARTÍCULO 341

El que suprimiere ó destruyere en todo ó en parte un documento, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas por los dos artículos anteriores en los casos respectivos.

Concordancias

Cód. italiano, 283; húngaro, 398; uruguayo, 248.

ARTÍCULO 342

El médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente á la existencia ó inexistencia, presente ó pasada, de alguna enfermedad ó lesión, sufrirá penitenciaría de un mes á un año. La pena será de uno á cuatro años si el falso certificado debiera tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto ú otro hospital.

Concordancias

Cód. holandés, 228; italiano, 289; húngaro, 408; español, 323; uruguayo, 249; belga, 204; alemán, 278; chileno, 203.

ARTÍCULO 343

El que hiciere uso de un documento ó certificado falso ó adulterado será reprimido como si fuere autor de la falsedad.

Concordancias

Cód. penal, 282; italiano, 281; holandés, 226, párrafo último.

ARTÍCULO 344

Para los efectos de este capítulo, quedan equiparados á los instrumentos públicos los testamentos ológrafos ó cerrados, las letras de cambio, y los títulos de crédito transmisibles por endoso ó al portador, no comprendidos en el artículo 331.

Concordancias

Cód. italiano, 284;

ARTÍCULO 345

Cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo fuere ejecutado por un empleado público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, además, inhabilitación absoluta perpétua.

Concordancias

Cód. penal, 381; holandés, 215; húngaro, 399; español, 328.



CAPÍTULO IV

Disposiciones comunes á los capítulos precedentes

ARTÍCULO 346

El que frabricare, introdujere en el país ó conservare en su poder, materias ó instrumentos conocida-
mente destinados á cometer algunas de las falsifica-
ciones legisladas en este título, sufrirá penitenciaría
de un mes á un año .

Las materias é instrumentos caerán en comiso.

Concordancias

Cód. penal, 294; Tejedor, 442; español, 326 y 327.



LIBRO TERCERO

DE LAS FALTAS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 347

Son aplicables á las faltas las disposiciones contenidas en el libro primero, con las modificaciones siguientes;

- 1º La tentativa de falta no es punible.
- 2º Los menores de catorce años que cometieren alguna falta serán entregados á la corrección doméstica, sin perjuicio de la cooperación y vigilancia de la autoridad.
- 3º Cuando una falta fuere cometida por persona subordinada á la potestad, dirección ó vigilancia de otra, la pena se aplicará también á ésta, si se tratare de faltas á disposiciones que esta-





ba obligada á hacer observar, y si la falta pudo ser impedida por ella empleando la debida diligencia.

Si la falta fuere cometida por orden de la persona investida de la potestad ó encargada de la dirección ó vigilancia, y violare disposiciones que ella misma estuviere obligada por la ley á hacer observar, la pena se aplicará también á la persona subordinada, si ésta hubiere cometido la falta á pesar de advertencia ó prohibición especial de la autoridad pública.

4° Cuando la ley no disponga de otro modo, el imputado podrá hacer cesar el procedimiento penal, pagando la suma correspondiente al máximo de la pena establecida para la falta de que se trate, las costas y la indemnización reclamada.

5° La reincidencia en las faltas no dará lugar á deportación.

6° El comiso de los instrumentos y efectos de las faltas será decretado por los tribunales á su prudente arbitrio, según los casos y circunstancias.

7° En la aplicación de las penas por faltas, los tribunales procederán según su prudente arbitrio dentro de los límites de cada una, atendiendo á las circunstancias del caso.

Concordancias

1° Cód. holandés, 46.

3° Cód. italiano, 60; uruguayo, 402.

4° Cód. italiano, 101.

6° Cód. español, 623; chileno, 500.

7° Cód. español, 620.

TÍTULO II

FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD GENERAL

ARTÍCULO 348.

Será reprimido con multa de diez á doscientos pesos:

- 1° El que omitiere tomar las precauciones necesarias para impedir el peligro proveniente de excavaciones, de obras en construcción ó de objetos dejados en paraje de tránsito público.
- 2° El que removiere las señales puestas para indicar un peligro en el tránsito público.
- 3° El que arbitrariamente apagare el alumbrado público, el del exterior de los edificios ó el de los portales ó escaleras de los mismos.
- 4° El que colocare en un edificio ó arrojarle á la calle ó sitio público un objeto cualquiera que pueda causar daño á los transeuntes.
- 5° El que dejare en la via pública una bestia de carga, de tiro ó de carrera, ó cualquier otro animal, sin haber tomado los precauciones suficientes para que no cause daño.
- 6° El que corriere caballerías ó carruajes por las calles, paseos ó sitios públicos, ó conflare su





- manejo á personas inexpertas, con peligro para la seguridad de las personas ó de las cosas.
- 7º El encargado de la guarda ó custodia de un loco, que lo dejare vagar por las calles y sitios públicos sin la debida vigilancia, ó no diere aviso á la autoridad cuando se sustrajere á su custodia.
- 8º El que, sin dar aviso inmediato á la autoridad, recibiere en custodia una persona en el concepto de estar atacada de enajenación mental.
- 9º El que, sin autorización de la autoridad competente, cerrare ú obstruyere una vía pública terrestre ó fluvial.
10. El que lanzare un globo con materias inflamables.
11. El que disparare un arma de fuego, tirare un fuego de artificio, ó tirare un fuego cualquiera con peligro de incendio para edificios ó bienes muebles.
12. El que incendiare un inmueble propio sin autorización de la autoridad competente.
13. El que contraviniere á las reglas establecidas para evitar la propagación del fuego en las máquinas de vapor, calderas, hornos, estufas, chimeneas ú otros lugares semejantes, ó dejare de limpiarlos ó cuidarlos, con peligro de incendio.
14. El que descuidare la demolición ó reparación á que esté obligado, de edificios que amenacen ruina con peligro para la seguridad.
15. El que infringiere los reglamentos ú ordenanzas sobre la elaboración, tenencia, custodia ó transporte de materias explosivas, inflamables ó corrosivas, ó productos químicos que puedan causar estragos.

16. El que infringiere las reglas establecidas para la quema de bosques ú otros productos de la tierra.
17. El que infringiere las reglas dictadas por autoridad competente para asegurar el abastecimiento de las poblaciones.
18. El que infringiere las reglas dictadas por la autoridad competente sobre epizootías, extinción de langosta ó filoxera, ú otras plagas semejantes.
19. El que infringiere las disposiciones sanitarias dictadas por la autoridad competente sobre conducción é inhumación ó cremación de cadáveres.
20. El que arrojaré animales muertos ó basuras en las calles ó sitios públicos, donde esté prohibido hacerlo, ó ensuciaré las fuentes ó abrevaderos.
21. El que infringiere las reglas dictadas por la autoridad competente, para la elaboración, tenencia ó transporte de sustancias fétidas, insalubres ó venenosas.
22. El que infringiere las disposiciones sanitarias sobre prostitución.
23. La mujer que sabiendo que está atacada de enfermedad contagiosa, se colocare como nodriza, ó no manifestare su enfermedad cuando la conoce estando en aquel servicio.
24. El que, de cualquier modo que no constituya delito, infringiere los reglamentos ú ordenanzas sobre higiene pública, dictados por la autoridad competente.
25. El médico, cirujano, partera ó flebótomo que sin causa justificada, rehusare ó demorare prestar el servicio profesional que se le solícitare



en caso urgente, y el farmacéutico que rehuse o demorare, sin causa justificada, despachar los medicamentos prescritos por los médicos.

26. El capitán ó individuo de la tripulación de un buque, que no observare las prescripciones de la ley para prevenir los abordajes ó colisiones.



Concordancias

1º Cód. italiano, 473; holandés, 427, 1º; húngaro de contravenciones, 117; chileno, 495, 20º; alemán, 367, 14º; belga, 551, 5º.

2º Cód. italiano, 478.

3º Cód. italiano, 474; húngaro de contr. 119, 3º; español, 598, 1º; chileno, 496, 38º.

4º Cód. holandés, 437, 4º; italiano, 475 y 476; húngaro de contr., 118; español, 599, 8º; francés, 471, 12º; belga, 552, 5º.

5º Cód. italiano, 481; holandés, 427, 5º.

6º Cód. italiano, 481 y 482; húngaro de contr. 120; español, 599, 5º; chileno, 494, 6º; alemán, 366, 2º.

7º Cód. italiano, 477; español, 599, 2º; chileno, 496, 16º; francés, 475, 7º; belga, 556, 2º.

8º Cód. italiano, 478.

9º Cód. holandés, 427, 6º; francés, 471, 4º; belga, 551, 4º.

10º Cód. holandés, 429, 2º; chileno, 496, 3º.

11º Cód. holandés, 429, 1º; italiano, 467; húngaro de contr. 115; español, 587; chileno, 496, 12; alemán, 368, 7º; francés, 471, 2º; belga, 553, 1º;

12º Cód. holandés, 428.

13º Cód. húngaro de contr. 141; español, 601, 1º; alemán, 369, 3º; francés, 471, 1º.

14º Cód. italiano, 472; español, 601, 2º; alemán, 367, 13º; francés, 471, 5º; belga, 551, 7º.

15º Cód. italiano, 469; húngaro, de contr. 109; español, 601, 4º. chileno, 494, 17º; alemán, 367, 5º y 6º.

16º Cód. chileno, 495, 11º.

17º Cód. húngaro de contr. 104; español, 593, 2º; chileno, 496, 6º;

18º Cód. español, 595, 4º.

19º Cód. español, 596, 5º.

20° Cód. español, 596, 7°; chileno, 496, 19°.

21° Cód. español, 596, 8°; chileno, 496, 20°.

22° Cód. húngaro de contr. 81: español, 596, 2° chileno, 495, 7°;
alemán, 361, 6°.

23° Cód. húngaro de contr. 106.

24° Cód. español, 596, 9°.

25° Cód. húngaro de contr. 93; chileno, 494, 12°.

26° Cód. holandés, 473.





TITULO III

Faltas contra el orden público

ARTÍCULO 349

Sufrirá penitenciaría por cuatro á ciento veinte días:

- 1° El que, sin permiso de la autoridad competente, hiciere ó publicare un plano, dibujo ó descripción de una obra de defensa militar;
- 2° El que acause alboroto en el pueblo, perturbatione una reunión ó fiesta, ú ofendiere á una persona con gritos, cencerradas ú otros ruidos;
- 3° El que con gritos, toques de campanas ú otros ruidos, ó ejercitando su oficio de un modo contrario á los reglamentos, turbare las ocupaciones ó el reposo de los vecinos;
- 4° El que arrojare contra una persona en la vía pública, agua ú otras sustancias que puedan molestarle sin causarle lesión;
- 5° El que mendigare en público;
- 6° El que permitiere que una persona menor de catorce años sujeta á su potestad, guarda ó vigilancia, se dedicare á mendigar, ó que otro se sirva de ella para mendigar;



- 7° que fuera del caso de urgencia, ejerciere sin título ó permiso de la autoridad, una profesión que los exija, ó traspasare los límites de su autorización;
- 8° El que fabricare, distribuyere, expendiere ó pusiere en venta, impresos ó piezas de metal cuya forma los haga confundibles á primera vista con papel moneda, billetes de banco, timbres ó especies amonedadas;
- 9° El que abriere ó tuviere abierto al público un lugar de espectáculo ó reuniones, sin observar las prescripciones establecidas por los reglamentos ú ordenanzas, en vista de la seguridad, higiene ó comodidad pública;
- 10° El dueño de fonda, posada ó cualquier establecimiento destinado á hospedaje, que dejare de dar á la autoridad los partes y noticias prevenidos por las ordenanzas ó reglamentos en el tiempo y forma debidos;
11. El que, sin permiso de la autoridad competente, cuando él sea legalmente necesario, fabricare, introducir, pusiere en venta ó expendiere armas, pólvora ú otras materias explosivas;
12. El que confiare ó permitiere llevar armas de fuego cargadas, á menores de catorce años, ó á cualquiera persona que no sepa, ó no pueda manejarla;
13. El que, fuera de su comercio ó industria, hubiera reunido armas ó municiones en cantidad excedente á las necesarias para su propio uso;
14. El que removiere ó manchare estatuas y demás objetos de ornato, ó de utilidad pública, colocados en las calles, caminos, parques, plazas, jardines ó paseos;



15. El que violare sepulcros ó profanare cadáveres ó restos humanos;

16. El que usare públicamente un nombre supuesto, ó un uniforme propios de un cargo que no ejerciere ó de un estado que no tuviere, ó insignias que no estuviere autorizado á llevar.

Concordancias

1º Cód. holandés, 430; húngaro de contr., 33; alemán 360, 1º.

2º Cód. holandés, 431; español, 589. 1º y 2º: chileno, 494. 2º: alemán, 360, 11º. •

3º Cód. italiano, 457; húngaro de contr. 40.

1º Cód. italiano, 475; español, 599, 7º.

5º Cód. holandés, 432; húngaro, de contr. 66; alemán, 361, 4º.

6º Cód. italiano, 456; alemán, 361, 4º.

7º Cód. holandés, 436.

8º Cód. holandés, 440; húngaro de las contr. 59.

9º Cód. italiano, 447.

10º Cód. ~~español~~, 490, 1º; italiano, 451; holandés, 438.

11º Cód. italiano, 460, 461, 462 y 463; húngaro de contr. 34.

12º Cód. italiano, 466.

13º Cód. italiano, 468; alemán, 360, 2º.

14º Cód. español, 585; húngaro de contr. 80.

15º Cód. español, 349, 350 y 596, 6º; húngaro de contr. 123; alemán, 367, 1º y 2º.

16º Cód. español 346 y 348; húngaro, de contr. 44 y 45; alemán, 360, 8º.



TÍTULO IV

FALTAS CONTRA LA AUTORIDAD Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 350

Será reprimido con penitenciaría con cuatro á sesenta días:

- 1º El que infringiere una orden legalmente dada por autoridad competente, para objeto de justicia ó de seguridad.
- 2º El que, en caso de flagrante delito ó de peligro para la seguridad general de las personas ó de los bienes, rehusare prestar á la autoridad el auxilio que ella le reclamare, pudiendo hacerlo sin riesgo personal.
- 3º El que, requerido por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, para declarar su nombre, profesión, estado, lugar del nacimiento ó domicilio, ú otras indicaciones personales, rehusare contestar ó diere falsos datos.
- 4º El que, sin derecho, arrancare, hiciere ilegible ó rompiere un anuncio fijado en paraje público por la autoridad competente.



- 5° El que no hiciere las declaraciones á que este legalmente obligado para el registro del estado civil de las personas.
- 6° El ministro, pastor ó sacerdote de cualquiera religión ó secta, que procediere á la celebración de un matrimonio religioso, sin tener á la vista el acta de la celebración del matrimonio civil.
- 7° El que promoviere ó levantara una suscripción pública para pagar ó reembolsar una pena pecunaria.
- 8° El que ejerciere profesión, funciones ó derechos de que estuviere inhabilitado por sentencia.
- 9° El que reclutare gente, sin licencia de autoridad competente.
- 10° El funcionario competente para expedir copias ó hacer notificaciones de resoluciones judiciales, que hiciere conocer esas resoluciones antes de hallarse firmadas.
11. El que, sin autorización de la autoridad competente, tomare copia ó extracto de documentos secretos de la administración, ó los publicare.
12. El oficial del estado civil ó capitán de buque que infringiere una disposición cualquiera de la ley concerniente á los registros ó á las actas del estado civil.
13. El capitán de buque que no tuviere á bordo todos los papeles del buque, libros ó documentos exigidos por las leyes ó reglamentos dictados por la autoridad competente.

Concordancias

Cód. italiano, 434.

2º Cód. holandés, 440; español, 589, 78; chileno, 496, 2º; alemán, 360, 10º.

3º Cód. húngaro de contr. 43; italiano, 436, español, 590; chileno, 466, 6º; francés, 475, 12º.

4º Cód. holandés, 447; húngaro de contr. 47; francés, 479, 9º; belga, 560. 1º

5º Cód. holandés, 448; chileno, 496, 3º y 4º.

6º holandés, 449.

7º Cód. húngaro de contr. 39.

8º Cód. español, 129. 6º; chileno, 90.

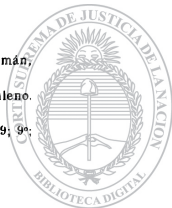
9º Cód. italiano, 452.

10º Cód. holandés, 462.

11º Cód. holandés, 463.

12º Cód. holandés, 466 y 472.

13º Cód. holandés, 470.





TÍTULO V

FALTAS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES

ARTÍCULO 351

Será reprimido con multa de diez á cien pesos:

- 1° El que ofendiere públicamente el pudor con palabras, cantos, exhibición de estampas ó grabados, ó con otra clase de actos.
- 2° El dueño ó encargado de una casa de prostitución que admitiere en ella á una mujer sin haberle prevenido antes, de un modo inteligible, en presencia de un funcionario municipal ó policial, el oficio que se ejerce en su casa, cuando el hecho no constituya delito.
- 3° El que se encontrare en un lugar público, en un estado manifiesto de embriaguez.
- 4° El que en el sitio público ó casa abierta al público sirviere bebidas alcohólicas á un niño menor de catorce años ó á una persona ébria ó en estado anormal por debilidad ó alteración de sus facultades mentales.
- 5° El que admitiere ó facilitare á un menor impúber la entrada en una casa de prostitución ó en otro sitio de corrupción.

- 6º El que admitiere ó facilitare la entrada en una casa de juego de azar á un menor de edad ó á otra persona incapaz de administrar sus bienes.
- 7º El que cometiere actos de crueldad contra un animal, ó sin necesidad lo maltratare ó lo impeliere á fatigas manifestamente excesivas.

Concordancias

- 1º Cód. italiano, 490; holandés, 451; español, 506, 1º; chileno, 495.
- 2º Cód. holandés, 452.
- 3º Cód. holandés, 453; húngaro de contr. 84.
- 4º Cód. holandés' 454; italiano, 489; húngaro de contr. 85; español, 589, 3º.
- 7º Cód. holandés, 455; húngaro de contr. 86; alemán, 360, 13º; belga 560, 5º.





TÍTULO VI

FALTAS CONTRA LA PROPIEDAD

ARTÍCULO 352

Será reprimido con multa de veinte á cien pesos:

- 1º El que habiendo sido condenado por mendicidad, robo, hurto, extorsión, estafa ú otro delito contra los bienes muebles, fuere encontrado en posesión de dinero ú objetos no correspondientes á su condición, cuya procedencia legítima no justifique, ó fuere hallado en posesión de llaves falsas ó instrumentos aptos para abrir ó forzar cerraduras, cuyo legítimo destino no justifique.
- 2º El herrero que fabricare llaves de cualquier especie, para quien no fuere poseedor ó legítimo tenedor del edificio ú objeto á cuya cerradura se destine.
- 3º El herrero, cerrajero ú otro artesano, que abriere cerraduras de cualquiera especie, á pedido de alguien, sin asegurarse previamente de que éste es el poseedor ó legítimo tenedor del edificio ú objeto que se pretenda abrir.



- 4° El que usare en su casa de negocio pesas ó medidas diferentes de las establecidas por la ley.
- 5° El que esparciere falsos rumores ó usare cualquier otro artificio ilícito capaces de alterar el precio corriente de las cosas ó de los efectos cotizables.
- 6° El que entrare á pié ó á caballo, ó en cualquier vehículo, ó hiciere entrar animales en un terreno ajeno, cuya entrada esté prohibida de un modo aparente.
- 7° El que, sin tener derecho para ello, anduviere ó hiciere andar animales sobre un terreno sembrado, cultivado ó plantado, ó preparado para la siembra, el cultivo ó la plantación.

Concordancias

- 1° Cód. italiano, 492.
 - 2° Cód. italiano, 496; húngaro de contr. 133; alemán, 369 1°.
 - 3° Cód. italiano, 497; húngaro de contr. 133.
 - 4° Cód. italiano, 498; húngaro de contr. 136; español, 592, 3°; chileno, 495. 17; alemán, 369, 28; francés, 479, 6°.
 - 5° Cód. español, 593, 1°.
 - 6° Cód. holandés, 461; español, 607, 4°; chileno, 496, 28.
 - 7° Cód. holandés, 458, 459, 460; español, 608, 2°; alemán, 368, 9°; francés, 471, 3°, y 14° y 475, 10°; belga, 552, 7°.
-

DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROYECTO DE CÓDIGO PENAL



Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, Junio 17 de 1892.

Al Honorable Congreso de la Nación:

Con el objeto de completar en lo posible el código penal vigente, incorporando á sus cláusulas el resultado de los estudios que han practicado últimamente diversos países al reformar su legislación penal, el Poder Ejecutivo dictó en 7 de Junio de 1890 un decreto designando una comisión especial compuesta de los Doctores Norberto Piñero, Rodolfo Rivavola y José Nicolás Matienzo, catedrático de derecho criminal en la facultad de derecho y ciencias sociales de la capital, el primero, y miembros del poder judicial de la provincia de Buenos Aires, los segundos.

Esa comisión ha dado término á su trabajo en la forma del adjunto proyecto de código impreso, concordado y precedido de una circunstanciada exposición de motivos.

Las reformas y sus fundamentos se encuentran indicadas y discutidas ampliamente en esa exposición, trayendo al debate cuestiones importantes.

V. H. decidirá si es propicia la época actual para emprender el estudio de aquellas, ó si se hace necesario que la experiencia acentúe sus conclusiones y aumente elementos de juicio en un periodo mayor de tiempo que el que lleva de vigencia la ley actual.



En tal concepto, el Poder Ejecutivo se limita á remitiros el proyecto preparado: V. H. al estudiarlo juzgará su mérito intrínseco y de las ventajas que pudiera ofrecer su sanción.

El Poder Ejecutivo cree oportuno representaros la necesidad que existe de una resolución al respecto para no dar margen á la inestabilidad de la legislación penal y á que no se fije definitivamente en la materia.

La indecisión traerá, por otra parte, la paralización de las obras ó estudios sobre la ley penal, que preparan personas que se dedican en el país á esta especialidad de la ciencia jurídica, por cuanto no darán cima á sus trabajos mientras se encuentre pendiente de la consideración del Honorable Congreso una reforma general como la proyectada.

Dios guarde á V. H.

CARLOS PELLEGRINI.

JUAN BALESTRA.

Despacho de la Comisión Revisora de Códigos

Orden del día N° 29

COMISIÓN REVISORA DE CÓDIGOS

A la H. Cámara de Diputados:

Vuestra Comisión de Códigos ha estudiado el proyecto de Código Penal, presentado á la H. Cámara por el P. E. y redactado por los doctores Noberto Piñero, José Nicolás Matienza, y Rodolfo Rivarola, y por las

razones que os dará el miembro informante, aconseja su sanción con las modificaciones siguientes:

Sala de la Comisión, Setiembre 30 de 1895.

F. A. Barroetaveña.

En disidencia respecto de la pena de muerte y del aumento de las penas de presidio y penitenciaría.

Tomás J. Luque.—R. Carol.—M. Demaria.



Revisión

COMISIÓN DE CODIGOS N° 29

A la H. Cámara de Diputados.

Vuestra Comisión de Códigos ha estudiado el Proyecto de Código Penal presentado á la Cámara y redactado por los doctores Norberto Piñero, José Nicolás Matienzo y Rodolfo Rivarola, y las razones que os expondrá el miembro informante, aconseja su sanción con las modificaciones siguientes:

MODIFICACIONES

Artículo 17, inciso 2°.—Agregar al final: «del reconocimiento de hijos naturales y de celebrar matrimonio con ese objeto».

Artículo 20, inciso 1°.—Agregar á continuación de la palabra *distrito*, las siguientes: «de la autoridad».



Artículo 59, inciso 1°—Suprimir la palabra «cualquiera».

Id id id 3°—Suprimido.

Id id id 5°—En seguida de la palabra *amenazas*, agregar: «también irresistibles».

Id id id 7°—Suprimido.

Id id id 8°—Párrafo 5°.—Suprimir las palabras *de uno*, y poner en lugar de ellas: «su».

En el título 6, en vez de «Concurso,» con que empieza, poner: «Concurrencia».

Artículo 83.—Después de la palabra, *aplicación*, agregar: «también»

Artículo 88, párrafo 3°.—Después de *ofendido*, agregar: «cuando se produzca».

Artículo 94.—Cambiar la palabra *propuestas*, por: «entabladas».

Artículo 96.—Suprimir la palabra *de*, después de «renuncia», y sustituirla por: «hecha por», y cambiarlas: *solo perjudica*, por: «produce efecto sólo respecto del».

Agregar á continuación del artículo 127 el siguiente artículo: «El que persistiere en batirse, cuando se le den explicaciones suficientes por el ofensor, ó el que provocase á otro sin motivos, será reprimido con penitenciaría de un mes á un año, si el duelo se realizase.

Los padrinos incurrirán en la misma pena del que, en tales casos, persiste en batirse, ó se niega á dar explicaciones.

Si resultare muerto, ó heridas, se aplicarán las disposiciones del artículo 126».

Artículo 134.—A continuación de las palabras, *á quién*, agregar: «por la ley civil».



Artículo 136.—Agregar después de: *invalida*, «ó impedida».

Artículo 143.—Suprimirlo.

Artículo 145.—Suprimir la palabra; *calumnia*, y agregar, al final del artículo, «sin perjuicio de la acción civil, por daños».

Artículo 164.—Suprimir: *multa de doscientos á mil pesos* poniendo en lugar de ellas: «seis meses á un año».

Artículo 168.—Sustituir la palabra: *servidumbre*, por «esclavitud».

Artículo 172.—Agregar, después de: *persona*, las siguientes palabras: «por engaño, ó por fuerza», y suprimir todas las que siguen á la palabra *República*.

Artículo 180.—Suprimir las palabras: «ó casa de negocio».

Artículo 181.—Agregar después de *allanare*: «ó mandare allanar».

Artículo 192. inciso 2º—Después de: *emitido*, agregar, «ó la rechazar indebidamente»

Artículo 198. inciso 1º—Suprimir ó: y agregar al final «ó Bancos».

Artículo 248.—Agregar al final: «siempre que respecto de él se hubiere cumplido el contrato»

Artículo 252—Suprimir: *el que tomare parte en cualquier*, poniendo en su lugar: «los que formaren cualquiera».

Artículo 253—Suprimir: *La participación en*, y poner en su lugar: «Los que formaren.»

Artículo 287—Agregar, al final: «ú no ser que se hallare comprendido en las excepciones establecidas en la Ley de Procedimientos».

Artículo 309—Agregar después de, *se*, «sustrajere ó menoscabare los».



Artículo 316—Después de la palabra: *falsas*, agregar: «ó interviniere en causas que patrocinó como abogado».

Artículo 328—Después de: *el que*, agregar «*la*».

Artículo 332—Suprimir las palabras *con respecto*, y poner en su lugar «*en*», y suprimir: *ó con respecto*, y poner: «*de*».

Artículo 349—Agregar al final del inc. 16, las siguientes palabras: «con ánimo de engañar ó perjudicar, siempre que no constituyere un hecho más severamente penado».

Artículo 350, inciso 9º—Agregar al final: «con fin ilícito».

Por último, modificar la numeración de los artículos é incisos con arreglo á lo dispuesto en esta planilla.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las provincias que actualmente no tuvieron penitenciarias, podrán mandar los penados á cumplir la condena á la de la Capital hasta tanto la tuvieren, y siempre que á los penados se les hubiere impuesto más de cinco años de penitenciaría. Cuando se les hubiere impuesto menor número de años, cumplirán los reos la pena de penitenciaría en las cárceles de provincia.

Artículo—Este código empezará á regir seis meses después de su sanción.

F. A. Barroetaveña.

En disidencia respecto de la pena de muerte y del aumento de las penas de presidio y de penitenciaría.

R. Carol.—M. Demaría.—F. J. Luque.



ÍNDICE



	Página
Decreto disponiendo la presente edición.....	3
Decreto del Poder Ejecutivo disponiendo la preparación del Proyecto de reformas al Código Penal.....	5

EXPOSICION DE MOTIVOS 7

LIBRO I

<i>Título</i> I. Aplicación de la ley penal.....	10
<i>Título</i> II. De las penas	25
<i>Título</i> III. De la responsabilidad.	47
<i>Título</i> IV. De la tentativa.....	91
<i>Título</i> V. De las personas responsables	97
<i>Título</i> VI. Concurso de hechos punibles	106
<i>Título</i> VII. De la reincidencia.	112
<i>Título</i> VIII. Ejercicio de las acciones penales.....	118
<i>Título</i> IX. Extinción de las acciones y de las penas..	121
<i>Título</i> X. Significación de términos empleados.....	125

LIBRO SEGUNDO

Método del Proyecto en la parte especial.	126
<i>Título</i> I. Delitos contra las personas.....	128

<i>Título</i> II. Delitos contra la honestidad.....	153
<i>Título</i> III. Delitos contra el estado civil.....	167
<i>Título</i> IV. Delitos contra la libertad....	172
<i>Título</i> V. Delitos contra la propiedad.....	180
<i>Título</i> VI. Delitos contra la seguridad pública.....	200
<i>Título</i> VII. Delitos contra el orden público.....	213
<i>Título</i> VIII. Delitos contra la seguridad de la Nación..	216
<i>Título</i> IX. Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.....	221
<i>Título</i> X. Delitos contra la administración pública.	228
<i>Título</i> XI. Delitos contra la fé pública.....	245



LIBRO TERCERO

De las faltas

Motivos de su inclusión en el Código Penal	257
<i>Título</i> I. Disposiciones generales.....	263
<i>Título</i> II. Faltas contra la seguridad general.....	266
<i>Título</i> III. Faltas contra el orden público.....	267
<i>Título</i> IV. Faltas contra la autoridad y administración pública	268
<i>Título</i> V. Faltas contra las buenas costumbres ...	269
<i>Título</i> VI. Faltas contra la propiedad.....	270
<i>Conclusión</i>	271

PROYECTO DE CODIGO PENAL

LIBRO PRIMERO

Disposiciones generales

TITULO I

Aplicación de la ley penal	279
--------------------------------------	-----

TÍTULO II

De las penas.....

Página

283

TÍTULO III

De la responsabilidad

301

TÍTULO IV

De la tentativa.....

308

TÍTULO V

De las personas responsables.....

310

TÍTULO VI

Concurso de hechos punibles.....

314

TÍTULO VII

De la reincidencia.....

317

TÍTULO VIII

Del ejercicio de las acciones penales.....

319

TÍTULO IX

Extinción de las acciones y de las penas.....

324

TÍTULO X

Significación de algunos términos empleados en este Código

330



LIBRO SEGUNDO

De los delitos

TITULO I

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

		<u>Página</u>
<i>Capítulo</i>	I. Delitos contra la vida.....	332
"	II. Lesiones.....	337
"	III. Disposiciones comunes á los dos capítulos anteriores.....	339
"	IV. Duelo.	340
"	V. Abuso de armas.	343
"	VI. Abandono de personas	344
"	VII. Delitos contra el honor.....	346

TITULO II

DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD

<i>Capítulo</i>	I. Violación, estupro y ultrajes al pudor..	350
"	II. Corrupción de menores.....	354
"	III. Rapto.	355
"	IV. Disposiciones comunes á los capítulos anteriores.....	357

TÍTULO III

DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL

<i>Capítulo</i>	I. Matrimonios ilegales.....	359
"	II, Suposición y supresión de estado civil...	361



TÍTULO IV

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

<i>Capítulo</i>		<i>Página</i>
I.	Delitos contra la libertad individual.....	363
"	II. Violación de domicilio.. .. .	370
"	III. Violación de secretos... .. .	372
"	IV. Delitos contra la libertad del trabajo....	374
"	V. Delitos contra la libertad de cultos	375
"	VI. Delitos contra libertad de reunión.....	376
"	VII. Delitos contra la libertad política.....	377
"	VIII. Disposiciones comunes á los cuatro capítulos precedentes.....	381

TÍTULO V

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

<i>Capítulo</i>	I. Hurto.....	382
"	II. Robo	384
"	III. Extorsión	386
"	IV. Estafas y otras defraudaciones	388
"	V. Quebrados y otros deudores punibles....	394
"	VI. Usurpación	397
"	VII. Delitos contra la propiedad intelectual é industrial.....	399
"	VIII. Daños	401
"	IX. Disposiciones comunes á los capítulos anteriores.....	402

TÍTULO VI

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

<i>Capítulo</i>	I. Incendios y otros estragos.....	403
"	II. Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación.. .. .	406
"	III. Delitos contra la salud pública.....	410
"	IV. Piratería	413
"	V. Otros delitos relativos á la navegación...	415





TÍTULO VII

DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

	Página
<i>Capítulo</i> I. Instigación á cometer delitos.....	417
" II. Asociación ilícita.....	418
" III. Formación de cuerpos armados é intimi- dación pública.....	419

TÍTULO VIII

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN

<i>Capítulo</i> I. Traición.....	421
" II. Delitos que comprometen la paz y la dig- nidad de la Nación.....	425

TÍTULO IX

DELITOS CONTRA LOS PODERES PÚBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL

<i>Capítulo</i> I. Rebelión.....	428
" II. Sedición.....	430
" III. Disposiciones comunes á los capítulos precedentes.....	432

TÍTULO X

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

<i>Capítulo</i> I. Atentado y resistencia contra la autoridad.	435
" II. Desacato.....	438
" III. Usurpación de autoridad, títulos ú honores.	439
" IV. Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos ...	440
V. Violación de sellos y documentos.....	443
VI. Cohecho.....	445
VII. Malversación de caudales públicos.....	448
VIII. Negociaciones incompatibles con el ejerci- cio de funciones públicas.....	451

<i>Capítulo</i>	IX. Exacciones ilegales.....	452
"	X. Prevaricato.....	454
"	XI. Denegación y retardo de justicia	456
"	XII. Falso testimonio.....	457
"	XIII. Encubrimiento	459
"	XIV. Evasión.....	461



TÍTULO XI

DELITOS CONTRA LA FÉ PÚBLICA

<i>Capítulo</i>	I. Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito.....	463
	II. Falsificación de sellos, timbres y marcas.....	466
	III. Falsificación de documentos en general..	469
	IV. Disposiciones comunes á los capítulos precedentes.....	472

LIBRO TERCERO

De las faltas

TÍTULO I

Disposiciones generales.....	473
------------------------------	-----

TÍTULO II

Faltas contra la seguridad general.	475
--	-----

TÍTULO III

Faltas contra el orden público.	480
--------------------------------------	-----

TÍTULO IV

Faltas contra la autoridad y administración pública.....	483
--	-----

TÍTULO V

Faltas contra las buenas costumbres.....	486
--	-----

TÍTULO VI

Faltas contra la propiedad.....	488
---------------------------------	-----

—

Documentos relativos al Proyecto de Código Penal

Mensaje del Poder Ejecutivo.....	490
Despacho de la Comisión Revisora de Códigos.....	491
Revisión—Modificaciones.....	492

—



